TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Radicación 110013103009 2018 00074 01

Obedézcase y cúmplase lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, en la providencia SC109-2023 del 9 de junio del año en curso[1], mediante la cual no casó la sentencia proferida por este Tribunal el 21 de abril de 2022.

En consecuencia, por secretaría devuélvase el expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE.

[1] Archivo *"16SalaCivilCorteNocasaSentencia.pdf"* de la carpeta *"CuadernoTribunal"*.

Firmado Por:

Clara Ines Marquez Bulla

Magistrada

Sala 003 Civil

Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bfd850a97fc9389dc8d40142ef8fefe3aeabf9399c66d34a8e44bd97a73f30c2**

Documento generado en 26/06/2023 02:16:50 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Expediente No. 11001-31-03-003-2012-00511-02
Demandante: CORPORACIÓN DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO – COMERPAL
Demandado: MANUEL GUSTAVO VELASCO FLÓREZ

En sede de apelación se revisa y se confirma el auto dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, el 26 de enero de 2023[1], mediante el cual se rechazó de plano el incidente de nulidad propuesto por el apoderado de Eneyda Fonteche Suárez, por los motivos que pasan a exponerse.

ANTECEDENTES

El 04 de octubre de 2019[2], el *a-Quo* decretó el embargo y secuestro de los derechos de posesión que el ejecutado, Manuel Gustavo Velasco Flórez, tuviera o pudiera tener sobre el local comercial No. 80134 de la Plaza de Mercado de Paloquemao 4 y, para el efecto, expidió despacho comisorio con destino a la Alcaldía Local de los Mártires.

El 09 de diciembre de 2020, se dio inicio formal a la diligencia de secuestro[3]. Sin embargo, pese a que Eneyda Fonteche Suárez se opuso a su realización, el Comisionado repelió la misma de plano. Luego, con ocasión al fracaso de la reposición, el Juzgado de Ejecución autorizó la alzada ante este Tribunal[4]; empero, en providencia del 27 de mayo de 2021[5], se declaró desierto el recurso vertical por no haberse sufragado las expensas necesarias para la digitalización del expediente.

---

[1] Página 13. Archivo No. 01CopiaCuadernoIncidenteNulidad.pdf.
[2] Página 538. Archivo No. 01CopiaCuadernoDos.pdf.
[3] Página 630.
[4] Página 736.
[5] Página 744.

El auto fue recurrido nuevamente en reposición y en subsidio se promovió la apelación. Ambos resultaron desfavorables, mediante determinación del 22 de junio de 2021[6].

Por todo lo anterior, el apoderado de Eneyda Fonteche Suárez reclamó la invalidez de lo actuado a partir del 04 de octubre de 2019, esto es, desde el decreto de la medida cautelar cuestionada, con sustento en lo previsto en el artículo 133.6 del Código General del Proceso: "[c]*uando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado*". Ello, pues el trámite de la alzada no se agotó por un hecho atribuible a la Secretaría del *a-Quo* que no se puede imputar a la parte desfavorecida[7].

La solicitud fue rechazada de plano, en auto del 26 de enero de 2023[8]. Para el efecto, el Juez Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá consideró que lo narrado no encuadraba en ninguna de las causales taxativamente previstas para tal fin.

El apoderado de la señora Fonteche Suárez censuró la decisión mediante reposición[9], con resultas desfavorables según decisión del 30 de mayo de 2023[10], y en subsidio apelación, razón última por la cual se encuentra el expediente ante esta Sala para decidir lo pertinente.

En síntesis, el quejoso insistió en la configuración de la nulidad y en la condición de poseedora de su poderdante.

CONSIDERACIONES

Recuérdese que las nulidades procesales fueron consagradas en el Ordenamiento Procesal Civil como el mecanismo idóneo para salvaguardar el derecho constitucional al debido proceso. De esta manera, son taxativas las causales que impiden la existencia y desarrollo de aquel precepto fundamental, estando expresamente consagradas en los artículos 132 y siguientes del Código General del Proceso, de forma que no puedan alegarse en el proceso civil, situaciones que no se encuentren establecidas en estos cánones.

---

[6] Página 772.
[7] Página 13. Archivo No. 01CopiaCuadernoIncidenteNulidad.pdf.
[8] Páginas 35 y 36.
[9] Archivo No. 0027RecursoRYA.08.13.12.pdf.
[10] Archivo No. 0029ResuelveRecursoConcedeApelación.pdf

Sobre el asunto, debe advertirse que la la Corte Suprema de Justicia ha sentado que el régimen de las nulidades procesales gira en torno a los principios de la especificidad, protección y convalidación:

> *"La especificidad alude a la necesidad de que los hechos alegados se subsuman dentro de alguna de las causales de nulidad taxativamente señaladas en las normas procesales o en la Constitución Política, sin que se admitan motivos adicionales (cfr. CSJ, SC11294, 17 ag. 2016, rad. n.° 2008-00162-01).*
>
> *La protección se relaciona «con la legitimidad y el interés para hacer valer la irregularidad legalmente erigida en causal de nulidad, en cuanto, dado el carácter preponderantemente preventivo que le es inherente, su configuración se supedita a que se verifique una lesión a quien la alega» (CSJ, SC, 1 mar. 2012, rad. n.° 2004-00191-01).*
>
> *La trascendencia impone que el defecto menoscabe los derechos de los sujetos procesales, por atentar contra sus garantías o cercenarlas.*
>
> *Por último, la convalidación, en los casos en que ello sea posible, excluye la configuración de la nulidad cuando el perjudicado expresa o tácitamente ratificó la actuación anómala, en señal de ausencia de afectación a sus intereses (cfr. SC, 19 dic. 2011, rad. n.° 2008-00084)."*[11]

En ese orden, la enunciación del artículo 29 de la Constitución Política como habilitadora del trámite del incidente de nulidad no encuentra asidero, pues de acuerdo a la jurisprudencia en cita, quien considere que la legalidad de las actuaciones de un procedimiento civil está viciada, debe sujetar su pedimento a las causales del artículo 133 del Código General del Proceso y a la oportunidad procesal pertinente para expresar su alegato, como viene de verse.

Ya en lo que hace al particular motivo de invalidez, debe decirse que la nulidad contenida en el numeral sexto del artículo 133 procesal se configura únicamente cuando el Juez omite: **i)** la etapa de alegaciones finales, o **ii)** la sustentación de un recurso y su traslado.

Aunado a lo dicho, indica el inciso final del artículo 135 *ibídem* que "[e]***l juez rechazará de plano la solicitud de nulidad*** *que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada*" (Subrayas de la Magistrada).

Si lo anterior es así, como se advirtió al inicio de esta decisión, se mantendrá el auto apelado por tres puntos esenciales.

---

[11] Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. Sentencia SC280-2018 del 20 de febrero de 2018. Mg. P Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

El primero, porque la declaratoria de deserción cuestionada derivó de la sanción procesal prevista en el artículo 324 inciso segundo del Código General del Proceso: "*en el auto que conceda la apelación se ordenará que antes de remitirse el expediente se deje una reproducción de las piezas que el juez señale, a costa del recurrente, quien deberá suministrar las expensas necesarias en el término de cinco (5) días, so pena de ser declarado desierto*" (destaca la Sala).

Entonces, si ya se había impartido el trámite de rigor a la censura vertical y solo restaba proceder con el pago de la digitalización de las piezas que debían remitirse al Tribunal, de ninguna manera se omitió la oportunidad para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

El segundo, porque de haber ocurrido alguna irregularidad que viciara el procedimiento en la forma que indicó el apoderado de Eneyda Fonteche Suárez, aquella se saneó en la forma prevista en el numeral 1º del precepto 136 *ejusdem* y en tanto la defensa de Eneyda desplegó dos actuaciones procesales antes de promover el incidente de nulidad: sustituyó el poder[12] y recusó al Juez[13]. Es decir que, habiendo podido alegarla, "*no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla*".

Y ***el tercero***, pues del escrito de nulidad se observa, sin mayor esfuerzo, que el mismo no conlleva razonamiento alguno que ataque la invalidez formal del juicio. Por el contrario, el defensor insiste en los derechos posesorios que deben declararse a favor de la señora Fonteche Suárez, argumento que no es susceptible de ser debatido por esta especial vía incidental, pues obedece a hechos que debieron ser alegados en el curso de la oposición, lo cual – se reitera – no ocurrió ante la deserción de la alzada por el impago de las expensas.

En ese orden de ideas, se impone confirmar la decisión apelada. No habrá condena en costas por no estar causadas.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

[12] Página 783. Archivo No. 01CopiaCuadernoDos.pdf.
[13] Página 785.

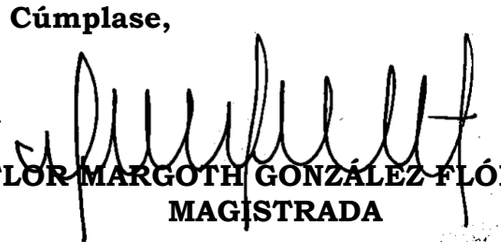
RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 26 de enero de 2023, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, de acuerdo con las anteriores consideraciones.

SEGUNDO: Sin condena en costas por no estar causadas.

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente digital al Juzgado de origen, previas las constancias de rigor.

Notifíquese y Cúmplase,



FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Expediente No. 11001-31-03-010-2018-00493-02
Demandante: BORIS HERMAN GARTNER CABALLERO y otro.
Demandado: MARTHA ISABEL ZULUAGA JARAMILLO

Se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 07 de junio de 2023, proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, en el efecto **suspensivo** (artículo 327 del Código General del Proceso).

Imprímasele a este asunto el trámite consagrado en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, con el objetivo de resolver la alzada.

En firme este auto, la Secretaría **REINGRESE** el proceso al Despacho, con el fin de impartir el trámite que corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,

FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023).

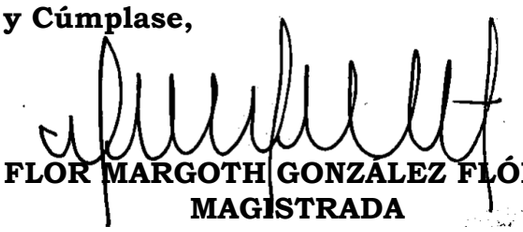
Expediente No. 11001-31-03-035-2018-00406-02
Demandante: KEY CAPITAL INVESTMENT S.A.S.
Demandado: ALERO S.A.S.

Se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 05 de mayo de 2023, proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, en el efecto **suspensivo** (artículo 327 del Código General del Proceso).

Imprímasele a este asunto el trámite consagrado en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, con el objetivo de resolver la alzada.

En firme este auto, la Secretaría **REINGRESE** el proceso al Despacho, con el fin de impartir el trámite que corresponda.

Notifíquese y Cúmplase,



FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Expediente No. 11001-31-03-036-2005-00439-02
Demandante: RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A.
Demandado: SOCIEDAD AUTOMOTORA DE TRANSPORTES S.A.

En sede de apelación se revisa y se confirma el auto dictado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, el 07 de diciembre de 2022, mediante el cual se decretó la terminación del proceso ejecutivo de la referencia (cobro de condenas derivadas del trámite ordinario) por desistimiento tácito, por las razones que pasan a exponerse.

ANTECEDENTES

En sentencia del 21 de junio de 2010, la Juez 36 Civil del Circuito de la ciudad condenó a la Sociedad Universal Automotora de Transportes S.A. y a Luis Humberto Bohórquez Aldana a pagar a favor de Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida, los perjuicios que, previamente, la aseguradora demandante había reconocido a las víctimas de un accidente de tránsito acaecido el 21 de junio de 2001[1].

Con la firmeza del veredicto memorado, se intentó el cobro judicial y, una vez enterados los enjuiciados, se dispuso seguir adelante con la ejecución[2]. Lo anterior, en auto del 10 de mayo de 2017.

Remitido el legajo ante la Oficina de Ejecución de Sentencias de Bogotá, el expediente fue asignado por reparto, al Estrado Tercero Civil del Circuito de tal categoría. Transcurridos más de dos años y medio

[1] Página 345 y siguientes. Archivo No. 01CopiaCuadernoUno.pdf
[2] Página 47. Archivo No. 01CopiaCuadernoRecurso.pdf

de encontrarse el expediente en la Secretaría del Cognoscente, en auto del 07 de diciembre de 2022, se declaró el desistimiento tácito[3].

La anterior determinación fue censurada mediante reposición[4], con resultas desfavorables según decisión del 21 de abril de 2023[5], y en subsidio apelación, razón última por la cual se encuentra el expediente ante este Tribunal para decidir lo pertinente.

Consideró el quejoso, en síntesis, que no es cierto que el expediente haya estado abandonado. Ello, pues presentó dos solicitudes de medidas cautelares desde el 09 de agosto de 2019, sobre las cuales nada ha resuelto el Juzgado.

CONSIDERACIONES

Sobre la figura del desistimiento tácito que hoy ocupa la atención de esta Sala, recuérdese que constituye una forma de terminación anormal del proceso: **i)** cuando se acredita la inactividad de quien promueve la demanda y no cumple con la carga que le corresponde, o **ii)** cuando pasados dos años en la Secretaría del Despacho, si el proceso tiene sentencia[6], la parte interesada no ha efectuado trámite alguno tendiente a superar el abandono de su asunto.

Así pues, en el presente caso, fácil resulta concluir como advirtió la *a-Quo*, que se dieron los requisitos exigidos por la norma en comento (segundo supuesto) para finalizar anormalmente el litigio.

Ello, pues contrario a lo dicho por el apelante en su censura, los memoriales del 09 de agosto de 2019[7] fueron atendidos en proveído del 20 de septiembre siguiente[8], en el cual previo a oficiar, según requirió, se le instó "*para que indique qué gestiones ha realizado ante la Agencia Judicial y la entidad financiera, descritas en los memoriales que preceden, tendientes a obtener la información exhortada, allegando de ser necesario prueba de ello (Artículo 43 numeral 4º del C. G. del P.)*".

[3] Página 57.
[4] Página 66.
[5] Página 28.
[6] Será un año de inactividad acreditada, si el asunto no tiene decisión de instancia.
[7] Páginas 121 y 122. Archivo No. 01CopiadeCuadernoMedidas Cautelares.pdf.
[8] Página 193.

Con posterioridad a la decisión que se menciona, no se promovió solicitud adicional por cuenta del apelante o de las partes y, en consecuencia, es factible concluir que desde la aludida calenda y hasta el 07 de diciembre de 2022, transcurrieron más de los dos años de inacción requeridos por la norma para imponer la sanción procesal que aplicó la *a-Quo*, razón por la cual la censura no puede salir avante.

En ese orden de ideas, se impone confirmar la decisión apelada. No habrá condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

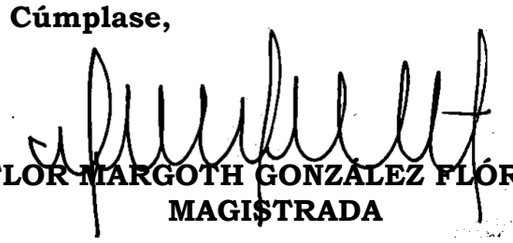
RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 07 de diciembre de 2022, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, de acuerdo con las anteriores consideraciones.

SEGUNDO: Sin condena en costas por no estar causadas.

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente digital al Juzgado de origen, previas las constancias de rigor.

Notifíquese y Cúmplase,



FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ
MAGISTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sala Civil

Bogotá, D. C., veintiséis de junio de dos mil veintitrés.

Radicado: 11001 31 03 002 **2021 00184** 01 - Procedencia: Juzgado 2° Civil del Circuito
Impugn. actas: Alejandro Flórez Romero y Otro vs Conjunto Residencial Altos del Moral.
Asunto: **Apelación auto que rechazó la demanda.**

1. Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 2 de agosto de 2021, alzada concedida el 15 de mayo de 2023.

2. El Tribunal revocará el proveído impugnado, pues no había caducado el término para interponer la acción encaminada a la declaratoria de nulidad del acta de la asamblea que la copropiedad demandada adelantó el 14 de marzo de 2021.

2.1. En el caso de la impugnación de decisiones de asambleas o junta de socios, el artículo 382 establece que: "*La demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier órgano directivo de personas jurídicas de derecho privado, sólo podrá proponerse, so pena de caducidad, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deberá dirigirse contra la entidad. Si se tratara de acuerdos o actos sujetos a registro, el término se contará desde la fecha de la inscripción*".

En cuanto a la caducidad que regula tal disposición, es imperioso señalar que tal figura conlleva *"…declarar extinguida la acción por no incoarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio establecido por el ordenamiento jurídico para ello. Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acción. Este plazo no se suspende ni*

interrumpe, ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre en tratándose de la prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase"[1].

2.2. En lo que concierne a la presentación de la demanda, el artículo 89 del Cgp prevé que se debe entregar ante el secretario del despacho judicial al que se dirija o a la oficina judicial respectiva '*quien dejará constancia de la fecha de su recepción*', actuación que, incluso, con antelación a la crisis en salud ocasionada por la Covid-19, era pasible de adelantarse por medio de mensajes de datos y en uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. (Art. 103 *ibídem*)

Ahora bien, con motivo de la 'pandemia' el Gobierno decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, y en virtud de ello se expidió el Decreto 806 de 2020[2], mediante el cual se adoptaron medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia.

Así, en el inciso 2° del artículo 6° de la citada norma, vigente para el presente caso, se estableció, temporalmente por dos años, que las demandas se presentaran en forma de mensaje de datos, dirigido a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto. Lo que, cabe decir, se adoptó como permanente en la actual Ley 2213 de 2022.

3. Precisado lo anterior, y revisada en detalle la presente actuación, se evidencia que el reparto interno que realizó la respectiva oficina judicial

[1] Sent. Corte Constitucional. T-433 de 1992. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[2] Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-240 de 2020.

no se desplegó el mismo día en que la parte demandante radicó la demanda de impugnación de actas de asamblea.

En efecto, basta con realizar un simple cotejo del archivo pdf '*08ReporteReparto*' que hace parte del expediente digital, y del archivo 013DocuemntosRadicacionDdaRto' (aportado como anexo al recurso de apelación), para percatarse que los demandantes acudieron a la jurisdicción y formularon sus pretensiones el 14 de mayo de 2021, a través de mensajes de datos utilizando el aplicativo '*recepción de demanda en línea*' que el Consejo Superior de la Judicatura dispuso en el la página web de la Rama Judicial del Poder Público.

Nótese, en esa senda, que el mismo día, a las 15:22, desde la dirección electrónica *demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co*, se informó a los demandantes sobre la *"Generación de la Demanda en línea No 179444"* y que '*su solicitud fue recibida con el número de confirmación 179444'*, y seguidamente se hizo una breve referencia de los datos más relevantes del litigio, tales como: nombre de las parte demandante, identificación, y además, se incluyó el vínculo o link para la descarga de los archivos correspondientes (el que, vale decir, a día de hoy aún se encuentra en funcionamiento).

Así, entonces, si bien el asunto fue asignado al Juzgado 2° Civil del Circuito por reparto del 19 de mayo siguiente, esa data no es la que se debe tener en cuenta para efectos de contar el término de caducidad de la acción, habida cuenta que el leve retraso de la oficina judicial en la determinación aleatoria del Despacho judicial cognoscente –trámite interno administrativo de la dependencia respectiva-, bajo ninguna circunstancia podría constituir el hito para computar el lapso del fenómeno jurídico bajo análisis.

Por tanto, es claro que la presentación efectiva de la demanda tuvo lugar el 14 de mayo de 2021, cuando los hechos motivo de la impugnación de actas de asamblea fueron puestos en conocimiento de la administración de justicia por medio del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

2.3. En resumen, en el *sub judice* la asamblea que se cuestiona fue adoptada en reunión ordinaria de copropietarios el 14 de marzo de 2021 (como obra en el acta aportada, que se encuentra en el archivo 002Anexos), de donde, si la demanda se presentó el 14 de mayo del mismo año, es claro que no se había extinguido la posibilidad de promover la presente acción –dos meses-.

3. Así las cosas, como no ocurrió la decadencia de la acción por caducidad, se impone revocar el auto apelado, y el a-quo deberá proveer sobre el dicha demanda en la forma que legalmente corresponda.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, **REVOCA** el auto proferido el 2 de agosto de 2021 por el Juzgado 2° Civil del Circuito de Bogotá. En su lugar, el a-quo provea lo que legalmente corresponda, teniendo en cuenta lo considerado en esta decisión.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA

Firmado Por:

German Valenzuela Valbuena

Magistrado

Sala 019 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a28d8f06ec5fcef51b4340ab3fdd460d944fee862aca10399d81e8b6a4a71a32**

Documento generado en 26/06/2023 10:22:32 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil veintitrés.

Radicado: 11001 31 03 010 2020 **00052** 01 - Procedencia: Juzgado 10° Civil del Circuito.
Verbal: Dídimo Gerardo Salamanca Gordo y Otros **Vs.** Henry Mauricio Galeano y Otra.
Asunto: **Apelación auto que resuelve sobre medidas cautelares.**

1. En memorial radicado el 28 de abril de 2021 la parte demandante solicitó la sustitución de la medida cautelar de inscripción de demanda por el embargo de créditos que el demandado Henry Mauricio Galeano Medina persigue en el proceso con radicado 11001 31 03 032 2020 00234 00.

2. En auto de 8 de septiembre de 2021 el *a quo* dispuso que el extremo actor debía adecuar o modificar su escrito de sustitución de cautelas por unas que correspondan a la naturaleza del presente proceso conforme el artículo 590 Cgp.

3. En sus recursos, el apoderado de los demandantes sostuvo: que la medida cautelar solicitada encuadra en las exigencias del literal c del artículo 590 en cuanto a las cautelas innominadas; que ese tipo de cautelas aplica a cualquier proceso declarativo, incluyendo el de responsabilidad civil, que en este caso consisten en el embargo de crédito; y que la medida es necesaria para proteger y garantizar el pago.

4. Para mantener incólume su decisión, en proveído de 12 de diciembre de 2022, el *a quo* señaló que la medida no es oportuna en este litigio, y que, si se pretende solicitar el embargo como innominada, se debe cumplir con la carga demostrativa *"de todos y cada uno de los elementos estructurales de esa clase de cautelas, lo cual no existe en el proceso"*.

CONSIDERACIONES

Analizada la actuación de manera detallada, y en integridad, de entrada se advierte que la decisión objeto de impugnación será confirmada.

Lo anterior, comoquiera que no podría decretarse un embargo en un proceso declarativo sin sentencia de fondo, pues esa medida cautelar resulta improcedente para procesos verbales declarativos, conforme

postura de la Corte Suprema.

Es de ver, entonces, que el embargo es una medida nominada y autónoma que no se encuentra contemplada en el artículo 590 Cgp, y que en manera alguna podría subsumirse dentro de la hipótesis consagrada en el literal c) de ese canon, en tanto que aquella no podría ser tratada como innominada al estar definida y regulada en la ley procesal.

Además, téngase en cuenta que, según el inciso 2° del literal b) de la referida disposición normativa, en procesos declarativos el embargo y secuestro proceden a petición de parte cuando hay inscripción de demanda previa y existe sentencia favorable al demandante, supuestos que, evidentemente, no concurren en este caso.

Sobre el anterior punto, y al analizar asuntos similares en sede de tutela, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[1], ha decantado:

> "Conforme a lo expuesto en precedencia, no cabe duda que la medida cautelar decretada el 5 de febrero de 2020 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal, y que fuere confirmada por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en virtud del juicio declarativo n° 2019-00214, realmente atañe a una de las que contempla el ordenamiento jurídico como *nominada*, pues nótese que hace referencia al «***embargo*** *de los derechos litigiosos o créditos que le llegare a corresponder a la sociedad demandada, dentro del proceso No. 2016-00063 el cual se adelanta en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal»*, siendo el embargo una de las medidas específicas y singulares históricamente reglamentadas con entidad jurídica propia, por lo cual resulta improcedente el tratamiento que se le dio conforme al literal c del numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso. En un caso de similares contornos esta Sala consideró:
>
> > «(…) *es preciso acotar que, uno de los elementos distintivos de las medidas cautelares es su carácter restringido con relación a las medidas nominadas, el cual no se ha perdido ante la entrada en vigencia del Código General del Proceso, pues en el Libro Cuarto, Título I, Capítulo I de dicha reglamentación, expresamente se prevén las cautelas pasibles de ser ordenadas dentro de los distintos trámites, precisándose su procedencia dependiendo del tipo de litigio (declarativo, ejecutivo, "de familia") y de las especiales circunstancias como se halle»*.[2].
>
> También reseñó en dicha providencia, que en sede de revisión esta Corporación estimó inviable en procesos declarativos ordenar cautelas *nominadas*, en ese caso específico el secuestro de bienes, por no hallarse contemplado para dicho trámite, recalcando así el carácter restrictivo de las medidas cautelares.
>
> (…)

[1] STC11406-2020 de 11 de diciembre de 2020, Radicación n° 11001-02-03-000-2020-03319-00.
[2]CSJ STC15244-2019 de 8 de noviembre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-02955-00

> De lo anterior, forzoso resulta concluir, que la única cautela nominada que potencialmente procedería en los litigios declarativos corresponde a la *inscripción de la demanda*, esto siempre y cuando atienda a alguna de las tres hipótesis contempladas en el artículo 590 *ejusdem*, esto es, cuando ***(i)*** *verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o* ***(ii)*** *como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra* o que verse *sobre una universalidad de bienes* y ***(iii)*** *cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual*.".

Por lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, **CONFIRMA** el auto apelado, proferido el 8 de septiembre de 2021 por el Juzgado 10° Civil del Circuito.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
11001 31 03 010 2020 00052 01

Firmado Por:
German Valenzuela Valbuena
Magistrado
Sala 019 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bac3ea114e67e44a206838859a054fdbb657fbefcd6c09f97f67dfd017975606**
Documento generado en 26/06/2023 10:23:03 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D. C., veintiséis de junio de dos mil veintitrés

Radicado: 11001 31 03 019 2021 00241 01 - Procedencia: Juzgado 19 Civil del Circuito.
Verbal: Ana Francisca Rozo Escobar. **Vs.** Sildana Acosta Navarrete y Otro.
Asunto: **Apelación de auto que decretó terminación por desistimiento tácito.**

Se resuelve la apelación subsidiaria interpuesta por la parte demandante contra el auto 10 de mayo de 2023.

ANTECEDENTES

1. En auto de 8 de julio de 2021, entre otras cuestiones, se resolvió: *"Para efectos del decreto de las medidas cautelares solicitadas, preste caución por la suma de $ 70'000.000 Mcte., equivalentes al 20 % de la totalidad de las pretensiones (Art. 590.1 del C.G.P)"*.

2. Mediante providencia de 17 de febrero de 2023 se requirió a la parte actora para que, en el término de 30 días procediera a dar cumplimiento a lo anterior.

3. En el proveído materia de impugnación, se decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito, con fundamento en que el extremo actor no acató cabalmente el requerimiento que se le efectuó.

4. En sus recursos, el apoderado de las demandantes (herederas de la inicial) manifestó: que el 14 de julio de 2021 adquirió póliza que puede ser verificada en link de la Compañía Mundial de Seguros; que pudo presentarse un error en la carga de la documentación en el despacho; que no ha dejado el proceso en inactividad pues se han presentado otras actuaciones; que el tema de la medida no interviene con las pretensiones de la demanda, *"razón por la cual considero que la decisión de sancionar no debería afectar la totalidad del proceso sino netamente a*

las medidas cautelares"; y que debe prevalecer el derecho a acceder a la justicia.

5. El 29 de mayo se requirió al mandatario judicial para que aportara la póliza junto con la constancia de su remisión al Juzgado, sobre lo cual se allegó pronunciamiento.

6. Para mantener su decisión, el Juzgado señaló que la póliza no se encuentra incorporada al plenario, el apoderado no cuenta con el correo de envío y en el correo electrónico tampoco se encontró e-mail; y que, pese a los múltiples requerimientos, no se cumplió con la carga impuesta.

CONSIDERACIONES

1. Fundamentada en la necesidad de preservar la regular culminación de los objetivos previstos para el respectivo trámite, el desistimiento tácito constituye una forma anormal de terminación del proceso que se sigue como consecuencia de una inactividad procesal y/o falta de cumplimiento de una gestión necesaria para la continuación de una actuación.

2. El numeral 1 del artículo 317 del Código General del Proceso establece que, entre otras hipótesis, el desistimiento tácito opera:

> *"Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.*
>
> *Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costa"*

3. Analizado el presente asunto a la luz de los presupuestos consagrados en la anterior norma, al rompe se advierte que la decisión apelada habrá

de revocarse, habida cuenta que, por las específicas particularidades del caso, en manera alguna podía concluirse que acá se encontraban reunidos tales presupuestos para dar aplicación a la terminación del proceso por desistimiento tácito.

En efecto, nótese que la actuación que echó de menos el Juzgado de primer grado, y que motivó el requerimiento efectuado y la emisión de la determinación apelada, atañe exclusivamente a la constitución de una caución para efectos de decretar la medida cautelar de inscripción de demanda solicitada, por lo que la falta de cumplimiento del llamado para prestar esa caución de ninguna forma podía conllevar la terminación del trámite declarativo.

Y es que el citado canon 317 es suficientemente claro en establecer que el funcionario judicial podrá realizar el requerimiento para que la parte respectiva cumpla una carga cuando ésta resulta necesaria para la continuación de la demanda o de cualquier otra actuación, sin que, en este preciso caso, pueda entenderse cómo la constitución de la referida caución y la eventual materialización de la inscripción de la demanda pedida, era necesaria e imperativa para que el desarrollo de las etapas subsiguientes del proceso.

4. Bajo tal orden, cabe acotar, el incumplimiento del llamado que hizo el juez a la parte demandante no podía conllevar el desistimiento del proceso como totalidad que es, dirigido a que haya un pronunciamiento final frente a los extremos del litigo, pues habiéndolo determinado un aspecto marginal sobre una cautela que, como en este caso particular, se suscita a iniciativa de parte, es asunto que no puede incidir en el desarrollo que deba haber para "…continuar el trámite de la demanda".

5. Baste lo dicho para revocar la decisión cuestionada.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, **REVOCA** el auto proferido el 10 de mayo de 2023 por el Juzgado 19 Civil Circuito de Bogotá.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
11001 31 03 019 2021 00241 01

Firmado Por:
German Valenzuela Valbuena
Magistrado
Sala 019 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **732c5f9cd455145ea7d4536b482849722bacd152a43d616d65dcf73a0130966b**
Documento generado en 26/06/2023 10:27:33 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil veintitrés.

Radicado: 11001 31 03 031 2018 **00277** 01

Se admiten, en el efecto **DEVOLUTIVO**, los recursos de apelación interpuestos por la demandada Flota Magdalena S.A. y la llamada en garantía Axa Colpatria Seguros S.A. contra la sentencia proferida por el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá en audiencia celebrada el 29 de mayo de 2023, dentro del proceso promovido por María Rubiela Valencia Giraldo y Otra contra Cajeto S.A.S. y Otros.

Cabe advertir que, de conformidad con lo establecido en la Ley 2213 de 2022, los apelantes cuentan con el término de cinco (5) días, a partir de la ejecutoria del admisorio, para sustentar los precisos reparos en los que fundamentaron sus recursos de apelación, y que si se presentan tales sustentaciones, los demás cuentan con cinco (5) días para las réplicas respectivas. Además, téngase en cuenta que la **no** sustentación de la alzada en esta instancia impone declararla desierta según el artículo 12 de tal normatividad.

NOTIFÍQUESE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
11001 31 03 031 2018 00277 01

Firmado Por:
German Valenzuela Valbuena
Magistrado

Sala 019 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8bdc3396c9868850d9b7d3c4c6f58f38c36dd82a434b84af809ec8c9f40545be**

Documento generado en 26/06/2023 10:20:53 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil veintitrés.

Radicado: 11001 31 03 039 2021 **00128** 01

Se admite, en el efecto **SUSPENSIVO**, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado 39 Civil del Circuito en audiencia celebrada el 5 de junio de 2023, dentro del proceso promovido por Gustavo Adolfo Salas Solano contra Positiva Compañía de Seguros S.A.

Cabe advertir que, de conformidad con lo establecido en la Ley 2213 de 2022, la parte apelante cuenta con el término de cinco (5) días, a partir de la ejecutoria del admisorio, para sustentar los precisos reparos en los que fundamentó su recurso de apelación, y que si se presenta tal sustentación, la parte no apelante tiene cinco (5) días para la réplica. Además, téngase en cuenta que la no sustentación de la alzada en esta instancia impone declararla desierta según el artículo 12 de la referida normatividad.

NOTIFÍQUESE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
11001 31 03 039 2021 00128 01

Firmado Por:
German Valenzuela Valbuena
Magistrado
Sala 019 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **99ac5c090ec595b12c9dd5b6e286590ce16e9089770309c1e478df149193576e**

Documento generado en 26/06/2023 10:20:33 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Asunto	Conflicto de competencia
Proceso	Declarativo –pertenencia-
Demandante	Orlando Pimiento Pedraza
Demandado	Liliana Orjuela Rubio y personas indeterminadas
Radicado	11001 2203 000 2023 01043 00
Decisión	Dirime conflicto de competencia

Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 14 Civil del Circuito y 15 Civil del Circuito de Bogotá D.C., para conocer del proceso en referencia, mismo que tiene como radicado para la instancia respectiva el número 110013103 014 2018 00160 00.

I. ANTECEDENTES

1 En decisión del 23 de febrero de 2023[1], el Juez 14 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., en el curso de la audiencia de instrucción y juzgamiento, el apoderado de una de las demandadas -Cimento Inmuebles Comerciales S.A.S.- solicitó la pérdida de competencia establecida en el artículo 121 del Código General del Proceso, al hallar superado el término incluida su prórroga para dictar la sentencia, petición que fue acogida y remitió el expediente a la célula judicial siguiente en turno.

2. Enviado el asunto al Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, en auto del 5 de mayo de 2023,[2] disintió en la competencia que le endilgó el despacho

[1] Minuto 22:28 a 26:19, archivo 113, cuaderno 01, archivo juzgado
[2] Archivo 121, cuaderno 01, archivo juzgado

homólogo, pues en su sentir esta se encuentra saneada, porque esta debió declararse antes del 10 de enero de 2023, y como tal circunstancia no acaeció, lo procedente era denegarla, porque lo actuado se convalidó cuando no fue alegada en la referida época.

En consecuencia, envió las presentes diligencias a esta Corporación para que se dirimiera el conflicto suscitado entre las referidas sedes judiciales[3].

II. CONSIDERACIONES

1. El problema jurídico para resolver consiste en determinar la autoridad judicial a la que corresponde continuar con el conocimiento del asunto; para lo cual se advierte que será direccionado al Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., por las razones que se pasan a expresar.

2. El Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., aceptó la pérdida de competencia planteada por el apoderado de la demandada –Cimento Inmuebles Comerciales S.A.S.- postura que dejó sentada en las actuaciones del 10 de junio de 2021 y 23 de agosto de 2021, donde detalló que el término para fallar se encontraba superado para el 23 de febrero de 2023.

-Destacó que la pasiva fue enterada de la admisión el 10 de junio de 2021[4], mediante correo electrónico, notificación que quedó surtida el 16 de junio de ese mismo año,[5] teniendo en cuenta lo previsto en el inciso tercero del artículo 8º del Decreto 806 de 2020, vigente para ese entonces.

-Mencionó que en auto del 23 de agosto de 2021, prorrogó la competencia por 6 meses más[6].

3. Sobre las anteriores actuaciones, resulta relevante mencionar que la

---

[3] Archivo 122 y 123, cuaderno 01, archivo juzgado
[4] Archivo 14, cuaderno 01, primera instancia, cuaderno juzgado
[5] *(…) la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.*
[6]Archivo 18, cuaderno 01, cuaderno juzgado

demanda fue presentada ante la oficina de reparto el 18 de abril de 2018[7].

El auto admisorio fue proferido y notificado a la parte demandante el 10 de mayo de 2018,[8] es decir, dentro del margen que señala el artículo 90 del C.G.P., con lo que se establece que el término para dictar sentencia se cuenta a partir de la notificación de los demandados.

Lo anterior quiere decir, que el plazo para proferir decisión de fondo venció el 16 de junio de 2022, y que sumada la prórroga, la competencia se extendió hasta el 16 diciembre de 2022.

Frente a las dos solicitudes de nulidad por pérdida de competencia presentadas el 21 de febrero de 2022[9] y 22 de marzo del mismo año[10], se acota que, resultaron anticipadas para la controversia que nos ocupa, porque para esa temporalidad no se encontraba vencido el plazo para proferir sentencia.

Ahora, la que fue alegada por el mandatario de Cimiento Inmuebles Comerciales S.A.S., en la audiencia que se llevó a cabo el 23 de febrero de 2023, y que fue aceptada por el Funcionario, misma que también comparte esta magistratura, al resultar apoyada en las permisiones legales y en la realidad procesal.

Para la fecha en que se desarrolló la audiencia antes indicada, sí se reunían las condiciones legales para ser declarada, porque el pedimento se elevó cuando se practicaban las pruebas y no se había dictado sentencia.

Así, para el momento del decreto se había superado el límite temporal y era procedente, aspecto que, aunque no compartió el Juzgado siguiente en turno, su tesis desconoce el espíritu de la propia norma procesal que regula el tema y la sentencia de constitucionalidad que estudió esta singular figura procesal.

Debe decirse que el camino que traza la falta de competencia no es idéntico

---

[7] Folio 32, cuaderno 01, primera instancia, cuaderno juzgado
[8] Folio 34, cuaderno 01, primera instancia, cuaderno juzgado
[9] Archivo 57, cuaderno 01, cuaderno Juzgado
[10] Archivo 69, cuaderno 01, archivo juzgado

al de la nulidad, sin embargo, ambas deben ser alegadas y pueden ser convalidadas por la ausencia de su solicitud, como lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria[11]

"Dicho de otra manera, queda fuera de dubitación que, con ocasión de la exclusión del ordenamiento jurídico de las expresiones «de pleno derecho» y «automática», contenidas en el original canon 121 del CGP, para que se produzcan los efectos invalidantes después de agotado el tiempo para sentenciar, es indispensable que alguno de los sujetos procesales invoque este hecho antes de que actúe o de que se profiera el veredicto final, pues en caso contrario se saneara el vicio y se dará prevalencia al principio de conservación de los actos procesales"

El alto Tribunal también ha explicado los eventos de saneamiento de la pérdida de competencia y de la nulidad[12], que se pueden generar una vez rebasado el término para fallar:

"3.1. *A partir de los razonamientos expuestos, es posible identificar tres escenarios distintos, relacionados con el supuesto que consagra el artículo 121 del Código General del Proceso:*

(i) Si el término de duración del proceso fenece, pero el fallo es dictado antes de que cualquiera de las partes alegue dicha circunstancia, la pérdida de competencia no habría operado y, por lo mismo, la actuación posterior al vencimiento no estaría viciada de nulidad.

(ii) Si se dan ambas variables, es decir, vencimiento del término y alegato de parte, el juez o magistrado perderá competencia y sus actuaciones subsiguientes estarán viciadas de nulidad. Sin embargo, el vicio quedará saneado si ninguna de las partes solicita la invalidación antes de que se dicte la sentencia, pudiendo hacerlo.

(iii) Para que no se produzca el saneamiento, se debe alegar la nulidad de «la actuación posterior que realice el juez [o magistrado] que haya perdido competencia» antes

[11] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC3377-2021 M.P. Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
[12] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC845-2022 M.P. Dr. Luis Alonso Rico Puerta

de que dicho funcionario dicte la sentencia; pero, en este escenario, las partes habrán de estarse a lo que dispongan los falladores ordinarios acerca de la invalidación del trámite."

4. Conforme a lo discurrido, se tiene que, en este caso, la pérdida de competencia se ajusta a la declaratoria establecida en el artículo 121 del Código General del Proceso y a su estudio de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C-443 de 2019[13], en tanto, (i) fue pedida por uno de los extremos, (ii) el expediente no cuenta con decisión de fondo; (iii) el juzgado tuvo hasta el 16 de diciembre de 2022, para fallar la primera instancia, y (iv) el momento que se tuvo para su declaratoria fue el 23 de febrero de 2023, posterior al margen legal que se habilitaba para dirimir la pertenencia.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,

III. RESUELVE

Primero: Dirimir el conflicto de competencia suscitado, en el sentido de asignar el asunto de la referencia al Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, como despacho competente para continuar el conocimiento del proceso declarativo -pertenencia- con radicado 110013103 014 2018 00160 00.

Segundo: Comunicar lo aquí decidido al Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, D.C.

Tercero. Devuélvase el presente asunto al Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá a través de la Secretaría del Tribunal.

---

[13] Corte Constitucional. Sentencia C-443-19 M.P. Dr. Luis Guillermo Gurrero Pérez.
En la parte resolutiva de esta decisión se indicó
"SEGUNDO.- DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del inciso 2 del artículo 121 del Código General del Proceso, en el sentido de que la pérdida de competencia del funcionario judicial correspondiente sólo ocurre previa solicitud de parte, sin perjuicio de su deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente del término para fallas, sobre la circunstancia de haber trascurrido dicho término sin que haya proferido sentencia

Notifíquese y Cúmplase

Firma electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **390179b5f89ce55120d50f9b9689ec50dc6ccd551886aed617005f3a40f10f45**
Documento generado en 23/06/2023 03:42:01 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	Verbal
Demandante	Jairo de Jesús Giraldo Salazar
Demandado	Banco de Bogotá Luis Carlos Ortiz Rodríguez
Radicado	11001 3103 022 2014 00488 01
Instancia	Segunda
Asunto	queja

Se decide el recurso de queja formulado por el apoderado del demandado Luis Carlos Ortiz Rodríguez en contra el auto calendado 29 de agosto de 2022, por el cual el *A quo* denegó la concesión del recurso de apelación por extemporáneo.

I. ANTECEDENTES

1. El *A quo* en proveído del 29 de agosto de 2022 ,[1] rechazó los recursos de *"apelación y reposición"* (sic) que impetró el demandado en contra de las providencias que se dictaron en el curso de la audiencia del 03 de agosto de misma anualidad.

2. Oportunamente interpuso recurso de reposición en subsidio de queja, en el que insistió sobre su concesión, pues en su sentir, esta es procedente, porque lo hizo dentro de los tres días siguientes a su realización.

Mencionó que hay ausencia de motivación en las providencias dictadas en

[1] Folio 244, archivo 02, cuaderno 01, archivo juzgado

el curso de la audiencia, hecho que lo impulsó a cuestionar lo decidido en esa actuación.

Que, por economía procesal, considera deben declararse probadas las excepciones "*previas"* de "*prescripción, caducidad y falta de legitimación en la causa"*.

Explicó que de conformidad con lo instituido en el inciso primero del artículo 352 del C.P.C. interpuso recurso de "*apelación en subsidio de reposición*",[2] pues así lo autoriza la disposición.

3. En proveído del 24 de febrero de 2023[3], el *A quo* desestimó los argumentos expuestos por el recurrente, recordó que las providencias dictadas en audiencia quedan notificadas en estrados y en firme si contra estas, no se interponen los medios de impugnación pertinentes en el instante en que son enteradas a los extremos procesales que participan en ella.

Resaltó que la *"técnica jurídica"* escogida por el abogado, no corresponde a la autorizada por el estatuto procesal civil, porque lo procedente era recurrir el auto y en subsidio la apelación. Razonamientos por los que mantuvo la providencia y concedió el recurso de queja.

II. CONSIDERACIONES

1. El problema jurídico para resolver consiste en establecer si tiene el carácter de apelable del auto por el cual el *A quo* negó la concesión del recurso en contra de las decisiones que se profirieron en la audiencia del 03 de agosto de 2022.

2. El objeto de la queja está circunscrito a indagar si se encuentra ajustada a derecho la negativa de la concesión de la apelación. Así las cosas, para que sea procedente el otorgamiento de la alzada, es necesario que la disputa sea susceptible del recurso de cara al principio de taxatividad, que sea interpuesto en la

[2] Folios 265 a 266, archivo 02, cuaderno 01, archivo juzgado
[3] Folio 273, archivo 02, cuaderno 01, archivo juzgado

oportunidad establecida en la ley, que el apelante sea parte o tercero interviniente y que la providencia le cause un agravio o perjuicio, lo que se concreta en el interés jurídico para recurrir.

3. En el presente caso, se impone examinar si la concesión de la apelación es viable, para ello se precisa determinar: i) si concurre legítimamente el recurrente, ii) si la providencia cuestionada es susceptible de apelación y, iii) si el recurso fue propiciado oportunamente.

4. Se valora que las decisiones cuestionadas se centran en las solicitudes que le fueron resueltas de manera desfavorablemente, esto es, la negativa de resolver las excepciones *"previas"* de *"prescripción"* "*caducidad"* y *"falta de legitimación en la causa"* y la ausencia de motivación de la providencia que negó el control de legalidad.

Para esto, es preciso indicar que quien promueve el recurso se haya legitimado para controvertir la actuación, dada la calidad de parte e interés que le asiste en el particular.

Se anticipa que se declarará bien denegado el recurso de apelación, toda vez que las providencias impugnadas fueron notificadas en estrados y contra estas no se interpuso recurso de apelación en esa oportunidad.

Al contrastar el objeto de la queja con lo actuado en la audiencia, se establece que la audiencia se desarrolló bajo las reglas del artículo 101 del C.P.C., en la etapa de "*fijación de hechos, pretensiones y excepciones*" hubo disenso frente a lo manifestado por el Juez cuando adujo que no existen excepciones previas por resolver[4], cuestión que lejos de establecer sobre su legalidad, lo cierto es que se evidencia que contra ese pronunciamiento no se interpuso ningún recurso de apelación.

En ese orden, tal y como lo advirtió el *A quo* resulta extemporáneo cualquier

[4] Minuto 37:57 a 48:50 y minuto 1:03:08 a 1:31:27, archivo 03, cuaderno juzgado

reparo,[5] circunstancia que provocó su ejecutoria instantánea,[6]y con tal omisión convalidó lo actuado.

Esto sin mencionar que tampoco son susceptibles de ser impugnadas las providencias que se dictaron en el desarrollo de la audiencia del 101 dela C.P.C., porque no encajan en ninguno de los supuestos de hecho que prevé el art. 351 del C.P.C.

5. En conclusión, hizo bien el Funcionario en negar la apelación, como quiera que resultaba extemporáneo.

Por lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero. Declarar bien denegado el recurso de apelación en el asunto en referencia.

Segundo. No condenar en costas, al no aparecer comprobada su causación.

Tercero. Devolver las diligencias al Juzgado de origen para que hagan parte del expediente

Notifíquese

Firma electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

---

[5] *Art. 325 del C.P.C. Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias, se considerarán notificadas el día en que éstas se celebren, aunque no hayan concurrido las partes."*

[6] *Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes**, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos**. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.*

Firmado Por:

Ivan Dario Zuluaga Cardona

Magistrado

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5d258c755c44895554d40f7ab30286a0e53a0fbb595d352f43098d44cf0647c1**

Documento generado en 23/06/2023 03:18:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	Ejecutivo a continuación de proceso verbal
Demandante	Nancy Mireya Laiton Laiton y otro
Demandados	Javier Andrés Zambrano Ramírez y otros
Radicado	110013103 022 2017 00494 03
Instancia	Segunda
Asunto	Declara inadmisible

1. Sería del caso decidir el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte ejecutada Nancy Mireya Laiton Laiton y otro, contra el auto calendado 01 de diciembre de 2022, proferido por el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá, D.C.[1], por medio del cual libró mandamiento de pago a continuación de proceso verbal; si no fuera porque se advierte su improcedencia.

2. En ese contexto debe recordarse que, para que sea procedente el recurso de alzada, es necesario que la providencia sea susceptible de dicho medio de cara al principio de taxatividad, es decir, que corresponda a los asuntos enlistados en el artículo 321 del Código General del Proceso o en norma especial; adicional a ser formulado en la oportunidad establecida en la ley, que el apelante sea parte o tercero interviniente y que la providencia le cause un agravio o perjuicio, lo que se concreta en el interés jurídico para recurrir.

3. En el particular, el legislador excluyó el auto que libra mandamiento de pago como pasible del medio vertical, tal como dispone el artículo 438 del C.G.P.,

[1] Cuaderno de primera instancia, cuaderno 04, archivo 008.

"[e]l mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo." Norma que no establece condicionamiento en contrario, más cuando, el canon 430 *ibidem,* manda porque este sea ordenado *"en la forma pedida, si fuere procedente"* o en la que el juez *"considere legal"*.

Ahora, el inciso segundo, del artículo 306 *ejusdem*, trae un condicionamiento para la notificación de la decisión, más no incorpora una pauta de procedencia de la alzada.

4. En este orden, al versar la apelación únicamente sobre la época en que se dictó el interlocutorio, esto es, si fue antes o después de los 30 días fijados en el inciso segundo del artículo 306 en comento; debe abrirse paso la inadmisibilidad del medio, porque ello de ningún modo, se trató de una negativa a librar el apremio.

5. Se otea que, las medidas cautelares no fueron impugnadas de manera independiente ni bajo razonamientos encausados a reprochar su procedencia, ni su alcance; puesto que, al buscarse abatir el mandamiento de pago, igual suerte debía surtir las aprehensiones y ello era lo que procuraba el recurrente.

Nótese que, la petición señaló: (…) "*la demanda se presentó el día 05 de agosto de 2022, es decir, de manera extemporánea y así lo debe declarar el despacho a su digno cargo mediante la revocatoria de la citada providencia y las que se emitieron seguidamente, como consecuencia de la revocatoria que se solicita." (sic)*[2]

Y, el primer grado, al resolver la reposición,[3] refirió *"[i]déntica postura se tiene respecto del decreto de medidas cautelares, pues no existiendo duda acerca de la procedencia de la orden de apremio, es viable disponer sobre las cautelas, acorde con lo dispuesto en el artículo 599 del Código General del Proceso, según el cual "Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado", tal y como aquí acontece."*

---

[2] Ibidem, archivo 013.
[3] Ibidem, archivo 022.

Así, no puede tenerse como apelado, en los términos del numeral 8, del artículo 321 del C.G.P., tal decisión; bien sea, por falta de sustentación de un reparo puntual, o porque, el levantamiento de medidas debía surtirse conforme a la ley, de haberse revocado el mandamiento de pago, tal como consigna el numeral 4, del artículo 597 *ibidem*.[4]

Por lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero. Declarar inadmisible el recurso de apelación formulado por el extremo ejecutado en contra del auto calendado 01 de diciembre de 2022, que libró mandamiento de pago, y tener por no apelado lo concerniente a las medidas cautelares, establecidas en decisión de la misma data; proferidas por el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., de conformidad con las razones precedentes.

Segundo. Devolver el expediente al funcionario de origen para lo de su competencia, una vez ejecutoriado este proveído.

NOTIFÍQUESE

Firma Electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

[4] Código General del Proceso. Artículo 597. Levantamiento Del Embargo Y Secuestro. Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos: (…)
4. Si se ordena la terminación del proceso ejecutivo por la revocatoria del mandamiento de pago o por cualquier otra causa. (…)

Firmado Por:

Ivan Dario Zuluaga Cardona

Magistrado

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c59e50a1dc7a9610ac3f391ca82ac09b0d491d365f2febb21f9ac832d330485d**

Documento generado en 23/06/2023 02:07:11 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	Verbal – Divisorio
Demandante	Daniel Lozano Chavarro
Demandado	Juan Alejandro Lozano Bernal y Olga Lucía Lozano Bernal
Radicado	110013103 023 2023 00020 01
Instancia	Segunda
Decisión	Resuelve apelación auto

ASUNTO

Se decide el recurso de apelación formulado por el demandante contra la decisión proferida el 21 de febrero de 2023 por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., por medio de la cual se rechazó la demanda, en el asunto en referencia.

ANTECEDENTES

1. Daniel Lozano Chavarro, a través de apoderado judicial, presentó demanda divisoria para la venta del bien común que posee con los convocados[1].

2. En auto de 26 de enero de 2023, el *a quo* inadmitió la demanda para que, entre otras cosas, se diera *"estricto cumplimiento al inciso 3 del artículo 406 del Código General del Proceso, aportando el dictamen pericial en los términos que allí se indican,*

[1] Cuaderno de primera instancia, archivo 002.

determinando la proporción que a cada comunero corresponde y debe ser asignada, así como el tipo de división que admite el bien. (art. 90 núm. 1º del C. G. del P).”

3. La parte actora presentó escrito de subsanación en el cual solicitó dar aplicación al artículo 227 del Código General del Proceso, ante la imposibilidad de aportar el dictamen pericial por fuerza mayor, porque, “*los comuneros que habitan el inmueble objeto de la demanda no permiten que el perito ingrese al inmueble para cumplir con la carga procesal*”, y como consecuencia, no puede ser allegado dentro del término para la subsanación.[2]

4. En proveído del 21 de febrero de 2023, la judicatura rechazó la demanda al advertir que no había sido corregida en debida forma, y reparó que, la exigencia del avalúo para admitir el medio recae en el artículo 406 del C.G.P., y no poder suplir el juez de instancia tal carencia, al ser una “*responsabilidad taxativa*” de quien acude a la jurisdicción.[3]

5. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, en procura de la revocatoria del pronunciamiento; para lo que se adujo que, en el escrito de subsanación y en la demanda se solicitó requerir a los demandados para que permitieran efectuar el dictamen, al oponerse al mismo; por lo que, peticionó dar aplicación al artículo 227 del C.G.P.[4]

6. En interlocutorio del 27 de marzo de 2023 el estrado resolvió el medio formulado, para lo que dispuso mantener incólume la determinación, lo que cimentó en que, indiferente con lo que pase con el inmueble, era del resorte del interesado prever la satisfacción de los requisitos consignados en las normas, que regulan el trámite especial y no esperar que el juez los supla. Por último, concedió el recurso de apelación al encontrarlo procedente.[5]

---

[2] Ibidem, archivo 012.
[3] Ibidem, archivo 014.
[4] Ibidem, archivo 016.
[5] Ibidem, archivo 019.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde establecer si la demanda fue subsanada en adecuada forma y como consecuencia de ello, debió o no efectuarse el rechazo del medio tuitivo. Desde ahora se advierte que la decisión será revocada, como se pasa a explicar.

2. Sea preciso aclarar que, el tema abordado resulta apelable dada la naturaleza del proceso y por disposición del numeral 5, del artículo 321 del Código General del Proceso, que enuncia como susceptible de alzada el auto que "*rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.*"

3. Sobre la presentación de un avalúo especial, como requisito para admitir la demanda divisoria, establece el estatuto procesal civil:

> *"Artículo 406. Partes. Todo comunero puede pedir la división material de la cosa común o su venta para que se distribuya el producto.*
>
> *La demanda deberá dirigirse contra los demás comuneros y a ella se acompañará la prueba de que demandante y demandado son condueños. Si se trata de bienes sujetos a registro se presentará también certificado del respectivo registrador sobre la situación jurídica del bien y su tradición, que comprenda un período de diez (10) años si fuere posible.*
>
> *En todo caso el demandante deberá acompañar un dictamen pericial que determine el valor del bien, el tipo de división que fuere procedente, la partición, si fuere el caso, y el valor de las mejoras si las reclama."*
> (Subraya fuera del texto)

En este ámbito se otea que, el requisito que le fue impuesto al demandante en efecto parte del precepto legal que procura por la celeridad del proceso, premisa sobre la cual, la Corte Constitucional se pronunció de cara con su exigencia junto al escrito de demanda[6]:

> *"En consecuencia, la carga procesal definida en el artículo 406 (parcial) del CGP, que le exige al demandante del proceso divisorio aportar un dictamen pericial como anexo de*

[6] Corte Constitucional. Sentencia C-284 de 2021. MP. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

la demanda, no genera una afectación desproporcionada de la garantía de acceso a la administración de justicia. Lo anterior, porque el anexo acusado es relevante para la pretensión del proceso, tiene la potencialidad de imprimirle celeridad al trámite, se exige en un contexto en el que concurren los propietarios de una cosa común y en el que se plantea una pretensión preponderantemente patrimonial. Finalmente, en cualquier caso, el estatuto procesal al que pertenece la disposición acusada prevé un mecanismo concreto, dirigido a que se evalúen y exoneren de las cargas con contenido económico a las personas que no cuentan con los recursos para satisfacerlas y, de este modo, se eliminen las barreras de acceso a la jurisdicción."

4. Por regla general y en el contexto de las cargas procesales, el demandante no debe presentar mayores inconvenientes para acercar lo pedido al momento de radicar la demanda; contrario, tal probanza pretende avanzar con prontitud hacia la definición de la instancia y lograr el fin último de la venta o la división.

Sin embargo, el no contar quien acciona con ingreso al inmueble objeto del litigio, especialmente cuando la causa subyace en no permitirse la entrada al predio por quien lo tiene bajo su tenencia o posesión, debe entenderse como una justificación de peso para trasladar la carga de aportar el mismo en otro estadio procesal, como puede ser, el que se señale en amparo del artículo 227 del C.G.P; con la salvedad que, se trata de correr el cumplimiento a una etapa en la que pueda instarse al extremo para que permita el acceso al bien; más no para eximir la práctica de la pericia.

En este contorno, el rechazo de la demanda impide el acceso efectivo a la administración de justicia del censor porque, difícilmente va a encontrar alivio fuera de los estrados judiciales para hacerse al avalúo que requiere, de ahí que, truncar bajo tal razón la admisión es desproporcional con los fines de la justicia y la efectividad del derecho sustancial; postulado que debe buscar satisfacerse, tal como pregona el artículo 11 *ejusdem;* así como de la igualdad de las partes, artículo 4 del C.G.P., porque, ello convalidaría que, mientras no se permita la inspección al inmueble, el demandante estaría obligado a permanecer en indivisión, lo que también contradice los cánones 1374 y 2334 del Código Civil.

5. Así las cosas, hay lugar a revocar el auto impugnado para que el *a quo* proceda a resolver nuevamente sobre la admisión de la demanda, sin anteponer lo visto; y sin condena en costas por salir avante la alzada.

Por lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero. Revocar el auto del 21 de febrero de 2023 emitido por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., por las razones expuestas en la parte motiva. En su lugar, deberá la autoridad judicial resolver una vez más sobre la admisión de la demanda en los términos sentados y sin anteponer la causal de rechazo génesis de la alzada.

Segundo. No condenar en costas al apelante.

Tercero. Devolver la actuación al juzgado de origen, ejecutoriado este proveído.

NOTIFÍQUESE

Firma Electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **568349ce0c2d1a793ff6c9ad89456a207d7973e8f69707c861ca4a2fa8ef1710**
Documento generado en 23/06/2023 02:28:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	Verbal
Demandante	Condominio Peñalisa Mall Hotel y Reservado P.H.
Demandado	Alianza Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio autónomo Fidecomiso Peñalisa Hotel
Radicado	110013103 033 2021 00556 01
Instancia	Segunda

ASUNTO

Se resuelve la solicitud de desistimiento que hace el mandatario de la parte actora.

CONSIDERACIONES

El desistimiento de un recurso es un acto procesal que recae exclusivamente en la parte que haya presentado el mismo. La ley procesal autoriza desistir de los recursos ya sea ante el funcionario de primera instancia o ante el superior.

En tal sentido, expresa el inciso segundo del citado artículo 316 del C.G.P: *"[e]l desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.*

En el caso concreto, se reúnen los requisitos legales para aceptar el desistimiento del recurso de apelación presentado por el extremo demandante frente a la alzada promovida contra el auto del 28 de marzo de 2022[1], proferido por el Juzgado 33 Civil del Circuito; en razón a que el apoderado que presenta la petición, tiene facultad expresa para desistir, según el memorial poder allegado junto con la demanda, además, esta Corporación aún no había emitido el pronunciamiento de fondo en el caso controvertido.

No se condenará en costas, porque en este asunto no se alcanzó a trabar la relación jurídico procesal ni se practicaron medidas cautelares.

En mérito de lo expuesto; se

RESUELVE

Aceptar el desistimiento del recurso de apelación en el proceso de la referencia.

No condenar en costas ni perjuicios a quien desistió.

Devolver el expediente al *A quo*. Por Secretaría procédase de conformidad.

Notifíquese

Firma electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Firmado Por:

[1] Archivo 11, cuaderno principal

Ivan Dario Zuluaga Cardona

Magistrado

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2e9d85a9672fb60eecb49bdac273da7a1d9fcc3045f296e2e137d2337f6cb258**

Documento generado en 23/06/2023 03:09:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Magistrado Sustanciador: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	Verbal – Responsabilidad civil contractual
Demandante	Katherine Garzón Bedoya, Eliseo Garzón Perdigón y María Adiela Bedoya De Garzón
Demandado	Pontificia Universidad Javeriana y Hospital Universitario San Ignacio
Llamados en garantía	Seguros Generales Suramericana S.A., Chubb De Colombia Compañía De Seguros S.A. y MAPFRE Seguros Generales De Colombia S.A.
Radicado	110013103 035 2013 00759 03
Instancia	Segunda
Decisión	Resuelve solicitud de pruebas en segunda instancia

Se resuelve sobre la solicitud de prueba documental que en término oportuno allegó la parte demandada.

CONSIDERACIONES

1. Solicitó la parte demandante decretar y tener como prueba un dictamen pericial de contradicción frente al aportado por el Hospital San Ignacio; lo que sustentó en que, *i)* la prueba que sirvió para exonerar de responsabilidad a la entidad citada se trató de una experticia de parte, contratada y pagada por aquella; *ii)* dentro de la contradicción de la prueba, fue solicitada la comparecencia del perito y la concesión de un plazo adicional para presentar un peritaje de contradicción; empero, la judicatura, en decisión del 09 de octubre de 2019, negó tal posibilidad porque para refutarlo, debía "*allegar un nuevo o en su defecto solicitar la comparecencia del perito a audiencia dentro de los tres días siguiente al auto que puso en conocimiento de las partes la*

experticia"; y *iii)* formulado recurso de apelación contra la providencia anterior, este se negó de plano.

2. El artículo 327 del Código General del Proceso, establece taxativamente los casos en los que es procedente el decreto y práctica de pruebas en segunda instancia a solicitud de parte, esto es:

> *"1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo.*
> *2. Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió.*
> *3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.*
> *4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria.*
> *5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior."*

3. En el *sub examine* surge que, la parte interesada mostró como causales para la práctica de la prueba en segunda instancia los numerales 2 y 3 del canon 327 en cita, a partir de lo cual se ausculta:

3.1. No puede tenerse que la prueba ahora requerida dejó de ser practicada sin culpa de la parte que la pidió; en tanto, aquella tuvo incidencia en la suerte negativa trazada a su solicitud, pauta bajo la cual fueron decididos los recursos impetrados.

Se nota que, en el particular, la contradicción al dictamen en la forma que plantea el extremo se truncó porque, el juzgado no halló ajustado a la norma lo pedido, tal como dio cuenta el auto 4, reseñado en la audiencia de instrucción y juzgamiento del 24 de septiembre de 2019[1], en el que se concedió el término de 03 días para que las partes procedieran de conformidad con el artículo 228 del C.G.P.

Ahora, el memorial que procuraba por citar a la sustentación de la experticia al perito y por la concesión de un plazo prudencial que permitiera acercar un dictamen de contradicción fue radicado el 30 de septiembre de 2019[2], data que es

[1] Cuaderno de primera instancia, cuaderno 03, páginas 720 a 721, y grabación 20, minutos 19:25 y ss.
[2] Ibidem, páginas 738 a 740.

posterior al vencimiento del lapso concedido, y que corrió entre el 25 y el 27 de ese mes y año.

Con ello, el segundo aparte del auto del 09 de octubre de 2019[3] que negó lo discrepado contiene una consecuencia acorde a la preclusividad de los estadios procesales y nada puede reprocharse ahora, en beneficio del censor, porque aún al haber acudido al recurso de apelación[4], que no le fue concedido[5], y al de reposición, en subsidio queja[6], que tuvo por debidamente denegada la alzada[7], dicha decisión se mantuvo y en ese contorno adquirió ejecutoria.

3.2. Visto lo anterior, cae de peso lo rogado bajo lo consignado en el numeral 3, del artículo 327 *ejusdem*; puesto que, la parte bien pudo controvertir el dictamen, lo que no ocurrió por extemporaneidad; misma que le es atribuible a su propia incuria, de ahí que, los hechos no son posteriores al momento previsto para "*pedir pruebas en primera instancia*", lo que sella la suerte adversa de lo perseguido.

4. Por lo anterior, se negará la solicitud de pruebas en esta instancia; lo anterior, sin perjuicio de que en caso de llegar a considerarse necesario el decreto oficioso de medios de convicción, oportunamente se haga uso de la facultad conferida en tal sentido por el ordenamiento procesal civil.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil,

RESUELVE

Primero. Negar la solicitud de pruebas elevada por la parte demandante; bajo las razones expuestas.

Segundo. Continuar con el trámite de la alzada.

---

[3] Ibidem, páginas 812 y 813.
[4] Ibidem, páginas 826 a 827.
[5] Ibidem, página 844.
[6] Ibidem, páginas 846 a 849.
[7] Ver auto que no reposición y ordena expedir copias para el recurso de queja: Ibidem, páginas 856 a 860.
Auto del 23 de enero de 2020, que resolvió el recurso de queja por esta Corporación, MP. Dra. Hilda González Neira: cuaderno 11, páginas 06 a 08.

NOTIFÍQUESE

Firma Electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a4d8627ad250c76c8efc4b06d9f5158537191922301633b81fa8563bc489d5df**
Documento generado en 26/06/2023 12:56:12 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	Ordinario
Demandante	Marlies Brugger de Álvarez
Demandado	Martha Stella Álvarez, Miguel Álvarez y otros
Radicado	110013103 037 2013 00211 01
Instancia	Segunda
Decisión	Resuelve apelación

ASUNTO

Se decide el recurso de apelación formulado por el mandatario judicial de la demandada Martha Stella Álvarez contra la decisión emitida en audiencia el 08 de febrero de 2023 ante el Juzgado 51 Civil del Circuito de la ciudad, por medio de la cual, no se aceptó un documento aportado por el testigo Andrés Kattah.

ANTECEDENTES

1. En sesión de audiencia de instrucción y juzgamiento celebrada el 08 de febrero de 2023, durante el testimonio del señor Andrés Kattah, el *a quo*, no accedió a la incorporación de documentos atinentes a las averiguaciones realizadas ante la Cámara de Comercio de las sociedades[1], para lo que arguyó que, salvo el denominado "*YDRAY-Prediales*", los restantes no están relacionados con la declaración y son

[1] Cuaderno de primera instancia, archivo 33, grabación 01, minutos 1:57:00.

anteriores a la contestación de la demanda, por lo que, pudieron ser acercados en esa oportunidad.[2]

2. La decisión fue recurrida en reposición y en subsidio apelación, con fines de su modificación[3]. Expuso el apoderado de la codemandada que el testigo no es parte, y que lo procurado por la ley procesal es el acercamiento a la verdad; lo que no le hace daño al mismo, en tanto, los folios aluden a las sociedades de las que eran accionistas los litigantes; y ser, además, conducentes, pertinentes y necesarias; aunado a poder ser sometidos a contradicción en la forma propia para las pruebas documentales, como sería tacharlos de falsos.

3. La contraparte, enfocó su intervención en aras de mantener la negativa, al ir ello en contra de la igualdad entre los contendientes y las normas que dirigen la materia.[4]

4. Seguido, el juzgado resolvió no reponer la decisión cuestionada[5]; para ello explicó que: *i)* los documentos tienen que estar relacionados con la declaración y *ii)* no estén supliendo una falencia en la actividad de la parte de presentar y pedir oportunamente las pruebas.

Lo que se sustentó en que, salvo el archivo que fue aceptado, los demás no cumplen con las exigencias establecidas en la Ley; así, la alusión del testigo de haber realizado averiguaciones ante las entidades, mención que fue generalizada, no habilita para acercar decisiones adoptadas en las asambleas de esas sociedades, y menos, para permitir que la parte obtenga una nueva oportunidad de aportar pruebas no traídas al contestar la demanda. Por último, concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

I. CONSIDERACIONES

[2] Ibidem, archivo 33, grabación 02, minutos 00 a 06:00 y carpeta Documentos Jorge Andrés Kt.
[3] Ibidem, archivo 33, grabación 02, minutos 06:20 a 15:20.
[4] Ibidem, archivo 33, grabación 02, minutos 15:30 a 21:00.
[5] Ibidem, archivo 33, grabación 02, minutos 21:20 a 29:00.

1. Se procede a analizar si se encuentra ajustada a derecho la decisión por medio de la cual el *a quo* negó la incorporación de documentos a través de un testigo, en la etapa probatoria. Desde ahora se anticipa que el pronunciamiento rebatido será confirmado.

2. En cuanto a la procedencia del recurso se otea que el legajo es susceptible de alzada, al tratarse de un proceso tramitado en primera instancia; adicional, el asunto debatido se halla dentro de los enunciados como apelables en el numeral 3, del artículo 321 del Código General del Proceso, para *"[e]l que niegue el decreto o la práctica de pruebas.*"

3. Establece el numeral 6, del artículo 221 del Código General del Proceso que, dentro de la práctica de la prueba testimonial, el deponente "*al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio; estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del testimonio. Así mismo el testigo podrá aportar y reconocer documentos relacionados con su declaración.*"

4. En ese ámbito se advierte que, los documentos en controversia, corresponden a los siguientes archivos: *"cheques marlys.pdf; WhatsApp Image 2023-02-07 at 8.01.35; YDRAY-Aiyda1.pdf; YDRAY-Din01.pdf; YDRAY-Din-02.pdf; YDRAY-Din-03.pdf; YDRAY-Din-04.pdf; YDRAY-Macris-1.pdf; YDRAY-Macris-2.pdf; YDRAY-Renta-Martha.pdf; YDRAY-Rinde.pdf; YDRAY-Suc-Intestada.pdf; YDRAY-Trefilco1.pdf; YDRAY-Trefilco2.pdf y YDRAY-Trefilco-3.pdf"*[6] que contienen información previa a la radicación a la demanda, o a registros efectuados para esas calendas, y en menor proporción, de fechas posteriores; mismos que se hallan en un amplio volumen de folios.

5. En este caso, la postura adoptada por la judicatura emerge con el peso y motivación para soportar la determinación de la instancia; en tanto, el numeral 6 del artículo 221 *ibidem*, procura porque, lo incorporado por el testigo esté dentro de los

[6] Ibidem, carpeta Documentos Jorge Andrés Kt.

linderos de aquello que está dando cuenta y en ese orden, no puede traer al plenario cualquier clase de información, sin limitación alguna.

En el particular no es diáfano que, los archivos guarden identidad palmaria con los aspectos mencionados por el absolvente, puesto que, no está en duda que este puede conocer ampliamente lo que involucran, empero, sus respuestas no eran suficientes para incorporar todo lo que se trajo.

Los interrogantes planteados por el apoderado de la codemandada no eran de tal precisión que unan lo contestado con los documentos traídos; así, en el desarrollo de la audiencia es visible que, las preguntas fueron puntuales en torno al traspaso de acciones de las sociedades Inversiones DIN S.A., TREFILCO S.A. y AYDA Ltda., entre los extremos de esta litis como parte de pago de la casa contendida.

Luego, le fue preguntado quién asumía el pago de impuestos, y si había realizado averiguaciones y de qué tipo, afines con las personas jurídicas en mención, para esto último refirió que, "*en Cámara de Comercio sacamos las actas de TREFILCO, AYDA, DIN*" y luego, por iniciativa del abogado de la señora Martha Stella Álvarez Martínez, mas no del testigo, le fue cuestionado *"¿usted desea aportar esos documentos al despacho*", a lo que contestó "*sí, claro*"[7].

De una parte, el testigo no fue espontáneo en querer que el juez, por su medio, conociera la información que poseía, sino que lo fue por impulso del profesional del derecho, luego, este fue el que determinó el alcance de lo que el testigo iba a aportar, y no permitió que entre la generalidad de todo lo que pudo averiguar ante la Cámara de Comercio, se enfatizara qué era lo que se ligaba a su ponencia y cómo ello nutría o contribuía a su dicho.

Nótese que, al sustentar el recurso de reposición y en subsidio apelación, la parte tampoco enfatizó cómo se concatenaba cada archivo de manera directa e íntima con lo abordado por Andrés Kattah; porque una cosa era que el cartapacio guardara

[7] Ibidem, archivo 33, grabación 01, minutos 1:57:00.

afinidad con el proceso, como debía serlo, y otra, que fehacientemente se relacionara con la declaración; lo que poco se concretó.

Así, el testimonio puede dar lugar a una nueva incorporación de pruebas, pero ello no es bajo un análisis desprovisto de rigor, y menos, sin limitación, porque la carga de la prueba recae en las partes (no en el testigo), y son estas las que cuentan con etapas preclusivas para su solicitud; de ahí que, en aspectos tan amplios y faltos de puntualidad temporal y material como el visto, es justificada la negativa que se extendió.

Por último, el apoderado recurrente expuso que la información había sido conseguida por el testigo "*en compañía de su madre*"[8], es decir, la señora Martha Stella Álvarez Martínez[9], quien es demandada dentro de la actuación; razón por demás, para reprochar que, la demandada pudo acercarlos al contestar la demanda, o valerse de la libertad probatoria para aducirlos en debida forma, en la oportunidad debida, porque se entiende, los conocía; y no esperar, que a través del tercero arrimaran al paginario, sin el más mínimo reparo.

6. Frente al memorial acercado por el apelante, donde precisa los asuntos que debe resolver esta magistratura, en el que expone "*está por decidirse el recurso de apelación del numeral ii) anterior y, los de queja y eventual apelación del numeral iii) también anterior*"; no se encuentra ninguna apreciación para realizar al respecto, al guardar concordancia con la decisión del 18 de abril de 2023[10], que ordenó la radicación del recurso de queja pendiente y que se pasa a definir en auto separado.

7. Así las cosas, hay lugar a confirmar el auto impugnado con la consecuente condena en costas a cargo del apelante, al no haber prosperado su reclamación. Las que se tasan tal como autoriza el numeral 1, del artículo 365 del C.G.P., y el numeral 7, del artículo 5°, del Acuerdo PSAA16-10554, antes mencionado.

---

[8] Ibidem, archivo 33, grabación 02, minuto 13:40.
[9] Ibidem, archivo 33, grabación 01, minutos 01:44:30 y 02:04:30.
[10] Cuaderno de segunda instancia, archivos 06 y 08.

Por lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero. Confirmar el auto proferido en audiencia el 08 de febrero de 2023 ante el Juzgado 51 Civil del Circuito de la ciudad, conforme a lo anotado en la parte motiva.

Segundo. Imponer condena en costas por la alzada al apelante, y a favor del demandante. Para efectos de la liquidación se fijan como agencias en derecho la suma correspondiente a medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente.

Tercero. Devolver el expediente a la autoridad de origen, una vez ejecutoriada esta actuación. Por secretaría, procédase de conformidad.

NOTIFÍQUESE,

Firma Electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b33945f9f08c3dcc2223eded8093a226149fe36995fb1e84c485f0ebe5c23246**
Documento generado en 23/06/2023 02:37:58 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	Ordinario
Demandante	Marlies Brugger de Álvarez
Demandado	Martha Stella Álvarez, Miguel Álvarez y otros
Radicado	110013103 037 2013 00211 02
Instancia	Segunda
Decisión	Resuelve recurso de queja

ASUNTO

Se decide el recurso de queja formulado por el mandatario judicial de la demandada Martha Stella Álvarez contra la decisión emitida en audiencia el 08 de febrero de 2023 ante el Juzgado 51 Civil del Circuito de la ciudad, por medio de la cual, se negó el decreto de una prueba de oficio.

ANTECEDENTES

1. En sesión de audiencia de instrucción y juzgamiento celebrada el 08 de febrero de 2023, el *a quo* no accedió a la incorporación de oficio de los documentos que fueron negados para ser anexados a través del testimonio del señor Andrés Kattah[1], decisión contra la cual, se formuló recurso de reposición, en subsidio apelación.[2]

[1] Cuaderno de primera instancia, archivo 33, grabación 02, minutos 28:50 a 31:20.
[2] Ibidem, archivo 33, grabación 02, minutos 31:20 a 34:45.

2. Seguido a ello, la judicatura rechazó de plano los recursos propuestos, al tratarse de una prueba de oficio, para la cual, el Código General del Proceso, claramente en los artículos 169 y 170, reseña que es el juez quien establece cuándo una prueba es necesaria para esclarecer los hechos objeto de la controversia, así como observar que los folios inmiscuidos no son requeridos, y ser suficientes los medios con que cuenta para resolver el litigio; materia que no es susceptible de ningún recurso[3].

3. El extremo impetró el medio de reposición y en subsidio queja, al entender que la cuestión que no admite recurso es el decreto de la prueba de oficio, más no la negativa a acceder a una probanza de esa índole.[4]

4. El estrado judicial, se sostuvo en la negativa a modificar su postura y ordenó dar trámite a la queja[5]

CONSIDERACIONES

1. El problema jurídico para resolver consiste en determinar si tiene carácter de apelable el auto por el cual el *a quo* no decretó una prueba de oficio; lo que conduce a advertir desde ahora que, analizada la actuación procesal, el grado será resuelto de forma desfavorable al proponente, por las razones que se pasan a explicar.

2. El objeto de la queja está circunscrito a indagar si se encuentra ajustada a derecho la negativa de la concesión de la apelación. Así las cosas, para que sea procedente el otorgamiento de la alzada, es necesario que la providencia sea susceptible del recurso de cara al principio de taxatividad, que sea interpuesto en la oportunidad establecida en la ley, que el apelante sea parte o tercero interviniente y que le cause un agravio o perjuicio, lo que se concreta en el interés jurídico para recurrir.

3. En el presente caso, se impone examinar si la concesión de la apelación es

[3] Ibidem, archivo 33, grabación 02, minutos 38:00 a 39:15.
[4] Ibidem, archivo 33, grabación 02, minutos 39:20 a 40:11.
[5] Ibidem, archivo 33, grabación 02, minutos 40:12 a 41:50.

viable, para ello se precisa determinar: *i)* si concurre legítimamente el recurrente, *ii)* si la providencia cuestionada es susceptible de apelación y, *iii)* si el recurso fue propiciado oportunamente.

4. Con ello se valora que la decisión del juez de primera instancia discutida en sede de recurso de queja se fundó en no haber decretado una prueba de oficio; al tenerse como no susceptible del medio vertical propuesto por el pasivo. Sea preciso indicar que, quien promueve el mecanismo se haya legitimado para controvertir las actuaciones, dada la calidad de parte y el interés que le asiste en la resolución del particular.

5. Al contrastar el proveído en el que recae la queja bajo el rasero de las causales contempladas en el artículo 321 *ejusdem* se encuentra que no guarda afinidad con las allí enunciadas, menos con la del numeral 3 que consigna como apelable el auto que "*niegue el decreto o la práctica de pruebas*", así como tampoco con norma especial; en tanto, no se trata de una prueba de parte, debidamente solicitada por alguno de los extremos, en los estadios fijados por el legislador, sino, que el tema gira en la solicitud que procuró porque el juez la ordenara de oficio.

Surge relevante que, el inciso segundo del canon 169 del C.G.P., impone que, *"[l]as providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso";* porque debe entenderse que son iniciativa del director del proceso, no de los litigantes, y en esa línea, su poder jurisdiccional no está llamado a cuestionamiento.

Así, la parte motivó una solicitud para que el juez evaluara si en su criterio, los archivos remitidos por el testigo Andrés Kattah eran útiles y necesarios para verificar los hechos relacionados con las alegaciones, lo que bien pudo desplegar en su intento de persuasión para alcanzar su objetivo, pero no, porque fuera imperativo que se accediera a ello, y menos aún, que la negativa pudiera tomarse como un acto contrario al régimen probatorio.

Los mandatos de los cánones 169 y 170 del estatuto procesal civil, afianzan que esa potestad se trata de un acto propio del juzgador, no de los contendientes; así, "*las facultades oficiosas están atribuidas exclusivamente al juez, sin que quepa, por lo mismo, solicitud de*

parte al respecto;"[6] y consecuentemente, como se reseñó, no admiten recurso.

6. En conclusión, al no encontrarse debidamente acreditada la concurrencia del requisito de procedencia de la apelación, resulta atinada la decisión del despacho de origen, de denegar la concesión del recurso de alzada; sentido en el cual, se pasa a decidir.

7. No se impone la condena en costas de que trata el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, al no aparecer causadas, en concordancia con el precepto de la misma norma, en su numeral 8.

Por lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero. Declarar bien denegado el recurso de apelación, en referencia.

Segundo. No condenar en costas al recurrente, al no aparecer comprobada su causación.

Tercero. Devolver las diligencias al Juzgado de origen para que hagan parte del expediente.

NOTIFÍQUESE,

Firma Electrónica
IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado

Firmado Por:

[6] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto AC5560-2022. Magistrado Dr. Luis Alonso Rico Puerta.

Ivan Dario Zuluaga Cardona

Magistrado

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fee72cb41711de1cd4548dbb6dfd4cab584780f694b745d2ad19bf2dfe0dc746**

Documento generado en 23/06/2023 02:44:09 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	Verbal – Expropiación
Demandante	Agencia Nacional de Infraestructura
Demandado	Álvaro Antonio Hernández Páez y otros
Radicado	110013103 038 2023 00129 01
Instancia	Segunda
Decisión	Resuelve apelación auto

ASUNTO

Se decide el recurso de apelación formulado por la entidad demandante contra la decisión proferida el 27 de marzo de 2023 por el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., por medio de la cual se rechazó la demanda, en el asunto en referencia.

ANTECEDENTES

1. La Agencia Nacional de Infraestructura, presentó demanda de expropiación en la que se pretende una franja del bien inmueble que pertenece a los demandados[1].

2. En auto de 15 de marzo de 2023, el *a quo* la inadmitió para que, entre otras cosas, se "*ALLEGAR el avalúo indicado en el numeral 2º del artículo 399 del Código*

[1] Cuaderno de primera instancia, archivo 02.

General del Proceso, con fecha de elaboración no superior a un año en vista de lo normado por el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998."[2]

3. La parte actora presentó escrito de subsanación en el cual explicó que, el avalúo comercial acercado no puede ser objeto de actualización o reemplazo por otro distinto al notificado en el proceso de enajenación voluntaria; por lo que, debía tenerse en cuenta el anexado con la radicación del medio tuitivo.[3]

4. En proveído del 27 de marzo de 2023, la judicatura rechazó la demanda al advertir que no había sido corregida en debida forma, y reparó que, la parte cuestionó lo atinente al avalúo, sin cumplir lo instado.[4]

5. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, en procura de la revocatoria del pronunciamiento; para lo que adujo que, la experticia en protesta incumbe a la que se encuentra en firme dentro de la enajenación voluntaria, como manifiesta el parágrafo 2, del artículo 9 de la Ley 1881 de 2018; adicional, en el acto administrativo de expropiación se encuentra discriminado el avalúo comercial notificado con la oferta de compra, mismo que está en firme en los términos del artículo 31 de la Ley 1682 de 2013 y los artículos 88 y 89 de la Ley 1437 de 2011.[5]

6. En interlocutorio del 17 de abril de 2023 el estrado resolvió el medio formulado, para lo que dispuso mantener incólume la determinación, lo que cimentó en que, la norma especial que rige la experticia regula el término de vigencia de los avalúos, ello es, el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, en el que refiere que aquella será de un año desde su elaboración; y no su firmeza. Por último, concedió el recurso de apelación al encontrarlo procedente.[6]

---

[2] Ibidem, archivo 06.
[3] Ibidem, archivo 07.
[4] Ibidem, archivo 09.
[5] Ibidem, archivo 10.
[6] Ibidem, archivo 12.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde establecer si la demanda fue subsanada en adecuada forma y como consecuencia de ello, debió o no efectuarse el rechazo del medio tuitivo. Desde ahora se advierte que la decisión será revocada, como se pasa a explicar.

2. Sea preciso aclarar que, el tema abordado resulta apelable dada la naturaleza del proceso y por disposición del numeral 5, del artículo 321 del Código General del Proceso, que enuncia como susceptible de alzada el auto que "*rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.*"

3. Sobre el particular se tiene que, la Agencia Nacional de Infraestructura trajo como avalúo comercial la suma de $356.323.859, bajo el documento nro. RM-633_CAB-2-1-345 del 26 de abril de 2021, para la zona del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria nro. 146-12587 objeto de expropiación en una de las franjas requeridas para el proyecto "*Conexión vial Antioquia – Bolívar*".[7] Adicional a ello, el acto administrativo que ordenó iniciar los trámites de expropiación judicial atañe a la resolución nro. 20226060019705 del 30 de noviembre de 2022, ejecutoriada el 29 de diciembre de 2022.[8]

Al respecto debe considerarse que, el proceso de expropiación tiene como objeto la efectividad del artículo 58 de la Constitución Política "*que desarrolla el concepto de función social de la propiedad*" por motivos de utilidad pública o de interés social; cuyo trámite judicial fue instituido para ser presentado ante el juez de manera célere una vez fracasado el trámite administrativo, para lo que fijó el legislador en el numeral 2, del artículo 399 del Código General de Proceso que, debía darse "*dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la cual quedare en firme la resolución que ordenare la expropiación, so pena de que dicha resolución y las inscripciones que se hubieren efectuado en las oficinas de registro de instrumentos públicos pierdan fuerza ejecutoria, sin necesidad de pronunciamiento judicial o administrativo alguno.*"

---

[7] Ibidem, archivo 01, páginas 45 a 98.
[8] Ibidem, archivo 01, páginas 135 a 157.

En este sentido se propende porque, la puesta en movimiento del aparato judicial sea ágil, una vez alcanzado el acto (y su firmeza) que ordene la expropiación por la entidad encargada; en este ámbito, anteponer una carga como la reseñada por el funcionario de instancia para la admisión, no solo trunca el acceso efectivo a la administración de justicia, sino que pone en riesgo que la encargada pierda la vigencia de sus actos.

Ahora, ello no es contrario a lo que la parte pueda controvertir para el justiprecio, o a lo que el juez, en sus facultades oficiosas pueda disponer para la actualización en la etapa procedente, de modo que la sentencia se rija por un avalúo actualizado; puesto que, bajo el criterio impuesto difícilmente se alcanzaría la decisión de fondo con la valuación vigente, conforme al canon 2.2.2.3.18 del Decreto 1170 de 2015.[9]

En este contorno, el rechazo impide la eficacia del artículo 229 de la Carta Superior de una entidad pública porque, ante las circunstancias específicas, requerir un avalúo nuevo o que actualice el practicado como requisito de admisión, contraría los postulados de preclusividad previstos para la presentación de la demanda.

4. Así las cosas, hay lugar a revocar el auto impugnado para que el *a quo* proceda a resolver nuevamente sobre la admisión, sin anteponer lo visto; y sin condena en costas al censor por salir avante la alzada.

Por lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

---

[9] Decreto 1170 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística.
Artículo 2.2.2.3.18. Vigencia de los avalúos. Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación. (Decreto 1420 de 1998, Artículo 19)

RESUELVE

Primero. Revocar el auto del 27 de marzo de 2023 emitido por el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., por las razones expuestas en la parte motiva. En su lugar, deberá la autoridad judicial resolver una vez más sobre la admisión de la demanda en los términos sentados y sin anteponer la causal de rechazo génesis de la alzada.

Segundo. No condenar en costas al apelante.

Tercero. Devolver la actuación al juzgado de origen, ejecutoriado este proveído.

NOTIFÍQUESE

Firma Electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9f5eb5e94daed7f075eb00682b2fba88901989f538b2c0159c1fb84e425e934b**
Documento generado en 26/06/2023 12:36:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Vínculo: 34. 049 2022-00527 01

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	Ejecutivo singular de mayor cuantía
Demandante	Banco de Occidente S.A.
Demandados	Juan Carlos González Pardo
Radicado	110013103 049 2022 00527 01
Instancia	Segunda
Asunto	Declara inadmisible

1. Sería del caso decidir el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte ejecutante contra el auto calendado 06 de marzo de 2023, proferido por el Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogotá, D.C.[1], en el asunto en referencia, por medio del cual libró mandamiento de pago; para el que se ha insistido por el censor en el reconocimiento de los intereses moratorios desde la data indicada en la demanda, y no, desde el momento señalado por el funcionario judicial[2].

2. En ese contexto debe recordarse que, para que sea procedente el recurso de alzada, es necesario que la providencia sea susceptible de dicho medio de cara al principio de taxatividad, es decir, que corresponda a los asuntos enlistados en el artículo 321 del Código General del Proceso o en norma especial; adicional a ser formulado en la oportunidad establecida en la ley, que el apelante sea parte o tercero interviniente y que la providencia le cause un agravio o perjuicio, lo que se concreta en el interés jurídico para recurrir.

---

[1] Cuaderno de primera instancia, archivo 004, páginas 43 y 44; y archivo 007.
[2] Ibidem, páginas 49 a 51.

3. En el particular, el legislador excluyó el auto que libra mandamiento de pago como pasible del medio vertical, tal como establece el artículo 438 del C.G.P., *"[e]l mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo."* Norma que no establece condicionamiento en contrario, más cuando, el canon 430 *ibidem,* manda porque este sea ordenado *"en la forma pedida, si fuere procedente"* o en la que el juez *"considere legal"*.

4. En este orden, al versar la apelación únicamente sobre los intereses moratorios, que fueron dispuestos de manera disímil a lo rogado, debe abrirse paso la inadmisibilidad del medio, porque ello de ningún modo, se trató de una negativa a librar el apremio.

Por lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero. Declarar inadmisible el recurso de apelación formulado por la entidad ejecutante en contra del auto calendado 06 de marzo de 2023, proferido por el Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., de conformidad con las razones precedentes.

Segundo. Devolver el expediente al funcionario de origen para lo de su competencia, una vez ejecutoriado este proveído.

NOTIFÍQUESE

Firma Electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Firmado Por:

Ivan Dario Zuluaga Cardona

Magistrado

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **59981d8caa2a2e58a2aa40938fba7791460d8d80f0d211322a27b96adc2b66b9**

Documento generado en 23/06/2023 02:20:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	Verbal
DEMANDANTE	Xiomara Paola Narváez Chinchia
DEMANDADA	Julio Alberto Saavedra Salcedo
RADICADO	110013103 004 2020 00317 01
INSTANCIA	Segunda – *apelación sentencia* -
DECISIÓN	Admite

De conformidad con lo reglado por los artículos 322 y 323 del Código General del Proceso en armonía con el precepto 12 de la Ley 2213 de 2022, que establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, se admite en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 16 de mayo de 2023, proferida por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá.

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este proveído, deberá sustentarse el recurso a través del correo electrónico institucional de la Secretaría de la Sala Civil de este Tribunal[1], atendiendo lo estatuido por el artículo 109 del Código General del Proceso, so pena de declararse desierto.

Presentada en oportunidad la sustentación, córrase traslado por cinco (5) días a la parte contraria.

Notifíquese.

JAIME CHAVARRO MAHECHA
Magistrado

[1] secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	Pertenencia
DEMANDANTE	Gilma Otilia Sicacha Cortés
DEMANDADA	Gladys Margoth Reyes de Sicacha
RADICADO	110013103 009 2014 00530 05
INSTANCIA	Segunda – *apelación sentencia* -
DECISIÓN	No repone

Se decide el recurso de reposición interpuesto por la apoderada judicial de la demandante inicial, frente al auto de fecha 24 de marzo de 2023, mediante el cual se declaró desierto el recurso de apelación que formuló contra la sentencia emitida en primer grado. Al efecto, se expone:

1. La Impugnación.

Aunque la recurrente inicialmente advirtió interponer el recurso de "súplica" frente a la señalada decisión, lo cierto es que a continuación refirió que "*en caso de no ser procedente el recurso solicito de manera respetuosa le dé el trámite que corresponde, conforme el parágrafo del artículo 318 del C.G.P.*".

Por consiguiente y al tenor de esa norma procesal, se decidirá la inconformidad por vía del recurso del reposición, defensa esta procedente respecto de la decisión cuestionada.

Se soportó, en esencia, en que el escrito que contiene los reparos contra la decisión de primera instancia, también contiene

la sustentación de aquellos, al poner de presente los yerros cometidos por el *iudex a quo*.

Adicionalmente, alegó que se radicó la sustentación de la apelación en las cuentas de correo institucional secstribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co y sectribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co el 16 de febrero de 2023.

2. Consideraciones.

2.1. En principio es importante mencionar que, en el auto de 24 de marzo de 2023, se consideró que:

> "*(…) el legislador previó claras oportunidades y términos para satisfacer las cargas del recurrente, esto es, impetrar el recurso, presentar los reparos concretos y sustentarlos. Esto último, más allá que el tenor literal de la norma establezca que se agota ante el ad quem, lo cierto es que se ha aceptado, que es posible tenerlo por cumplido cuando ante el a quo se plasmaron los puntuales motivos de disidencia con la sentencia.* ***En esa dirección se ha pronunciado reiteradamente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[1], posición que este despacho comparte en su integridad por ser la interpretación más garantista*** *de los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso y doble instancia*" (negrilla fuera de texto).

2.2. No obstante, se tiene que lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 no se presta a interpretaciones acerca del acatamiento del deber de la recurrente de sustentar el recurso en segunda instancia ante el superior, sin que tal encomienda pueda ser satisfecha prematuramente ante el *a quo*. De allí que, la sustracción del imperativo mandato legal conlleva la deserción del recurso, sin que ello apareje la vulneración del debido proceso.

Respecto a que el 16 de febrero de 2023 se satisfizo mediante correo electrónico el requisito echado de menos, basta decir lo

[1] Cfr. Sentencias CSJ STC5501-2022 y STC5790-2021, entre muchas otras.

siguiente: primero, no aparece en el expediente digital el mencionado documento de sustentación; segundo, aun si estuviese, lo cierto es que el auto admisorio de la alzada se profirió el 27 de enero del año en curso, se notificó en estado del 30 del mismo mes y año, por lo que la ejecutoria corrió hasta el 3 de febrero y los cinco días para allegar la sustentación vencieron el 10 siguiente; entonces, no sería tempestiva la actuación.

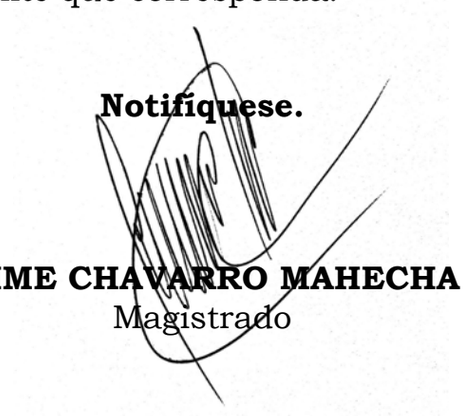
2.3. Así las cosas, al no haber cumplido la apelante con su carga de sustentar en esta instancia la apelación, lo procedente era declararlo desierto, lo que fuerza a mantener tal decisión.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, el magistrado sustanciador de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, **no revoca** el auto calendado 24 de marzo de 2023.

En firme este proveído, por Secretaría ingrésese el expediente para imprimir el trámite que corresponda.

Notifíquese.



JAIME CHAVARRO MAHECHA
Magistrado

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación	110013103-018-2018-00269-02
Proceso	Ejecutivo
Asunto	Sentencia
Demandante	Centro de Recuperación y Administración de Activos – C.R.A. S.A.S.
Demandado	Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y o.
Decisión	Confirma

Magistrado Ponente
JAIME CHAVARRO MAHECHA

Discutido en Salas del 27 de marzo y 23 de mayo de 2023 y aprobado en esta última

Se decide el recurso de apelación formulado por la ejecutada SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO – FIDUAGRARIA S.A. contra la sentencia proferida por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá, el 22 de febrero de 2022, dentro del proceso ejecutivo promovido en su contra y de FIDUCIARIA CENTRAL - FIDUCENTRAL S.A. por CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS - CRA S.A.S.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitó la ejecutante[1] librar mandamiento de pago a su favor y en contra de la ejecutada por las sumas de $83.336.594, por

[1] Ver folios 54 a 60 del archivo *"01CuadernoPrincipal"* de la carpeta *"01CuadernoPrincipal"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.

concepto de capital contenido en el pagaré No. 271707, junto con los intereses moratorios liquidados desde el 1 de julio de 2015 hasta cuando se verifique el pago.

2. Fundamentos fácticos

En el libelo[2] se afirmaron los hechos que a continuación se sintetizan.

2.1. Las ejecutadas, en nombre propio y del Patrimonio Autónomo Torcoroma Siglo XXI, se obligaron con Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales, al suscribir el título valor No. 271707, para garantizar las acciones de recobro y similares relacionadas con diversas pólizas de seguro de cumplimiento expedidas por dicha aseguradora.

2.2. La aseguradora fue sometida a liquidación forzosa administrativa, por lo que, a través de la escritura pública No. 1369 de 5 de abril de 2016, otorgada ante la Notaría 21 de Bogotá, se le transfirió a la demandante la cartera respectiva, dentro de la que se incluyó el crédito adeudado por las aquí encausadas, de conformidad con el anexo No. 1 del citado instrumento público.

2.3. La aseguradora endosó en propiedad el título valor a favor de la ejecutante.

3. Posición de la parte accionada

Fiduagraria S.A. presentó las defensas de mérito que denominó: *"la obligación que se reclama a Fiduagraria S.A. no fue parte de la*

[2] Ver folios 78 a 84 del archivo *"001Cuaderno01Principal2019-0433"* de la carpeta *"01Cuaderno01Principal2019-0433"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.

venta de activos entre la extinta Cóndor y la parte ejecutante", "falta de legitimación en la causa por activa", "inexistencia de título ejecutivo respecto a Fiduagraria S.A. en posición propia", "inexistencia de interrupción de la prescripción" y *"prescripción de la acción cambiaria"*[3].

Fiducentral S.A. se opuso a las pretensiones con los medios enervantes de: *"falta de legitimidad por pasiva-No es Fiduciaria Central S.A. a nombre propio, quien suscribió el título sino como vocera y administradora del Fideicomiso Torcoroma Siglo XXI, lo cual se desprende de la literalidad del pagaré Nº 271707", "inexistencia de prueba de las pólizas de seguros expedidas por Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales (hoy liquidada) de las cuales se desprenden las acciones de recobro y similares garantizadas por el pagaré, para efectos de realizar el cobro a Fiduciaria Central S.A., en nombre propio, a propósito de la cesión", "cobro de lo no debido por inexistencia de obligación dineraria a cargo de Fiduciaria Central S.A., a nombre propio" y "prescripción de cualquier acción judicial en contra de Fiduciaria Central S.A., a nombre propio, derivada del negocio causal"*[4].

4. Sentencia de primer grado

En su fallo[5] la *a quo* declaró probada la excepción de *"falta de legitimación en la causa por pasiva"* que alegó Fiducentral S.A., por lo que declaró la terminación del proceso en su contra; encontró imprósperas las defensas de Fiduagraria S.A., y ordenó seguir adelante la ejecución, realizar el remate de bienes embargados y liquidar el crédito.

[3] Ver folios 211 a 218 ídem.
[4] Ver folios 229 a 236 ídem.
[5] Ver archivo "09ActaAudiencia" ídem.

Para decidir de ese modo, en esencia, expuso:

Fiducentral S.A. fincó su oposición a las aspiraciones en que no suscribió el pagaré en su nombre, sino como vocera y administradora del Fideicomiso Torcoroma Siglo XXI. Ahora bien, en la demanda se indicó que el NIT de aquella es 800171372-1, y en el trámite se demostró que era la representante del consorcio que conformaba junto a Fiduagraria S.A., el cual se identificó con el NIT 830053036-3. En el documento cambiario se vislumbra que el representante legal de la mencionada fiduciaria lo firmó, pero con el NIT del consorcio en representación del patrimonio Autónomo, lo que revela que se obligó al fideicomiso y no a Fiducentral S.A.

Las excepciones impetradas por Fiducentral S.A. denominadas *"falta de legitimación en la causa por activa", "inexistencia de título ejecutivo respecto a Fiduagraria S.A. en posición propia"*, se soportaron en que el deudor es el consorcio Fiduagraria-Fiducentral en representación del fideicomiso, y que las normas mercantiles prohíben que la fiducia responda con sus recursos por obligaciones a cargo de los patrimonios que administran. En este caso, se allegó como base del recaudo el pagaré que a la letra dice, que *"los suscritos (…) obrando en nuestro propio nombre y en representación de (…) pagaremos a Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales o a su orden la suma de (…) ($83.336.594) el día 30 de junio de 2015"*, y en el siguiente espacio se anotó a mano *"consorcio Fiduciario Fiduagraria-Fiducentral en representación del Patrimonio Autónomo Torcoroma Siglo XXI"*, y se firmó por Fiduagraria S.A., con su propio NIT, y por Jaime Nieto Villegas, representante legal de Fiducentral S.A., con el NIT del consorcio. En la escritura pública No. 665 de 2002 se determinó que representaría al consorcio el representante legal de Fiducentral S.A., por lo que, si se hubiese obligado solamente el consorcio, no era

necesaria la firma puesta por Fiduagraria S.A., pues con la de aquel bastaba. Entonces, la citada fiduciaria adquirió una obligación independiente a nombre propio. Además, la rúbrica no se acompañó de ninguna salvedad respecto a que obraba en representación del patrimonio autónomo, ya que no era su representante, y si existiera duda de la calidad en que actuó, se acude al artículo 634 del Código de Comercio.

Frente a que la fiduciaria no puede responder con recursos propios por obligaciones a cargo de los fideicomisos, ello no se desconoce, como quiera que lo declarado es que se adquirió a nombre propio, lo que no está prohibido. En torno a la falta de legitimación por pasiva, se memora la clase de título que se aportó, y que fue endosado a la ejecutante, sin que se tachara de falsedad, por lo que goza de mérito ejecutivo. En el anexo 1 de la escritura pública No. 1365 de 5 de abril de 2016, mediante la que se protocolizó la venta de cartera con la que se transfirieron a la demandante los derechos, créditos y obligaciones que tenía Cóndor S.A., y se discriminó el Fideicomiso Fiduciaria Central. Por ello, decaen las defensas.

Tampoco se abren paso las de *"inexistencia de interrupción de la prescripción"* y *"prescripción de la acción cambiaria"*, fincadas en que la notificación que se le hizo fue inválida y que transcurrió el tiempo de fenecimiento; no obstante, el primer punto fue resuelto en el control de legalidad ante una solicitud de nulidad, momento en que se advirtió que el enteramiento fue acorde con el ordenamiento legal. Respecto al segundo, el vencimiento de la obligación fue el 30 de junio de 2015, la demanda se presentó el 6 de junio de 2018, el mandamiento se libró el 20 de noviembre de 2018, notificado por estado el 15 de enero de 2019, por lo cual debía ponerse en conocimiento de la pasiva máximo el 16 de enero de

2020, acorde con lo reglado por el artículo 94 del Código General del proceso, y el 18 de noviembre de 2019 Fiduagraria presentó recurso de apelación contra el auto de apremio, por lo que no se consolidó la prescripción.

Sucesión procesal

El 14 de marzo de 2022, se reconoció a Protekto CRA S.A.S. como sucesor procesal de la demandante[6].

5. El recurso de apelación

Fiduciaria Agraria S.A. planteó y sustentó los siguientes reparos:

5.1. ***"Constitución del Patrimonio Autónomo Torcoroma Siglo XXI y representación a cargo de Fiducentral", "la presunta obligación que se debate en el presente asunto se originó por la constitución del patrimonio autónomo Torcoroma Siglo XXI"***. El 28 de julio de 1999 se suscribió el acuerdo consorcial entre Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Central S.A. para participar y presentar una propuesta en la licitación pública No. 004 de 1999 de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de Asuntos del Instituto de Crédito Territorial UAE-ICT. Se designó a Fiducentral S.A. como representante del consorcio (cláusula séptima). El 8 de abril de 2002, mediante escritura pública No. 665, se celebró contrato de fiducia mercantil con el que se constituyó el patrimonio Autónomo denominado Fideicomiso Torcoroma, entre el Consorcio Fiducentral S.A. – Fiduagraria S.A., en calidad de fiduciario, y las sociedades Torcoroma Siglo XXI S.A. y Constructora UCC Ltda., en condición de fideicomitentes. En el instrumento

[6] Ver archivo *"15AutoAceptaDesistimientoyMas"* ídem.

público se estableció que la fiduciaria, en representación del patrimonio autónomo, debía suscribir una póliza de seguro a favor del INURBE (Capítulo IV – punto 4.2., literal u.), y para su expedición se le exigió al administrador fiduciario la suscripción del pagaré cobrado, de allí, que la obligación cobrada se derivó de las actividades de representación del patrimonio autónomo, razón por la que las dos ejecutadas excepcionaron en ese sentido, sin que la actora lograra acreditar que se trató de acreencias adquiridas a nombre propio de Fiduagraria S.A., lo que fue refrendado con los interrogatorios de parte de los representantes legales de las fiduciarias. Tampoco se demostró que la aseguradora tuviese relación comercial con las encausadas, que permitiera el nacimiento *"de forma causal a la obligación"*. El patrimonio autónomo se liquidó el 4 de diciembre de 2009, sin que existieran obligaciones pendientes a su cargo.

"De la desvinculación de Fiducentral". No es posible que se desligue a dicha entidad del trámite, pese a que era la representante del consorcio, más si se considera, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal; por ende, dada la cesación de la acción contra aquella debe ocurrir lo mismo frente a Fiduagraria S.A.; ***"el juzgado en su decisión desconoce la separación patrimonial entre los bienes del fideicomiso P.A. Torcoroma y los bienes propios de la Fiduagraria en posición propia"***, desproporcionadamente, el Despacho sostuvo, que la recurrente es avalista, sin tener presente que el artículo 634 del Código de Comercio predica la existencia de esa figura cuando se firma un título ejecutivo, siempre y cuando no le pueda atribuir otra justificación, y en este caso se consignó en el pagaré *"consorcio fiduciario Fiduagraria – Fiducentral en representación del Patrimonio Autónomo Torcoroma Siglo XXI, lo que "atribuye a los firmantes la calidad de miembros de dicho consorcio"*.

5.2. ***"El hecho de plasmar el NIT de Fiduagraria S.A. en el título valor no implica dar paso al nacimiento de una nueva obligación"***. El título valor se otorgó en ejecución del negocio fiduciario y, únicamente, como integrante del consorcio, *"pero no existió un negocio jurídico anexo del cual se pueda predicar una obligación diferente que se pudiera endilgar a Fiduagraria"*.

5.3. ***"El despacho omitió verificar la legalidad o la calidad de la obligación que dio lugar al cobro del título valor".*** El representante legal de Fiduciaria Central S.A. explicó en el interrogatorio de parte que el título valor se suscribió en condición de voceros del patrimonio autónomo, como garantía de la póliza de seguro en caso de siniestro, pero este no se presentó, por lo que quedaron saldos pendientes por pagar a la aseguradora, de donde se colige el origen de la obligación. Es deber del juez verificar la legalidad del negocio causal. Quedó demostrado que el pagaré se endosó con posterioridad a su vencimiento, esto es, que se está *"frente a una cesión ordinaria con las implicaciones que esto conlleva"*. La encausada no puede ser obligada a lo imposible, puesto que no tiene la facultad, la titularidad y menos la obligación de cumplir la condena proferida.

Con base en tales argumentos solicitó la revocatoria del fallo apelado.

6. La entidad demandante no se pronunció frente a lo alegado por su contraparte.

II. CONSIDERACIONES

1. Concurren en este asunto los presupuestos procesales traducidos en competencia del juez, demanda en forma, capacidad procesal y para ser parte, sin que se advierta causal de nulidad que

pueda comprometer la validez de lo actuado, por manera que se procede a resolver el asunto en referencia, en orden a lo cual se precisa que, por mandato del artículo 328 del Código General del Proceso, la actividad del Tribunal se concretará a los precisos reparos debidamente sustentados por el impugnante.

2. Título valor pagaré

De conformidad con el artículo 422 del Código de General del Proceso, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él. El artículo 619 del Código de Comercio establece que "*los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancías*"; el artículo 620 ídem, determina que *"[l]os documentos y los actos a que se refiere este Título sólo producirán los efectos en él previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que ella los presuma"*. Entre los requisitos que este tipo de documentos deben reunir, aparecen la mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de quien lo crea (art. 621 ídem). Específicamente, para el pagaré, el artículo 709 del citado compendio impone, los que se enlistan así:

1. *La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero;*
2. *El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago;*
3. *La indicación de ser pagadero a la orden o al portador, y*
4. *La forma de vencimiento.*

2.1. Endoso posterior a la fecha de vencimiento

Los títulos valores a la orden, *"(…) se transmitirán por endoso y entrega del título (…)"* (art. 651 C. Com.); tal forma de transferencia

puede hacerse en *"propiedad, en procuración o en garantía"* (art. 656 ídem). El artículo 660 del estatuto mercantil dispone:

> *Cuando en el endoso se omite la fecha, se presumirá que el título fue endosado el día que el endosante hizo la entrega del mismo al endosatario.*
>
> *El endoso posterior al vencimiento del título, producirá los efectos de una cesión ordinaria.*

3. Análisis del caso concreto

Las inconformidades de la recurrente, en esencia, se centran en que la suscripción del pagaré la hizo como integrante del consorcio Fiduagraria-Fiducentral, que se constituyó con ocasión de un negocio fiduciario para representar al Patrimonio Autónomo Torcoroma, y no a nombre propio, pese a que en el cuerpo del documento de cobro hubiese puesto su NIT. Dicho documento se otorgó como garantía a la aseguradora que expidió una póliza de seguro en caso de siniestro, el cual no se presentó, pues el fideicomiso se liquidó el 4 de diciembre de 2009 sin que existieran obligaciones a su cargo. No se acreditó que, entre Seguros Cóndor S.A., ya extinta, y las demandadas, existieran relaciones comerciales, por lo que no hubo un negocio jurídico que diera origen a la obligación. No se tuvo en cuenta en la sentencia la separación patrimonial entre los bienes del fideicomiso y los de la fiduciaria. Se equivocó la juzgadora al señalar que Fiduagraria S.A. obró como avalista, debido a que en el instrumento de recaudo se indicó que era el consorcio en representación del patrimonio el que lo suscribía.

Para atender en orden lógico los reproches, se empezará por el atinente a la calidad en que firmó Fiduagraria S.A. el pagaré; luego, los efectos del endoso posterior al vencimiento de la obligación en él contenida; seguido, lo referente al negocio causal y, finalmente, si

hubo algún desacierto en el fallo frente a la separación de patrimonios del fideicomiso y la fiduciaria ejecutada.

3.1. El título valor

Se aportó al litigio el pagaré No. 271707[7], en el que se lee:

> El (los) Suscrito(s):
>
> Mayor(es) de edad, identificado(s) como aparece al final, obrando en mi (nuestro) propio nombre y en representación de:
>
> Pagaré(mos) a Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales, o a su orden la suma de: ochenta y tres millones trescientos treinta y seis mil quinientos noventa y cuatro pesos m/cte. (83.336.594) el día 30 de junio de 2015. (…)
>
> Consorcio Fiduciario Fiduagraria-Fiducentral, en representación del Patrimonio Autónomo Torcoroma Siglo XXI

Fue firmado por el representante legal de Fiduagraria S.A., con NIT 800.159.998-0, así como por Jaime Nieto Villegas de Fiducentral S.A., con el NIT 830.053.036-3.

En ese orden, tal como advirtió la *iudex a quo*, revisado el certificado de existencia y representación legal de Fiduagraria S.A.[8] junto con el escrito de excepciones[9], el NIT de esa fiduciaria es el mismo que se consignó en el título valor; por ende, actuó en su propio nombre, con los efectos que ello apareja, como son obligarse a pagar el importe del documento a favor del acreedor.

No existe duda de que, el 28 de julio de 1999, las ejecutadas conformaron el consorcio Fiduagraria-Fiducentral[10], el cual estaba representado por Jaime Nieto Villegas[11]. Tampoco se discute que, el

---

[7] Ver folio 52 del archivo *"01CuadernoPrincipal"* de la carpeta *"01CuadernoPrincipal"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.
[8] Ver folio 28 a 34 ídem.
[9] Ver folio 211 ídem.
[10] Ver folio 223 ídem.
[11] Ver folio 240 ídem.

8 de abril de 2002, mediante escritura pública No. 665, otorgada ante la Notaría 40 de Bogotá[12], se celebró contrato de fiducia mercantil, en virtud del cual se constituyó el patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Torcoroma, en el que obró como vocero y fiduciario el aludido consorcio. Se demostró que el 4 de diciembre de 2009 se levantó *"acta de terminación y liquidación del contrato de fiducia mercantil mediante el cual se constituyó el patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Torcoroma Código 22039"*, en la que se expuso que *"los fideicomitentes y el fiduciario se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto (…)"*.

Los elementos de juicio mencionados, permiten colegir que estaba discriminada la condición de cada una de las fiduciarias ahora demandadas y, entre ellas, Fiduagraria S.A., únicamente tuvo la de integrante del consorcio ya referido, por lo que, en armonía con lo dicho en la sentencia fustigada, no era necesaria su rúbrica en el pagaré otorgado, ni para actuar en representación del patrimonio autónomo ni del consorcio.

En ese orden, la anotación vista en el cartular, atinente a: *"Consorcio Fiduciario Fiduagraria-Fiducentral, en representación del Patrimonio Autónomo Torcoroma Siglo XXI"*, no le restó mérito ejecutivo frente a la recurrente, pues, como viene de verse, se obligó directamente con su firma e identificación, ya que no podía representar a nadie más que a sí misma. Las versiones ofrecidas por los representantes legales de las encausadas no alteran en nada el tenor literal del báculo de la ejecución en este sentido. De allí que decaen los argumentos de alzada orientados a atribuir un yerro de la juez al tener por obligada a Fiduagraria S.A.

[12] Ver folio 237 a 280 ídem.

El pagaré fue endosado en propiedad por Cóndor S.A. a favor de Centro de Recuperación y Administración de Activos S.A.S.[13]; esto, según informó el representante legal de dicha sociedad, tuvo lugar, aproximadamente, en diciembre de 2015 y enero de 2016[14], con posterioridad al vencimiento que tuvo lugar el 30 de junio de 2015.

Así las cosas, operó lo reglado por el artículo 660 del Código de Comercio, el cual, no prohíbe este tipo de transferencia respecto de títulos valores a la orden, sino que específicamente señala que *"producirá los efectos de una cesión ordinaria"*; sin que de esto se entienda que deban atenderse las mismas solemnidades de notificación de la cesión al deudor, pues a lo que se dirige la norma es a enfatizar que al ejecutante le son oponibles las excepciones personales.

En el particular, Fiduagraria S.A. no presentó ninguna excepción fundada en este suceso, no obstante, se itera, que no hay impedimento legal para que se promueva la ejecución con soporte en un instrumento endosado luego de vencer el plazo pactado.

3.2. Negocio causal

El artículo 784 del Código de Comercio establece que *"[c]ontra la acción cambiaria sólo podrán oponerse las siguientes excepciones: (…) 12. Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa (…)"*.

[13] Ver folio 53 ídem.
[14] Ver tiempo 45:08 de la "07AudienciaPrimeraParte"

Fiduagraria S.A. no alegó como excepción el supuesto fáctico de la norma en cita, pero en esta instancia insistió en que no existió relación comercial con Cóndor S.A. y que el pagaré se otorgó como garantía, en caso de materializarse el siniestro amparado, lo cual no acaeció. Tal reproche fracasa al tener presente que el legislador previó contra quien puede oponerse este tipo de defensa, a la sazón, *i)* el demandante que participó en el negocio o *ii)* el ejecutante que sea tenedor de mala fe, calidades que no tiene la aquí actora, pues recuérdese que Centro de Recuperación de Activos - CRA S.A.S. le fue endosado el título valor por la liquidada Condor S.A. y, posteriormente, se reconoció a Protekto CRA S.A.S. como sucesora procesal de aquella, sin que se acreditara que la tenencia del título de la ejecutante inicial estuviese desprovista de buena fe. Así las cosas, aun cuando se hubiese impetrado como mecanismo defensivo, le era inoponible a la activa.

Respecto a que en la sentencia se pasó por alto la separación de patrimonios entre el fideicomiso y la fiduciaria, es útil memorar que la juzgadora se ocupó de tal ítem al explicar que, precisamente, aquí se cobró a esta última el valor al que directamente se obligó, que no en nombre de aquel. Por este motivo, no hay lugar a revocar lo decidido.

III. CONCLUSIÓN

El pagaré allegado presta mérito ejecutivo y fue suscrito por Fiduagraria S.A. a nombre propio, lo que lleva a refrendar la sentencia apelada.

Y como no aparece que se hubieran causado costas en este segundo grado, ante ausencia de la parte demandada en la réplica de la sustentación de la alzada, no se fulminará condena al respecto (num. 8° art. 365 C.G.P.).

IV. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia apelada.

En la debida oportunidad, la Secretaría devolverá la actuación digital al juzgado de origen.

Notifíquese.

Magistrados integrantes de la Sala

JAIME CHAVARRO MAHECHA

RICARDO ACOSTA BUITRAGO

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ
(con salvamento de voto)

Firmado Por:

Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ricardo Acosta Buitrago
Magistrado

Sala Civil Despacho 015 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,
Firma Con Salvamento De Voto

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 08f21d803fc95e6fc5c15d0d884ea33682f4c693dabb0530553cde02afd4fa6b
Documento generado en 26/06/2023 12:34:54 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Pablo César Rendón Rincón y o.
DEMANDADA	Saludcoop E.P.S.
RADICADO	110013103 021 2009 00642 01
INSTANCIA	Segunda – *apelación sentencia* -
DECISIÓN	Admite

De conformidad con lo reglado por los artículos 322 y 323 del Código General del Proceso en armonía con el precepto 12 de la Ley 2213 de 2022, que establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, se admite en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 26 de abril de 2023, proferida por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá.

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este proveído, deberá sustentarse el recurso a través del correo electrónico institucional de la Secretaría de la Sala Civil de este Tribunal[1], atendiendo lo estatuido por la norma 109 del Código General del Proceso, so pena de declararse desierto.

Presentada en oportunidad la sustentación, córrase traslado por cinco (5) días a la parte contraria.

Notifíquese.

JAIME CHAVARRO MAHECHA
Magistrado

[1] secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación	110013103031-202000156-03
Proceso	Verbal
Asunto	Apelación sentencia
Demandante	Corporación Cultural Ecológica Mujer Tejer y Saberes - Mutesa
Demandado	Blanca Teresa Salinas Morales
Decisión	Confirma

Magistrado Ponente
JAIME CHAVARRO MAHECHA

Discutido y aprobado en Sala de Decisión del 8 de mayo de 2023

Se decide el recurso de apelación formulado por la demandante contra la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2022 por el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso verbal de la Corporación Cultural Ecológica Mujer Tejer y Saberes - Mutesa contra Blanca Teresa Salinas Morales.

I. ANTECEDENTES

1. Síntesis de la demanda

Se solicitó declarar el enriquecimiento sin justa causa por parte de Blanca Teresa Salinas Morales por razón del empobrecimiento injustificado de Mutesa, por no reconocer las mejoras necesarias, el pago de impuestos y reinstalación de servicios públicos que esta efectuó respecto del predio ubicado en la carrera 6 No. 46-80 de Bogotá y que se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-569467.

En consecuencia, se condene a la demandada a pagar a favor de la demandante la suma de $165.699.992, correspondiente *"al valor de las mejoras y otras efectuadas (…)*", junto con la indexación respectiva. Adicionalmente, se ordene la retención del bien[1].

2. Fundamentos fácticos

En el libelo[2] se afirmaron los hechos que a continuación se sintetizan.

2.1. El 22 de septiembre de 2010, la demandante, en calidad de comodataria, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en condición de comodante, suscribieron un contrato de comodato que tuvo como objeto el inmueble ubicado en la carrera 6 No. 46-80 de Bogotá, el cual estaba en ruinas y sin servicios públicos.

2.2. El 13 de diciembre de 2012, la actora le informó al I.C.B.F. que era urgente realizar mejoras necesarias para evitar la pérdida y deterioro del inmueble, las cuales efectuó la comodataria con sus propios recursos y aportes *"de origen oficial"*, entre ellas, la modificación de muchos elementos estructurales, cambio de vidrios, arreglo de humedades, reinstalación de servicios públicos domiciliarios, pago de impuestos prediales; no obstante, con ocasión de tales ajustes, la Alcaldía Local de Chapinero inició investigación administrativa.

2.3. Mutesa tuvo conocimiento de que, mediante sentencia de 25 de octubre de 2018, proferida por el Juzgado 17 de Familia de Bogotá, se le adjudicó a Blanca Teresa Salinas Morales el inmueble, y se ordenó su restitución.

2.4. La demandada solicitó la entrega del bien, pero sin reconocer las mejoras necesarias y útiles que se le hicieron.

---

[1] Ver archivo *"05Subsanación157-163"* de la carpeta *"C01CuadernoPrincipal"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.
[2] Ver folios 1 a 14 del archivo *"01DemandaAnexos1-152"* ídem.

3. Posición de la convocada

La demandada contestó la demanda y presentó las excepciones de mérito que denominó: *"inexistencia del enriquecimiento sin justa causa"*, *"inexistencia de las mejoras", "falta de legitimación en la causa-vía procesal errada", "inexistencia de presupuesto legal para la devolución de los impuestos", "causación de perjuicios para la demandada", "prescripción", "compensación", "ausencia de buena fe de la demandante"* y *"genérica"*[3].

4. Sentencia de primer grado

El *a quo* negó la totalidad de las pretensiones de la demanda, se abstuvo de condenar en costas por estar amparada por pobre la actora y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que se hubiesen practicado.

Para decidir de ese modo, expuso:

Los presupuestos para la prosperidad de la acción son: *i)* el enriquecimiento, ventaja o provecho de un patrimonio que puede ser positivo o negativo, es decir, bien por aumento debido al acrecimiento del activo o bien por la disminución del pasivo; *ii)* como consecuencia de esa ganancia exista un correlativo empobrecimiento; iii*)* que no haya causa jurídica válida para el desplazamiento patrimonial; *iv)* que no se cuenta con una acción judicial principal para conjurar la injusticia, dado el carácter subsidiario de la *actio in rem verso*.

En el caso estudiado, se afirmó en la demanda que Salinas Morales se enriqueció injustificadamente a costa del

[3] Ver folios 2 a 16 del archivo *"23ContestaDemanda261-351"* ídem.

empobrecimiento de Mutesa, debido a que ingresaron al patrimonio de la primera las mejoras realizadas en el año 2012 en el bien ya mencionado, cuyo valor ascendió a $139.125.992 más los gastos por $4.350.000 por concepto de transporte para el proceso y honorarios del perito.

Los montos pagados con ocasión del litigio no representaron ganancia o aumento del patrimonio de la encausada, razón suficiente para desechar su reconocimiento.

Tampoco se accede a la aspiración cuantificada en $22.224.000, por los impuestos prediales, porque en el contrato de comodato que celebró la demandante con el I.C.B.F. se pactó que la comodataria asumiría su pago a partir de la firma y, cuando se extinguiera, debía restituir el inmueble a paz y salvo por ese concepto. Entonces, si hubo causa justificante para que la activa sufragara el costo aludido, más cuando en el interrogatorio de parte señaló que derivó provecho económico del bien con el funcionamiento de un restaurante y un almacén, sin que con el cambio de titular del derecho de dominio se tornara en injusta, como quiera que lo detentó hasta finales de 2020.

En punto de las mejoras no hubo claridad del monto perseguido; además, dada la naturaleza de la acción no basta acreditar las inversiones efectuadas a este tenor para predicar que la demandada se enriqueció, pues no siempre hay proporcionalidad entre el dinero requerido para ese fin y el valor del bien, ya que en ocasiones este se incrementa, en otras, es intrascendente o, incluso, puede acarrear un detrimento. Para el año 2005, según el avalúo efectuado por encargo del I.C.B.F., el predio tenía un valor de $163.804.800, pero se desconoce ese dato para el año 2020 (fecha de entrega), con el cual se pudiese comparar y determinar si hubo una variación por efecto de las obras. El dictamen pericial aportado

contiene una estimación de las mejoras como si se tratara de un presupuesto para hacerlas nuevas, con inclusión de gastos administrativos, imprevistos utilidades, y aplica deducciones por depreciación, pero sin enunciar cuánto valorizaron el inmueble o en qué medida se enriqueció la pasiva. Al ser cuestionado el perito sobre el proceso del que se valió para su cálculo, señaló que ese presupuesto se tiene en cuenta si está hecha la obra, se va a hacer o no se haga, lo que deja ver que no se refirió al estado real de la edificación. El experto también adujo que las redes eléctricas e hidráulicas no podían verificarse sin romper, por lo cual en su dictamen las mencionó acordó con lo que le dijeron al respecto.

La demandante entregó la casa previo retiro de algunos elementos, especialmente de la cocina, por lo que no estaba en idénticas condiciones que cuando se elaboró el dictamen. Por reparaciones en el techo exigió la demandante $39.000.000, pero vistas las fotografías que datan de diciembre de 2020 se ve deteriorada dicha zona y no revela que constituya una ventaja patrimonial para Salinas Morales y, por el contrario, María Clemencia Herrera Nemerayema expuso que se pusieron palos para que no se entrara el agua debido a los constantes problemas de humedad, lo que indica que las mejoras realizadas no fueron efectivas ni aumentaron el precio del bien. Las obras realizadas sin licencia de construcción disminuyen el valor de la edificación, en la medida que la encausada debe asumir las multas insatisfechas e incurrir en gastos para obtener aquellas, so pena de que sea demolida la edificación. No corresponden a mejoras los valores discriminados como insumos para el restaurante y tienda artesanal, por $35.989.333, toda vez que se destinaron al desarrollo de la actividad económica de Mutesa; tampoco cuentan con esa connotación los gastos de mantenimiento, si se tiene en cuenta que en el comodato se obligó a conservar y reparar el predio. No se acompañó la prueba de idoneidad del perito para avaluar en más de

$13.000.000 los murales y, en todo caso, no se demostró que aumenten el precio del inmueble.

No se probó la cuantía del enriquecimiento, por lo que fracasan las pretensiones.

No se demostró el empobrecimiento de la activa. Se desconoce cuánto dinero salió de su peculio para las obras que alegó, dado que en el documento calendado 15 de julio de 2014, emitido por la directora administrativa, la directora financiera y la revisora fiscal de Mutesa, se consignó que el arreglo general lo hizo la OIM y los locativos por $5.500.000 por la junta directiva porque la entidad no tenía recursos. La representante legal de la demandante explicó que $83.000.000 los aportó la Organización Internacional de las Migraciones así como $30.000.000 de impermeabilización; otros $30.000.000 *"son recursos de mantenimiento que nosotros hemos hecho"* y $5.500.000 de recaudos por ventas. No se acompañaron estados financieros o comprobantes de egresos. En el concurso de voluntades que otorgó el uso del bien se acordó, de un lado, que la comodataria no podía hacer construcciones o mejoras sin autorización del comodante y, de llevarse a cabo, quedaría de propiedad de esta; del otro, que al terminarse, se restituiría con las mejoras, sin indemnización alguna.

5. El recurso de apelación

La demandante planteó y sustentó los siguientes reparos:

5.1. *"Falta de apreciación por parte del juez de primera instancia del perito Paulo César Rugeles"*. No se valoró la intachable exposición que realizó en audiencia el experto que llevó a la comprobación de su teoría de manera sistemática, pese a que el artículo 232 del Código General del Proceso establece la forma de

analizar este tipo de prueba de acuerdo con la sana crítica, la solidez, la claridad, exhaustividad, precisión de los fundamentos, así como la idoneidad del perito y su comportamiento al ser controvertido el dictamen.

5.2. *"Violación a la ley procesal"*. En desarrollo del interrogatorio de parte el juez le formuló múltiples preguntas a la demandante, pero no procedió igual frente a la demandada, con lo que trasgredió lo reglado por el artículo 372 del compendio procesal que le impone la obligación de hacerlo oficiosa, obligatoria y exhaustivamente. Se evidenció un prejuzgamiento debido a que *"el proceso no se valoraba con el mismo racero"*.

5.3. *"Falta de valoración de las pruebas"*. El dictamen pericial, los testimonios y los documentos dieron cuenta del enriquecimiento alegado, aún así en el fallo fueron completamente ignorados. *"De la misma forma, se presentaron diversas pruebas que fueron cruciales para demostrar que la demanda es infundada y debe ser desestimada"*.

5.4. *"Indebida interpretación de la norma"*. En sentencia de 7 de junio de 2002 la Corte Suprema de Justicia explicó que el enriquecimiento como presupuesto de la acción puede ser negativo o positivo. Para el particular, la actora implantó mejoras para evitar que el bien se devaluara. La sentencia fue incongruente pues *"no se corresponde con los hechos alegados y probados"* en el trámite procesal.

5.5. *"Del empobrecimiento del demandado y la ausencia de una justa causa (mala interpretación)"*. Es difusa la interpretación del Despacho al señalar que frente al empobrecimiento de la demandada debe mencionarse *"cuando"* (sic) dinero salió de su patrimonio para las mejoras, si se tiene en cuenta

que la encausada fue quien se enriqueció al recibir el inmueble restaurado con impuestos y servicios públicos pagados. Se presentaron pruebas contundentes de que la transferencia de los valores careció de causa justa, con lo que se acreditó el empobrecimiento de Mutesa.

5.6. ***"Falta de congruencia de la sentencia"***. Se declaró la inexistencia del enriquecimiento sin causa de la pasiva porque se pasaron por alto los valores y bienes transferidos en el proceso.

5.7. ***"Respecto al contrato de comodato"*** se le otorgó un valor probatorio errado, en tanto entendió el *iudex a quo* que prohibía hacer mejoras, sin reparar en que eran necesarias para conservar el bien. El plazo pactado era de un año, el cual se cumplió y lo dejó sin efectos. Tal acuerdo de voluntades es irrelevante porque no está directamente relacionado con el enriquecimiento sin causa.

5.8. ***"Existencia del enriquecimiento sin causa por parte del demandado"***. *"En la demanda quedo (sic) demostrado que existen todos los presupuestos para que se otorgue el enriquecimiento sin justa causa (…)"*.

En consecuencia, pidió la revocatoria del fallo apelado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

6. La demandada se pronunció frente al recurso de su opositora para que se deniegue.

II. CONSIDERACIONES

1. Concurren en este asunto los presupuestos procesales traducidos en competencia del juez, demanda en forma, capacidad procesal y para ser parte, sin que se advierta causal de nulidad que

pueda comprometer la validez de lo actuado, por manera que se procede a resolver el asunto en referencia, en orden a lo cual se precisa que, por mandato del artículo 328 del Código General del Proceso, la actividad del Tribunal se concretará a los precisos reparos debidamente sustentados por la impugnante.

2. La acción de enriquecimiento sin causa

En palabras de la Corte Suprema de Justicia en SC8390-2021:

> "*La acción de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, entonces, para su éxito, exige el enriquecimiento, ventaja, beneficio o provecho de un patrimonio –lucrum emergens- o la ausencia de su disminución –damnum cessans-; un empobrecimiento correlativo; una ganancia –o falta de mengua-, ayuna de causa válida; y la inexistencia de acciones principales para conjurar la injusticia.*
> (…)
> *La Corte, en posición apuntalada y reiterada hace más de un siglo, exige, para la consolidación de la actio in rem verso, probar «(…) que un individuo obtenga una ventaja patrimonial; que como consecuencia de dicha ganancia exista un empobrecimiento de otro sujeto, esto es, que entre el enriquecimiento y la mengua* ***haya correlación y correspondencia****, es decir, que se observe un* ***nexo de causalidad****, que uno se deba a u origine en el otro; que el desplazamiento patrimonial se verifique sin causa jurídica que lo justifique (…)»*"[4] (se resalta).

3. Análisis del caso concreto

El *iudex a quo* negó las pretensiones porque no se demostró el enriquecimiento de la pasiva ni el correlativo empobrecimiento de la actora, ni que tales situaciones, de haberse presentado en virtud de las mejoras referidas en la demanda, carecieran de causa, puesto que el contrato de comodato que suscribieron el I.C.B.F. y la demandante sirvió de fundamento a la realización de aquellas. Ahora, los motivos

[4] CSJ SC. Sentencia de 19 de diciembre de 2012, ref. 54001-3103-006-1999-00280-01.

de inconformidad con la sentencia se fincaron, en esencia, en la indebida valoración de las pruebas y la incongruencia, por lo que se analizará en principio este último ítem y luego lo atinente a la apreciación probatoria.

Desde ahora advierte la Sala que el fallo está llamado a ser refrendado, toda vez que uno de los presupuestos para la prosperidad de la *actio in rem verso* es que se utilice subsidiariamente.

En el *sub judice,* Mutesa fundó sus aspiraciones en que implantó mejoras en un inmueble ajeno, con lo cual éste incrementó su valor, y aun así no le fueron pagadas por la propietaria, a quien se le aumentó su patrimonio y, proporcionalmente, decreció el de aquella. Entonces, en armonía con tales soportes fácticos, se está en presencia del modo de adquirir el dominio (art. 673 C.C.) denominado accesión (art. 713 C.C.), consistente en que *"el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles"*. En estos casos, el legislador (art. 739 C.C.), precisamente, para evitar el enriquecimiento injustificado, ha dispuesto que:

> *El dueño del terreno en que otra persona, sin su consentimiento, hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho de hacer suyo el edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título de la reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle los perjuicios.*
> *Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será éste obligado, para recobrarlo, a pagar el valor del edificio, plantación o sementera.*

La Corte Suprema de Justicia en SC4755-2018, explicó:

> *[s]e sigue de lo expuesto que,* ***por regla general, quien plantó mejoras en suelo ajeno, no tiene acción directa para obtener del dueño de la tierra su valor o para obligarlo a venderle el predio****; y que, por excepción,*

> ***únicamente en aquellos casos en los que se ha materializado, por sentencia judicial o de facto, la recuperación del suelo por parte del titular dominio, aquél puede accionar para obtener de éste el valor de las mejoras*** *(Se resalta). (CSJ. SC10896-2015).*

Aquí no está en discusión que Blanca Teresa Salinas Morales adquirió la propiedad por adjudicación judicial, tal como consta en la anotación No. 13 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-569467[5], y el 18 de noviembre de 2019, promovió la entrega del bien por conducto del Juzgado 40 de pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá[6]. De allí que se facultó a la interesada para perseguir el reconocimiento de lo que invirtió; sin que hubiera accionado a efectos de "*conjurar la injusticia*" que hogaño pregona; por ende, acudió directamente al aparato judicial a exigir la declaración de enriquecimiento sin causa, lo que, se itera, está vedado, atendiendo a la naturaleza de la acción.

Lo precedente apareja el decaimiento íntegro de las pretensiones; empero, en aras de no pasar de soslayo los alegatos de la recurrente, se analizan a continuación.

3.1. De la congruencia del fallo

Al tenor del artículo 281 del Código General del Proceso, "*La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley"*. Así las cosas, la congruencia está relacionada con que se respeten los contornos delineados por los fundamentos fácticos, el *petitum* y los medios enervantes de este.

---

[5] Ver folios 85 y 86 del archivo *"01DemandaAnexos1-152"* de la carpeta *"C01CuadernoPrincipal"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.
[6] Ver folio 23 a 33 del archivo *"23ContestaDemanda261-351"* ídem.

En esta instancia, expuso la disidente que la decisión cuestionada no *"se corresponde con los hechos alegados y probados"*, aunque sin discriminar puntualmente los fundamentos de hecho que fueron omitidos o que se analizaron sin ser parte de la discusión judicial.

El fracaso de este argumento deviene de lo siguiente:

Las aspiraciones se encaminaron a obtener la declaratoria del enriquecimiento sin causa que se le atribuyó a la demandada y el correlativo empobrecimiento injustificado de Mutesa, por no reconocérsele las mejoras necesarias, el pago de impuestos y reinstalación de servicios públicos que efectuó respecto del predio ubicado en la carrera 6 No. 46-80 de Bogotá y que se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-569467; las excepciones propuestas contra dicho petitum lo atacan directamente al negar que se hayan materializado tanto el aumento como el detrimento patrimonial mencionados. En la providencia se hizo alusión a las normas que se consideró sirven de contexto al tema, esto es, los artículos 2313 y 1747 del Código Civil y el artículo 831 del Código de Comercio, al tiempo que se mencionaron los presupuestos jurisprudenciales para el éxito de la *actio in rem verso* y, seguido, se analizaron uno a uno, sin encontrarlos reunidos o satisfechos.

No existe, entonces, la tal incongruencia que señaló la apelante, en la medida en que se analizó el eje del litigio a partir de lo pretendido, los hechos en que se soportó y los mecanismos de resistencia que impetró la pasiva, es decir, que se atendieron los límites que fijaron las partes con la demanda y las excepciones.

3.2. De la valoración probatoria

3.2.1. Según la recurrente no se apreció la exposición que realizó en audiencia Paulo César Rugeles Ochoa, persona que se

encargó de elaborar el dictamen pericial que acompañó la demanda, con lo que se desatendió lo dispuesto por el artículo 232 del Código General del Proceso.

Al respecto esta Sala observa: de la lectura de la providencia se advierte que se resaltaron las deficiencias encontradas en el experticio como en lo dicho por el perito, entre otras cosas, que el trabajo se limitó *"a realizar una valoración de las mejoras como si se tratara de un presupuesto para hacerlas nuevas en la que se incluyen gastos administrativos, imprevistos, utilidades, y luego se aplica una deducción por depreciación, sin que sea un estimativo real de cuánto valorizaron aquellas el inmueble o cuanto enriquecieron a la demandada, que era lo que correspondía probar"*, y, a continuación destacó: *"al preguntársele al perito sobre el proceso que utilizó para calcular el valor de las mejoras, dijo en la audiencia, ' ese es el mismo presupuesto que se hace este hecha la obra, se vaya a hacer o nunca se haga', por lo que se insiste en que no es un avalúo real sobre lo que se hizo, su estado de conservación, así como si en realidad incrementó el patrimonio de la demandada"*, y *"también declaró que muchas de las mejoras que incluyó fue partiendo de la 'buena fe' respecto de lo que le dijeron que aquellos habían hecho, pues, por ejemplo, él no podía determinar el estado real de la red eléctrica e hidráulica sin tener que romper"*. Adicionalmente, se puso de presente que aun cuando Rugeles Ochoa se ocupó de estimar los murales en la vivienda, *"no se encuentra habilitado para avaluar obras de arte (…)"*.

En ese orden, carece de sustento fáctico la alzada, como quiera que fue debidamente examinado el contenido del dictamen y lo explicado por quien lo realizó, lo que llevó, precisamente, a no asignarle valor probatorio, por falta de claridad, solidez e idoneidad, con lo que se satisfizo lo reglado por el artículo 232 del compendio procesal. En cualquier caso, coincide esta Colegiatura en que no es útil para los fines propuestos por la actora el medio de juicio bajo

estudio[7][8], debido a que no es concluyente acerca de las obras que hizo en la casa, su valor, su fecha, el origen de los recursos, ni el aumento y detrimento que revelaron los patrimonios de los litigantes en tal virtud, y al presentar una cuantificación sobre hipotéticos al desconocer el estado de las redes eléctricas e hidráulicas[9].

3.2.2. La violación a la ley procesal, específicamente al artículo 372 del Código General del Proceso, que le enrostró la censora al dispensador de justicia por formular preguntas a la demandante y no así a la demandada no fuerza a revocar lo decidido. Esto, porque si bien es cierto que la norma en cita impone, en lo pertinente, que *"[e]l juez oficiosamente y de manera obligatoria interrogará de modo exhaustivo a las partes* ***sobre el objeto del proceso****. (…)" (negrilla intencional)*; por ende, es no es discrecional del director del proceso hacerlo, también lo es que no hay una consecuencia legal consistente en que se deba, automática e irreflexivamente, modificar total o parcialmente la sentencia, más cuando en este asunto para el señor juez no existía duda en relación con las cuestiones que se sometieron al escrutinio judicial.

Tampoco puede concluirse que omitir hacer un cuestionario a una de las partes constituya prejuzgamiento, más cuando previo a emitir la decisión de fondo, se adelantaron las restantes etapas establecidas en la ley.

3.2.3. De forma genérica e inespecífica la actora atacó la valoración probatoria, refiriéndose al dictamen pericial, los testimonios y los documentos. El experticio ya fue materia de pronunciamiento en esta instancia por lo que no hay lugar a nuevas disertaciones a este tenor.

---

[7]

[8] Ver folio 24 a 48 del archivo *"01DemandaAnexos1-152"* de la carpeta *"C01CuadernoPrincipal"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.

[9] Ver tiempo 3:05:10 de *"54VideoAudiencia1raParte488"* ídem.

En su testimonio Edgar Mauricio Garzón González[10], destacó que el primero dijo conocer el inmueble desde el año 2010, que estaba en estado de abandono y la demandante le hizo un proceso de adecuación y remodelación, para el 2015 ya se había arreglado buena parte del bien, (3:28:59) los recursos, vienen en principio de un aporte base, y al año debían ya estar en producción. Claudia Deyanira Duarte[11] fue a las instalaciones en el 2010, estaba inhabitable, se invirtieron muchos recursos, se atendieron problemas de humedad.

Las declaraciones no dan cuenta puntual de qué ajustes ameritó la vivienda, sino que fue genérica la descripción, no indicaron valores individuales o totales de los mismos, y no hicieron referencia a si los recursos para ese empeño salieron del peculio de la demandante. No ofrecen información en torno a si las mejoras implicaron el aumento del patrimonio de la demandada o un empobrecimiento de su contraparte.

3.2.4. De cara al presunto error en la apreciación de las documentales fue genérica y no identificó los medios suasorios que, en su criterio, examinó de tal manera el juzgador de primer grado, ni expuso las puntuales fallas en que incurrió al otorgarle mérito a las mismas; entonces, ante esa indeterminación, se itera, en la individualización de las pruebas en que descansa el reproche, o los específicos yerros en su apreciación, no es posible ahondar en la búsqueda de los mismos, oficiosamente, por esta Corporación.

3.2.5. Pese a las reiteradas afirmaciones de la demandante acerca de que las pruebas demuestran cada uno de los axiomas para el éxito de su demanda, lo cierto es que no es así, pues como viene de verse, los elementos de juicio no ofrecieron certeza sobre el enriquecimiento de la demandada, el empobrecimiento de la actora,

---

[10] Ver tiempo 3:13:37 ídem.
[11] Ver tiempo 4:02:23 ídem.

la ausencia de causa de tales eventos, por lo que el resultado es la improcedencia de las pretensiones, sin que sea menester profundizar en los reclamos dirigidos contra el examen que se hiciera del contrato de comodato, en la medida en que nada se alteraría.

III. CONCLUSIÓN

Entonces, como se hallan ausentes los presupuestos propios de la acción incoada como es la subsidiariedad y, tal como lo sostuvo el funcionario *a quo*, los atinentes al enriquecimiento de la pasiva y el empobrecimiento de la actora, se confirmará la sentencia.

No obstante el resultado del recurso de apelación, no se impondrá condena en costas por la segunda instancia a la recurrente, dado que se encuentra amparada de pobre.

IV. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2022 por el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, en el asunto referenciado.

En su oportunidad, devuélvase la actuación digital, al juzgado de origen; déjense las constancias de rigor.

Notifíquese.

Magistrados integrantes de la Sala

JAIME CHAVARRO MAHECHA

RICARDO ACOSTA BUITRAGO

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ

Firmado Por:

Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ricardo Acosta Buitrago
Magistrado
Sala Civil Despacho 015 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e660f091c2d72a7088e73654bc36f6b9227d99ac8f4abea74ed0844785001ad4**
Documento generado en 26/06/2023 12:35:03 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	Verbal
DEMANDANTE	Johana Carolina Maldonado López
DEMANDADA	Ronald Torres López y o.
RADICADO	110013103 035 2017 00485 03
DECISIÓN	Resuelve recursos

Se decide el recurso de reposición y la solicitud subsidiaria de expedición de copias para surtir queja, interpuesto por el apoderado judicial de la demandante, frente al auto de fecha 28 de noviembre de 2022, mediante el cual se denegó la concesión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de segunda instancia proferida el día 24 de marzo de 2022. Al efecto, se expone:

1. La Impugnación.

El recurso de reposición se sustentó en que al interponer el recurso extraordinario de casación se allegó la certificación expedida por el profesional en Contaduría José Rodolfo Gómez, en la que consta que el valor intrínseco de las cuotas de participación de la socia Johanna Carolina Maldonado López en la sociedad Mundolimpieza Ltda., equivalentes a $1.100.000.000, es decir, que se solicitó se diera aplicación al artículo 227 del Código General del Proceso y se concediera un término prudencial para allegar el dictamen pericial; no obstante, el *ad quem* asumió que la mencionada certificación no cumple los requisitos que prevé el precepto 226 *ídem*, ni tampoco dio trámite a la petición de otorgar el término para allegar la pericia.

En el auto atacado se indexó el monto de $392.000.000 que pagó la actora el 4 de marzo de 2015 por concepto de cuotas sociales que no cancelaron los encausados, desconociendo que las pretensiones no se encaminaron a que se condene a estos a pagar dicho valor, sino que las aspiraciones son de naturaleza declarativa, pero, en caso contrario, para establecer el interés patrimonial para recurrir se debieron estudiar todos los elementos de juicio obrantes en el expediente "*para sumar la segunda pretensión declarativa (en lo que corresponde a establecer el valor real de las cuotas sociales, conforme al dictamen que se decrete), con la pretensión número cinco indexada en la providencia fustigada y así, determinar que la cuantía es superior a un mil salario mínimo, con base, también, en la certificación aportada al momento en que se interpuso la casación*".

2. Consideraciones.

2.1. Al tenor de la actuación surtida y sus fundamentos probatorios, se observa la infertilidad de los alegatos que soportan el recurso horizontal. Esto, por cuanto ante la insistencia de la recurrente respecto a que las pretensiones son esencialmente declarativas y no económicas y, por ende, no es necesario estimar la cuantía para recurrir, es un asunto debidamente zanjado por la Corte Suprema de Justicia en el proveído de 15 de julio de 2022, por medio del que declaró prematuro el pronunciamiento con el que este Tribunal, el 21 de junio de 2022, concedió el recurso extraordinario de casación. Memórese que en dicha decisión adujo ese órgano de cierre que esta Colegiatura "*decidió de manera apresurada la concesión del recurso, haciéndose necesario que evalúe si realmente existe o no interés para recurrir en casación en la demandante como única impugnante (…)*". Bajo tal entendimiento, no es necesario reabrir la discusión en el sentido anotado.

2.2. Frente a las inconformidades presentadas en relación con la experticia, es útil destacar que efectivamente la certificación contable allegada al impetrar el recurso extraordinario no reúne los requisitos que impone la memorada norma 226, por lo que no es dable valerse de su contenido para determinar el interés económico, y si bien este argumento se expuso en el auto censurado, no fue objeto de ataque ni desvirtuado.

Además, el alegato atinente a que debió otorgarse un plazo para aportar la pericia anunciada conforme a lo reglado por el citado artículo 227 fracasa, al tener presente lo enseñado por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil en la providencia antes citada, en la que refirió que "*(…) no es viable habilitar una nueva oportunidad procesal para que los impugnantes acrediten su interés para recurrir en casación, al tenor de la regulación plasmada en el artículo 339 del Código General del Proceso, sobre el cual esta Corte tiene decantado que* ***el inconforme con la sentencia de segunda instancia puede aportar dictamen pericial para acreditar el interés que le asiste para acudir a la casación, a más tardar con la interposición del recurso***". (negrilla no es del original).

En ese orden, el espacio temporal para allegar el dictamen pericial tendiente a demostrar el interés económico para recurrir, se extingue una vez agotado el momento para interponer el recurso, por lo que no procede la concesión de uno adicional para tal empeño, como reclama la disidente.

El precepto 339 del ordenamiento procesal establece que para determinar el interés económico afectado con la sentencia deberá apoyarse el dispensador de justicia en los elementos de juicio que obren en el expediente, y la activa manifestó que debieron tenerse en cuenta la totalidad de medios suasorios recaudados, sin discriminar los que, a su juicio, fueron omitidos por el *ad quem*, y en todo caso, no existe en el plenario prueba alguna que lleve a modificar el monto obtenido en el proveído que negó la concesión del recurso de casación.

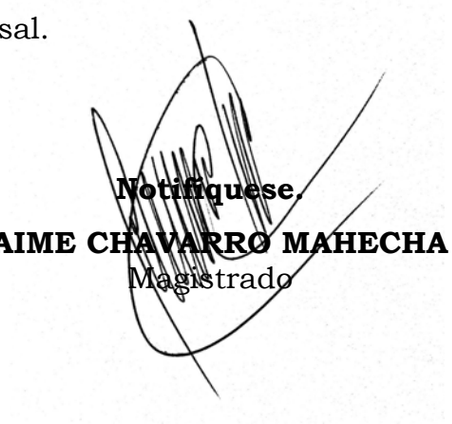
2.3. Entonces, por las razones esgrimidas, el auto recurrido deberá mantenerse en firme. Y con ocasión de la desestimación de la reposición interpuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 353 del Código General del Proceso, se torna procedente ordenar que por Secretaría se efectúe la remisión de la copia del expediente digital a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia.

3. Decisión.

Por lo expuesto, el suscrito Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, **Resuelve:**

3.1. Mantener el auto proferido el 28 de noviembre de 2022, mediante el cual se denegó la concesión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de segunda instancia.

3.2. Ordenar la remisión de copia íntegra del expediente digital a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para que se surta el recurso de queja, en la forma dispuesta en la norma 353 del reseñado código procesal.



Notifíquese.

JAIME CHAVARRO MAHECHA
Magistrado

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación	110013103040-2018-00277-01
Proceso	Verbal
Asunto	Sentencia
Demandante	Sandra Patricia Granados Lozano
Demandado	Herederos indeterminados de María Aurora Jiménez Moreno y o.
Decisión	Modifica

Magistrado Ponente
JAIME CHAVARRO MAHECHA

Discutido y aprobado en Sala del 2 de mayo de 2023

Se decide el recurso de apelación formulado por la sucesora procesal de la demandada inicial y demandante en reconvención contra la sentencia proferida por el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, el 30 de noviembre de 2022, dentro del proceso de pertenencia promovido por Sandra Patricia Granados Lozano contra herederos indeterminados de María Aurora Jiménez Moreno y personas indeterminadas.

I. ANTECEDENTES

1. La actora solicitó declarar que, por la vía de la prescripción extraordinaria de dominio, adquirió el bien inmueble con matrícula inmobiliaria Nº 50C-1292870, ubicado en la calle 32 Bis A No. 13-16, local No. 4 en Bogotá.

2. Fundamentos fácticos

En el libelo[1] se afirmaron los hechos que a continuación se sintetizan.

Desde enero de 1998, aproximadamente, en virtud del contrato de cesión de derechos de posesión del bien inmueble (local comercial) y mejoras que celebró con Claudia Elizabeth Yepes Gómez, la demandante ha ejercido actos de señora y dueña respecto del predio, de forma pública, pacífica e ininterrumpida, pues desarrolló la actividad mercantil de servicio de restaurante, lo pintó, ha pagado los impuestos, la cuota de administración y asiste a las asambleas de copropietarios.

Los linderos especiales del objeto de la usucapión son: *"tiene su acceso por el número trece dieciséis (13-16) de la calle treinta y dos (32). Cuenta con un área de cuarenta y ocho metros cuadrados con sesenta decímetros (48.60 M2) distribuidos en dos niveles, así: Primer (1er) Nivel: Esta ubicado en el primer piso; cuenta con un área de veintiséis metros cuadrados con nove (sic) y dos decímetros cuadrados (26.92 M2); (…). Segundo (2do) Nivel; está ubicado en el mezzanine; cuenta con un área de veintiún metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados (…)"*.

3. Posición de la parte accionada

El curador *ad litem* de los herederos indeterminados de María Aurora Jiménez Moreno y de las personas indeterminadas dijo atenerse a lo que resultare probado[2].

---

[1] Ver folios 169 a 182, y 205 a 207 del archivo *"001CuadernoUno"* de la carpeta *"01CuadernoPrincipal"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.
[2] Ver folios 301 a 307 ídem.

El 2 de marzo de 2020, se tuvo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F. como sucesor procesal de la referida causante[3]. El 28 de mayo de 2021, se ordenó controlar el término que tenía para contestar la demanda[4], y dentro del mismo se opuso a las pretensiones e impetró las defensas de *"falta de causa para demandar"* e *"imprescriptibilidad de bienes de uso público"*[5].

4. Demanda en reconvención y su réplica

Por esta vía reclamó la reivindicación del dominio que tiene sobre el inmueble cuyo folio de matrícula inmobiliaria es 50C-1292870. En consecuencia, se ordene a la demandada restituírselo y pagarle los frutos civiles generados, sin que la activa deba indemnizar por concepto de expensas necesarias (art. 965 C.C.) por ser la encausada poseedora de mala fe[6].

Relató que, mediante sentencia de 31 de octubre de 2018, proferida por el Juzgado 32 de Familia de Bogotá, se le adjudicó la totalidad del fundo con ocasión de su vocación hereditaria, lo que fue debidamente inscrito en el registro respectivo. No lo ha enajenado, pero se encuentra privado de la posesión, ya que la ejerce Sandra Patricia Granados Lozano.

La convocada en la mutua demanda manifestó su oposición al *petitum* e impetró las defensas de "*deficiencia en el derecho de dominio*", "*inexistencia de mala fe alegada*", *"prescripción adquisitiva de dominio"*, *"prescripción extintiva de la acción reivindicatoria"* y "*genérica*"[7].

---

[3] Ver folio 505 ídem.
[4] Ver archivo *"039AutoResuelveReposición-Declaranulidad20210528"* ídem.
[5] Ver folios 20 a 34 del archivo *"040ContestaciónDemanda20211020"* ídem.
[6] Ver archivo *"03SubsanaciónDemanda"* de la carpeta *"03Demandareivindicatoria"* ídem.
[7] Ver archivo "*07ContestaciónDemanda220214*" ídem.

Sentencia de primer grado[8]

La *iudex a quo* negó las pretensiones.

Para decidir de ese modo, expuso:

La presentación de la demanda, con la que se aspiró a usucapir la totalidad del inmueble cuyo folio de matrícula inmobiliaria es 50C-1292870, precedió al registro de la propiedad a favor del I.C.B.F., razón por la que, pese a ser imprescriptible a partir de este último suceso, para entonces era de dominio particular, por tanto, pasible de ser adquirido por prescripción.

Según se anotó en el texto introductor el señorío comenzó hace 14 años, con la cesión de derechos de posesión que le hizo Claudia Elizabeth Yepes Gómez, quien a su turno los adquirió de quien era la propietaria inscrita. El referido contrato está fechado 27 de junio de 2017 y contiene la descripción del bien por linderos generales y especiales, frente a los que se indicó que es un bien de dos niveles, los cuales fueron debidamente enunciados por su área y ubicación. En el interrogatorio de parte la actora manifestó que está en el local desde septiembre de 1999, cuando Yepes Gómez le entregó las llaves del mismo, donde funcionaba un restaurante; adujo que le ha hecho modificaciones, mantenimiento, adecuaciones, pero que su señorío es exclusivamente en el primer nivel, pues en el segundo era la cocina de un hotel, el cual nunca ocupó, por lo que dijo estar sorprendida con lo solicitado en su demanda, es decir, perseguir todo el predio, debido a que su apoderada conocía las circunstancias puntuales en torno a que era únicamente el nivel de abajo.

[8] Ver archivo *"076ActaAudiencia-LinVideoArt373CGP20221130"* en *"Link de visualización de la audiencia segunda parte Click aquí 11001310304020180027700"* de la carpeta *"01CuadernoPrincipal"* ídem.

Claudia Elizabeth Yepes Gómez declaró que adquirió el local por compra a María Aurora Jiménez Moreno, que era la dueña, aunque al parecer la vendedora falleció y no se pudo transferir el dominio como tal; empezó a explotarlo económicamente desde 1994, y en el año 2000 se lo entregó real y materialmente a Sandra Patricia por negocio verbal, que en junio de 2017 se plasmó por escrito. Indicó que hace dos años compareció a otro proceso en el que era demandante la mamá de la ahora actora, dado que esta estaba enferma en esa época; dice que a Granados Lozano le cedió el primer piso o nivel, no el segundo. Respecto al paz y salvo que se allegó a favor de Emilia Lozano, de junio de 2017, expuso que fue porque le terminaron de pagar el precio. En desarrollo de la inspección judicial, la administradora del edificio del que hace parte el local señaló que la demandante ocupa el bien, paga las expensas y asiste a las asambleas de copropietarios, y que el segundo nivel está destinado a zona común de la edificación, y aportó contratos de arrendamiento que suscribió la administración sobre esa porción del bien. En la diligencia en referencia se constató que la demandante solamente utiliza el primer nivel, que se encuentra separado totalmente del segundo, tienen entradas diferentes, no hay conexión física entre estos. Los Testigos Leonidas Rodríguez García, Rocío del Pilar, dijeron conocer a Granados Lozano y que detenta el local en el piso 1.

En este asunto, el predio descrito en la demanda no corresponde a lo que efectivamente posee la demandante, pues nunca ejecutó, ni su antecesora, actos sobre el segundo nivel; entonces, como quiera que el artículo 282 del Código General del Proceso establece que el texto introductor es el marco sobre el que debe emitirse la sentencia, dado que debe estar en consonancia con los hechos, pretensiones y las excepciones, no es dable acoger lo pedido, esto es, la totalidad del predio que comprende los niveles 1 y 2, toda vez que se tornaría incongruente la decisión, al haberse verificado que solamente se posee el primero. La progenitora de la demandante, con

similares aspiraciones, adelantó trámite en el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá, pero le fueron negadas, y tal determinación fue confirmada por el superior en el año 2017, lo que significa que los hechos de posesión que se atribuyen aquí tienen una inconsistencia, en la medida que comparten el mismo espacio temporal con los que sirvieron de soporte a aquella.

La acción dominical exige para su prosperidad unos puntuales requisitos que deben concurrir de forma íntegra, so pena de fracasar. Con la sentencia dictada por el Juzgado 32 de Familia de Bogotá y el folio de matrícula inmobiliaria se demostró el derecho real de dominio en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- I.C.B.F. La singularidad e individualización están en el certificado de tradición respectivo. La identidad del bien poseído con el que se quiere reivindicar se echa de menos, al tener presente que se persiguió por la entidad aludida el 100% del bien mientras que la demandada en reconvención obró con ánimo de señora y dueña sobre una fracción del mismo, por lo que no se abren paso las pretensiones.

5. El recurso de apelación

La inicial demandada y demandante en reconvención planteó y sustentó los siguientes reparos:

En el particular se acreditaron los requisitos para la prosperidad de la acción, puesto que: se demostró que la actora en reconvención es la titular del derecho de dominio de la cosa pedida en reivindicación; frente a la posesión de la demandada, señaló que *"la presente demanda acumulada se originó por el proceso de pertenencia iniciado por la señora Sandra Patricia Granados razón por la cual se da origen a la presente acción por ser esta quien tiene el inmueble y pretende en proceso de pertenencia, razón por la cual*

se da inicio al proceso reivindicatorio en contra de la demandante en proceso ya referido"; en relación con que las pretensiones recaigan sobre cosa singular o cuota determinada, destacó que en la demanda de usucapión se buscó ganar el 100% del inmueble, pero en la etapa probatoria se modificó ese interés al manifestar que solamente se ejercía la posesión del primer nivel. En ese orden, al momento de contestar el libelo inicial se presentó la oposición respecto de la totalidad del predio y con soporte en ello se promovió la reconvención. La coincidencia del bien que posee la demandada con el que reclamó la actora se probó. Adicionalmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F. apoya su propiedad en la cadena ininterrumpida de títulos que es anterior a la posesión alegada, en tanto, María Aurora Jiménez Moreno le compró a Constructora Baviera S.A. mediante escritura pública No. 1449 de 7 de julio de 1992; posteriormente, por decisión judicial se le adjudicó a la reivindicante.

La vía escogida por la reconviniente es la idónea para obtener el local, y *"no encuentro más herramientas jurídicas que pueda invocar para el restablecimiento o recuperación del inmueble (…)".*

Con base en tales argumentos solicitó la revocatoria del fallo apelado únicamente frente a lo decidido en la demanda en reconvención y, en su lugar, se acceda a las pretensiones.

6. La demandante primigenia no se pronunció frente a lo alegado por su contraparte.

II. CONSIDERACIONES

1. Concurren en este asunto los presupuestos procesales traducidos en competencia del juez, demanda en forma, capacidad procesal y para ser parte, sin que se advierta causal de nulidad que

pueda comprometer la validez de lo actuado, por manera que se procede a resolver el asunto en referencia, en orden a lo cual se precisa que, por mandato del artículo 328 del Código General del Proceso, la actividad del Tribunal se concretará a los precisos reparos debidamente sustentados por el impugnante.

2. La acción reivindicatoria

El artículo 946 del Código Civil expresamente dispone: *"La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla".* De modo que los elementos estructurales de la pretensión reivindicatoria son: *i)* Que el actor sea el titular del derecho de dominio sobre la cosa objeto de reivindicación; *ii)* Que el demandado tenga la condición de poseedor actual de esa misma; *iii)* Que la cosa sea singular, o cuota determinada de ella; y *iv)* Que haya identidad entre el bien poseído por el demandado y el pretendido en reivindicación. En ausencia de cualquiera de estos elementos, forzosamente fracasa la pretensión.

De otra parte, al tenor del artículo 952 del Código Civil, la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor, es decir, contra quien demuestre que ostenta esa calidad al momento de presentar la correspondiente demanda. Tal norma consagra la legitimación en la causa por pasiva y prevé regulación precisa sobre uno de los elementos esenciales y necesarios de la acción de dominio.

En definitiva, como lo ha reiterado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, *"-en lo concerniente al derecho de dominio y a la acción reivindicatoria- que uno de los atributos arquetípicos del primero es el de persecución, en virtud del cual al propietario se inviste de la facultad de reclamar la restitución del bien*

que no se encuentra en su poder, de cara a aquel que sí lo detente."[9]. Así, es condición *sine qua non* que el demandado sea en verdad un poseedor.

La Corte Suprema de Justicia en SC-433 de 2020, en relación con la prueba de la condición de poseedor del demandado explicó:

> *"Pregonado como fue por los reivindicantes que Agripina León de Forero «es la actual poseedora»*[10] *del bien pretendido, lo que ella aceptó de manera expresa al formular el libelo de mutua petición,* ***tal reconocimiento recíproco se constituyó en un aspecto pacífico****.*
>
> *En ese sentido como se indicó en CSJ SC 18 oct. 2000, rad. 5673,*
>
> *(…) frente a la convergencia de los elementos prototípicos de la acción reivindicatoria, como son la titularidad del dominio en cabeza del demandante; la singularización e identidad del objeto reivindicado y la posesión en el demandado, éste último puede alegar en su defensa, como excepción, la prescripción extintiva de dicha acción, e igualmente como demanda de mutua petición –o de reconvención- la adquisitiva del dominio del mencionado bien.*
>
> *Formulada la mencionada excepción, le corresponde entonces al demandado demostrar los supuestos de hecho en que descansa su mecanismo defensivo: la posesión llevada a cabo, la prescriptibilidad del objeto y el plazo correspondiente a la prescripción ordinaria o extraordinaria aducida. Es así, entonces, como a la parte pasiva le incumbe la carga de la demostración de su posesión, a la par que de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la misma.*
>
> *De otro lado, en la medida en que, en caso dado,* ***el demandado, al aceptar a través de la contestación de la demanda, la posesión o la calidad de poseedor que le haya atribuido el demandante en su libelo introductorio, en cuanto éste hecho le resulta desfavorable, debe entenderse que confiesa esta circunstancia, lo que sirve de medio de convicción al juzgador frente al primer elemento axiológico de la pretensión de dominio antes indicado****.*

---

[9] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SC. 15 de agosto de 2001, exp. 6219.
[10] Así figura en el hecho sexto de la demanda de reivindicación (fl. 49 cno. 1).

(…)

En un asunto similar en sus contornos en el que una de las partes intentó variar una calidad que ya había admitido, tratado en CSJ SC2805-2016, se llamó la atención en que

[n]inguna discusión se propone en relación con la presencia de todos los requisitos de éxito en la acción de dominio, que concuerdan a su vez con la mayoría de los de viabilidad de la pertenencia, siendo el único desacuerdo el tiempo de posesión acreditado.

Es así vano predicar que «al tener por establecido como un hecho cierto que los demandantes prescribientes, después de ocurrida la muerte de (…) el 28 de marzo de 1995, intervirtieron el título de meros tenedores en poseedores» lo indicado era «la desestimación de la demanda por improcedencia de la reivindicación pretendida», en vista de que «mientras el vínculo negocial en cuestión no desaparezca, es ley para las partes y sus derechohabientes».

Esa manifestación de los recurrentes distorsiona tanto los aspectos factuales admitidos por todos ellos cuando comparecieron al pleito, como lo que tuvo por establecido el fallador, ya que ambas partes coincidieron en que al momento en que empezó la contienda los demandados eran «poseedores», indistintamente de la forma como llegaron al predio.

Tan es así que en la contestación los opositores aceptaron ser «poseedores de un predio que aparece inscrito en mayor extensión, a nombre de las demandantes» y simultáneamente reconvinieron en pertenencia, por lo que como lo tiene decantado la jurisprudencia

(…) ***si con ocasión de la acción reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante o alega la prescripción adquisitiva respecto de él, esa confesión apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesión y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesión.*** *(CSJ SC 003 de 14 mar. 1997, reiterada en SC 14 dic. 2000 y SC. 12 de diciembre de 2001, entre otras).*

> *Y a pesar de que tal situación se ha atemperado en los casos donde la «confesión» viene aparejada de otras circunstancias que la condicionan, como cuando se acepta ser poseedor pero como consecuencia de un título de dominio que entra a discutir con el de la contraparte o existe disparidad total o relevante entre las áreas que reclama cada quien, en el evento de que se constate una coincidencia entre lo que ambas buscan esa aceptación de quienes tienen en su poder el bien con ánimo de señores y dueños pero sin ser propietarios, cobra relevancia.*
>
> *Bajo ese escenario esbozado por los litigantes, en el cual la titularidad del derecho de dominio de los demandantes originarios estaba definida, la prescribiente era poseedora indiscutida del inmueble y ninguna discusión existía sobre la individualización de éste, lo que no ameritaba un esfuerzo del fallador distinto a determinar si el ejercicio del señorío «no alcanza siquiera los diez (10) años»[11], como lo afirmaron los primeros en un comienzo, o según el dicho de la contradictora era de «más de veinte años»[12], sin necesidad de elucidar otros aspectos*" (negrillas a propósito).

3. Examen del asunto *sub judice*

La conformidad con la negativa de las aspiraciones de la pertenencia deja incólume tal determinación. En torno a las pretensiones de la demanda en reconvención fueron negadas por cuanto no se tuvo por probado el elemento consistente en que exista identidad entre el bien poseído por la demandada y el reclamado por la activa, en el entendido que Sandra Patricia Granados Lozano ejerció el señorío exclusivamente en el primer nivel del inmueble y no sobre su totalidad. Respecto de los demás presupuestos de la acción no hubo duda de su concurrencia, empero se hace forzoso verificar, en su orden, si realmente fueron demostrados.

De entrada, se advierte que la decisión de primera instancia en relación con la acción dominical debe ser revocada, por los motivos que en adelante se exponen:

---

[11] Hecho segundo de la demanda de reivindicación (fl. 49 cno. 1).
[12] Hecho segundo del libelo de reconvención (fl.100 cno. 2).

Dadas las particularidades de este litigio, es importante mencionar que la pretensión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar versó sobre la totalidad del bien inmueble, puesto que solicitó lo siguiente:

> *Se declare que pertenece el dominio pleno y absoluto (…) del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1292870 (…) el cual se encuentra ubicado en la calle 32 Bis A No 13-16 local 4 de la ciudad de Bogotá D.C., cuya cabida y linderos y demás son los siguientes: Nivel (3) o primer piso y (4) o mezanine local número 13-16 de la calle 32, cuenta con un área de 48.60 mts 2, distribuidos en dos niveles, así: primer nivel: está ubicado en el primer piso cuenta con un área de 26.92 mts 2 (…). Segundo (2do) Nivel; está ubicado en el mezanine; cuenta con un área de veintiún metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados (21.68 m2) (…).*

La descripción del inmueble permite colegir que lo integran dos dependencias, es decir, los niveles uno y dos, que jurídicamente lo constituyen al estar englobados, pero físicamente son independientes y tienen su propia área.

Lo anterior cobra relevancia, se itera, por las circunstancias que rodean la discusión propuesta.

3.1. Ahora bien, respecto al primer requisito axial mencionado, es decir, que el reivindicante sea el titular del derecho real de dominio se acreditó con la sentencia del Juzgado 32 de Familia de Bogotá aprobatoria del respectivo trabajo de partición y el *"formulario de calificación constancia de inscripción"* que da cuenta de la anotación 19 del folio de matrícula inmobiliaria del bien raíz aludido No. 50C-1292870[13], la cual es del siguiente tenor:

Fecha: 07-05-2019 (…)

---

[13] Ver folio 365 del archivo *"001CuadernoUno"* y folio 145 del archivo *"018ExpedienteJuzgado32Familia"* de la carpeta *"01CuadernoPrincipal"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.

Documento: Sentencia Sin del: 31-10-2018 Juzgado 032 Civil del Circuito de Bogotá D.C. (…)
Especificación: 0109 Adjudicación en sucesión (modo de adquisición)
Personas que intervienen en el acto (…)
De: Jiménez Moreno María Aurora
A: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

3.2. Del segundo presupuesto requerido, vale referir lo que sigue.

En armonía con la jurisprudencia citada, en torno a la prueba de la posesión del demandado, se tiene que por vía de acción la señora Granados Lozano reclamó la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio de todo el inmueble; luego, al contestar la demanda en reconvención, presentó la excepción de *"prescripción adquisitiva de dominio"*. De este modo, en los términos del artículo 193 del Código General del Proceso, confesó su condición de poseedora, con el correlativo efecto de sustraer al administrador de justicia de indagar sobre tal calidad y acerca de la identidad del bien poseído con el objeto de reivindicación; sin embargo, no puede pasarse por alto que en el interrogatorio de parte que absolvió la encausada reconoció que solamente detentó con ánimo de señor y dueño el primer nivel, situación que refrendaron los testigos y que no es motivo de debate en esta instancia, lo que permite establecer que carece de legitimación en la causa por pasiva frente al segundo nivel, y no es dable ordenar que restituya lo que no está bajo su custodia.

Así las cosas, no queda duda de que Sandra Patricia es poseedora parcial del inmueble, esto es, del primer nivel, pero sin el tiempo para ganar por prescripción adquisitiva dicha porción o llevar al fracaso la pretensión dominical si se tiene en cuenta el efecto declarativo que apareja la sentencia que aprobó la partición de la masa sucesoral.

En todo caso, nótese que, si bien en la demanda inicial se argumentó que Granados Lozano ha ejercido actos de señora y dueña respecto del predio desde enero de 1998, aproximadamente, en virtud del contrato de cesión de derechos de posesión (local comercial) y mejoras que celebró con Claudia Elizabeth Yepes Gómez, lo cierto es que el aludido concurso de voluntades tiene como fecha de suscripción el 27 de junio de 2017 y en ninguna de sus cláusulas se indicó que la entrega del bien o la transferencia de la posesión se hubiese efectuado con antelación a la firma[14]; por ende, ese tenor literal impide tener a la actora en usucapión como poseedora en calenda precedente a la últimamente mencionada, la cual, de cara a cuando se radicó su demanda, esto es, el 8 de mayo de 2018[15], es insuficiente para ganar el dominio.

3.3. Para el examen atinente a que *i)* la cosa sea singular, o cuota determinada de ella, y *ii)* la identidad entre el bien poseído por la encausada y el pretendido en reivindicación, es pertinente memorar lo que en SC4046-2019 sostuvo el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil:

> "***2.-*** *Entre los requisitos necesarios para viabilizar la acción de dominio se encuentran que ésta recaiga sobre una cosa singular o cuota determinada de cosa singular, y la identidad entre el bien objeto de reivindicación y el poseído por los demandados. Estos presupuestos deben concurrir en armonía, comoquiera que la cosa singular, esto es aquella caracterizada como especie o cuerpo cierto que se torna inconfundible, y sobre la cual el demandante alega y demuestra dominio, debe ser la misma poseída materialmente en forma total o parcial por aquel de quien se reclama la restitución.*
> *Frente a estos conceptos, en CSJ SC 25 nov. 2002, rad. 7698, reiterada en SC 13 oct. 2011, rad. 2002-00530-01, se precisó que,*
> *(…) la singularidad de la cosa, tratándose de un inmueble, hace relación a que se trate de una especie o cuerpo cierto,*

[14] Ver folios 149 a 154 del archivo *"001CuadernoUno"* de la carpeta *"01CuadernoPrincipal"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.
[15] Ver folio 185 ídem.

por tanto inconfundible con otro; por consiguiente, no están al alcance de la reivindicación las universalidades jurídicas, como el patrimonio y la herencia, o aquellos predios que no estén debidamente individualizados o determinados. ***En esa medida, cabe señalar que no pierde la condición de ser cosa singular el inmueble objeto de reivindicación por el hecho de que se haya especificado en la demanda un predio, y luego se demuestre que el dominio o la posesión recae sobre una porción menor del mismo, pues ésta se impregna de esa misma característica, claro está, hallándose perfectamente determinada como parte integrante del bien disputado****.*

3. El segundo, ***la identidad, simplemente llama a constatar la coincidencia entre todo o parte del bien cuya restitución reclama el demandante en su condición de dueño, con el que efectivamente posee el demandado; y si apenas resulta afectada en esa correlación una porción del mismo, simplemente se impone aplicar lo dispuesto en el artículo 305 del C. de P. C., según el cual "si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último****.*

4. Es decir, uniendo ambos requisitos, la cosa singular debe ser una misma, sea en todo o en parte, tanto aquella respecto de la cual el demandante alega dominio, como la que posee materialmente el demandado a quien aquél le reclama la restitución. ***La singularidad ni la identidad, pues, desmerece por el hecho de que el demandante haya singularizado un predio del cual apenas parcialmente ejerce posesión el demandado; tal presupuesto no se verifica entre lo que se demanda y lo que se otorga en la sentencia, sino entre la cosa de la cual afirma y demuestra dominio el actor y lo que respecto de ella posee el demandado****.* *(…)* -En el mismo sentido pueden consultarse, entre otros, el fallo de 28 de junio de 2002, exp. N° 6192-

Posteriormente, en SC 211-2017, rad. 2005-00124-01, se refirió,

(…) Conviene empezar señalando que la «identidad» requerida en esta estirpe de controversias ostenta un alcance dual, pues de una parte, atañe a la coincidencia que debe existir entre la heredad cuya reivindicación se reclama y la de propiedad del demandante, y a la correspondencia de la cosa poseída por el accionado con la reclamada por aquél.

La carencia de cualquiera de los elementos axiológicos que integran la acción reivindicatoria trunca el propósito restitutorio. Se limita el escenario y alcance de la acción, al

no demostrarse uno solo de los elementos, así concurran los otros requisitos, frustrando su acogimiento. Al respecto, la Corte ha estructurado una doctrina intangible a fin de dar seguridad a las relaciones jurídicas en el marco del derecho de las cosas. Con relación al requisito de singularidad expuso:

"La determinación y singularidad de la cosa pretendida circunscribe el campo de la acción reivindicatoria, porque como lo tiene dicho la Corte, 'cuando la cosa que se intenta reivindicar no se ha podido determinar no se puede decretar la reivindicación'. De modo que este elemento atisba a la seguridad y certeza de la decisión, amén de su entronque íntimo con el derecho protegido, pues no puede olvidarse que tratándose de la acción reivindicatoria, tutela del derecho real de dominio y expresión del ius persequendi, la determinación misma de la cosa se torna en elemento sine qua non, porque el derecho real de dominio sólo puede hacerse realidad como poder directo y efectivo sobre una cosa determinada, es decir, una cosa individualizada como un cuerpo cierto-CSJ: Civil. Sentencia de 14 de marzo de 1997, radicación 3692-

Luego, enfatizó que la "(…) singularidad de la cosa reivindicada (…) apunta a que la pretensión recaiga sobre una cosa particular, o una cuota determinada proindiviso de ella, puesto que la reivindicación es una acción de defensa de la propiedad, que supone, como objeto, un bien individualmente determinado, requerimiento que por ende se colma singularizándolo objetivamente, en forma que no sea dable confundirlo con otro (…)» - CSJ. Civil. Sentencia de 1º noviembre de 2005, expediente 00556- *(…).*

4.3. <u>La verificación de la identidad del bien reivindicable se obtiene de cotejar objetivamente la prueba de la propiedad en cabeza del actor, la demanda y los medios de persuasión útiles para el efecto. Ese ejercicio permite determinar si el terreno detentado por el accionado, en realidad corresponde al reclamado por aquél.</u> (subraya intencional)" (negrilla no es del original).

Acorde con los raseros de la alta Corporación, puede decirse que en este caso la reivindicación recayó sobre un bien singularizado, a la vez que existe identidad, parcialmente, entre lo que reclama el actor y lo que posee la pasiva. Se explica:

Como ya se sabe, la acción dominical se persiguió sobre la totalidad del inmueble ya conocido, el cual está dividido físicamente

en dos niveles, que tienen entradas por puertas diferentes, como quiera que al nivel uno se ingresa por la parte externa del edificio, y al dos, por la interna; cada uno tiene su área específica, el primero, de 26.92 metros cuadrados y, el segundo, de 21.68 metros cuadrados; o sea, que son inconfundibles, con otros bienes y entre sí, tal como quedó constatado en la inspección judicial practicada por la *iudex a quo*[16]. A su vez, el predio de propiedad del I.C.B.F. considerado en su integridad también se distingue con facilidad de otros. El mismo folio de matrícula inmobiliaria revela con nitidez las características de cada piso, en la medida que en la *"descripción: cabida y linderos"* registra:

> "*Nivel (3) o primer piso y (4) o Mezzanine. Local # 13-16 de la calle 32. Cuenta con un área de 48.60 Mts 2, distribuidos en dos (2) niveles, así: Primer nivel: está ubicado en el primer piso cuenta con un área de 26.92 Mts2 (…), Segundo nivel: está ubicado en el mezzanine; cuenta con un área de 21.68 Mts2 (…)*"[17].

En el dictamen pericial[18] que allegó la encausada en reconvención, elaborado por la Agencia Nacional de Avaluadores y Peritos – ANAP, en su acápite de *"identificación plena del inmueble"*, en punto del área, se discriminó en total: 48.6 m2, primer piso: 26.92 m2, área mezanine: 21.68 m2.

Con todo, importa destacar que la parte demandante inicial, no reprochó la identificación del inmueble que persigue la parte actora en reconvención.

No hay duda, entonces, de la presencia del tercer elemento examinado.

---

[16] Ver archivos *"059AudienciaInspecciónParteI"* y *"060AudienciaInspecciónJudParteIIfijaFecha(20220901)"* de la carpeta *"01CuadernoPrincipal"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.
[17] Ver folio 159 del archivo *"001CuadernoUno"* ídem.
[18] Ver folio 9 y 10 del archivo *"09AportanDictamen pericial20220228"* de la carpeta *"03DemandaReivindicatoria"* ídem.

3.4. En cuanto a la identidad del bien poseído por la encausada con el reclamado en la reconvención, también se logró probar, en la forma en que se anunció, es decir, la activa es propietaria del bien del cual hacen parte los niveles 1 y 2, y la demandada poseedora del primero, exclusivamente, lo que según la jurisprudencia no condena al fracaso las pretensiones, sino que hace aplicable lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso - que remplazó al artículo 305 del C. de P.C.- en relación con que *"[s]i lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último"*.

La reunión íntegra de los presupuestos de la acción reivindicatoria lleva a revocar la decisión apelada; en consecuencia, se ordenará a la demandada en reconvención restituir el nivel 1 del inmueble a su propietaria, sin que haya lugar a condenar a la primera al pago de frutos civiles, toda vez que no se acreditó la cuantía de los que se produjeron o se hubieran podido percibir, debido a que en el experticio que rindió la Agencia Nacional de Avaluadores y Peritos – ANAP, si bien se cuantificó el valor de los frutos civiles causados desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2021 en $58.140.000, a razón de $1.615.000 mensuales, lo cierto es que se utilizó para tal encomienda un método comparativo de ofertas en el mercado, pero se echa de menos la ubicación de los locales que sirvieron de insumo para el cotejo en referencia, y la inclusión de sus áreas y el monto ofertado en internet no es suficiente para determinar que efectivamente el nivel uno del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1292870 es el que se indicó, por lo que no puede ser acogido como elemento de juicio para imponer una condena en este sentido.

La excepciones de mérito denominadas *"deficiencia en el derecho de dominio", "prescripción adquisitiva de dominio y "prescripción extintiva de la acción reivindicatoria",* fincadas, en lo

esencial, en que no se acreditó la calidad de propietaria de la activa; que la demandante inicial reúne los requisitos para ganar por prescripción extraordinaria el dominio y correlativamente al I.C.B.F. se le extinguió el derecho a promover la acción dominical, quedan abatidas con lo expuesto en precedencia, o lo que es igual, no hay duda de la condición de dueña de la actora en reconvención, ni acerca del fracaso de la usucapión alegada por Sandra Patricia Granados Lozano, ni de la tempestividad de la presentación de la pretensión reivindicatoria.

Caso distinto acaece con la defensa de *"inexistencia de mala fe alegada"*, en la medida en que era tarea de la promotora de la contrademanda demostrar que el otro extremo procesal ostentó la posesión en contravía de la buena fe, tarea de la cual se sustrajo, por lo que se declarará prospera.

No sobra señalar, que la Sala advirtió una deficiencia en la anotación No. 19 del folio de matrícula inmobiliaria en relación con la autoridad que emitió la sentencia que allí se registró, como quiera que lo fue el Juzgado 32 de Familia de Bogotá, que no el 32 Civil del Circuito de la misma ciudad; no obstante, esa situación no es objeto de discusión en este juicio, lo que impide a esta Corporación realizar declaración alguna para su corrección. En todo caso, no existe duda acerca de la propiedad en cabeza del I.C.B.F.

III. CONCLUSIÓN

En síntesis, como la parte demandante probó los necesarios presupuestos axiales de la reivindicación para tener éxito en su pretensión restitutoria, pero sólo respecto del primer nivel del señalado local, deberá revocarse la sentencia en este sentido con las órdenes consecuenciales a cargo de la demandada en reconvención.

Por las resultas del recurso, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso, se habrá de condenar en costas a la demandante inicial a favor de la parte actora en reconvención, en ambas instancias.

IV. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

Primero: Revocar el ordinal segundo resolutivo de la sentencia de fecha, contenido y procedencia, de la cual se ha hecho mérito en la parte motiva de este fallo, por lo que quedará con la siguiente decisión:

a) Declarar prospera la excepción denominada *"inexistencia de mala fe alegada"* que impetró la demandada en reconvención.

b) Declarar que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. le pertenece el dominio pleno y absoluto del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1292870, el cual se encuentra ubicado en la calle 32 Bis A No 13-16 local 4 de la ciudad de Bogotá D.C.

c) Ordenar a Sandra Patricia Granados Lozano restituir a favor del demandante en reconvención Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F., el primer nivel del indicado local, el cual cuenta con la siguiente alinderación : "*Primer (1er) Nivel: Esta ubicado en el primer piso; cuenta con un área de veintiséis metros cuadrados con noventa y dos centímetros cuadrados (26.92 M2); su altura es de dos*

metros con cincuenta centímetros cuadrados (2.50 mts), y sus linderos son: entre los puntos uno (1) y dos (2), en dimensión de tres metros con cuarenta centímetros (3.40mts), muro medianero con el local Número trece veinte (13 - 20) de la calle treinta y dos (32); entre los puntos dos (2) y tres (3) línea quebrada y dimensiones sucesivas de treinta y cinco centímetros (0.35mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), un metros y cinco centímetros (1.5 mts), tres metros con sesenta centímetros (3,60 mts) dos metros con doscientos un milímetros (2.201mts) setenta centímetros (0.70 mts) y ochenta centímetros (0.80 mts) muro y columnas comunes al medio que lo separan de área comunal y con el local Número Trece Doce (13 - 12) de la calle treinta y dos (32); ente los puntos tres (3) y cuatro (4), en dimensión de cinco metros con treinta centímetros (5.30 mts) muro medianero con el local número, trece doce (13 - 12) De la calle treinta y dos (32); entre los punto cuatro (4) y uno (1), en dimensión de cuatro metros (4.00 mts), fachada y puerta comunes al medio que lo separan de circulación comunal. Por el Cenit: Placa común al medio que lo separa del mezanine por el Nadir: Placa Común al medio con el semisótano, Dependencias: Espacio Para Local y Baño"[19].

d) No se impone condena al pago de frutos civiles, por las razones consignadas en la motiva del fallo.

Segundo: Revocar los ordinales tercero y cuarto de lo resolutivo.

Tercero: Se condena al pago de las costas en ambas instancias a la parte demandante inicial y demandada en reconvención, en favor de la parte actora reivindicante. Tásense por la secretaría del despacho de origen en la oportunidad procesal adecuada.

---

[19] *"01EscritoDemandaReivindicatoria20211"* de la carpeta *"03DemandaReivindicatoria" "PrimeraInstancia"* del expediente digital.

Cuarto: Se confirma en lo demás, la sentencia que aquí se revisa por apelación.

En firme esta sentencia, devuélvanse las diligencias digitales correspondientes a este proceso, a su lugar de origen; déjense las constancias de rigor.

Notifíquese.

Magistrados integrantes de la Sala

JAIME CHAVARRO MAHECHA

RICARDO ACOSTA BUITRAGO
(con aclaración de voto)

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ

Firmado Por:

Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ricardo Acosta Buitrago
Magistrado
Sala Civil Despacho 015 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,
Firma Con Aclaración De Voto

Marco Antonio Alvarez Gomez

Magistrado

Sala 006 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1a8b26b4eafa6e64efb14fea2e55cca925be33a849398b657fad4115374b2da5**

Documento generado en 26/06/2023 12:35:12 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación	110013103040-2018-00277-01
Proceso	Verbal
Asunto	Sentencia
Demandante	Sandra Patricia Granados Lozano
Demandado	Herederos indeterminados de María Aurora Jiménez Moreno y o.
Decisión	Señala agencias en derecho

El suscrito magistrado señala la suma de $1.000.000 a título de agencias en derecho, con fines de la liquidación de costas a que se contrae la sentencia de segundo grado de esta misma fecha.

Notifíquese.

JAIME CHAVARRO MAHECHA

Magistrado

Firmado Por:
Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6be2fff5ea2687a9c16aee1924896ef0509052e103afe243a83f188a1e4cde0c**

Documento generado en 26/06/2023 12:39:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	Verbal
DEMANDANTE	María Consuelo Arciniegas Villamizar
DEMANDADA	Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
RADICADO	110013103 040 2022 00210 01
INSTANCIA	Segunda – *apelación sentencia* -
DECISIÓN	Admite

De conformidad con lo reglado por los artículos 322 y 323 del Código General del Proceso en armonía con el precepto 12 de la Ley 2213 de 2022, que establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, se admite en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 14 de abril de 2023, proferida por el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá.

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este proveído, deberá sustentarse el recurso a través del correo electrónico institucional de la Secretaría de la Sala Civil de este Tribunal[1], atendiendo lo estatuido por la norma 109 del Código General del Proceso, so pena de declararse desierto.

Presentada en oportunidad la sustentación, córrase traslado por cinco (5) días a la parte contraria.

Notifíquese.

JAIME CHAVARRO MAHECHA
Magistrado

[1] secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación	110013199001-202168497-02
Proceso	Acción de protección al consumidor financiero
Asunto	Apelación sentencia
Demandante	Justo Pastor Gamboa Vargas
Demandado	Finsocial S.A.
Decisión	Confirma

Magistrado Ponente
JAIME CHAVARRO MAHECHA

Discutido en Salas de Decisión del 13, 20 de febrero, y 13 de junio, de 2023, aprobado en ésta última.

Se decide el recurso de apelación formulado por la demandada contra la sentencia proferida el 7 de octubre de 2021 por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de la acción de protección al consumidor de JUSTO PASTOR GAMBOA VARGAS contra FINSOCIAL S.A.

I. ANTECEDENTES

1. Síntesis de la demanda

Se solicitó declarar que la demandada desconoció los derechos del consumidor financiero del actor, al cobrar valores distintos a lo que ofertó respecto al producto crediticio y, por tanto, la obligación a

cargo del actor es realmente de $125.539.540, que corresponde a $62.769.779 por cada uno de los créditos identificados con los Nos. 58138 y 58136; que la tasa de interés corriente aplicable a dichos productos es del 14.14% E.A., tal como le fue ofertado al momento de adquirirlos, y no del 19.2% E.A. como se aplicó por la pasiva; que el plazo de duración correspondió a 27 meses comprendidos entre la fecha de desembolso, el 16 de octubre de 2018, y la compra de cartera efectuada por el Banco Sudameris, el 18 de enero de 2021; que por ser producto del engaño al que fue sometido por la encausada y de los que nunca fue informado ni los aceptó, el demandante no está obligado a pagar los conceptos de fianza, seguro de cumplimiento y estructuración de crédito que ascienden a $61.179.288; que Finsocial S.A. recibió de manera irregular $271.839.180 de la siguiente manera: $177.069.180 con desembolso del Banco Sudameris y $94.770.000 con el pago de 27 cuotas mensuales que realizó directamente Gamboa Vargas por valor de $3.510.000 cada una; que se generó un lucro cesante, pues el actor fue privado de los rendimientos que podía obtener de las sumas de dinero cobradas en exceso; que, en consecuencia, se ordene la reliquidación de la obligación conforme al capital y la tasa de interés ofrecida, y se pague la diferencia de dinero a favor del demandante por $105.624.829,04, junto con los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde el 19 de enero de 2021 hasta cuando se efectúe la restitución aludida.

2. Fundamentos fácticos

En el libelo[1] se afirmaron los hechos que a continuación se sintetizan.

2.1. El 4 de octubre de 2018, María Fernanda Castillo, asesora de Finsocial S.A., apoyada en un programa de simulación, le ofreció

[1] Ver archivo *"1.Demanda.21-168497"*, carpeta *"CuadernoSIC"* del expediente digital.

al accionante un crédito de libranza por $128.000.000 con tasa preferencial de 14.4% E.A., con un plazo de hasta 96 meses; días después, aquella le manifestó que se le había preaprobado un crédito en las condiciones anunciadas, lo cual fue refrendado por la gerente comercial Deycy Martínez Rodríguez, quien, además, le indicó que debía enviar algunos documentos a Barranquilla para agilizar el trámite, pero que la misma entidad se encargaba de incluir la información requerida, y una vez quedara aprobado, se le entregaría al consumidor lo pertinente para que revisara las características y, luego, proceder con el desembolso.

2.2. A pesar de que a Gamboa Vargas no se le dieron a conocer las condiciones finales del producto, ni dio su aprobación al contrato final, el 16 de octubre de 2018 fue contactado por Castillo, quien le expuso que el crédito había sido aprobado y se compró la cartera que él tenía con Cooperativa Financiera Confiar, a través del giro de un cheque y se tramitó lo correspondiente con Colpensiones para el traslado de lo deducido, ante lo cual expuso su disgusto y solicitó personalmente a la gerente comercial la copia de la papelería, pero le fue negada, debido a que no había regresado de la oficina principal; no obstante, en un papel sin membrete y escrito a mano la señora Martínez le dio los detalles generales: desembolso de $186.720.564, cuota fija mensual de $3.510.000.

2.3. El 10 de diciembre de 2018, el señor Gamboa Vargas recibió una llamada telefónica de Bancolombia con la que se le indicó que se hizo a su favor un depósito por $53.197.066.

2.4. El deudor tuvo que radicar derechos de petición (sin indicar la fecha) ante Finsocial S.A. para recibir la documentación e información pertinente, y pasados más de dos años de vínculo con aquella pudo obtenerlas, y notó que las condiciones pactadas verbalmente con la asesora de la financiera no coinciden con la

realidad del producto, puesto que aun cuando se pidió solamente uno, se constituyeron dos créditos de libre inversión identificados con los Nos. 58136 y 58138 por $93.360.282, *"sin embargo, ese valor no corresponde a las sumas efectivamente desembolsadas"*; el plazo no se estableció en los 96 meses pactados sino en 120; la tasa de interés ofrecida del 1.20% N.M.V. y del 14.4% E.A. no se consolidó y, en su lugar, se dispuso por la demandada el 1.6% N.M.V. y del 19.2% E.A; pese a que cuando simuló el crédito *"y que de forma intencional se ocultó dicha información"*, se le cobraron costos por fianza por $23.700.000, por estructuración del crédito $28.346.970 y por seguro de cumplimiento.

3. Posición de la convocada

La pasiva contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y formuló la excepción de mérito que denominó: "*debida información al consumidor financiero*"[2].

4. Sentencia de primer grado

El *a quo* declaró que Finsocial S.A. vulneró los derechos del consumidor ante el incumplimiento del deber de información establecido en el artículo 45 de la Ley 1480 de 2011, reglamentado por el Decreto 1368 de 2014 unificado en la legislación del sector turismo por el Decreto 1074 de 2015, por lo que ordenó que dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria del fallo, la demandada reliquide tales créditos de libranza, es decir, 58138 y 58136, con la tasa de interés que le fue inicialmente ofertada, esto es, 14.4% efectivo anual, teniendo como base del valor de los créditos los conceptos: libranza No. 58136 valor desembolsado $26.269.770, compra de cartera $36.500.000; libranza 58138 valor desembolsado $26.269.770, compra de cartera $36.500.000; de

[2] Ver folios 35 a 41 archivo *"5.Contestación.Demanda"*, ídem.

existir saldo a favor deberá ser reembolsado al actor y expedir el correspondiente paz y salvo. Adicionalmente, se deben excluir los cobros de fianza, restructuración y seguro de cumplimiento, montos que deberán ser reintegrados al actor, debidamente indexados; ordenó al demandante que, dentro de los 30 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado para darle cumplimiento a las precedentes órdenes, informe al Despacho sobre el acatamiento de lo dispuesto; advirtió que el retraso de la financiera causará multa, o el cierre del establecimiento de comercio.

Para decidir de ese modo, expuso:

Están reunidos los presupuestos para la viabilidad de las pretensiones, como son, la relación de consumo entre Justo Pastor Gamboa Vargas y Finsocial con ocasión de las libranzas Nos. 58136 y 58138, la reclamación directa ante el proveedor (art. 58.5 Ley 1480 de 2011) y la prueba del defecto. Entre los deberes del proveedor se encuentra el de suministrar la información, que define el numeral 7 del artículo 5 ídem, al consumidor, acorde a lo dispuesto en los artículos 23 y 45 ibídem, este último en el evento específico de servicios de financiación, que demanda que se informe al momento de perfeccionarse el concurso de voluntades de forma íntegra y clara, el monto a financiar, interés remuneratorio, moratorio, la tasa efectiva anual que se aplique sobre el total financiado, la periodicidad de los pagos, el número de cuotas y su valor. El parágrafo del artículo 24 *ejusdem* fija una responsabilidad objetiva derivada del incumplimiento de tales deberes, con lo que se busca que se brinden al consumidor todos los elementos de juicio para realizar una elección fundada entre la variedad de servicios existentes en el mercado, por lo que el empresario no puede ejercer presiones indebidas en aquel. La publicidad e información es vinculante según la norma de protección al consumidor, por lo cual no es dable alterar las condiciones de la negociación o con ocasión

de la celebración del contrato, salvo que haya consentimiento del consumidor. El artículo 30 del compendio mencionado es una garantía de protección contractual.

Tratándose de contratos de adhesión (art. 37 ib.), las condiciones generales tienen que ser informadas anticipada y expresamente al cliente, en idioma castellano, concreta y claramente, en los contratos escritos los caracteres legibles y a simple vista, no incluir espacios en blanco. En los de seguro, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador explicándole el contenido de la cobertura de las exclusiones y de las garantías.

El documento que sirvió de soporte para afirmar que se aceptaron las condiciones del producto no prueba que se le informara a Gamboa Vargas el valor de los costos adicionales, por ejemplo, la fianza, el seguro de cumplimiento, la estructuración del crédito, a cuánto correspondía o a qué porcentaje. Se demostró que las obligaciones a favor de Finsocial fueron canceladas en enero de 2021, en forma anticipada, incluyendo el cobro de los aludidos costos adicionales sobre la totalidad del crédito, pese a que no debió restructurar sobre las 27 cuotas mensuales que ya habían sido pagadas, vulnerando la pasiva los derechos del consumidor.

La apoderada de Finsocial mencionó en el interrogatorio de parte que los documentos se firman en blanco y posteriormente se oficializa, pero es en ese acto que se debe diligenciar y de estar de acuerdo el consumidor, deberá aceptarlo. El actor alega que no se le entregó la proyección del crédito cuando se le hizo la oferta y, en oposición, la pasiva menciona que se allegó la prueba al expediente, pero no hay en el plenario probanza alguna de ello, con la que se determine cuánto se paga por intereses, cuánto de capital, ni los costos adicionales. No demostró la encausada que aplicó la tasa de

interés ofrecida, en principio, del 14.4% al deudor, ni que le entregó la copia de la totalidad de los documentos al momento de la firma del contrato, mientras que reconoció la demandada que se puso la firma cuando existían espacios en blanco. Entonces, se desatendió el deber de información.

5. El recurso de apelación

La parte demandada estuvo en desacuerdo con lo decidido, por lo que planteó y sustentó los siguientes reparos.

5.1. *"La Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que mi representada sí suministró información por escrito al consumidor de forma previa a la celebración del contrato de mutuo"*. Carece de soporte lo concluido por el juez de primer grado en torno a que no se enteró a Gamboa Vargas de las condiciones del crédito, como quiera que con el documento denominado *"conocimiento del cliente"*, el cual está firmado y tiene la huella del demandante, se le informó de manera previa, expresa, clara, oportuna y comprensible acerca de las mismas y sus costos accesorios, como la definición de cada uno, por ejemplo, fianza, seguro de cumplimiento, tasa de reestructuración y sus porcentajes. Así mismo, en el *"contrato de mutuo"* se le insistió al actor acerca de dichas particularidades crediticias. Pasó por alto, el administrador de justicia, que se aportó el contrato de fianza, la afiliación a la cooperativa, el pagaré Coophumana, la solicitud de afiliación a Cooperativa Humana de Aporte y Crédito *"Coophumana"*, los que están firmados y huellados por el interesado, *"lo cual demuestra que este tuvo pleno conocimiento de los términos y condiciones del crédito y aceptando el otorgamiento de la fianza del crédito otorgado a su favor"*.

5.2. *"La Superintendencia de Industria y Comercio valoró indebidamente la declaración efectuada por la apoderada de*

Finsocial en el interrogatorio de parte". No es cierta la consideración atinente a que hubo confesión de la pasiva en punto a que se diligenciaron espacios en blanco sobre las condiciones del crédito posterior a la firma del cliente, debido a que, en el recaudo de la declaración aludida, se indicó que el conocimiento del cliente y el contrato de mutuo no contienen espacios en blanco que puedan ser diligenciados de manera arbitraria y unilateral por la encausada, pues las condiciones y el llenado fueron conocidas por Gamboa Vargas. Además, en una respuesta dada se especificó que los espacios en blanco corresponden a datos del cliente como nombre, identificación, y es él quien los suministra.

5.3. *"La Superintendencia de Industria y Comercio valoró indebidamente las pruebas documentales obrantes en el expediente"*. El conocimiento del cliente, contrato de mutuo, pagaré, contrato de fianza, afiliación a la cooperativa, no fueron debidamente valorados y no se hizo una apreciación de la información suministrada previa y expresamente en dicha papelería.

6. La parte demandada en oportunidad se pronunció frente al recurso de su opositora para pedir que sea desechado.

II. CONSIDERACIONES

1. Concurren en este asunto los presupuestos procesales traducidos en competencia del juez, demanda en forma, capacidad procesal y para ser parte, sin que se advierta causal de nulidad que pueda comprometer la validez de lo actuado, por manera que se procede a resolver el asunto en referencia, en orden a lo cual se precisa que, por mandato del artículo 328 del Código General del Proceso, la actividad del Tribunal se concretará a los precisos reparos debidamente sustentados por la impugnante.

2. Del deber de información

El Estatuto del Consumidor (art. 5.7) define la información como *"[t]odo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica o referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización".* El mismo compendio, impone una carga a los proveedores y productores frente a los consumidores, pues deberán suministrarles información *"clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano"* (art. 23). En las operaciones mediante sistemas de financiación, estableció el legislador que:

> *Artículo 45. En las operaciones de crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en particular, y en los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en que el productor o proveedor otorgue de forma directa financiación, se deberá:*
> *1. Informar al consumidor, al momento de celebrase el respectivo contrato, de forma íntegra y clara, el monto a financiar, interés remuneratorio y, en su caso el moratorio, en términos de tasa efectiva anual que se aplique sobre el monto financiado, el sistema de liquidación utilizado, la periodicidad de los pagos, el número de las cuotas y el monto de la cuota que deberá pagarse periódicamente. (…)*
> *4. En caso que se cobren estudios de crédito, seguros, garantías o cualquier otro concepto adicional al precio, deberá informarse de ello al consumidor en la misma forma que se anuncia el precio.*

3. Análisis del caso concreto

La disidencia se funda en la indebida apreciación de las pruebas que se le enrostra al *iudex a quo*, principalmente a las documentales denominadas *"conocimiento del cliente"* y *"contrato de mutuo"*, así como el interrogatorio de parte de la demandada, por lo que habrá de ocuparse la Sala de analizar tales elementos de juicio en aras de determinar si efectivamente se incurrió en el yerro aludido.

3.1. Es pacífico que Justo Pastor Gamboa Vargas estuvo vinculado con Finsocial S.A. en virtud de las obligaciones No. 58138[3] y 58136[4], que tenían las siguientes características:

58138: crédito de libranza por valor de $93.360.282; plazo de 120 meses; valor de la cuota mensual de $1.755.000; tasa de interés fija mensual 1.6%; la fecha de desembolso fue el 16 de octubre de 2018; la fianza ascendió a $11.724.868; el seguro de cumplimiento por $3.966.159; $36.500.000 del capital del crédito se usaron directamente para compra de cartera y $26.269.770.

58136: crédito de libranza por valor de $93.360.282; plazo de 120 meses; valor de la cuota mensual de $1.755.000; tasa de interés fija mensual 1.6%; la fecha de desembolso fue el 16 de octubre de 2018; la fianza ascendió a $11.724.868; el seguro de cumplimiento por $4.566.159; $35.842.474 del capital del crédito se usaron directamente para compra de cartera y $26.927.296.

Según certificaciones expedidas por la entidad financiera y aportadas por el demandante[5] dichas acreencias fueron canceladas

[3] Ver folio 46 del archivo *"1.Demanda.21-168497"* de la carpeta *"1.Demanda.21-168497"* de *"CuadernoSic"* del expediente digital.
[4] Ver folio 47 ídem.
[5] Ver folios 40 y 41 del archivo *"1.Demanda.21-168497"* de la carpeta *"1.Demanda.21-168497"* de *"CuadernoSic"* del expediente digital.

en su totalidad por el entonces deudor el 18 de enero del año 2021, es decir, que los vínculos crediticios se extinguieron desde entonces.

En ese orden, la contienda se centró en que, según el demandante, las anotadas condiciones de crédito no se compadecen con lo ofertado por la entidad financiera, en relación con el capital, plazo, tasa de interés remuneratorio, costos adicionales y que nunca se le dio la posibilidad de autorizar el producto con las características enlistadas, a la par que los documentos fueron firmados en blanco.

3.2. Ahora bien, para la apelante el contenido del documento denominado "*conocimiento del cliente*"[6] es suficiente para demostrar que no se sustrajo del deber de información que debía satisfacer respecto al consumidor, de forma antelada a la celebración del contrato, en torno a las condiciones del crédito y los costos accesorios del mismo, por lo que es idóneo conocer su contenido, que es del siguiente tenor:

> *Estimado Cliente, Para Finsocial es muy importante que usted tenga a su disposición de manera clara, veraz, suficiente, oportuna, comprensible y precisa, la información relacionada con las condiciones del crédito que desea adquirir, razón por la cual se encuentra a su disposición la siguiente información que regulará los términos y condiciones bajo las cuales usted celebrará con Finsocial el contrato de crédito correspondiente, en el evento que sea aprobada* ***su solicitud de crédito****.*
>
> *1. Información previa al otorgamiento de la operación de crédito*
>
> *En cumplimiento del Decreto 1368 de 2014 y demás normas que regulan el tema, declaro que he recibido de Finsocial la siguiente información: 1) Monto crédito solicitado_____ El monto de crédito solicitado se encuentra sujeto a estudio y aprobación. 2) Plazo solicitado_____ meses. (…) 3)* ***La base de capital sobre la cual se aplicará la tasa de interés y el plazo de la respectiva operación corresponden al valor del crédito y plazo solicitados en***

[6] Ver folios 20, 21 y 24 y 25 ídem.

> ***el presente documento o el aprobado por Finsocial*** *en el evento que se apruebe el crédito por un valor o plazo diferentes a los solicitados. 4)* ***La tasa de interés de mora corresponderá a la máxima legal autorizada*** *por las autoridades competentes, vigente en el momento de causación y liquidación de los intereses de mora. 5)* ***La tasa de interés remuneratorio será la aprobada por Finsocial de acuerdo con el perfil de crédito del cliente, se liquidará mensualmente y su pago será vencido****. Dicha tasa corresponderá a la vigente de acuerdo con las políticas internas del producto. En todo caso,* ***para conocer con exactitud la tasa de interés vigente con la que se desembolsará la operación de crédito, podrá contactarse a la línea de atención al cliente Finsocial*** *(…). 6) La modalidad de la cuota será plazo fijo, cuota fija y la periodicidad de los pagos será mensual. 7)* ***Los costos accesorios al crédito corresponderán al seguro de vida deudores, seguro de cumplimiento, fianza, intereses de ajuste, gravamen financiero 4 por mil y gastos de gestión de cobranza proporcionales con la gestión desplegada cuyas políticas y tarifas podrá consultar en la página web*** *(…)"* (negrilla fuera de texto)

Se refirió qué es una garantía de crédito, qué es una fianza o seguro de cumplimiento, acompañada de las alternativas empresariales que la podían otorgar y unas condiciones genéricas.

Esta pieza procesal tuvo como objetivo acatar los lineamientos legales y contractuales de hacer saber al consumidor las características del producto ofertado, pero no lo logró por sí solo. Nótese que el monto solicitado y el plazo, ítems de innegable interés para el consumidor, no aparecen.

Lo dispuesto en el numeral 3) tampoco favorece a la pasiva, en la medida en que se condicionó la base de capital sobre la que se aplicaría la tasa de interés y el plazo, precisamente, al valor del crédito y al tiempo para su pago, los cuales, se itera, no estaban determinados en el documento.

El interés moratorio se anunció en el equivalente al tope máximo legal, es decir, que este dato se le puso en conocimiento al actor.

La tasa de interés remuneratorio quedó sujeta a las políticas internas del producto, por ende, no se indicó expresamente el porcentaje; sin embargo, se consignó que para conocerla con exactitud era necesario comunicarse a la línea de atención al cliente; en cuanto a la modalidad, se dejó constancia que sería mes vencido.

Los costos adicionales, fianza, estructuración del crédito, seguro de cumplimiento, fueron descritos, aunque sin su respectiva cuantificación, ni la forma en que debían ser satisfechas por el deudor, pero se remitió al consumidor a la página web de Finsocial para conocer las tarifas, lo que significa que el demandante sabía que existían estos valores y cómo verificar los montos que asumiría. Insistió la recurrente en que la firma y huella del entonces pretenso deudor aparecen en dichos documentos, lo cual es cierto, aunque no es suficiente para sanear los defectos informativos aludidos hasta aquí.

No obstante lo anterior, de la redacción del *"conocimiento del cliente"*, se colige que cada uno se acompañó de la *"solicitud de crédito*"[7], en la que se anotó el nombre de la asesora María Fernanda Castillo González, la fecha 9 de octubre de 2018, lo atinente al *"préstamo"*, específicamente, el monto por $93.360.282, línea libranza, plazo 120 meses, cuota $1.755.000, tasa de interés 1.6%, la autorización para compra de cartera a Confiar Cooperativa Financiera por $36.500.000 en el 58138 y $35.842.474 en el 58136, con lo que queda claro que el actor fue enterado de las específicas condiciones que regularían las relaciones crediticias, esto es, capital, tasa de

[7] Ver folios 22, 23, 31 y 32 ídem.

interés remuneratorio y de mora, plazo, monto destinado a compra de cartera ante Confiar Cooperativa Financiera y los costos adicionales.

3.3. Es importante mencionar, que en el escrito de demanda se enfatizó que Gamboa Vargas firmó los documentos con espacios en blanco[8], y en el interrogatorio de parte[9], al exhibirle, entre otras, la solicitud de crédito, mantuvo esa postura y agregó que lo que está diligenciado a máquina lo llenó Finsocial, no él, y que la totalidad de piezas allegadas las obtuvo en febrero de 2021; sin embargo, tales afirmaciones no encontraron respaldo probatorio (art. 167 C.G.P.), porque no se probó que las solicitudes de crédito, pese a ser firmadas no contaban con los datos de las condiciones de tales productos, por lo que se mantiene incólume su mérito demostrativo, en la medida en que la pasiva no confesó, al contestar la demanda (art. 193 C.G.P.), ni al rendir declaración (art. 194 C.G.P.), haber incurrido en las deficiencias que se le achacaron en este sentido. Además, si se considera cierto que se dejaron espacios sin llenar, en todo caso el artículo 261 del Código General del Proceso presume cierto su contenido.

Lo anterior, como quiera que la apoderada general de la entidad financiera, en la anotada diligencia[10], expuso, en punto de si los documentos fueron firmados con espacios en blanco, en esencia, que (tiempo 44:15) los documentos no tienen valores del crédito previamente diligenciados, el contrato de mutuo, se llenaba de datos de nombre y cédula del cliente y no se establecen valores porque cuando firma es una mera solicitud de crédito; el conocimiento del cliente también es genérico, no tiene diligenciado el monto solicitado, pero están informados los costos accesorios. Si bien el demandante firmó la documentación, los campos que se dejan en blanco no son llenados con datos de crédito, ni monto, ni tasa, ni plazo, debido a

[8] Ver hecho décimo séptimo, fl. 58 ídem.
[9] Ver tiempo 41:57 audiencia *"21168497—0001000001"* ídem.
[10] Ver audiencia *"21168497—0001000001"* ídem.

que se llenaban después de la confirmación que se le hiciera a Gamboa, para que él validara o autorizara el contrato de crédito; el contrato de mutuo incluye la compra de cartera; dijo, la declarante, que se le envió el boletín de costos, previo al desembolso (tiempo 45:52) *"si bien es cierto , no se le entregó copia completa de la papelería, la documentación que él firma es genérica, es prestablecida, y habla de los pisos y techos que se cobran por los costos accesorios o el monto a desembolsar, y posteriormente se formaliza el crédito para que pueda autorizarse"*. Se le preguntó si esos documentos se firman y todos los espacios quedan en blanco, y aseveró que (tiempo 49:10) "lo que pasa es que esos documentos no llevan valores".

Es evidente que hubo documentos que tenían espacios en blanco sin diligenciar cuando fueron firmados por el consumidor, entre estos, el *"conocimiento del cliente"*, que, inclusive, a la presentación de la demanda permaneció en ese estado; pese a ello, es relevante destacar que al recaudar la versión de la apoderada de Finsocial no se le consultó si esa situación ocurrió también con la *"solicitud de crédito"* de cada libranza, por lo que no es dable predicar un reconocimiento respecto de esa eventualidad. De todas maneras, se insiste, en estos casos aplica el señalado precepto 261.

Le asiste, entonces, razón a la inconforme en relación con la inadecuada valoración de los documentos en cita y el interrogatorio de parte aludido, puesto que, para la Sala, los elementos de juicio analizados, revelan que se le brindó al consumidor la información suficiente e idónea para adoptar una decisión consciente, traducido esto, en que, se le informaron las condiciones de sus créditos de libranza.

3.4. En relación con los otros elementos de juicio allegados, importa explicar lo que sigue.

Visto el *"contrato de mutuo y carta de instrucciones"*[11] se vislumbra que se trata de uno de adhesión, que no se ajusta en todo a los preceptos del artículo 37 de la Ley 1480 de 2011, en tanto podría discutirse acerca de la legibilidad de los caracteres (numeral 3), pero hace referencia a la condición de mutuante de Finsocial, de mutuario de Justo Pastor Gamboa Vargas y afianzadora de Coophumana. El consumidor declaró conocer y entender las condiciones y coberturas del seguro solicitado, su costo, forma de pago de la prima, el concepto de fianza, seguro de vida, seguro de cumplimiento y aceptó su valor. Además, el demandante suscribió la "*afiliación a la Cooperativa*"[12] Coophumana, el "*contrato de fianza*"[13], el "*pagaré Coophumana*"[14], tendientes a que se permitiera el acceso a los servicios que generaban costos adicionales, por lo que no puede acogerse la afirmación del actor en cuanto a que desconocía la existencia de tales rubros. Igualmente, en los pagarés mencionados hay espacios en blanco sin diligenciar, lo que no vulnera el derecho a la información, debido a que es una posibilidad establecida por el artículo 622 del Código de Comercio.

En cualquier caso, los elementos suasorios referidos dan cuenta de que Finsocial S.A. puso a disposición del cliente la totalidad de datos relevantes para adoptar su elección de consumo, por lo que no existió una trasgresión al derecho a la información del demandante.

3.5. Se resalta, ahora, que no se acreditó que el consumidor hubiese sido víctima de engaños o fraude por la demandada para adquirir lo productos de crédito. Adicionalmente, a pesar de que en la demanda se aludió que las condiciones en que se aprobó el préstamo son disímiles a las que fueron ofertadas verbalmente al cliente, tal

---

[11] Ver folios 19 a 20 y 23 a 24 del archivo *"5.Contestación.Demanda"* de la carpeta *"5.Contestación.demanda"* de *"CuadernoSic"* del expediente digital.
[12] Ver folios 27 y 29 ídem.
[13] Ver folio 28 ídem.
[14] Ver folios 30 y 31 ídem.

afirmación no encontró soporte en el acervo allegado, pues no se verificaron estas últimas.

Así las cosas, es fértil la excepción propuesta por la encausada denominada "*debida información al consumidor financiero*".

III. CONCLUSIÓN

Dado que no se demostraron los supuestos de hecho alegados por la activa en torno al incumplimiento de la demandada del deber de información, habrá de revocarse la sentencia fustigada, para en su lugar declarar prospera la defensa indicada y negar las pretensiones impetradas.

Atendiendo el resultado del recurso de apelación, se impondrá condena en costas por las dos instancias a la parte demandante (num. 4° art. 365 C.G.P.).

IV. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **REVOCA** la sentencia apelada; en su lugar

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar probada la excepción denominada "*debida información al consumidor financiero*".

SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Condenar al pago de las costas en ambas instancias a la parte demandante en favor de la parte demandada. Tásense por la secretaría del despacho de origen, en la oportunidad procesal indicada en la norma 366 del código procesal en cita.

En su oportunidad, devuélvase la actuación digital, al Despacho de origen.

Notifíquese.

Magistrados integrantes de la Sala

JAIME CHAVARRO MAHECHA

RICARDO ACOSTA BUITRAGO

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ

Firmado Por:

Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ricardo Acosta Buitrago
Magistrado
Sala Civil Despacho 015 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **500aafd41be604320cf77057af2dd739dfc4424f59380afb894a0f293a74edb0**

Documento generado en 26/06/2023 12:35:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación	110013199001-2021-68497-02
Proceso	Acción de protección al consumidor financiero
Asunto	Apelación sentencia
Demandante	Justo Pastor Gamboa Vargas
Demandado	Finsocial S.A.
Decisión	Señala agencias en derecho

El suscrito magistrado señala la suma de $800.000 a título de agencias en derecho, con fines de la liquidación de costas a que se contrae la sentencia de segundo grado de esta misma fecha.

Notifíquese.

JAIME CHAVARRO MAHECHA

Magistrado

Firmado Por:
Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1ef878d751312aeac9191de1739bd4881305f77ce50d5029077316b5a2bca9e1**

Documento generado en 26/06/2023 12:38:16 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	Verbal
DEMANDANTE	Arango Ocampo e Hijos S.A.S.
DEMANDADA	Alianza Fiduciaria S.A.
RADICADO	110013199 003 2020 01917 01
INSTANCIA	Segunda -*apelación sentencia* -
DECISIÓN	Declara desiertos recursos de apelación

Se resuelve lo pertinente acerca del informe secretarial[1], en el cual se consignó que *"**venció en silencio** el término para que la parte apelante allegara en esta instancia la sustentación de la alzada*". Al efecto, se expone:

1. Al tenor del numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso, "*[c]uando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior*"; luego, dispone que *"[p]ara la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada*" (subraya fuera de texto).

[1] Ver archivo *"06InformeEntrada20230328"* de la carpeta *"CuadernoTribunal"* del expediente digital.

Por su parte, el precepto 12 de la Ley 2213 de 2022, en lo pertinente estatuye que: *"[e]jecutoriado* ***el auto que admite el recurso*** *o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante* ***deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes****. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso,* ***se declarará desierto****"* (destacado propio).

2. Se colige, entonces, que el legislador previó claras oportunidades y términos para satisfacer las cargas del recurrente, esto es, impetrar el recurso, presentar los reparos concretos y sustentarlos. No obstante, en el caso examinado, las apelantes se sustrajeron de satisfacer esto último, dado que en esta fase procesal no se ocuparon de exponer concretamente las razones que sustentan su desacuerdo, dirigidas a socavar los argumentos puntuales en que quedó edificada la sentencia del *a quo*.

En esa medida, en este caso, se desatendió la teleología del diseño normativo en mención, pues al haberse omitido la sustentación de los recursos de alzada queda cerrado el paso a su definición, por cuanto, es sobre los fundamentos que soportan la censura que debe ocuparse el superior, dado que tienen el alcance de limitar su competencia, según lo estipula el artículo 328 del Código General del Proceso: "*El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante*".

3. En suma, comoquiera que ninguna de las partes recurrentes sustentó su recurso de apelación, se declararán desiertos de conformidad con lo dispuesto en la norma 322 en cita, en armonía con lo indicado en el segundo párrafo del auto

del pasado 8 de marzo, en el cual se indicó expresamente cuál sería la consecuencia de tal omisión.

En mérito de lo expuesto, el magistrado sustanciador de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, **declara desiertos** los recursos de apelación formulados contra la sentencia emitida en el asunto en referencia.

Notifíquese.



JAIME CHAVARRO MAHECHA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	Verbal
DEMANDANTE	Arango Ocampo e Hijos S.A.S.
DEMANDADA	Alianza Fiduciaria S.A.
RADICADO	110013199 003 2020 01917 01
INSTANCIA	Segunda -*apelación sentencia* -
DECISIÓN	Corre traslado solicitudes

De las solicitudes de nulidad e imposición de sanción que se aprecian en los archivos 07 y 08 de la carpeta correspondiente al "*CuadernoTribunal*", se corre traslado por el término de tres (3) días.

Vencido dicho término, regrese el asunto al despacho para decidir lo que sea del caso.

Notifíquese.

JAIME CHÁVARRO MAHECHA
Magistrado

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA RV: PROCESO ACCION DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR FINANCIERO - RDO: 11001319900320200191701 - DTE: ARANGO OCAMPO E HIJOS S.A.S - DDO: ALIANZA FIDUCIARIA

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 30/03/2023 9:08

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (8 MB)

Documento (30).pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA <oscar_ivan_montoya@hotmail.com>
Enviado: jueves, 30 de marzo de 2023 8:14 a. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 07 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C. <des07ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: PROCESO ACCION DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR FINANCIERO - RDO: 11001319900320200191701 - DTE: ARANGO OCAMPO E HIJOS S.A.S - DDO: ALIANZA FIDUCIARIA

Buenos días
Cordial saludo,

Dr. Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado Sala Civil Tribunal Superior de Bogotá

Adjunto memorial solicitando la nulidad de la actuación surtida por esa instancia. del proceso de la referencia, como apoderado de la parte demandante.

PROCESO ACCION DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
RDO: 11001319900320200191701
DTE: ARANGO OCAMPO E HIJOS S.A.S
DDO: ALIANZA FIDUCIARIA

Atentamente,

OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA

Abogado

MONTOYA ESCARRIA ABOGADOS ASOCIADOS
Calle 30 Nº 28–78 Oficina 202 Piso 2- Edificio Antigua Caja Agraria
Teléfono 2844368 - Celular 315 556 78 21
Palmira Valle
Correo Electrónico: oscar_ivan_montoya@hotmail.com

Doctor

JAIME CHAVARRO MAHECHA
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá
E. S. D.

REFERENCIA: **PROCESO ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**
DEMANDANTE: **ARANGO OCAMPO E HIJOS S.A.S**
DEMANDADO: **ALIANZA FIDUCIARIA S.A**
RADICACION : **11001319900320200191701**
SEGUNDA INSTANCIA

En mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante, dentro del asunto de la referencia me permito indicar lo siguiente:

1.- Se evidencia en los sistemas llamados REPORTE DEL PROCESO y CONSULTA DE PROCESOS que el día 08 de marzo de 2023, se notifica por estado en actuación registrada ese mismo día a las 11 horas con 31 minutos 19 segundos, el auto por medio del cual se admite en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y se corre traslado a la parte apelante para que sustente el recurso de apelación por el termino de 05 días.

2.- Conforme se evidencia en la providencia antes mencionada esta fue registrada o generada por ese despacho, el día 08 de marzo de 2023 a las 9:53 am.

3.- De acuerdo al estado electrónico de fecha 08 de marzo de 2023, descargado de la página de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se indica que bajo el No. de lista E-41 se notifica los estados del día 08 de marzo de 2023.

4.- Descargados los autos notificados el día 08 de marzo de 2023, no se haya o encuentra auto emitido por ese despacho del Magistrado Dr. JAIME CHAVARRO MAHECHA, dentro del proceso que nos ocupa, de fecha 08 de marzo de 2023, donde admite el recurso de apelación en segunda instancia y corre traslado para sustentar el mismo.

5.- De acuerdo a lo anterior si presuntamente a pesar que no se encontró evidencia de la notificación de dicho auto realizada el día 08 de marzo de 2023, el termino para sustentar el recurso de apelación para ambas partes feneció el día 28 de marzo de 2023.

MONTOYA ESCARRIA ABOGADOS ASOCIADOS
Calle 30 Nº 28–78 Oficina 202 Piso 2- Edificio Antigua Caja Agraria
Teléfono 2844368 - Celular 315 556 78 21
Palmira Valle
Correo Electrónico: oscar_ivan_montoya@hotmail.com

6.- Por lo anterior a través de correo electrónico dirigido a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co, se solicitó el link del expediente, el día 29 de marzo de 2023, de acuerdo al mismo se indica o aparece una constancia secretarial donde se establece que el termino de traslado para que la parte apelante allegara a esa instancia la sustentación el recurso de apelación feneció el día 28 de marzo de 2023, a pesar que como se indicó el día 08 de marzo de 2023, no se notificó por estado, dicho auto.

7.- Realizando una búsqueda de dicho expediente se encuentra que el Auto en cuestión fue notificado por estado el día 09 de marzo de 2023, estableciendo o indicando como parte demandante al suscrito abogado OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA, cuando la parte demandante dentro del proceso radicado bajo el No. 11001319900320200191701 es la SOCIEDAD ARANGO OCAMPO E HIJOS S.A.S.

8.- De acuerdo a lo anterior el termino para sustentar el recurso de alzada para las partes, teniendo en cuenta que ambas partes apelaron no terminaba o fenecía el día 28 de marzo de 2023 como se indica en la constancia o informe secretarial, si no el día 29 de marzo de 2023, teniendo en cuenta que el auto no se notificó por estado el día 08 de marzo de 2023, como se indica en los sistemas de consultas de procesos, lo cual se verificó con los autos notificados el día 08 de marzo de 2023 y que se presentan como pruebas en este escrito.

9.- Así mismo tengas en cuenta que el Art. 295 numeral 2 del C.G.P., nos indica que en las notificaciones por estados de los autos, en este caso el que nos ocupa, debe de constar o indicar los nombres del demandante y demandado, en este caso por la búsqueda realizada se encontró que el auto en cuestión se notificó el día 09 de marzo de 2023, y en dicha notificación por estado se indica que la parte demandante correspondiente al proceso radicado bajo el No. 11001319900320200191701 es OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA, cuando la parte demandante es la SOCIEDAD ARANGO OCAMPO E HIJOS S.A.S

10.- Es pertinente también indicar que en los sistemas llamados REPORTE DEL PROCESO Y CONSULTA DE PROCESO, se indica que la parte demandante es el suscrito abogado OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA, cuando la parte demandante en el proceso que nos ocupa es la SOCIEDAD ARANGO OCAMPO E HIJOS S.A.S, razón por la cual bajo el nombre de la parte demandante SOCIEDAD ARANGO OCAMPO E HIJOS S.A.S, no se encuentra el proceso que nos ocupa, lo que ofrece una confusión al momento de consultar el proceso.

MONTOYA ESCARRIA ABOGADOS ASOCIADOS
Calle 30 Nº 28–78 Oficina 202 Piso 2- Edificio Antigua Caja Agraria
Teléfono 2844368 - Celular 315 556 78 21
Palmira Valle
Correo Electrónico: oscar_ivan_montoya@hotmail.com

11.- Conforme lo anterior, se establece una violación a los derechos fundamentales del DEBIDO PROCESO Y DE DEFENSA, establecido en el Art. 29 Constitucional como también a los principios procesales de OBSERVANCIA DE NORMAS PROCESALES Y DEBIDO PROCESO consagrado en los Art. 13 y 14 del C.G.P., razón por la cual, se configura una causal de nulidad de la actuación surtida por esa instancia establecida en el numeral 8 del Art. 133 del C.G.P., ya que es una irregularidad que afecta las normas superiores y procesales mencionadas, así mismo como lo establece el inciso 1 de dicho numeral, si se corrige la irregularidad como es la notificación nuevamente del Auto de fecha marzo 08 de 2023 que admite el RECURSO DE APELACIÓN y corre traslado para sustentar, la actuación posterior a este es nula, entre ellas la constancia o informe secretarial de fecha marzo 28 de 2023.

12.- Por las anteriores consideraciones le solicito honorable Magistrado declarar la nulidad de toda la actuación surtida por esa instancia en la forma que lo indica el Art. 133 numeral 8 del C.G.P., ó si considera ese despacho que tal irregularidad se subsana con la notificación nuevamente del Auto de fecha marzo 08 de 2023, conforme a lo establecido en este escrito como es el indicar en el estado que la parte demandante es la SOCIEDAD ARANGO OCAMPO E HIJOS S.A.S, es decir que se notifique en debida forma, declare nula la actuación surtida posterior al Auto, entre ellas la constancia o informe secretarial de fecha marzo 28 de 2023.

PRUEBAS

1.- Impresión del reporte del proceso radicado bajo el No. 11001319900320200191701, donde se indica que el demandante es OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA, y que el Auto que admite el recurso de apelación y corre traslado para sustentar se notifica por estado el día 08 de marzo de 2023.

2.- Impresión del reporte del proceso radicado bajo el No. 11001319900320200191701, donde se indica que el demandante es OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA, y que el auto que admite el recurso de apelación y corre traslado para sustentar se notifica por estado el día 08 de marzo de 2023.

3.- Impresión del estado electrónico No. E-41, de fecha 08 de marzo de 2023, donde se encuentran los Autos notificados el día 08 de marzo de 2023, donde se evidencia que el auto emitido por ese despacho no se notificó ese día 08 de marzo de 2023 por estado.

4.- Impresión del estado electrónico No. E-42 del 09 de marzo de 2023, donde se encuentran los autos notificados el día 09 de marzo de 2023, fecha en la cual se notificó el auto en cuestión, donde se indica que dentro del proceso radicado bajo el No. 11001319900320200191701, el demandante es OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA,

MONTOYA ESCARRIA ABOGADOS ASOCIADOS
Calle 30 Nº 28–78 Oficina 202 Piso 2- Edificio Antigua Caja Agraria
Teléfono 2844368 - Celular 315 556 78 21
Palmira Valle
Correo Electrónico: oscar_ivan_montoya@hotmail.com

cuando la parte demandante en dicho proceso es la SOCIEDAD ARANGO OCAMPO E HIJOS S.A.S.

5.- Auto de fecha 08 de marzo de 2023 emitido por ese despacho donde se admite el recurso de alzada en el efecto suspensivo y se corre traslado para la sustentación del mismo.

6.- Constancia o informe secretarial de fecha marzo 28 de 2023, donde se indica que el día 28 de marzo de 2023, se venció en silencio el termino de traslado para que la parte apelante allegará la sustentación del recurso de apelación.

7.- Impresión del correo eléctrico de fecha d29 de marzo donde se solicita a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el Link del expediente ante la inconsistencia presentada en la notificación del auto de fecha 08 de marzo de 2023 ya mencionadas.

Anexo lo anunciado.

Atentamente,

OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA
C. C. Nº 6.385.900 DE PALMIRA
T. P. Nº 98.164 DEL C. S. J.

REPORTE DEL PROCESO

Libertad y Orden
República de Colombia

11001319900320200191701

Fecha de la consulta: 2023-03-29 16:33:19
Fecha de sincronización del sistema: 2023-03-29 09:23:36

Datos del Proceso

Fecha de Radicación	2022-08-09	Clase de Proceso	Verbal
Despacho	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	Recurso	Apelación Sentencia
Ponente	JAIME CHAVARRO MAHECHA	Ubicación del Expediente	Despacho
Tipo de Proceso	Declarativo	Contenido de Radicación	SENTENCIA 28-02-2022

Sujetos Procesales

Tipo	Es Emplazado	Nombre o Razón Social
Demandante	No	OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA
Demandado	No	ALIANZA FIDUCIARIA S.A

Actuaciones del Proceso

Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha Inicia Término	Fecha Finaliza Término	Fecha de Registro
2023-03-28	Al Despacho				2023-03-28

Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha Inicia Término	Fecha Finaliza Término	Fecha de Registro
2023-03-08	Notificación por Estado	Actuación registrada el 08/03/2023 a las 11:31:19.	2023-03-09	2023-03-09	2023-03-08
2023-03-08	Auto que Admite Recurso	ADMITE EN EFECTO SUSPENSIVO EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR AMBAS PARTES CONTRA LA SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2022 // 5 DIAS A PARTIR DE LA EJECUTORIA PARA SUSTENTAR EL RECURSO // PRESETADA LA SUSTENTACION CORRASE TRASLADO POR 5 DIAS A LA PARTE CONTRARIA // SE PRORROGA EL TÉRMINO PARA TAL FIN POR SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO INICIAL (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148			2023-03-08
2022-08-09	Al despacho por Reparto	LZ			2022-08-09
2022-08-09	Reparto del Proceso	a las 15:13:44 Repartido a:JAIME CHAVARRO MAHECHA	2022-08-09	2022-08-09	2022-08-09
2022-08-09	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 09/08/2022 a las 15:12:13	2022-08-09	2022-08-09	2022-08-09

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consulta De Procesos

Fecha de Consulta : Miércoles, 29 de Marzo de 2023 - 04:07:38 P.M.

Número de Proceso Consultado: 11001319900320200191701

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Corporacion/Especialidad: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - SALA CIVIL

Datos del Proceso

Información de Radicación del Proceso

Despacho	Ponente
000 Tribunal Superior - Civil	JAIME CHAVARRO MAHECHA

Clasificación del Proceso

Tipo	Clase	Recurso	Ubicación del Expediente
Declarativo	Verbal	Apelación Sentencia	Despacho

Sujetos Procesales

Demandante(s)	Demandado(s)
- OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA	- ALIANZA FIDUCIARIA S.A

Contenido de Radicación

Contenido
SENTENCIA 28-02-2022

Actuaciones del Proceso

Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha Inicia Término	Fecha Finaliza Término	Fecha de Registro
28 Mar 2023	AL DESPACHO				28 Mar 2023
08 Mar 2023	NOTIFICACIÓN POR ESTADO	ACTUACIÓN REGISTRADA EL 08/03/2023 A LAS 11:31:19.	09 Mar 2023	09 Mar 2023	08 Mar 2023
08 Mar 2023	AUTO QUE ADMITE RECURSO	ADMITE EN EFECTO SUSPENSIVO EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR AMBAS PARTES CONTRA LA SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2022 // 5 DIAS A PARTIR DE LA EJECUTORIA PARA SUSTENTAR EL RECURSO // PRESETADA LA SUSTENTACION CORRASE TRASLADO POR 5 DIAS A LA PARTE CONTRARIA // SE PRORROGA EL TÉRMINO PARA TAL FIN POR SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO INICIAL (ML) VER LINK HTTPS://WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/WEB/TRIBUNAL-SUPERIOR-DE-BOGOTA-SALA-CIVIL/148			08 Mar 2023
09 Aug 2022	AL DESPACHO POR REPARTO	LZ			09 Aug 2022
09 Aug 2022	REPARTO DEL PROCESO	A LAS 15:13:44 REPARTIDO A:JAIME CHAVARRO MAHECHA	09 Aug 2022	09 Aug 2022	09 Aug 2022
09 Aug 2022	RADICACIÓN DE PROCESO	ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 09/08/2022 A LAS 15:12:13	09 Aug 2022	09 Aug 2022	09 Aug 2022

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
Secretaría Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá

Av. calle 24 N° 53-28 Torre C - Oficina 305
Teléfono: 423 33 90 Extensión 8349
Email: secretariasalacivil@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFICACION POR ESTADO ELECTRÓNICO No. E-41
08 DE MARZO DE 2023

NUMERO EXPEDIENTE	CLASE PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA AUTO	MAGISTRADO	DESCRIPCION
11001220300020220272400	Laudo Arbitral	Construcciones Rubau S.A Sucursal Colombia	REALIDAD COLOMBIA SAS	7/03/2023	ADRIANA SAAVEDRA LOZADA	SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN INTERPUESTO POR REALIDAD COLOMBIA SAS FRENTE AL LAUDO ARBITRAL DE SEPTIEMBRE 8 DE 2022 PROFERIDO EN EL PROCESO ARBITRAL DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA SAS EN CONTRA DE LA RECURRENTE. /// EN FIRME ESTA PROVIDENCIA INGRESE EL EXPEDIENTE AL DESPACHO PARA PROVEER. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303920140032201	Ordinario	BEATRIZ ARENAS DE MONCAYO Y OTROS	ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.	7/03/2023	ADRIANA SAAVEDRA LOZADA	CONFIRMAR LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ EN MAYO 2 DE 2019 DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN ESTE FALLO. /// CONDENAR EN COSTAS DE ESTA INSTANCIA A LA PARTE APELANTE. LA MAGISTRADA PONENTE FIJA POR CONCEPTO DE AGENCIAS EN DERECHO LA SUMA DE UN SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE. /// DEVOLVER EL EXPEDIENTE AL DESPACHO DE ORIGEN. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310301120190076101	Verbal	JAIRO IVAN ARIAS RAMIREZ	FANNY CONSTANZA CARDENAS GARCIA	7/03/2023	CARLOS AUGUSTO ZULUAGA RAMIREZ	REVOCAR LA SENTENCIA PROFERIDA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. CONDENAR EN COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE. REMÍTASE EL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303720190056001	Verbal	DIEGO FERNANDO LIEVANO PENAGOS	10021383	7/03/2023	CLARA INES MARQUEZ BULLA	ADMITIR EN EL EFECTO SUSPENSIVO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE CONTRA LA SENTENCIA PROFERIDA EL 16 DE FEBRERO DE 2023 1 , POR EL JUZGADO 7 CIVIL DEL CIRCUITO DE ESTA CIUDAD./// UNA VEZ COBRE EJECUTORIA ESTA PROVIDENCIA, REGRESE AL DESPACHO PARA LO QUE CORRESPONDA. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310304120150044101	Verbal	ADRIANA DUQUE RODRIGUEZ	JORGE ENRIQUE GARCIA NARANJO	7/03/2023	CLARA INES MARQUEZ BULLA	ADMITIR EN EL EFECTO SUSPENSIVO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE PRINCIPAL CONTRA LA SENTENCIA PROFERIDA EL 16 DE AGOSTO DE 2022 1 , POR EL JUZGADO 51 CIVIL DEL CIRCUITO DE ESTA CIUDAD. /// UNA VEZ COBRE EJECUTORIA ESTA PROVIDENCIA, REGRESE AL DESPACHO PARA LO QUE CORRESPONDA. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001220300020230024401	Verbal	DMG GRUPO HOLDING	DMG GRUPO HOLDING	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZALEZ FLOREZ	DECLARAR INFUNDADA LA RECUSACIÓN ERIGIDA POR EL ABOGADO DE BERNARDO JOSE CAMPILLO BLANCO, CONTRA LA JUZGADORA DEYANIRA DEL PILAR OSPINA ARIZA, DIRECTORA DE INTERVENCIÓN JUDICIAL. DEVUELVASE EL EXPEDIENTE DIGITAL AL ESTRADO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148

11001310300420180008102	Verbal	BANCOLCRES	EXPERIAN COLOMBIA SA	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLOREZ	ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEL 06 DE FEBRERO DE 2023, PROFERIDA POR EL JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, EN EL EFECTO SUSPENSIVO. IMPRÍMASELE A ESTE ASUNTO EL TRÁMITE CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 2213 DE 2022. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310300720190022401	Verbal	ISMENIA CARREÑO MARTINEZ	FIDUCIARIA BOGOTA SA	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLOREZ	CONFIRMAR LA SENTENCIA PROFERIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, POR EL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. CONDENAR EN COSTAS. DEVOLVER EL EXPEDIENTE A SU DESPACHO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310300820190047104	Ejecutivo Singular	GENERAL FIRECONTROL SA	CONTEIN S.A.S	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZALEZ FLOREZ	DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA DECISIÓN DEL 24 DE ENERO DE 2023, PROFERIDO POR EL JUZGADO OCTAVAO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310300920210038601	Verbal	ALEJANDRO LEON SIERRA	FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLOREZ	REVOCAR EL AUTO DEL 19 DE ENERO DE 2022, PROFERIDO POR EL JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO BOGOTA. SIN CONDENA EN COSTAS. DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE DIGITAL AL JUZGADO DE ORIGEN (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310301120200024603	Ejecutivo Singular	MVG LAWYERS AND CONSULTIBG SAS	CORPORACION MULTIACTIVA EMPRENDER ONG	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLOREZ	ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEL 13DE DICIEMBRE DE 2022, PROFERIDA POR EL JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, EN EL EFECTO SUSPENSIVO. IMPRÍMASELE A ESTE ASUNTO EL TRÁMITE CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 2213 DE 2022. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310302320120053701	Verbal	MERCEDES DEL CARMEN CASTILLEJO DE CARDOZA	SALUDCOOP E.P.S. EN LIQUIDACION	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLOREZ	VINCULAR AL PRESENTE PROCESO AL SEÑOR EDGAR MAURICIO RAMÓN ELIZALDE EN CALIDAD DE MANDATARIO DE LA EXTINTA SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN. SOLICITAR AL SEÑOR EDGAR MAURICIO RAMÓN ELIZALDE QUE, EN EL TÉRMINO DE 5 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA PROVIDENCIA, INFORME SI CONSTITUYÓ FIDUCIA MERCANTIL O ENCARGO FIDUCIARIO.OFICIAR. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310302520140047702	Ordinario	VICTOR HUGO VILLEGAS VELEZ	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZALEZ FLOREZ	CONFIRMAR EL AUTO DEL 10 DE FEBRERO DE 2021, PROFERIDO POR EL JUZGADO CINCUENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. SIN CONDENA EN COSTAS. DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE DIGITAL AL JUZGADO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310302720120028102	Ordinario	RUTH SANCHEZ GIL	E.P.S. FAMISANAR LTDA	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLOREZ	ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, PROFERIDA POR EL JUZGADO 41 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, EN EL EFECTO SUSPENSIVO. IMPRÍMASELE A ESTE ASUNTO EL TRÁMITE CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 2213 DE 2022. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148

11001310302820090017502	Verbal	MAURICIO GONZALEZ JARAMILLO	ALEJANDRO SALAZAR YUSTI Y OTRO	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLOREZ	REVOCAR EL AUTO DEL 06 DE JULIO DE 2022, PROFERIDO POR EL JUZGADO CINCUENTA CIVIL DEL CIRCUITO BOGOTÁ. SIN CONDENA EN COSTAS. DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE DIGITAL AL JUZGADO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303220220012901	Verbal	IGNACIO ANTONIO ARIAS PATARROYO	NOHORA ESPERANZA PEDRAZA	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLOREZ	CONFIRMAR LA SENTENCIA ANTICIPADA PROFERIDA EL 14 DE OCTUBRE DE 2022 POR EL JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE ESTA CIUDAD. CONDENAR EN COSTAS DE ESTA INSTANCIA. DEVOLVER EL EXPEDIENTE A SU DESPACHO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303320170020402	Ejecutivo Singular	TIANA CATERIM TUNJANO TEJEDOR Y OTRA	OPTICAS GMO COLOMBIA S.A S	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLOREZ	CONFIRMAR EL AUTO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROFERIDO POR EL JUZGADO TREINTA Y TRES CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. SIN CONDENA EN COSTAS. DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE DIGITAL AL JUZGADO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303420130026402	Ordinario	IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS	LEONARDO ANDRES ZAMBRANO ENDARA E U Y OTRO	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLOREZ	NO REPONER EL AUTO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022. DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE DIGITAL A LA DEPENDENCIA DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310304320130053701	Verbal	ALONSO HOMERO BOSCH NOGUERA	ANDRES IGNACIO AMADO AMADO	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLOREZ	NEGAR LA SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS EN ESTA INSTANCIA. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310305220220015001	Verbal	MYRIAM STELLA ACUÑA ALVARADO	JENNIFER CATERINE MATEUS MIRANDA	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZALEZ FLOREZ	CONFIRMAR EL AUTO DEL 28 DE JUNIO DE 2022, PROFERIDO POR JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. SIN CONDENA EN COSTAS. DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE DIGITAL AL JUZGADO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310305020220031401	Ordinario	MABEL CECILIA SUESCUN DE DURAN	JUAN LEONARDO ESCOBAR MIDDLENTON	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZALEZ FLOREZ	CONFIRMAR EL AUTO DEL 17 DE AGOSTO DE 2022, PROFERIDO POR JUZGADO CINCUENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. SIN CONDENA EN COSTAS. DEVUELVASE EL EXPEDIENTE DIGITAL AL JUZGADO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001319900120216707401	Verbal	CARLOS ANDRES CHAVES CABRERA	VICTORIA ADMINISTRADORES SAS	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZALEZ FLOREZ	CONFIRMAR LA SENTENCIA PROFERIDA EL 9 DE AGOSTO DE 2022, POR LA DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. CONDENAR EN COSTAS. DEVOLVER EL EXPEDIENTE A SU DESPACHO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001314900220210007201	Verbal	DIGITAL WARE SA	SALUDCOOP E.P.S. EN LIQUIDACION	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZALEZ FLOREZ	VINCULAR AL PRESENTE PROCESO AL SENOR EDGAR MAURICIO RAMÓN ELIZALDE EN CALIDAD DE MANDATARIO DE LA EXTINTA SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN. SOLICITAR AL SEÑOR EDGAR MAURICIO RAMON ELIZALDE QUE, EN EL TERMINO DE 5 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE ESTA PROVIDENCIA, INFORME SI CONSTITUYO FIDUCIA MERCANTIL O ENCARGO FIDUCIARIO DECRETAR LA AMPLIACION DEL PLAZO PARA RESOLVER LA INSTANCIA EN ESE ORDEN DE IDEAS, SE PRORROGA POR EL TERMINO DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DEL 30 DE MARZO DE 2023, INCLUSIVE, PARA DICTAR LA SENTENCIA. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148

11001319900320220053701	Verbal	LUZ MARINA RODRIGUEZ MURCIA	SEGUROS DE VIDA ALFA SA VIDALFA SA	7/03/2023	FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLOREZ	REQUIERE AL APELANTE PARA QUE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO, PROCEDA A SUSTENTAR DE MANERA ESCRITA SU ALZADA. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310300320140011303	Expropiación	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO S A S	OSWALDO JUAN DE JESUS GONZALEZ BAUTISTA	7/03/2023	GERMAN VALENZUELA VALBUENA	VISTA EL INFORME QUE ANTECEDE, SE PONE DE PRESENTE A LAS PARTES LO SIGUIENTE: EL ASUNTO FUE REPARTIDO AL DESPACHO MEDIANTE EL 23 DE MARZO DE 2022, FECHA DESDE LA CUAL SE HA INTENTADO ABRIR EL VÍNCULO ADJUNTADO POR EL JUZGADO DE ORIGEN EN EL MENSAJE ELECTRÓNICO REMITIDO. EN VARIAS OPORTUNIDADES SE HA INSISTIDO PARA LOGRAR EL ACCESO AL LINK, CON RESULTADOS NEGATIVOS. FRENTE A LAS ANTERIORES CIRCUNSTANCIAS EL AUXILIAR DEL DESPACHO, REMITIÓ CORREO A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL JUZGADO 47 CIVIL DEL CIRCUITO. L JUZGADO INDICÓ QUE REVISADO EL ONEDRIVE NO EXISTE EL LINK, Y QUE SE PIDIÓ LA AYUDA CORRESPONDIENTE PARA ESTABLECER QUÉ HABÍA OCURRIDO. POR TODO LO ANTERIOR, Y COMO YA SE HABÍA
11001310305520120002701	Verbal	JORGE ELIECER LOZANO SANCHEZ	SAMUEL RUEDA GOMEZ	7/03/2023	GERMAN VALENZUELA VALBUENA	SE ADMITE, EN EL EFECTO SUSPENSIVO, EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE CONTRA LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 1° CIVIL DEL CIRCUITO TRANSITORIO EN AUDIENCIA CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020. LA PARTE APELANTE CUENTA CON EL TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS, A PARTIR DE LA EJECUTORIA DEL ADMISORIO, PARA SUSTENTAR LOS PRECISOS REPAROS EN LOS QUE FUNDAMENTÓ SU RECURSO DE APELACIÓN, Y QUE SI SE PRESENTA TAL SUSTENTACIÓN, LA PARTE NO APELANTE TIENE CINCO (5) DIAS PARA LA RÉPLICA. SE INADMITE LA APELACIÓN ADHESIVA FORMULADA POR LA PARTE DEMANDADA CONTRA EL CITADO FALLO SIENDO INMINENTE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 6 MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO
11001310301620210011301	Ejecutivo Singular	EDGAR ELIECER MOLANO CAMACHO	JUAN JOSE CAMACHO LINARES	7/03/2023	GERMAN VALENZUELA VALBUENA	REVOCA EL AUTO PROFERIDO EL 9 DE MARZO DE 2022 POR EL JUZGADO 10° CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. DEVUELVASE (ML)
11001210301620190052501	Verbal	JUAN JOSE GARCIA MONTALVO	SECURITAS COLOMBIA SA	7/03/2023	GERMAN VALENZUELA VALBUENA	REVOCA EL AUTO APELADO, PROFERIDO EL 28 DE OCTUBRE DE 2021 POR EL JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO. DEVUELVASE (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310302220120060102	Medidas Cautelares	GRUPO EDITORIAL PATRIA	PROMOCIONES LA GRAN MANZANA E U.	7/03/2023	GERMAN VALENZUELA VALBUENA	INGRESADO EL PROCESO AL DESPACHO CON LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, SOLICITADA EN AUTO DE 10 DE AGOSTO DE 2020, SE DECRETA LA REANUDACIÓN DEL PRESENTE PROCESO Y LA INCORPORACIÓN DE TAL DOCUMENTO A ESTA ACTUACIÓN (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303220200031601	Ejecutivo Singular	CABLE PLUS INTENATIONAL	SOCIEDAD LA MAFA SAS	7/03/2023	GERMAN VALENZUELA VALBUENA	CONFIRMA EL AUTO APELADO, PROFERIDO EL 20 DE MAYO DE 2022 POR EL JUZGADO 32 CIVIL DEL CIRCUITO. DEVUELVASE. (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303220200031902	Ejecutivo Singular	CABLE PLUS INTENATIONAL	SOCIEDAD LA MAFA SAS	7/03/2023	GERMAN VALENZUELA VALBUENA	SE ADMITEN, EN EL EFECTO SUSPENSIVO, LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS PARTES CONTRA LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 32 CIVIL DEL CIRCUITO EN AUDIENCIA CELEBRADA EL 19 DE JULIO DE 2022. LOS APELANTES CUENTAN CON EL TÉRMINO DE CINCO (5) DIAS, A PARTIR DE LA EJECUTORIA DEL ADMISORIO, PARA SUSTENTAR LOS PRECISOS REPAROS EN LOS QUE FUNDAMENTARON SUS RECURSOS DE APELACIÓN, Y QUE SI SE PRESENTAN TALES SUSTENTACIONES, LOS DEMAS CUENTAN CON CINCO (5) DIAS PARA LAS RÉPLICAS RESPECTIVAS. SIENDO INMINENTE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 6 MESES PREVISTO EN EL ARTICULO 121 CGP, ESTE SE PRORROGA. (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-

11001310303420210021901	Verbal	CIEM OIKOS OCCIDENTE CENTRO INDULTRIAL Y EMPRESARIAL P.H	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA SA	7/03/2023	GERMAN VALENZUELA VALBUENA	SE ADMITE, EN EL EFECTO SUSPENSIVO, EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE CONTRA LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 34 CIVIL DEL CIRCUITO EN AUDIENCIA CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2023. LA PARTE APELANTE CUENTA CON EL TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS, A PARTIR DE LA EJECUTORIA DEL ADMISORIO, PARA SUSTENTAR LOS PRECISOS REPAROS EN LOS QUE FUNDAMENTÓ SU RECURSO DE APELACIÓN, Y QUE SI SE PRESENTA TAL SUSTENTACIÓN, LA PARTE NO APELANTE TIENE CINCO (5) DÍAS PARA LA RÉPLICA. (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310304420210012201	Verbal	JAVIER RODRIGUEZ SEGURA	LUCY YANNETH LOZANO OLARTE	7/03/2023	GERMAN VALENZUELA VALBUENA	SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE CONTRA LA SENTENCIA PROFERIDA EL 20 DE ENERO DE 2023 POR EL JUZGADO 44 CIVIL DEL CIRCUITO. DEVUELVASE. (ML) https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310305020210015502	Ejecutivo Singular	MEDICAL PRO&NFO SAS	ADRES	7/03/2023	GERMAN VALENZUELA VALBUENA	CONFIRMA EL AUTO APELADO, PROFERIDO EL 21 DE ABRIL DE 2022 POR EL JUZGADO 50 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. DEVUÉLVASE (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001319900120216867901	Verbal	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE SAN JOAQUÍN P.H	FEDERACIÓN NACIONAL DE LA VIVIENDA POPULAR	7/03/2023	GERMAN VALENZUELA VALBUENA	SE ADMITE, EN EL EFECTO DEVOLUTIVO, EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE CONTRA LA SENTENCIA CELEBRADA EN AUDIENCIA EL 13 DE FEBRERO DE 2023. LA PARTE APELANTE CUENTA CON EL TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS, A PARTIR DE LA EJECUTORIA DEL ADMISORIO, PARA SUSTENTAR LOS PRECISOS REPAROS EN LOS QUE FUNDAMENTÓ SU RECURSO DE APELACIÓN, Y QUE SI SE PRESENTA TAL SUSTENTACIÓN, LA PARTE NO APELANTE TIENE CINCO (5) DÍAS PARA LA RÉPLICA. TENIENDO EN CUENTA, QUE LA AUTORIDAD DE PRIMER GRADO CONCEDIÓ LA APELACIÓN EN EL EFECTO SUSPENSIVO CUANDO DEBÍA CONCEDERSE EN EL DEVOLUTIVO POR NO ENCONTRARSE EL FALLO EN ALGUNO DE LOS CASOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO 2° DEL
11001310301620220005001	Ejecutivo Singular	EDGAR FERNANDO ALONSO MASMELA	GERARDO CERVELEÓN LINARES AGUDELO	7/03/2023	JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS	CONFIRMAR EL AUTO OBJETO DE APELACIÓN DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022, MEDIANTE EL CUAL EL JUZGADO 45 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. SIN CONDENA EN COSTAS. DEVOLVER EL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE ORIGEN.(MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001319303320050010602	Ordinario	IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LATINOAMARICANAS	EMPRESA BRASILERA DE AERONAUTICA S.A	7/03/2023	JORGE HERNAN VARGAS RINCON	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE LO DISPUESTO POR LA SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR MEDIO DE LA CUAL NO CASÓ LA SENTENCIA PROFERIDA, EL 28 DE ABRIL DE 2016, POR ESTA CORPORACIÓN DENTRO DEL PRESENTE PROCESO. (ML) (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303520160041701	Verbal	RENTANDES	MARTHA PATRICIA PARRA SOSA	3/03/2023	JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA	CONFIRMA AUTO DEL 2 DE JUNIO DE 2022 PROFERIDO POR EL JUZGADO 5° CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, CONDENA EN COSTAS AL APELANTE, DEVOLVER EL EXPEDIENTE AL JUZADO DE ORIGEN (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303520200008201	Verbal	SANDRA LILIANA CANDIA GARZON Y OTRO	URIEL QUIROGA LEÓN	3/03/2023	JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA	MODIFICA EL NUMERAL 4° DE LA PARTE RESOLUTIVA LA SENTENCIA, DEL 1° DE JUNIO DE 2022 PROFERIDA POR EL JUZGADO 35 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA, EN LO DEMAS CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. DEVOLVER OPORTUNAMENTE EL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148

11001310303620210022401	Verbal	MARIA VILMA CANCINO FORERO	ANA MILENA NEGRETTE CONTRERAS	6/03/2023	JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA	REVOCA SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DE 2022 PROFERIDA POR EL JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE ESTA CIUDAD, CONDENA EN COSTAS. OPORTUNAMENTE DEVOLVER EXPEDIENTE AL JUZGADO DE ORIGEN (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310304220170041502	Verbal	ANA JULIA AREVALO DELGADO	JORGE PIÑOL MASOT Y PERSONAS INDETERMINADAS	6/03/2023	JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA	ACEPTA EL IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR LA MAGISTRADA PONENTE, DOCTORA FLOR MARGOT GONZÁLEZ FLÓREZ, NO DESIGNA MAGISTRADO EN REMPLAZO YA QUE NO ES NECESARIO. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001319900120216394601	Verbal	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SA VECOL SA	PHIBRO ANIMAL HEALTH COLOMBIA S.A.S	3/03/2023	JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA	REVOCA PROVIDENCIA DEL 21 DE JUNIO DE 2022 PROFERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- SIC, EN SU LUGAR ORDENA DECRETAR Y PRACTICAR PRUEBA. DEVOLVER EXPEDIENTE A LA OFICINA DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001220300020230042800	Recurso Extraordinario de Revisión	INSTITUTO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS ISDET	YUDY MARINELLA CASTILLO AFRICANO	6/03/2023	KATHERINE ANDREA ROLONG ARIAS	INADMITASE LA ANTERIOR DEMANDA DE REVISIÓN, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE CINCO (05) DÍAS, SO PENA DE RECHAZO. /// APORTAR PODER ESPECIAL PARA ACTUAR. /// SEÑALAR DE MANERA CLARA LA PROVIDENCIA QUE SERÁ OBJETO DE REVISIÓN /// INTÉGRESE EN DEBIDA FORMA EL CONTRADICTORIO. /// EN ACAPITE APARTE, ESPECIFIQUE EL PROCESO EN QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA /// INDIQUE EXPRESAMENTE LA CAUSAL DE REVISIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO INVOCADA. /// APORTE LA CONSTANCIA SECRETARIAL DE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN. /// DETERMINE CLARAMENTE LOS HECHOS EN LOS CUALES FUNDA EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN./// DETERMINE CLARAMENTE LOS HECHOS EN LOS CUALES FUNDA EL
11001310305420210007601	Verbal	HERNANDO SERRANO ALVAREZ	ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS SA hoy ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA	6/03/2023	KATHERINE ANDREA ROLONG ARIAS	DECLARAR BIEN DENEGADO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN LAS CONSIDERACIONES DE ESTA PROVIDENCIA. /// OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE LO ACTUADO AL DESPACHO DE ORIGEN. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310301920200030002	Ejecutivo Singular	ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES SAS	SOCIEDAD MERCANTIL FENIX SA	7/03/2023	KATHERINE ANDREA ROLONG ARIAS	CONFIRMAR LA SENTENCIA PROFERIDA EL 24 DE OCTUBRE DE 2022 POR EL JUZGADO 19 CIVIL DE CIRCUITO DE ESTA CIUDAD, PERO POR LAS CONSIDERACIONES AQUÍ EXPRESADAS. /// CONDENAR EN LAS COSTAS DE ESTA INSTANCIA A LOS EJECUTANTES Y EN FAVOR DE LA EJECUTADA. SE FIJAN COMO AGENCIAS EN DERECHO LA SUMA DE UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS ($1200.000 OO). /// EN SU OPORTUNIDAD, DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE A LA DEPENDENCIA DE ORIGEN. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303520190056302	Verbal	HIDROSAN SAS	FINDETER	6/03/2023	KATHERINE ANDREA ROLONG ARIAS	OBEDÉZCASE Y CUMPLASE LO RESUELTO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. /// DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 366 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, REMÍTASE EL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA QUE REALICE LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN DE COSTAS. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148

11001319900220160038705	Verbal	MIGUEL ANGEL ALVAREZ MARTINEZ	SOCIEDAD DE INVERSIONES MACRIS SAS	6/03/2023	KATHERINE ANDREA ROLONG ARIAS	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE LO RESUELTO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. /// DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 366 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, REMÍTASE EL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA QUE REALICE LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN DE COSTAS. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001220300020220272600	Laudo Arbitral	ANTROPURBANA SAS	ORGANIZACION TERPEL	7/03/2023	LUIS ROBERTO SUAREZ GONZALEZ	DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN FORMULADO POR ANTROPURBANA S.A.S CONTRA EL LAUDO EMITIDO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DENTRO DEL PROCESO ADELANTADO CONTRA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A /// CONDENAR EN COSTAS DEL RECURSO A LA RECURRENTE, LAS CUALES SE LIQUIDAN Y APRUEBAN EN EL VALOR DE $1.500.000 CORRESPONDIENTES A LAS AGENCIAS EN DERECHO A SU CARGO. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303120170059901	Verbal	MAGDALENA MILAGROS FUENTES SÁNCHEZ	FRANCY JENNIFER PAEZ GALVIZ	7/03/2023	LUIS ROBERTO SUAREZ GONZALEZ	CONFIRMA EN SU INTEGRIDAD LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. /// SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA POR NO APARECER CAUSADAS. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001319900520215002501	Verbal	EGEDA COLOMBIA	GRUPO SUITES SAS	7/03/2023	LUIS ROBERTO SUAREZ GONZALEZ	EN SENTENCIA EMITIDA POR ESCRITO EL PASADO 16 DE DICIEMBRE, LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DECLARÓ PARCIALMENTE PROBADA LA PRESCRIPCIÓN FORMULADA POR EL DEMANDADO Y ATESTÓ QUE EL GRUPO SUITES S.A.S REALIZÓ LA COMUNICACIÓN PUBLICA DE OBRAS EN LAS ZONAS COMUNES DEL ESTABLECIMIENTO DE SU TITULARIDAD, INFRINGIENDO EL DERECHO PATRIMONIAL DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES REPRESENTADOS POR EGEDA, POR LO QUE LA CONDENÓ AL PAGO DE $94.750.048 POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE /// LA CONVOCADA APELÓ EL FALLO /// DESIERTA LA APELACIÓN FORMULADA POR LA DEMANDADA CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA
11001310300120220008901	Divisorios	LUZ NELLY PRADO PEÑALOZA	ALVARO ANTONIO DIAZ	7/03/2023	MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA	CONFIRMAR EL AUTO DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 PROFERIDO POR EL JUZGADO 1° CIVIL DEL CIRCUITO DE ESTA CIUDAD, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE MOTIVA. /// SIN CONDENA EN COSTASEN ESTA INSTANCIA. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303220190056101	Verbal	WILSON FERNEY GUTIÉRREZ MONTAÑA	WALTER JARAMILLO SÁNCHEZ	7/03/2023	MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA	DECLARAR DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN QUE LA PARTE DEMANDANTE INTERPUSO CONTRA LA SENTENCIA ESCRITA DE 12 DE ENERO DE 2023 PROFERIDA POR EL JUZGADO 10° CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL INCISO FINAL DEL NUMERAL 3° DEL ARTÍCULO 322 DEL CGP2 Y LA JURISPRUDENCIA DE LA COSTE CONSTITUCIONAL Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA QUE SE CITÓ EN LA PARTE MOTIVA /// OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE ESTA ACTUACIÓN AL JUZGADO DE ORIGEN. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148

11001310304420180042701	Ejecutivo con Titulo Hipotecario	BANCO COLPATRIA S.A. MULTIBANCA COLPATRIA SA	LUISA FERNANDA PINEDA CAMELO	7/03/2023	MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA	EN ARAS DE DETERMINAR LA SUERTE DE ESTE PROCESO, POR SECRETARÍA REQUIÉRASE CON LOS APREMIOS DE LEY AL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONSTRUCTORES DE PAZ PARA QUE INFORME EL ESTADO DEL TRÁMITE DE NEGOCIACIÓN DE DEUDAS DE LA SEÑORA LUISA FERNANDA PINEDA CAMELO. SE DEBERÁ INFORMAR SI SE CUMPLIERON LOS TÉRMINOS DE LA NEGOCIACIÓN. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310300720210009801	Verbal	JORGE ENRIQUE RUIZ VENEGAS	BLANCA ELIDA AGUILAR	7/03/2023	MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA	ADMITE EN EL EFECTO SUSPENSIVO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA. CORRE TRASALDO POR CINCO (5) DÍAS PARA SUSTENTAR RECURSO VENCIDO AQUEL, DESCORRERÁ LA PARTE CONTRARÍA. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310302520170039802	Verbal	ADVANTECH WIRELESS INC	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. ENTELCOM S.A.S.	7/03/2023	MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA	EN ATECION QUE NO SE PRESTÓ CAUCIÓN QUE SE ORDENÓ EN AUTO DEL 20 DE OCTUMBRE DE 2022, PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN DE CUMOPLIMIENTO DE SENTENCIA, SE ADVIERTE QUE SE PRODRÁN EJECUTAR LOS MANDATOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA, DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL NUMERAL 3° DEL AUTO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022, (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303320210058301	Verbal	PETROLEUM EXPLOTATION INTERNACIONAL S.A.	PEXIN USA LLC SUCURSAL COLOMBIA	7/03/2023	MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA	ADMITE EN EL EFECTO SUSPENSIVO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA. CORRE TRASALDO POR CINCO (5) DÍAS PARA SUSTENTAR RECURSO. VENCIDO AQUEL, DESCORRERÁ LA PARTE CONTRARÍA. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001319503220220024901	Verbal	JUAN FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ	INGENIUS EDUCATION SAS	7/03/2023	MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA	DECLARAR DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN INSTAURADO POR LA APODERADA JUDICIAL DE LOS DEMANDADOS CONTRA LA SENTENCIA QUE PROFIRIÓ LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES EL 8 DE FEBRERO DE 2023. DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE A LA OFICINA DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303820200027901	Verbal	CARLOS JOSE LOPEZ ZAPATA	BLANCA LILIA BAEZ DE NUÑEZ	7/03/2023	MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO	CONFIRMAR LA SENTENCIA PROFERIDA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR EL JUZGADO 8° CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. CONDENAR EN COSTAS. DEVOLVER EL PROCESO AL JUZGADO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310302420190032801	Verbal	EMGESA SA ESP	LIBERTY SEGUROS SA	7/03/2023	MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO	CONFIRMAR LA SENTENCIA PROFERIDA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, POR EL JUZGADO 24 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA. CONDENAR EN COSTAS. DEVOLVER EL PROCESO AL JUZGADO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303320220005401	Ejecutivo Singular	MECO VIALNIT	INGENIERIA DE VIAS SAS	7/03/2023	MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO	REVOCAR EL AUTO CALENDADO 12 DE ENERO DE 2023, PROFERIDO POR LA JUEZ 38 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. NO CONDENAR EN COSTAS. DEVOLVER EL EXPEDIENTE AL DESPACHO DE ORIGEN. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310303120190051501	ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO	LIBARDO MELO VEGA	UNILEVER COLOMBIA SCC SAS	7/03/2023	OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA	SE ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN QUE FORMULÓ EL DEMANDANTE CONTRA LA SENTENCIA QUE EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 PROFIRIÓ EL JUZGADO 13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. LA SECRETARÍA CONTROLARÁ EL SURTIMIENTO DE LOS TRASLADOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 2213 DE 2022. (ML) (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148

11001310301320180022101	Verbal	VIVIANA PAOLA BAENA LAUSCHUS	ANDREA BAENA ANDRADE	7/03/2023	RUTH ELENA GALVIS VERGARA	SE CORRE TRASLADO A LOS DEMÁS INTERVINIENTES POR EL TÉRMINO DE TRES (3) DÍAS. LA PETICIÓN DE NULIDAD ALEGADA POR OMISIÓN EN LA OPORTUNIDAD PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN O PARA SUSTENTAR UN RECURSO O DESCORRER SU TRASLADO, PRESENTADA POR EL APODERADO DE LA DEMANDANTE. (MPV) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148

EL PRESENTE ESTADO SE FIJA HOY 08/03/2023 A LAS OCHO DE LA MAÑANA (8 A.M.)

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario

EL PRESENTE ESTADO SE DESFIJA HOY 08/03/2023 A LAS CINCO DE LA TARDE (5 P.M.)

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario

Ley 2213 de 2022, artículo 9: Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva. No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal. De la

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
Secretaría Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Av. calle 24 N° 53-28 Torre C - Oficina 303
Teléfono: 423 33 90 Extensión 8349
Email: secretariasupsala2@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFICACION POR ESTADO ELECTRÓNICO No. E-42
09 DE MARZO DE 2023

NUMERO EXPEDIENTE	CLASE PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA AUTO	MAGISTRADO	DESCRIPCION
11001310300619991258501	Ejecutivo con Titulo Hipotecario	BANCAFE S.A	EVA ISBELIA MENDEZ SANABRIA	8/03/2023	ADRIANA SAAVEDRA LOZADA	DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA CONTRA EL AUTO PROFERIDO EL 25 DE OCTUBRE DE 2021 POR EL JUZGADO PRIMERO (1°) CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO. /// OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE EL PROCESO AL JUZGADO DE ORIGEN. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310300920180012202	Ejecutivo Singular	EDIFICIO SUGUIL PH	LILIA DEL CARMEN GONZALEZ VELASQUEZ	8/03/2023	ADRIANA SAAVEDRA LOZADA	CONFIRMAR EL AUTO PROFERIDO POR EL JUZGADO NOVENO (9°) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO. /// SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA. /// OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE EL PROCESO AL JUZGADO DE ORIGEN. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310301320200010501	Verbal	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS - SAE SAS	PIEDAD DEL SOCORRO ALVAREZ POLANIA	8/03/2023	ADRIANA SAAVEDRA LOZADA	CONFIRMAR EL AUTO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020, PROFERIDO POR EL JUZGADO 13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., ATENDIENDO A LAS CONSIDERACIONES QUE SE EXPUSIERON EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO. /// SIN CONDENA EN COSTAS EN ESTA INSTANCIA. /// : EN FIRME LA DECISIÓN, REMÍTASE AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LO DE SU CARGO. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310301420180016004	Verbal	ORLANDO PIMIENTO PEDRAZA	CIMENTO INMUEBLES COMERCIALES SAS	8/03/2023	ADRIANA SAAVEDRA LOZADA	DECLÁRASE BIEN DENEGADO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE CONTRA EL AUTO PROFERIDO EN AUDIENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR EL JUZGADO CATORCE (14) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ /// SIN CONDENA EN COSTAS, POR NO ENCONTRASEN CAUSADAS /// NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE AL JUZGADO DE ORIGEN. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310301620220019801	Ejecutivo Singular	MATRIX CREDITO SAS	CONFECCIONES BEMTTO	8/03/2023	ADRIANA SAAVEDRA LOZADA	CONFIRMAR EL AUTO DEL 11 DE AGOSTO DE 2022, PROFERIDO POR EL JUZGADO DIECISÉIS (16) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, ATENDIENDO A LAS CONSIDERACIONES QUE SE EXPUSIERON EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO. /// SIN CONDENA EN COSTAS EN ESTA INSTANCIA. /// EN FIRME LA DECISIÓN, REMÍTASE AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LO DE SU CARGO. (VMPG) VER LINK : https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148

11001310301320180047401	Verbal	RENATA PATRICIA OSPINA	MARTHA VASQUEZ MOTAVITA	8/03/2023	JAIME CHAVARRO MAHECHA	ADMITE EN EFECTO SUSPENSIVO EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE // 5 DIAS A PARTIR DE LA EJECUTORIA PARA SUSTENTAR EL RECURSO // PRESENTADA LA SUSTENTACION CORRASE TRASLADO POR 5 DIAS A LA PARTE CONTRARIA (ML) (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310301920160084502	Verbal	ELSA MIREYA CADENA VEGA	ALFONSO CASTRO Y PERSONAS INDETERMINADAS	8/03/2023	JAIME CHAVARRO MAHECHA	ADMITE EN EFECTO SUSPENSIVO EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE // 5 DIAS A PARTIR DE LA EJECUTORIA PARA SUSTENTAR EL RECURSO // PRESENTADA LA SUSTENTACION CORRASE TRASLADO POR 5 DIAS A LA PARTE CONTRARIA // SE PRORROGA EL TÉRMINO PARA TAL FIN POR SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO INICIA (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001310302520170099602	Verbal	NEYDIS CENIT SANCHEZ CUADRADO	PEDRO NEL LOPEZ MOLINA	8/03/2023	JAIME CHAVARRO MAHECHA	SE DECLARA IMPEDIDO PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA ALZADA FORMULADA CONTRA EL AUTO DE 1 DE JUNIO DE 2022 POR EL JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.. INGRESE EL EXPEDIENTE AL DESPACHO DEL DR. RICARDO ACOSTA BUITRAGO, QUIEN ME SIGUE EN TURNO. (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001319900120206249502	Verbal	CONDOMINIO TORRES DE MILANO	GRANDES Y MODERNAS CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS GRACOL	8/03/2023	JAIME CHAVARRO MAHECHA	SE ADMITE EN EFECTO DEVOLUTIBO EL RECUSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA DEMANDANTE CONTRA LA SENTENCIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 // 5 DIAS A PARTIR DE LA EJECUTORIA PARA SUSTENTAR EL RECURSO // PRESETADA LA SUSTENTACION CORRASE TRASLADO POR 5 DIAS A LA PARTE CONTRARIA (ML) (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001319900320200191701	Verbal	OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA	ALIANZA FIDUCIARIA S.A	8/03/2023	JAIME CHAVARRO MAHECHA	ADMITE EN EFECTO SUSPENSIVO EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR AMBAS PARTES CONTRA LA SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2022 // 5 DIAS A PARTIR DE LA EJECUTORIA PARA SUSTENTAR EL RECURSO // PRESETADA LA SUSTENTACION CORRASE TRASLADO POR 5 DIAS A LA PARTE CONTRARIA // SE PRORROGA EL TÉRMINO PARA TAL FIN POR SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO INICIAL (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148
11001319900320210417401	Verbal	JOSE ANTONIO GUTIERREZ BEDOYA	SEGUROS COLPATRIA SA	8/03/2023	JAIME CHAVARRO MAHECHA	ADMITE EN EFECTO SUSPENSIVO EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE CONTRA LA SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 2022 // 5 DIAS A PARTIR DE LA EJECUTORIA PARA SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACION SUSTENTACION // CORRASE TRASLADO POR 5 DIAS A LA PARTE CONTRARIA // SE PRORROGA EL TÉRMINO PARA TAL FIN POR SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO INICIAL (ML) Ver link https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil/148

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	Verbal
DEMANDANTE	Arango Ocampo e Hijos S.A.S.
DEMANDADA	Alianza Fiduciaria S.A.
RADICADO	110013199 003 2020 01917-01
INSTANCIA	Segunda -*apelación sentencia* -
DECISIÓN	Admite

1. De conformidad con lo reglado por los artículos 322 y 323 del Código General del Proceso en armonía con el precepto 12 de la Ley 2213 de 2022, que establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, se admiten en el efecto suspensivo los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia de 28 de febrero de 2022, proferida por la Delegatura Para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este proveído, deberá sustentarse el recurso a través del correo electrónico institucional de la Secretaría de la Sala Civil de este Tribunal[1], atendiendo lo estatuido por el artículo 109 del Código General del Proceso, so pena de declararse desierto.

Presentadas en oportunidad las sustentaciones, córrase traslado por cinco (5) días a la parte contraria.

[1] secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

2. En aras de evitar la pérdida automática de competencia, y con el objeto de proferir la sentencia de segunda instancia, se prorroga el término para tal fin por seis (6) meses, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término inicial, teniendo presente que el referido plazo es subjetivo respecto al Magistrado.

Ejecutoriada esta decisión regresen las diligencias al Despacho para lo pertinente.

Notifíquese.

JAIME CHAVARRO MAHECHA
Magistrado

Firmado Por:
Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5846e54314b2db3b97b22c2ac95d44ba1c89ad4b424b6e6ec07769e121d0ca7a**
Documento generado en 08/03/2023 09:53:44 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota

De: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
Enviado el: martes, 28 de marzo de 2023 12:36 p. m.
Para: Despacho 07 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C.
CC: 2 GRUPO CIVIL
Asunto: INFORME ENTRADA PROCESO 003-2020-01917-01 DR JAIME CHAVARRO MAHECHA

INFORME SECRETARIAL:

Marzo 28 de 2023. En la fecha ingresan las presentes diligencias (003-2020-01917-01) al Despacho del Magistrado **JAIME CHAVARRO MAHECHA**, para el trámite que corresponda y en firme la providencia anterior. Se informa que venció en silencio el término de traslado para que la parte apelante allegara en esta instancia la sustentación de la alzada.

11001319900320200191701

Atentamente,

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
Secretaría Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá

Av. calle 24 N° 53-28 Torre C - Oficina 305
Teléfono: 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Judicial

tlook Buscar Reunirse ahora
icio Vista Ayuda
Correo nuevo Eliminar Archivar Informar Limpiar Mover a Responder Leído / No leído
A partir del 1 de febrero, necesitará más almacenamiento para enviar o recibir correo electrónico. Administrar almacenamiento Obtener más almacenamiento

Favoritos
Carpetas
Bandeja de ent... 756
Correo no deseado
Borradores 1
Elementos enviados
Programado
Elementos elimin... 10
Archivo
Notas
carpeta reporte de c...
contestacion deman...
Conversation History

macenamiento de Microsoft
9 GB usados de 5 GB (279%)
Obtener más almacenamiento

Cerrar Anterior Siguiente

DESPACHO DR. JAIME CHAVARRO MAHECHA RADICACION PROCESO: 11001319900320200191701 DTE: ARANGO OCAMPO E HIJOS SAS DDO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
Hola, gracias por contactarse con la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial ... Mié 29/03/2023 5:04 PM

OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA
Para: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co Mié 29/03/2023 5:04 PM

Cordial saludo,

En mi calidad de apoderado Judicial de la parte demandante, dentro del proceso referenciado, solicito se me remita el link del expediente, toda vez que en el sistema llamado CONSULTA DE PROCESOS, y REPORTE DE PROCESOS, se indica que el día 08 de marzo de 2023, se notificó un auto por estado que admite en el efecto suspensivo el RECURSO DE APELACION y corre traslado a ambas partes para la sustentación, pero de acuerdo a la búsqueda realizada de las providencias notificadas ese día no aparece el auto en cuestión, por eso se hace necesario revisar el link del expediente para verificar dicha notificación por estado.

Atentamente,

OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA
Abogado

Los tenis mas cotizados en usa, ya estan en colombia a...
Tienda Verifica...
CFD: Cómo ganar hasta $2.700 a la semana con Amazon
Inversión Segu...
¡Los que sufren de dolor de rodilla y cadera deberían leer...
Bioforce

MEMORIAL PARA RGEISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA RV: PROCESO VERBAL DE ARANGO OCAMPO VS. ALIANZA FIDUCIARIA RADICACION 2020-001917-01

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 15/05/2023 9:36

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

3 archivos adjuntos (382 KB)

PDF MAYO 11 2023 ESTADO DEL PROCESO.pdf; MAYO 12 2023 SOLICITUD SANCION ABOGADO PARTE DEMANDANTE.pdf; MAYO 2023 SOBRE EL REQUISITO DE SUSTENTAR EN SEGUNDA INSTANCIA.pdf;

MEMORIAL PARA RGEISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA

Atentamente,



República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
Secretaría Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá

Av. calle 24 N° 53-28 Torre C - Oficina 305
Teléfono: 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co



OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Judicial

De: ABOGADO EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA <edgarnavia@naviaestradaabogados.com>
Enviado el: lunes, 15 de mayo de 2023 8:52 a. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Juridico Corasa <juridico@corasa.com.co>; juansebastian <juansebastian@naviaestradaabogados.com>; oscar_ivan_montoya@hotmail.com
Asunto: PROCESO VERBAL DE ARANGO OCAMPO VS. ALIANZA FIDUCIARIA RADICACION 2020-001917-01
Importancia: Alta

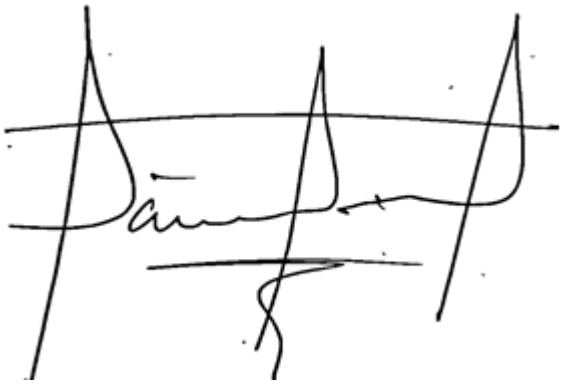
Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
MAGISTRADO PONENTE:
JAIME CHAVARRO MAHECHA
SANTA FE DE BOGOTA

REFERENCIA : PROCESO VERBAL DE MAYOR CUANTIA
DEMANDANTE : ARANGO OCAMPO E HIJOS S. A. S.

DEMANDADOS : ALIANZA FIDUCIAIA S. A.
FIDEICOMISO VERSALLES PALMIRA
RADICACION : 11001319900320200191701
TEMA : SOLICITUD SANCION ABOGADO PARTE DEMANDANTE
APORTE SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR CALI SOBRE
LA OBLIGACION DE SUSTENTAR EN SEGUNDA INSTANCIA

EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA, abogado titulado y en ejercicio con cédula de ciudadanía No. 16.663.081 de Santiago de Cali y con tarjeta profesional No. 33.201 del Consejo Superior de la Judicatura obrando como apoderado de la parte demandada por este escrito presento escrito con dos anexos para mejor proveer.

Cordialmente,



NAVIA ESTRADA ABOGADOS ASOCIADOS S. A. S.
EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA - Abogado Asociado
www.naviaestradaabogados.com
SEDE CENTRO: Carrera 3 No. 6-83 CUARTO PISO EDIFICIO LA MERCED
SEDE SUR: Carrera 100 No. 11-60 OFICINA 413 TORRE FARALLONES HOLGUINES TRADE CENTER
Celular : 3155222690 - 3206759610
Teléfono : 6028841328
Santiago de Cali, Valle del Cauca, República de Colombia

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. No se autoriza
la publicación de esta información sino con Autorización de su Autor en forma expresa

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
MAGISTRADO PONENTE:
JAIME CHAVARRO MAHECHA
SANTA FE DE BOGOTA

REFERENCIA : PROCESO VERBAL DE MAYOR CUANTIA
DEMANDANTE : ARANGO OCAMPO E HIJOS S. A. S.
DEMANDADOS : ALIANZA FIDUCIAIA S. A.
FIDEICOMISO VERSALLES PALMIRA
RADICACION : 11001319900320200191701
TEMA : SOLICITUD SANCION ABOGADO PARTE DEMANDANTE
APORTE SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR CALI SOBRE LA OBLIGACION DE SUSTENTAR EN SEGUNDA INSTANCIA

EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA, abogado titulado y en ejercicio con cédula de ciudadanía No. 16.663.081 de Santiago de Cali y con tarjeta profesional No. 33.201 del Consejo Superior de la Judicatura obrando como apoderado de la parte demandada por este escrito y con fundamento en el artículo 78 numeral 14 del Código General del Proceso presento este escrito por las siguientes razones.

PRIMERO:
Solicito que el ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE sea sancionada con una MULTA DE UN SALARIO MINIMO al no enviar a LA PARTE DEMANDADA NI A SU APODERADO copia del escrito del 30 DE MARZO DE 2023 que aparece en la PAGINA WEB de la RAMA JUDICIAL en donde el señor OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA acompaña un ESCRITO DE INCIDENTE DE NULIDAD.

La norma señala con absoluta claridad este deber y se cumple el presupuesto porque el escrito lo aportó el 30 de marzo de 2023 y tuvo hasta el 31 de MARZO DE 2023 para hacernos llegar dicho escrito y no lo ha hecho. Nos enteramos el día de ayer cuando revisamos la PAGINA WEB de la RAMA JUDICIAL y aparece la anotación del 30 de marzo. Estábamos esperando el PROCESO EN LA SUPERFINANCIERA para el AUTO DE CUMPLASE:

> *14. Enviar a las demás partes del proceso* ***después de notificadas, cuando hubieren suministrado una dirección de correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos****, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se exceptúa la petición de medidas cautelares. Este deber se cumplirá a más tardar el día siguiente a la presentación del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuación, pero la parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa hasta por un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracción.*

SEGUNDO:
No podré contestar el INCIDENTE DE NULIDAD que presentó el señor ESCARRIA, porque no tuve oportunidad de recibirlo y por lo tanto y como el TRASLADO DEBE SER AUTOMATICO con la entrega del escrito, no puedo referirme a dicha petición.

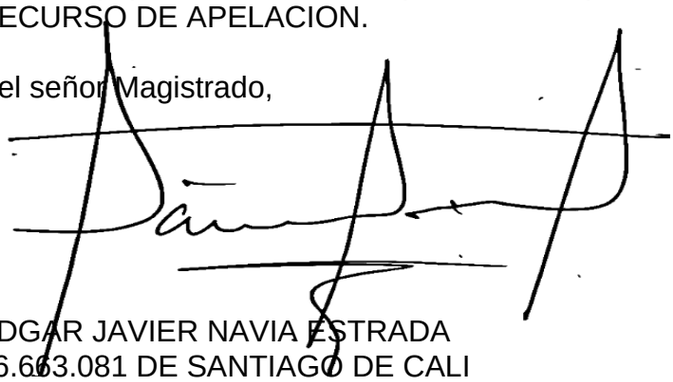
TERCERO:
Acompaño reciente DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL DE CALI en donde analiza en extenso argumento LAS RAZONES JURIDICAS HOY VIGENTES para que en SEGUNDA INSTANCIA exista la obligación del RECURRENTE DE SUSTENTAR

EL RECURSO, así haya expuesto reparos concretos y/o extenso análisis de las razones de su apelación.

Por esa simple razón es INDISPENSABLE la sustentación y el no hacerlo genera como SANCION DECLARAR DESIERTO EL RECURSO.

El AUTO SE NOTIFICO CORRECTAMENE, tuve oportunidad de revisarlo y me quede esperando que el recurrente procediera a SUSTENTAR EL RECURSO, hecho que no sucedió y por ese motivo la providencia que SIGUE ES DECLARAR DESIERTO EL RECURSO DE APELACION.

Del señor Magistrado,



EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA
16.663.081 DE SANTIAGO DE CALI
33.201 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATUARA

SANTIAGO DE CALI, MAYO 2023

Carrera 3 No. 6-83
Cuarto Piso
Edificio La Merced
Santiago de Cali

Teléfonos 8841328 – 3206759610 - 3206759613
edgarnavia@naviaestradaabogados.com
juansebastian@naviaestradaabogados.com

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE CALI
SALA CIVIL DE DECISIÓN
MAG. PONENTE DR. HOMERO MORA INSUASTY

Santiago de Cali, dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Responsabilidad Civil Contractual
Demandante: Conjunto Residencial Tierra Alta PH
Demandado: Mecon SA y otro.
Radicación: 76001-31-03-016-2019-00137-01

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Decidir el recurso de reposición formulado por el procurador judicial del polo activo, frente al auto del 13 de abril de los corrientes, proferido por este Tribunal en Sala Unitaria, que declaró desierto el remedio vertical impetrado contra la sentencia adiada 16 de noviembre de 2022, emitida por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de esta ciudad.

II. ANTECEDENTES

1.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, profirió sentencia desestimatoria de las pretensiones dentro del proceso de responsabilidad civil contractual formulado por el Conjunto Residencial Tierra Alta PH.

2.- Frente al veredicto, el extremo activo elevó recurso de apelación, izando sus reparos concretos ante el juez de conocimiento.

3.- Una vez arribó el expediente a esta Corporación, mediante auto del 9 de diciembre del 2022, se admitió el recurso de alzada, concediendo el término de 5 días para cumplir con la carga de sustentación de los reparos blandidos conforme lo señala la Ley 2213 de 2022.

4.- En providencia del 13 de abril del año en curso, se declaró desierta la apelación interpuesta, por cuanto el censor se sustrajo de la ineludible carga de sustentación ante esta instancia.

5- En oposición, el procurador judicial del convocante, impetró recurso de reposición bajo la consideración axial de que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencias del 24 de junio de 2021 y del 23 de marzo de 2022, en asuntos de similares connotaciones tuvo como suficiente la sustentación del recurso que previamente se presentó ante el juez de primera instancia, evitando incursionar en aplicación excesiva de los ritos procesales.

III. CONSIDERACIONES

1.- Los recursos procesales por medio de los cuales se controvierte una decisión judicial tienen su fundamento en la falibilidad humana, pues el juez como ser humano puede equivocarse. Así, el recurso de reposición tiene como teleología que el mismo funcionario que profirió la decisión revise su actuación y la revoque o modifique, de ser el caso.

2.- Examinadas en su precisa dimensión las razones de inconformidad blandidas por el demandante, de la mano con las actuaciones judiciales que le sirven de apoyatura, pronto se advierte su infructuosidad y fracaso, por las siguientes razones:

2.1.- La Ley 2213 de 2022 tiene como objetivos, entre otros, de *"agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria,"* y, *"flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia con el uso de las herramientas tecnológicas e informáticas como forma de acceso a la administración de justicia"*.

Con la finalidad de hacer realidad dichos postulados, para el trámite de la apelación de sentencia tratándose de procesos civiles y de familia, en su articulo 12 dispuso que todo el trámite de la segunda instancia se llevaría a cabo por regla general de manera escritural, salvo que fuera necesario practicar pruebas, por lo cual, los traslados, sustentación, réplica y sentencia deben hacerse por escrito y, particularmente en lo que atañe a la sustentación del ruego vertical, se precisó sin distinción alguna, que la misma debe adelantarse ante el juez de la apelación, que de cejarse o despreciarse dicha oportunidad por el opugnante, la consecuencia ineludible es la deserción del mismo.

Ninguna interpretación distinta emerge de la lectura del pluricitado canon 12 de la citada ley cuando disciplina que *"Ejecutoriado el auto que admite el recurso… el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes",* que, en el evento de llegarse a desatender esta carga procesal, la consecuencia inexcusable sería que *"se declarará desierto".*

Prístina es la citada preceptiva en lo que concierne al trámite que debe seguirse para adelantar las apelaciones de sentencias en materia civil, pues introdujo modificaciones importantes en la forma y términos en que debía discurrir, marginando, en lo medular, la oralidad que se materializa en la vista pública consagrada en el artículo 327 del CGP, para imponer nuevamente el sistema escritural, y precisando sin ambages que la sustentación de la apelación debe hacerse ante el superior dentro del preclusivo y perentorio

término de cinco (5) días posteriores a la ejecutoria del auto que admite el recurso vertical, so pena de declararse desierto.

2.2.- Ahora, atendiendo los precisos contornos de la censura, impera precisar respecto del supuesto desbarro por exigirse la sustentación de la apelación en segunda instancia, habida cuenta que, según la concepción del recurrente, ya militaba en el plenario un escrito que fue arrimado ante el juez de primer grado que satisface la antedicha carga sustentatoria, sin que deba volver a reiterarlo en esta instancia, debe señalarse que la doctrina judicial de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de tiempo atrás ha indicado de manera reiterada y sin vacilaciones que la formulación y decisión del recurso de apelación de sentencia, involucra tres frases que acompasan igualmente sendas cargas procesales, las cuales son: (i) interposición del recurso, (ii) exposición de reparos concretos y, (iii) alegación final o sustentación[1].

Atañedero con este último escalón, con suficiencia, ha sentado la jurisprudencia[2] que es ineludible sustentar ante el *ad quem* el remedio vertical que le fuera concedido, desarrollando argumentativamente los reparos concretos izados frente a la sentencia de primer nivel, tal y como lo señalaba el artículo 322 de la normatividad procesal civil, reeditado tanto por artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, como por el artículo 12 de la ya mencionada ley, de lo contrario, emerge forzoso declarar su deserción.

De este modo, no debe confundirse, como lo hace el recurrente, la etapa de exposición o enunciación de los reparos, que los hace ante el *a quo* y que, de cumplir con los presupuestos legales, será procedente su **concesión**, decisión que de superar el tamiz preliminar previsto en el canon 325 del CGP y, de no hallarse ninguna causal de invalidación de la actuación, se **admitirá** por el *ad quem*, quien dispondrá la sustentación de los mismos, cual lo recaba la preceptiva ritual, en la medida que un criterio opuesto, afectaría seriamente el principio de legalidad y el orden público de las disposiciones procesales.

Sobre el punto, resulta valioso y sumamente ilustrativo un pasaje acerca de la temática puesta a consideración emanado por el Tribunal de Cierre de esta especialidad, indicando que:

"***Aceptar entonces que los reparos concretos aducidos ante el a quo al formularse la alzada contra una sentencia son suficientes y que puede soslayarse la sustentación oral ante el superior,*** *impuesta en el canon 322 del Código General del Proceso, [ahora por escrito conforme con lo dispuesto en el artículo 14 Dcto. Legislativo 806 de 2020],* ***contradice los postulados en mención*** *y, de contera, el principio democrático*

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC6481-2017 del 11 de mayo de 2017, Mag. Pte. Dr. Luis Amando Tolosa Villabona, Rad. 19001-22-13-000-2017-00056-01.
[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC2294-2020 del 04 de marzo de 2020, Mag. Pte. Dr. Luis Alonso Rico Puerta, Rad. 11001-02-03-000-2020-00566-00.

representativo, según el cual es el Congreso de la República, revestido de una amplia potestad legislativa, el competente para regular los procedimientos judiciales (art. 150, C.P.)"[3].

En un asunto más reciente y de contornos similares, con la variación de que el tribunal en esa oportunidad para desatar la apelación tuvo en cuenta lo discurrido por el accionante ante el *a quo*, la citada Corporación determinó que:

"*Puestas de ese modo las cosas, debe precisarse en principio, que independientemente de la norma que se hubiera aplicado, asunto que no discute la sociedad apelante, lo cierto es que lo ocurrido en el proceso en forma visible, es que el Tribunal acogió una posición contraria a la jurisprudencia decantada de esta sala, dando por válidas las alegaciones presentadas en primera instancia, sin tener en cuenta que la intención del legislador, ratificada por la sentencia unificadora SU 418 de 2019 de la Corte Constitucional, es que* ***la sustentación ante el juez de segunda instancia es obligatoria****, sea en forma oral como lo establece el Código General del Proceso, ya por escrito como lo señala el decreto 806 de 2020, pero en todo caso ante el juez ad quem,* ***y que no son válidos los argumentos acogidos por el fallador acusado de dar validez y eficacia a los argumentos allegados cuando se propuso el recurso o sea los presentados ante el juez de primera instancia así sean muy completos****… En esa forma, le asiste razón a la accionante en tutela cuando señala el error en que incurrió el fallador civil al dar trámite completo al recurso de apelación sin la sustentación del recurso en segunda instancia"*[4]. (subrayas por fuera del texto).

Para abundar sobre esta arista, y dentro de un asunto que guarda estrecha analogía con el aquí debatido, la H. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, volvió a concluir sentenciosamente:

"Aduce la tutelante que radicó por escrito y además sustentó oralmente el recurso de apelación ante el funcionario de primer grado. Dichos planteamientos no pueden ser de recibo por parte de la Sala, en la medida que el numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso, determina con claridad absoluta que la alzada debe ser sustentada en segunda instancia. ***De tal manera que las argumentaciones esbozadas ante el a quo no la eximen de hacer lo propio ante el superior jerárquico, pues son momentos procesales distintos que no pueden confundirse entre sí.***

Téngase presente que quien apela una sentencia no solo debe exponer de manera breve sus reparos concretos respecto de ese veredicto, sino ***acudir ante la autoridad colegiada para sustentar allí ese remedio apoyado***

[3] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC10405-2017 del 19 de julio de 2017, Mag. Pte. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona, Rad. 11001-02-03-000-2017-01656-00.
[4] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de febrero de 2021, reiterada en la STC1738-2021.

precisamente, en esos cuestionamientos puntuales. *"*[5]. (Negrilla fuera del texto original).

En honor a la verdad, la tesis que enarbola en esta oportunidad el recurrente, esto es, sobre lo inoficioso que resulta exigir en segunda instancia la sustentación del recurso vertical cuando ya en oportunidad anterior con la exposición de los reparos se cumplió con la función de dar a conocer diáfanamente sus razones de disenso frente al fallo atacado, encuentra apoyo en ulteriores pronunciamientos de la Sala Civil, que después de la expedición del Decreto 806 y su continuidad a través de la Ley 2213 de 2022, recogió su criterio y adoptó que era suficiente con la sustentación en primera instancia, caso en el cual, el *ad quem* debía atender los razonamientos anticipadamente expuestos por el recurrente.

Dicha postura, se exteriorizó en un buen número de sentencias de tutela –objeto de vehementes salvamentos de voto por parte de las Honorables Magistradas Hilda González Neira y Martha Patricia Guzmán Álvarez-, que luego de ser impugnadas fueron sistemática e invariablemente revocadas por su homóloga Sala Laboral, como puede evidenciarse en las sentencias STL7317-2021 rad. 93665, STL6362-2021 rad. 93129; STL5683-2021 rad. 93211 y STL7274-2022.

En ese orden, a despecho de lo planteado por el recurrente quien estima zanjada la discrepancia expuesta, en realidad, la comentada espiral de amparos y posteriores revocatorias, continúa su curso al día de hoy, tal y como puede observarse en recientes pronunciamientos, *verbi gracia*, las sentencias STL16088-2022, STL419-2023 y STL422-2023 donde la Sala Laboral reitera su criterio y revoca una vez más el amparo constitucional concedido por la Sala Civil en decisiones del 18 de enero de 2023. Escenario que imposibilita que se considere la postura expuesta por el máximo Tribunal de cierre de nuestra especialidad como el precedente jurisprudencial actual y vigente en el marco jurídico, en cuanto se refiere a la oportunidad válida y eficaz para sustentar el recurso de apelación de sentencias.

De otra parte, es menester relievar que la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-418 de 2019, consideró que la interpretación que debe dársele al régimen de apelaciones, es la directa, sistemática y acorde con su configuración legal, en tal virtud, sostuvo que dicho medio de defensa judicial debe sustentarse ante el superior, sea cual fuere la manera diseñada por el legislador, de no hacerlo, tendrá el apelante por sanción la deserción del recurso; así, su precedente se unificó en armonía con el criterio jurisprudencial inicialmente desarrollado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 806 de 2020.

---

[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC11858-2020 del 18 de diciembre de 2020, Mag. Pte. Dr. Francisco Ternera Barrios, Rad. 11001-02-03-000-2020-03372-00.

La anterior disquisición sirvió de pilar para que el andamiaje judicial continuara por ese camino, tanto que el sistema estatal, cuando emitió las ya reseñadas normativas, previno que era presupuesto *sine qua non* la sustentación del apelante ante el segundo grado jurisdiccional, en mérito a despachar de fondo la inconformidad habida con la sentencia de instancia.

En estos términos, al haberse sustraído el recurrente de su carga primaria de sustentación del medio de impugnación enantes referido (ahora por escrito) en la forma y términos de la nueva normativa, el único colofón posible era declarar su deserción, reitérese, por imperativo legal, en la medida que una interpretación contraria conllevaría a desnaturalizar los trámites y procedimientos prestablecidos, y, de contera, arrogarnos una competencia de configuración que es ajena al administrador de justicia, como lo habíamos advertido anteriormente.

2.3.- Memórese, por otro lado, que es principio general de interpretación jurídica el enunciado: *"donde no hay ambigüedad, no cabe interpretación"*, materializado, asimismo, en los artículos 27 y 28 del Código Civil Colombiano, cánones que perentoriamente expresan: *"Cuando el sentido de la Ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu"* y *"Las palabras de la Ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras"*.

Así que, si dada la claridad y perentoriedad de la norma legal y de índole procesal, impone, en forma clara y diamantina, como premisa obligatoria la sustentación de la alzada ante el juez de segunda instancia, en la oportunidad ahí señalada, no existe ninguna otra posibilidad de hacerlo, ni siquiera acudiendo a benévolas interpretaciones; luego, de no realizar tal conducta positiva, la consecuencia jurídica del apelante no es otra que obtener una resolución desfavorable de la administración de justicia, esto es, que se declare desierto su recurso vertical.

Esta fue la conclusión categórica a la que arribó el máximo Tribunal Constitucional cuando examinó las diferentes opciones hermenéuticas que se venían presentado en el foro judicial, para precisar sin ambages ni vacilaciones que:

"En este caso parecería existir una interpretación y la ponderación se hace en contravía con el querer del legislador. Sería tanto como ponderar una norma clara, para darle prelación a una opción distinta que se estima más garantista. ***Esa opción no cabe. Si la norma no es inconstitucional, no puede excepcionarse, para dar aplicación a un criterio más garantista. Se está en el nivel de garantía fijado por el legislador que no es inconstitucional, así pueda haber opciones más garantistas*** *(al menos para una parte, pero eventualmente, en detrimento de la otra). Por ejemplo, ampliar el término para recurrir, es más garantista para quien quiera*

apelar, pero disminuye las garantías de quien tiene una sentencia favorable y aspira a la seguridad jurídica"[6]. (Destaca la Sala).

Por lo demás, una interpretación en contravía del texto legal, sería inobservar "*las formas propias de cada juicio*" y, a la postre, contravenir el artículo 29 superior, así como el orden público de las normas procesales[7], máxima que impide, tanto a funcionarios como a particulares, derogar, modificar o sustituir el contenido ontológico del supuesto adjetivo, salvo autorización expresa de la ley, excepción que aquí no acude.

Reflexiónese, también, que no atender el mandato legal, so pretexto de garantizar intereses en favor de un extremo procesal, conllevaría a desconocer o vulnerar las garantías de la contraparte, y, ahí sí, habría una perturbadora lesión a la igualdad, cual es uno de los mayores valores constitucionales reconocidos por la Carta Política de 1991. Con gran ilustración, la H. Corte Constitucional ya había relievado la importancia de respetar la normatividad procesal y su incidencia con la igualdad, al predicar que:

"El artículo 13 de la Constitución consagra la igualdad de todos ante la ley, al declarar que "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". Y dispone que, por razón de esa igualdad, todas recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Esa igualdad teórica se realiza en los distintos campos por medio de normas especiales. En el campo procesal, en lo referente a la administración de justicia, la igualdad se logra al disponer que todos sean juzgados por el mismo procedimiento. En lo que tiene que ver, en materia civil, con la manera de aducir las pretensiones ante el juez, con la respuesta a éstas para aceptarlas o negarlas, con las excepciones, con la manera de aportar o producir la prueba, etc. todas las personas están en un plano de igualdad, merced a los procedimientos uniformes. (…)

Pero la regla general, encaminada a garantizar la igualdad, determina el establecimientos (sic) *de competencias y procedimientos iguales para todas las personas. ¿Por qué? Porque* ***el resultado de un juicio depende, en gran medida, del procedimiento por el cual se tramite. Éste determina, las oportunidades para exponer ante el juez las pretensiones y las excepciones, las pruebas, el análisis de éstas, etc. Existen diversos procedimientos, y, por lo mismo, normas diferentes en estos aspectos: pero, el estar el actor y el demandado cobijados por idénticas normas, y el estar todos, en principio sin excepción, sometidos al mismo proceso para demandar o para defenderse de la demanda, garantiza eficazmente la igualdad****"*[8].

---

[6] Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019, M. P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[7] Código General del Proceso, artículo 13.
[8] Corte Constitucional, Sentencia C-407 de 1997, M. P. Dr. Jorge Arango Mejía.

Ello, sin echar de menos que, en el evento de cambiarse el sentido diáfano de la ley, el juez estaría adoptando el papel de *"legislador"*, como se itera, conducta proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, por el contrario, es misión de la justicia garantizar, con total neutralidad, que todas las personas que se someten a la jurisdicción sean tratadas en condiciones de igualdad, otorgando los mismos derechos e idénticas oportunidades que están dentro de la ley, a cuyo imperio está sometido el juzgador (art. 230 C.P.)

2.4.- Casi que, por las mismas elucubraciones, de golpe, se descarta que haya exceso ritual manifiesto, como quiera que, para que se configure este defecto, se debe partir de un culto irracional a las formas sobre el derecho sustancial, oponiéndose a postulados constitucionales, luego, y, por el contrario, el debido proceso, la seguridad jurídica y la igualdad, son prerrogativas que prohíjan el deber de sustentar la apelación en los términos previstos.

Valga traer a colación que, sobre este punto, también se encargó la jurisprudencia constitucional de aclarar que, cuando el legislador impone una obligación clara y exigible, se está ante una *"carga razonable"* que atiende a valiosos objetivos y que no es disponible por las partes, *"[en] esa medida, no podría hablarse de una concepción procesal en extremo rigurosa al punto de leerse la sustentación del recurso de apelación como un obstáculo para la realización de los derechos sustanciales de las partes y no en un medio para lograrlo"*, para agregar finalmente que si bien, las opciones de interpretación suponen que existe efectivamente un problema, lo cierto es que "***si es posible llegar a una interpretación que surja del texto, no hay lugar a ponderar lo que satisface más los derechos, porque eso se encuentra dentro del ámbito de configuración del legislador***"[9].

2.5.- La amplia discusión que se suscitó en torno de si era forzoso sustentar o no la apelación ante el superior funcional, finalmente fue decantada con la expedición en principio del Decreto Ley 806 de 2020, y posteriormente con la Ley 2213, que son de idéntico tenor sobre esta temática, pues, en su contenido íntegro, de manera expresa consagró que debía llevarse a cabo inexcusablemente ese acto procesal ante el superior, so pena de declararse desierto, como explícitamente lo consigna su texto y estaba advertido el recurrente; ahora, esa intención fue objeto de control de constitucionalidad, tal como se avizora en la sentencia C-420 de 2020[10], providencia que declaró la exequibilidad de la decisión, incluso, al realizar el juicio de necesidad, determinó que *"[lo] anterior, en tanto evita «la realización de audiencias respecto de actuaciones que perfectamente se [pueden] surtir por escrito» como «**la sustentación**, oposición y decisión de la alzada», específicamente, en los casos en que no sea necesario practicar pruebas"* (se resalta), ratificando, entonces, la posición de marras.

---

[9] Corte Constitucional, Sentencia SU418-2019
[10] Corte Constitucional, Sentencia C-420 de 2020, Mag. Pte. Dr. Richard S. Ramírez Grisales.

2.6.- No esta demás resaltar que, el censor no recurrió el auto a través del cual además de admitirse su recurso de apelación, le impuso la carga de sustentar el mismo ante esta instancia, al igual que le fijó el plazo preclusivo que tenía para hacerlo y, la consecuencia procesal que operaba en caso de soslayarse aquella, decisión que se notificó mediante estados electrónicos el 12 de diciembre postrero, con inserción de la providencia, cumpliéndose así, con unos de los valores que orienta la administración de justicia, que no es otro que el de publicidad de las decisiones judiciales.

Desde esta perspectiva, enterados todos los sujetos procesales del contenido integral del comentado auto y sus ordenamientos, particularmente la parte demandante y recurrente, es lo cierto que dentro de su ejecutoria no mostró ni exhibió inconformidad ninguna, por lo cual se convirtió en ley de proceso, con efectos vinculantes, no solo para el juez, sino también para las partes, como no podía ser de otra manera. Debe precisarse, entonces, que esa era la oportunidad procesal que tenía el apoderado de la ejecutada para revelar su desacuerdo con tal determinación y abogar para que su remedio vertical se tuviese por sustentado y que por tanto era innecesario tener que volver a cumplir con dicha carga procesal, como lo reclama ahora con notoria extemporaneidad, pero ante su silencio no quedaba alternativa distinta que someterse a sus estrictos términos, por cuanto, itérese, que al ser una determinación que no fue cuestionada adquirió el carácter de imperativa y vinculante para todos los agentes que integran la *lid*, incluido el funcionario a quien le está vedado revocar o modificar sus decisiones por expresa política legislativa.

Por tanto, al haberse sustraído el convocante de recurrir el auto que ordenó correr el traslado para sustentar la apelación, que valga señalar, es susceptible de combatirse mediante recurso de reposición, tal como lo prevé el artículo 318 del CGP, no le quedaba alternativa distinta que acatar sus ordenamientos, al convertirse, reitérese, en ley del proceso.

3.- Colofón, como ya se había anticipado, está llamada al fracaso la reposición planteada por el pretensor, en tanto que la decisión confutada se encuentra soportada en las normas legales que regulan la materia, al igual que respeta las posturas adoptadas sobre el punto por los órganos de cierre en materia constitucional, como se reseñó ampliamente en precedencia.

Sin más explanaciones por la claridad del tema tratado, esta Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,

RESUELVE

NO REPONER el auto recurrido por las razones expuestas en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE



HOMERO MORA INSUASTY
Magistrado

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consulta De Procesos

Fecha de Consulta : Jueves, 11 de Mayo de 2023 - 08:23:01 P.M.

Número de Proceso Consultado: 11001319900320200191701

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Corporacion/Especialidad: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - SALA CIVIL

Datos del Proceso

Información de Radicación del Proceso

Despacho	Ponente
000 Tribunal Superior - Civil	JAIME CHAVARRO MAHECHA

Clasificación del Proceso

Tipo	Clase	Recurso	Ubicación del Expediente
Declarativo	Verbal	Apelación Sentencia	Despacho

Sujetos Procesales

Demandante(s)	Demandado(s)
- OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA	- ALIANZA FIDUCIARIA S.A

Contenido de Radicación

Contenido
SENTENCIA 28-02-2022

Actuaciones del Proceso

Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha Inicia Término	Fecha Finaliza Término	Fecha de Registro
30 Mar 2023	RECIBO DE MEMORIALES	OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA PRESENTA INCIDENTE DE NULIDAD (ML) 8:14 AM			30 Mar 2023
28 Mar 2023	AL DESPACHO				28 Mar 2023
08 Mar 2023	NOTIFICACIÓN POR ESTADO	ACTUACIÓN REGISTRADA EL 08/03/2023 A LAS 11:31:19.	09 Mar 2023	09 Mar 2023	08 Mar 2023
08 Mar 2023	AUTO QUE ADMITE RECURSO	ADMITE EN EFECTO SUSPENSIVO EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR AMBAS PARTES CONTRA LA SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2022 // 5 DIAS A PARTIR DE LA EJECUTORIA PARA SUSTENTAR EL RECURSO // PRESETADA LA SUSTENTACION CORRASE TRASLADO POR 5 DIAS A LA PARTE CONTRARIA // SE PRORROGA EL TÉRMINO PARA TAL FIN POR SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO INICIAL (ML) VER LINK HTTPS://WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/WEB/TRIBUNAL-SUPERIOR-DE-BOGOTA-SALA-CIVIL/148			08 Mar 2023
09 Aug 2022	AL DESPACHO POR REPARTO	LZ			09 Aug 2022
09 Aug 2022	REPARTO DEL PROCESO	A LAS 15:13:44 REPARTIDO A:JAIME CHAVARRO MAHECHA	09 Aug 2022	09 Aug 2022	09 Aug 2022
09 Aug 2022	RADICACIÓN DE PROCESO	ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 09/08/2022 A LAS 15:12:13	09 Aug 2022	09 Aug 2022	09 Aug 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	Verbal
DEMANDANTE	Ginna Alejandra Vargas Rico
DEMANDADA	La Previsora S.A. Compañía de Seguros
RADICADO	110013199 003 2021 02304 01
INSTANCIA	Segunda *–apelación sentencia -*
DECISIÓN	Admite

Se resuelve lo pertinente acerca del informe secretarial que precede, en el cual se consignó que *"**venció en silencio** el término para que la parte apelante allegara en esta instancia la sustentación de la alzada*". Al efecto, se expone:

1. Al tenor del numeral 3° del artículo 322 del Código General del Proceso, *"[c]uando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior."*; luego, dispone que *"[p]ara la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada*" (subraya fuera de texto).

Por su parte, el precepto 12 de la Ley 2213 de 2022, en lo pertinente, estatuye que: *"**[e]jecutoriado el auto que admite el recurso** o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante **deberá***

sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. *De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso,* ***se declarará desierto***" (destacado propio)

2. Se colige, entonces, que el legislador previó claras oportunidades y términos para satisfacer las cargas del recurrente, esto es, impetrar el recurso, presentar los reparos concretos y sustentarlos. No obstante, en el caso examinado, la apelante se sustrajo de satisfacer esto último, dado que en esta fase procesal no se ocupó de exponer concretamente las razones que sustentan su desacuerdo, dirigidas a socavar los argumentos puntuales en que quedó edificada la sentencia del *a quo*.

En esa medida, en este caso, se desatendió la teleología del diseño normativo en mención, pues al haberse omitido la sustentación del recurso de alzada queda cerrado el paso a su definición, por cuanto, es sobre los fundamentos que soportan la censura que debe ocuparse el superior, dado que tienen el alcance de limitar su competencia, según lo estipula el artículo 328 del Código General del Proceso: "*El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante*".

3. En suma, comoquiera que la parte apelante no sustentó su recurso de apelación, se declarará desierto, de conformidad con lo dispuesto en la indicada norma 322, en armonía con lo señalado en el segundo párrafo del auto del 28 de noviembre de 2022, en el cual se indicó expresamente cuál sería la consecuencia de tal omisión.

4. En mérito de lo expuesto, el magistrado sustanciador de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, **declara desierto** el recurso de apelación formulado contra la sentencia emitida en el asunto en referencia.



Notifíquese.

JAIME CHAVARRO MAHECHA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	Verbal
DEMANDANTE	Natalia María Tasco Acevedo
DEMANDADA	Seguros de Vida Sura S.A.
RADICADO	110013199 003 2022 02866 01
INSTANCIA	Segunda -*apelación sentencia* -
DECISIÓN	Admite recurso

De conformidad con lo reglado por los artículos 322 y 323 del Código General del Proceso en armonía con el precepto 12 de la Ley 2213 de 2022, que establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, se admiten en el efecto suspensivo los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia de 29 de marzo de 2023, proferida por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este proveído, deberán sustentarse los recursos a través del correo electrónico institucional de la Secretaría de la Sala Civil de este Tribunal[1], atendiendo lo estatuido por la norma 109 del mencionado código procesal, so pena de declararse desiertos.

Presentadas en oportunidad las sustentaciones, córrase traslado por cinco (5) días a la parte contraria.

Notifíquese.

JAIME CHAVARRO MAHECHA
Magistrado

[1] secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Ref: EJECUTIVO MIXTO de CECILIA GUTIÉRREZ DE CAICEDO (q.e.p.d.) contra HEREDEROS INDETERMINADOS de JUAN MANUEL SEGOVIA BARBERI. Exp. 015-2012-00501-03.

Procede el Magistrado Sustanciador a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión del 29 de marzo de 2022, mediante la cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá negó la solicitud de renovación de la inscripción de una medida cautelar.

I. ANTECEDENTES

1.- El señor Marco Rafael Caycedo Gutiérrez, en calidad de sucesor de la parte actora, solicitó "a fin de evitar que se disponga la caducidad de la medida cautelar prevista por el art. 64 de la Ley 1579 de 2012 (vigente a partir del 1° de octubre de 2012), se ordene oficiar con destino a la Oficina de Registro Zona Centro de esta ciudad (...) solicitando la renovación de la inscripción de la medida cautelar de embargo, dispuesta en esta ejecución sobre la prenda hipotecaria, según la décimo primera (11) anotación de su folio de matrícula n.° 50N-716963".

2.- En la providencia cuestionada, la juez de primer grado negó lo pedido, "en la medida que no se cumplen los presupuestos consagrados" en la citada disposición normativa.

3.- Inconforme con la anterior determinación, el extremo actor interpuso recurso de reposición y en subsidio, apelación. Alegó que el único requisito para obtener la renovación es que se encuentre inscrita, como ya lo está. Entonces, solicitó acceder a lo deprecado para evitar que "pueda ser declarada por el Registrador la caducidad de la inscripción del aludido embargo, lo cual burlaría la justicia que se pretende, al estar dando al traste con el objeto y la garantía de esta ejecución".

4.- La a-quo, en providencia del 14 de septiembre de 2022 mantuvo incólume su determinación en razón a que la norma señala que la cancelación de la inscripción debe hacerse por acto administrativo, una vez vencido el término de vigencia o de sus prórrogas, siempre y cuando el titular del bien o la persona que demuestre un interés legítimo, lo requiera por escrito, de modo que "la facultad de Registrador (...) se encuentra condicionada a la solicitud previa del legítimamente interesado, con el fin de evitar, en este caso, la vulneración de los derechos del acreedor garantizado". Además, señaló que "los 10 años de vigencia de la medida cautelar aquí inscrita, ni siquiera están próximos a cumplirse".

5.- Resuelta de manera desfavorable la defensa horizontal, se concedió la alzada promovida en subsidio.

II. CONSIDERACIONES

1.- Sea lo primero recordar que, como lo ha sostenido la doctrina autorizada, las medidas cautelares "aseguran, dentro de lo posible, que quien recurre a la justicia podrá mantener en el trascurso del proceso un estado de cosas similar al que existía cuando presentó su demanda y obtener un adecuado y pronto restablecimiento de los derechos que le han sido reconocidos". Asimismo, buscan "asegurar el cumplimiento del derecho solicitado por la parte respectiva, usualmente la demandante, e impedir para él más males de los que por sí le ha ocasionado el demandado al constreñirlo a acudir a la administración de justicia"[1].

Por su parte, la jurisprudencia precisó: "las medidas cautelares son concebidas como una herramienta procesal a través de la cual se pretende asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales, sean personales o patrimoniales y, en este último caso, se orientan a lograr la conservación del patrimonio del obligado de salir adelante los reclamos del demandante, restringiéndose, con ello, los eventuales efectos desfavorables que puedan suscitarse ante la tardanza de los litigios. Por ello, son de naturaleza instrumental o aseguraticia, provisoria o temporal, variable o modificable y accesorias al proceso principal"[2].

2.- El tema al que alude el conflicto planteado está regulado en el artículo 64 del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, Ley 1579 de 2012, a cuyo tenor:

"Las inscripciones de las medidas cautelares tienen una vigencia de diez (10) años contados a partir de su registro. Salvo que antes de su vencimiento la autoridad judicial o administrativa que la decretó solicite la renovación de la inscripción, con la cual tendrá una nueva vigencia de cinco (5) años, prorrogables por igual período hasta por dos veces.

Vencido el término de vigencia o sus prórrogas, la inscripción será cancelada por el registrador mediante acto administrativo debidamente motivado de cúmplase, contra el cual no procederá recurso alguno; siempre y cuando medie solicitud por escrito del respectivo titular(es) del derecho real de dominio o de quien demuestre un interés legítimo en el inmueble.

PARÁGRAFO. El término de diez (10) años a que se refiere este artículo se empieza a contar a partir de la vigencia de esta ley, para las medidas cautelares registradas antes de la expedición del presente estatuto".

En el primer inciso y en el parágrafo de aquella norma, el legislador estableció las reglas para la ***procedencia de la renovación*** *de la inscripción de una cautela, que se pueden compendiar así:* ***i)*** *el registro de una medida precautoria tiene una vigencia de diez (10) años, contados a partir de su registro o, si es anterior a la ley, a partir de la vigencia de la norma;* ***ii)*** *la renovación podrá pedirse antes de su vencimiento,* ***iii)*** *está legitimada para efectuar esa solicitud*

---

[1] Hernán Fabio López Blanco, Código General del Proceso, Parte Especial, Segunda Edición, 2018, Dupré Editores, págs. 754 a 755.
[2] Corte Suprema de Justicia, Sentencia STC3917-2020, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

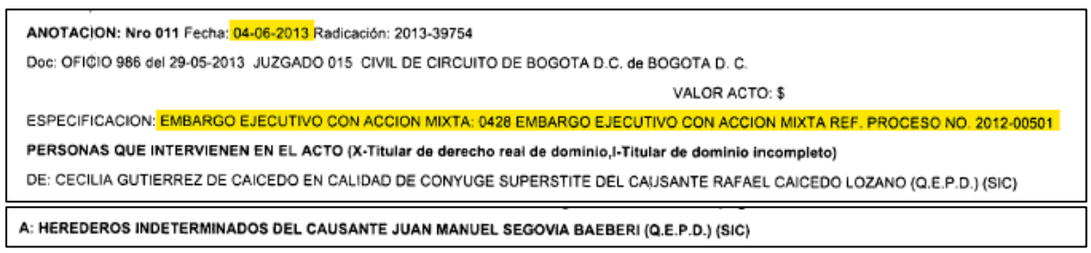
la autoridad respectiva que decretó la cautela, bien sea judicial o administrativa, según corresponda; y ***iv)*** *en el evento de proceder, se mantendrá su vigencia por cinco (5) años más, prorrogables por el mismo término, máximo dos (2) veces.*

Ya en el inciso segundo, se señaló lo relativo a la ***cancelación de la inscripción****, disponiendo en lo medular* ***que una vez vencida la década de vigor****, será el Registrador quien la declare, previa solicitud por escrito del titular de dominio o bien de una persona con interés legítimo; decisión que tendrá la naturaleza de acto administrativo no susceptible de recursos.*

3.- Bajo al anterior derrotero, se anticipa la revocatoria de la decisión atacada, por las siguientes razones:

3.2.- En primer lugar, ningún impedimento se avizora para que la juez a-quo procediera con lo pretendido por el sucesor de la parte actora. Obsérvese que lo buscado fue precisamente salvaguardar la cautela existente en su favor, lo que constituye una razón legítima en un proceso ejecutivo adelantado desde el año 2013 de naturaleza mixta donde además de la prenda general del extremo deudor se persigue una garantía real.

En efecto, al interior del compulsivo sub-examine, en providencia del 30 de abril de 2013 el Juzgado Quince Civil del Circuito decretó el embargo y secuestro del bien distinguido con la matrícula 50N-716963[3]*, orden que fue comunicada a la autoridad competente mediante Oficio n.° 986 de ese mismo año*[4]*, medida registrada en el folio del predio el* ***4 de junio de 2013****, como se ilustra en la documental arrimada*[5] *por el recurrente:*



ANOTACION: Nro 011 Fecha: 04-06-2013 Radicación: 2013-39754

Doc: OFICIO 986 del 29-05-2013 JUZGADO 015 CIVIL DE CIRCUITO DE BOGOTA D.C. de BOGOTA D. C.

VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION MIXTA: 0428 EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION MIXTA REF. PROCESO NO. 2012-00501

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CECILIA GUTIERREZ DE CAICEDO EN CALIDAD DE CONYUGE SUPERSTITE DEL CAUSANTE RAFAEL CAICEDO LOZANO (Q.E.P.D.) (SIC)

A: HEREDEROS INDETERMINADOS DEL CAUSANTE JUAN MANUEL SEGOVIA BAEBERI (Q.E.P.D.) (SIC)

Ahora, si bien para cuando se efectuó la solicitud de renovación por el interesado (8 de marzo de 2022), aún faltaba más de un año para completar el decenio (4 de junio de 2023), lo cierto es que la norma no estableció una oportunidad puntual para pedirla distinta a "antes de su vencimiento", lo que en todo caso se cumpliría.

De todas formas, no puede pasar por alto este Tribunal que, para la fecha en que se asumió conocimiento de este asunto, con ocasión de los trámites secretariales acaecidos con el expediente, ya estaban próximos a cumplirse los diez (10) años estipulados, por lo que mantener la decisión de primer grado implicaría una afectación a la parte ejecutante, en la medida que la petición cumple con los presupuestos normativos explicados y la solicitud se elevó previo al vencimiento en aras de evitar la caducidad de la inscripción.

3.3.- Por último, deviene inane al caso estudiar las disposiciones de la segunda parte de la norma antes referida, relativas a la solicitud y trámite que deberá adelantarse para la declaratoria de caducidad, comoquiera que esta jurisdicción no es la habilitada para tales efectos. Es decir, los tópicos relativos

---

[3] *Pág. 12, archivo "01CuadernoMedidasCautelares.pdf" del expediente de primera instancia.*
[4] *Pág. 14, ídem.*
[5] *Págs. 373 a 374, ídem.*

a la cancelación, así como la legitimación para alegarla, esto es, ser el titular de dominio o tener un interés válido, escapan del ámbito del fallador de primera instancia, al estar reservados para el estudio del funcionario encargado del registro.

En cambio, sí es procedente conminar a la renovación, pues bien dispone el tenor normativo que será "la autoridad judicial que la decretó" quien "solicite la renovación de la inscripción".

4.- Por lo dicho, se revocará la providencia apelada para en su lugar, disponer que el despacho cognoscente imparta el trámite respectivo a la renovación pretendida. Sin condena en costas ante la prosperidad del reclamo.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Magistrado Sustanciador del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Civil,

RESUELVE:

*1.- **REVOCAR** el auto objeto de censura adiado 29 de marzo de 2022, pronunciado por el Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá; en su lugar, **ORDENAR** al juzgado de primer grado impartir el trámite correspondiente a la renovación de la medida cautelar objeto de registro que afecta al bien identificado con matrícula inmobiliaria n.° 50N-716963.*

2.- Sin condena en costas, ante la prosperidad del recurso.

3.- En firme este proveído, retorne el expediente al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE



JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
MAGISTRADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Ref: VERBAL de PERTENENCIA de RIPARK EU contra HEREDEROS INDETERMINADOS Y DETERMINADOS DE JOSÉ SANTOS ROJAS y otros. Exp. 019-2018-00689-01.

Obedézcase y cúmplase *lo resuelto por la H. Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil mediante providencia calendada 12 de mayo de 2023.*

Por la Secretaría del Tribunal devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

CÚMPLASE



JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
MAGISTRADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Ref: VERBAL de YENNY DEL SOCORRO JARAMILLO contra LINA ROCÍO RODRÍGUEZ PARRA. Exp. 002-2022-00085-02.

Atendiendo al contenido del artículo 12 de Ley 2213 de 2022, se dispone:

*1.- **ADMITIR** en el efecto **SUSPENSIVO** los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia dictada el 21 de abril de 2023 por la Directora Jurisdicción Societaria III de la Superintendencia de Sociedades.*

2.- Conforme lo establecido en el inciso 3º de la citada norma, a cuyo tenor: "Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes", vencido aquél, la contraparte deberá descorrer, si así lo considera, el traslado; términos que comenzaran a contabilizarse desde la ejecutoria de esta determinación.

*3.-Por Secretaría **comuníquese a los apoderados de los intervinientes** las determinaciones que se adopten en el marco de la norma reseñada vía correo electrónico[1], empero en caso de no llegar a obrar la misma en el expediente, pese a ser una obligación de los togados, remítanse las comunicaciones correspondientes a la dirección física que hayan informado en el expediente o en el Registro Nacional de Abogados.*

A su turno, las partes contendientes deberán dirigir sus escritos o memoriales con destino a este asunto al correo electrónico del Secretario Judicial de esta Corporación secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia a la escribiente encargada de los procesos del suscrito Magistrado mparradv@cendoj.ramajudicial.gov.co

4.- Concurrente con lo antes señalado, los profesionales del derecho deberán dar estricto cumplimiento al numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso, so pena de imposición de multa, en los términos allí previstos.

---

[1] *Esta comunicación no reemplaza la notificación por estado electrónico y se hace para dar mayor garantía a las partes.*

5.- Cumplido lo anterior, ingresen las diligencias al despacho.

NOTIFÍQUESE



JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
MAGISTRADO

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Radicación: 110013103005-2012-00555-01
Demandante: Leydi Yanexy Sánchez Sarmiento y otro
Demandado: Famisanar E.P.S.
Proceso: Ordinario
Trámite: Devuelve expediente

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Revisado este asunto, obsérvase que no puede tramitarse el recurso de apelación, de examinar que el expediente está incompleto.

1. En efecto, en el pdf del cuaderno principal consta del escaneo del expediente físico hasta el folio 462, que incluye como única contestación de la demanda la de Caja de Compensación Familiar Cafam.

2. El pdf del cuaderno dos (72 folios), corresponde al llamamiento en garantía de esa entidad a la aseguradora Allianz Seguros S.A., quien presentó excepciones.

3. El pdf del cuaderno tres (23 folios), trata del llamamiento en garantía de Famisanar E.P.S. a la Caja de Compensación Familiar Cafam, quien formuló excepciones al llamamiento.

4. El cuaderno cuatro contiene el video de la audiencia de alegatos de 30 de marzo de 2022 (001), la sentencia escrita (003), escrito de reparos de apelación (004), auto que concede el recurso en el efecto suspensivo (005), y la renuncia del poder de la apoderada de Famisanar S.A.S. y su aceptación (006 y 007).

La anterior descripción del legajo coincide con el índice electrónico y el oficio remisorio de 15 de junio de 2023, de lo cual la secretaria del juzgado certificó que el expediente se encuentra "*debidamente foliado, completo (con todas las piezas que lo conforman), de acuerdo a los nuevos protocolos de digitalización*" (pdf 008 del cuad. 04).

Sin embargo, al seguir la secuencia de las actuaciones se observa la ausencia de muchas piezas del expediente, a partir de los que deberían ser

los folios 463 y siguientes del expediente físico original, que al parecer corresponden, entre otras actuaciones, a la contestación a la demanda de Famisanar, la audiencia del art. 101 del anterior Código de Procedimiento Civil, el decreto y práctica de pruebas, los interrogatorios de parte, la etapa de instrucción y hasta el acta de la audiencia en la que solo se escucharon alegatos de conclusión, actuaciones que se encuentran referenciadas en los antecedentes de la sentencia apelada.

Por consiguiente, devuélvase la actuación al despacho de origen, con el fin de que, antes de remitirla al Tribunal, se organice el expediente escaneado debidamente y en forma completa, con inclusión de todas las actuaciones, como los escritos de las partes, las los autos, los medios audiovisuales de las audiencias de primera instancia o las respectivas actas, todo acorde con las normas del *Protocolo para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación del expediente*", expedido con base en el acuerdo PCSJA20/11567 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas que lo complementen y adicionen.

Notifíquese y cúmplase.



JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
MAGISTRADO TRIBUNAL SUP. DE BOGOTÁ, SALA CIVIL

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

MAGISTRADO PONENTE	: **JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO**
RADICACIÓN	: **11001-31-03-029-2022-00161-01**
PROCESO	: **EXPROPIACION**
DEMANDANTE	: **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**
DEMANDADO	: **EDGAR JAIME ISAZA ISAZA Y OTROS.**
ASUNTO	: **IMPUGNACIÓN SENTENCIA**

De conformidad con el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, frente a la sentencia proferida el 9 de febrero de 2023, por el Juzgado Veintinueve Civil Circuito de Bogotá, en el asunto del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante demanda de expropiación, pretende la entidad accionante, en esencia, que "(…) *se decrete la expropiación por vía judicial a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, de un ÁREA PARCIAL de terreno CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE METROS CUADRADOS (135.213 M2), Ó TRECE HECTÁREAS QUINIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS METROS CUADRADOS (13.521300 Ha)* (…) *la cual será segregada del predio de mayor extensión denominado CABAÑA (LA) SEGREGACIÓN / LA CABAÑA SEGREGACIÓN, ubicado en la Vereda Puerto Escondido, del Municipio de Titiribí, Departamento de Antioquia* (…). *Incluyendo las mejoras y construcciones que se relacionan* [en el escrito genitor]"; además de ratificarse en "*la entrega anticipada del inmueble, previa la consignación a órdenes del Juzgado de un valor de* (…) *($777.471.347), adeudado por la Concesionaria Vía del Pacífico S.A.S. al señor EDGAR JAIME ISAZA ISAZA*", y darse las órdenes correspondientes a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Titiribí.

Como sustento de sus aspiraciones, entre otros supuestos, anotó que "*la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, suscribió con la CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO S.A.S. -COVIPACIFICO S.A.S., el contrato de Concesión bajo el esquema de APP N°0007 de 2014",* para desarrollar el Proyecto Vial Autopista Conexión Pacífico 1. En ese contexto, fue declarada

de utilidad pública la zona de ubicación del terreno objeto de este litigio, cuyo "*titular inscrito del derecho real de dominio*" es Edgar Jaime Isaza Isaza. Así, se obtuvo el avalúo corporativo N°ACP1-01-028 del 14 de noviembre de 2018, por el monto de $853.706.681, y "*con base en* [esto, se] (…) *formuló* (…) [al propietario] *el alcance a la Oferta Formal de Compra* (…) [quien la] *rechazó* (…) *y solicitó la revisión y la adquisición de áreas adicionales*"; pero, tras resolverse las objeciones, se ratificó dicha valoración predial, y "*debido a la no aceptación del titular del derecho real de dominio de la Oferta Formal de Compra y vencido el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la misma sin que se haya llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, según el artículo 4 de la Ley 1742 de 2014, modificado por la Ley 1882 de 2018, en razón al desacuerdo presentado por el valor del informe de avalúo corporativo, se procede a dar inicio al proceso de expropiación judicial.*"

2. Dentro de la oportunidad concedida, Edgar Jaime Isaza Isaza indicó que el avalúo aportado por la parte actora "*NO ES CORPORATIVO, porque quien lo hizo NO ES NI UN GREMIO NI UNA LONJA como lo establece la Ley 1673 de 19 de julio de 2013, reglamentada por el decreto 556 de 2014, y en consecuencia* (…) *NO PUEDE HABER OFERTA NO HAY PRECIO Y ESTE NO EXISTE PORQUE EL AVALUO NO FUE ELABORADO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY. No fue Corporativo y mucho menos elaborado por una Lonja o gremio y a su vez por los afiliados de este*". Agregó que "*el avalúo como lo dice la ANI fue elaborado por la firma VALORAR pero este adolece de errores fundamentales como el haber desconocido los valores comerciales del predio, y las normas que sobre la materia establece la oficina de Planeación Municipal de Titiribí, jurisdicción a la cual está vinculado el inmueble* (…)*. Teniendo en cuenta lo narrado* (…) *encargó a la SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES LONJA SECCIONAL ANTIOQUIA* (…) *un avalúo COMERCIAL Y CORPORATIVO DEL PREDIO en el cual se estableciera por diferentes miembros afiliados a ella cual era el valor comercial del bien que hoy pretenden expropiar. El dictamen de fecha 05 de diciembre de 2018* (…) *entregado a la concesionaria, establece que el valor del área comprometida es un valor totalmente diferente al avalúo espurio que* [le] *están poniendo como soporte a una oferta mercantil.*" Aclaró que "*entregó el predio confiando en dos cosas una que la concesionaria iba a contratar una Lonja de Propiedad Raíz y dos que esta entidad haría un avalúo comercial, pero no paso ni lo uno ni lo otro, VALORAR NO ES LONJA".*

3. La curadora *ad litem* de los demandados Bernardo Ángel Vélez e Iván Uribe Restrepo, al momento de referirse a los hechos del escrito iniciático, manifestó que no se oponía a las pretensiones, "*siempre y cuando se le reponga a* [sus] *representados, en uno de los polígonos sobrantes, la servidumbre de que trata la anotación número 3 del folio de matrícula inmobiliaria número 033-3813 'Derecho al uso del Agua"*.

II. LA SENTENCIA APELADA

1. Agotada la ritualidad consagrada para esta clase de asuntos, la juzgadora de primera instancia decretó la expropiación deprecada y, entre otros mandatos, ordenó a la demandante consignar "*el saldo de pago para ajustar el precio de la indemnización por suma de $36.063.291*", además, dispuso "*el pago del título judicial por valor de $777.471.347 al demandado*", con fundamento en las consideraciones que admiten el siguiente compendio:

1.1. Sobre la indemnización a la que tiene derecho el extremo pasivo, indicó:

"Los reproches, según los cuales, el perito no tiene la idoneidad e imparcialidad, el trabajo pericial de la parte demandante perdió vigencia y la tacha de sospecha, no se estructuran. El primero, tanto en el dictamen pericial como en su contradicción, el señor JORGE MEDRANO VEGA, quien participó en la elaboración del informe, desde su rol en la compañía contratada para rendir el informe Empresa de Avalúos y Tasaciones Valorar S.A, coordinador del comité técnico RAA demostró tener una vasta experiencia y amplios conocimientos en la materia de avalúos para adquisición de predios en infraestructura vial, ya que, es ingeniero catastral y geodesta, especializado y magister, quien ha participado en la elaboración de un poco de más 3000 dictámenes periciales para distintos proyectos viales a nivel nacional, y, con contradicción judicial en más de 250 procesos. Tiene amplios conocimientos en la materia, pues, es profesor universitario en posgrados de por lo menos dos universidades reconocidas, ha escrito artículos y estos han sido publicados en diferentes portales, también ha participado en conferencias a nivel nacional e internacional, estos cuando era empleado de Valorar SAS.

Su imparcialidad, pese a ser cuestionada desde el ámbito de las aristas del contrato de prestación de servicios que suscribió con el representante legal suplente de Valorar SA con la concesionaría contratante del avalúo, no se configura, dado que, pese a la cláusula de indemnidad, el dictamen se ajusta a los preceptos normativos que regulan esta clases de experticias, por lo demás, no se indica cual sería el favorecimiento de las partes o el perjuicio, porque de existir tales, el demandado cuenta con la oportunidad para contradecir el dictamen, conforme se hizo en este escenario. A cuál más la cláusula de aquel contrato no afectan ni ven comprometido los intereses de la demandada, estas resultan ley únicamente entre las partes involucradas, de acogerse la tesis planteada por la demandada, impediría que los empleados de Valorar SA, asistieran a diligencias de contradicción de sus dictámenes. Recuérdese, que esta es la oportunidad para formular los cuestionamientos y reparos que los mismos adolecen, entre los cuales esta los puntos de valoración y métodos utilizados.

En cuanto a la vigencia del dictamen, es asunto que debió atacarse mediante recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda; más

como se contestó la demanda, sin protestarlo, se entiende, aceptado su contenido, luego, entonces, consintió tácitamente la actuación. Además, el avalúo fue elaborado para soportar la oferta formal y ante su negativa sirvió como anexo de la demanda.

Por último, la tacha de sospecha que se formula contra el perito, por virtud de la regla 7ª del artículo 399 del CGP, deviene improcedente y por lo mismo se rechaza. Fue el legislador quien dispuso que en caso de existir controversia sobre la indemnización se interrogue a los peritos, por eso su participación. Al fin de cuentas, quien más que el perito que participó en la elaboración del dictamen la persona llamada a esclarecer la forma y los métodos que utilizó para la elaboración del mismo. Súmese, lo estatuido en el artículo 228 ibidem. A cuál más, la recusación del perito a estas alturas del proceso resulta extemporánea, según lo dispuesto en el Art. 142 CGP, comoquiera que debió ser con la contestación de la demanda presentada, primera actuación desplegada por la parte demandada en curso del proceso, ya que fue con el traslado que tuvo conocimiento del dictamen y las personas que participaron en su elaboración, más ello no fue así".

1.2. Al examinar los dictámenes aportados a la actuación, sostuvo:

i) "*Informe de Avalúo Comercial Corporativo N°ACP1-01-028 elaborado por la Empresa de Avalúos y Tasaciones Valorar S.A., a instancia de la parte demandante, suscrito por Daniel Amézquita (Avaluador Comisionado), Jorge Medrano Vega (Coordinador Comité Técnico RAA) y Jorge Mario Ángel (Representante Legal Valorar RAA S.A.),* (…) [e]*n suma, el trabajo realizado por el experto, grosso modo, cumple con los requisitos generales contenidos en el artículo 226 del Estatuto Procesal, pues explicó con claridad la metodología empleada, los elementos que tuvo en cuenta, la forma en qué obtuvo los porcentajes indicados para arribar al precio final y aunque no acompañó los documentos que dijo haber consultado según lo requiere la resolución del IGAC, no le resta fuerza demostrativa, pues sus explanaciones concuerdan con la metodología expresada".*

ii) "*Con relación al dictamen traído por la demandada, elaborado por Sociedad Colombiana de Avaluadores, suscrito, entre otros, por el perito Carlos Alberto Delgado*", concluyó que "*no es claro en sus fundamentos, lo que impide que se le otorgue pleno valor, por manera que el despacho acoge el trabajo del experto presentado a costa de la entidad demandante por la Empresa de Avalúos y Tasaciones Valorar S.A, atendiendo los postulados de la sana critica, conforme el artículo 176 del Código General del Proceso* (…)*".*

III. LA IMPUGNACIÓN

1. En descuerdo con el fallo de primera instancia, en la oportunidad de que trata el numeral 3, inciso 3, del artículo 322 del C.G.P.,

el apoderado de Edgar Jaime Isaza Isaza interpuso recurso de apelación, exteriorizando sus reparos, que reprodujo en la fase procedimental contemplada en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022:

1.1. Cuestionó el contrato celebrado entre la entidad actora y Valorar S.A., porque, en su opinión, tal convención desconoce los artículos 226 y 235 del Código General del Proceso, pues, conforme a las condiciones establecidas en las cláusulas cuarta (numerales 14, 22 y 24), sexta, octava (parágrafo tercero), décima primera (literal c), décima segunda, décima quinta (literal f), hizo que el perito perdiera "*objetividad e imparcialidad*", situación que le está causando perjuicios, incluso, "*este contrato hace que la obligación del perito que es de medio* (…) *se vuelva de resultado consistente* (…) *en obtener un avalúo conforme a las instrucciones conferidas*", hasta el punto que el "*contratante demandante* [puede] *objetar el dictamen que no le conviene*".

1.2. Insistió en que "*el perito manifestó tener una serie de calidades que no acreditó y el despacho sin ahondar en ello* (…) *lo aceptó, habló de títulos, publicaciones, asesorías, etc., pero la sentencia no tuvo en cuenta lo más importante, el perito nunca fue miembro de la lonja de propiedad raíz al momento de la firma del avalúo* (…) *la persona que asistió al despacho a deponer sobre el testimonio no era la idónea y por lo tanto el avalúo no se sustentó en debida forma, por la falta de demostración de las calidades del compareciente* (…) *nunca fue al predio objeto del avalúo* (…) *habló de términos de referencia de bienes que no sabía dónde estaban ubicados (no sabía la ubicación de la vereda Sabaletas), pero sí sabía dónde estaba LA SIRIA que queda frente al bien expropiado a los diez o quince metros donde los valores de los inmuebles son totalmente diferentes Y NO LOS TUVO EN CUENTA.*"

1.3. Expuso que denunció a Valorar S.A. por "*su falta de imparcialidad y objetividad*", ante la "A.N.A." -Autorregulador Nacional de Avaluadores-, "*pero el perito manifestó reiterativamente su intervención ante esa entidad por la denuncia de* [su] *cliente, esto muestra su prevención en contra del Doctor Edgar Jaime Isaza Isaza, situación que hace que el testimonio del Doctor Medrano sea parcial* (…) *proveniente del sentimiento o animadversión que el deponente tiene en contra del demandado*".

1.4. Indicó que la juez, en su sentencia, desestimó "*el documento proveniente del director o secretario de Planeación de Titiribí Antioquia el cual aportó el perito CARLOS ALBERTO DELGADO RESTREPO junto con su dictamen y el cual sirvió para llegar a un avalúo comercial del predio objeto de expropiación todo esto despreciado por el despacho*".

1.5. Explicó que la experticia aportada por la demandante no tiene el carácter de ser comercial, "*porque no tuvo en cuenta el valor más probable en que se podría comercializar el bien sus términos de referencia fueron bienes fuera del ámbito de ubicación del inmueble, vereda SABALETAS Y DIJO INICIALMENTE QUE ERAN PREDIOS COLINDANTES MOSTRÁNDOLO EN UN PLANO QUE NADA INDICABA AL RESPECTO Y OLVIDANDO LA PARCELACIÓN LA SIRIA QUE ESTA VÍA DE por medio con el predio objeto de la expropiación*".

1.6. Manifestó que el "*despacho interrogó y le puso de presente al perito CARLOS ALBERTO DELGADO RESTREPO un avalúo diferente al establecido con anterioridad por el despacho de Titiribí que estableció que el dictamen sobre el cual se debía deponer era el de 12 de agosto de 2019 el cual tiene 48 páginas y se le puso de presente uno que tiene 51 páginas haciéndolo incurrir en el error al no poder responder con precisión los interrogantes del despacho y de las partes* (…)".

1.7. Finalmente, puso de relieve que "*1.- el avalúo elaborado por VALORAR tiene fecha 31 de julio de 2018. 2.- La resolución 1085 de expropiación tiene fecha 17 de julio de 2019. 3.- El poder del apoderado del demandante tiene fecha de autenticación 12 de agosto de 2019. 4.- El auto admisorio de la demanda proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Titiribí tiene fecha noviembre 01 de 2019. 5.- Como obra en el plenario y manifestado POR AMBOS PERITOS el término de duración de un avalúo es de un año. Así las cosas, tenemos que el avalúo lo hicieron antes de la resolución de expropiación exactamente 11 meses y varios días antes de la expropiación, el mencionado avalúo cuando se otorgó el poder ya estaba vencido y cuando se admitió la demanda también estaba vencido*".

2. Al descorrer el traslado de la apelación, la Agencia Nacional de Infraestructura, por intermedio de su mandataria, se opuso a la prosperidad del recurso, tras estimar, en síntesis, que "*el recurrente ha presentado apreciaciones subjetivas referentes a su interpretación del clausulado del contrato realizado por la entidad contratante debidamente avalada por la ANI en calidad de adquirente en virtud de lo consagrado en el Contrato de Concesión APP 007 de 2014, para la elaboración de los avalúos comerciales corporativos para el Proyecto Autopista Conexión Pacífico 1.*". Además, señaló que el "*informe valuatorio fue realizado por una entidad privada adscrita a una lonja de propiedad raíz desde el año 2009 de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013. ii) el informe de avalúo se ajustó a cada uno de los parámetros establecidos para la realización de estos y está de acuerdo con el artículo 226 del CGP. iii) En la rendición del peritazgo el perito avaluador Jorge Alberto Medrano, en atención a lo indicado por la Señora Juez en primera instancia enlistó sus estudios académicos, publicaciones, experiencia en procesos judiciales, experiencia en elaboración informes valuatorios para Proyectos de Infraestructura, metodología valuatoria* (…).*"*

IV. CONSIDERACIONES

1. Encontrándose presentes los presupuestos procesales necesarios para adoptar una decisión de fondo, y no habiendo vicio que pueda invalidar lo rituado -dentro el marco decisorio y dialéctico comprendido en la transliteración que, en los antecedentes de esta providencia, se hizo de la motivación del fallo cuestionado y de los reparos formulados por la apelante-, el Tribunal desatará el recurso en lo precisos términos de los artículos 320 y 328 del C.G.P.

2. Para empezar, y con el propósito de dar respuesta a las censuras constitutivas de la alzada, recuérdese, "*porque viene al caso, que de antaño la Corte tiene dicho que el dictamen pericial, como medio de prueba, es susceptible de ser valorado, pues aun cuando se trata de una prueba técnica no es de obligatoria aceptación para el funcionario judicial. Por el contrario, este elemento de convicción es de libre apreciación para él, quien puede argumentar por qué no le merece la suficiente credibilidad al adolecer de deficiencias en sus fundamentaciones o de lógica en sus conclusiones. (CSJ SC de 29 abr. 1942, 11 dic. 1945, 3 sep. 1954, 17 jun. 1970, 15 dic. 1973, entre otras).*

Entre los requisitos para la eficacia probatoria del dictamen pericial, se encuentran: a) que sea un medio conducente respecto del hecho por probar; b) que el perito sea competente para el desempeño de su encargo; c) que no exista motivo serio para dudar de su imparcialidad o sinceridad; d) que esté debidamente fundamentado; e) que sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos; y f) que del trabajo se haya dado traslado a las partes; correspondiendo al juez el análisis de tales requisitos para establecer la eficacia probatoria del dictamen.

La prueba pericial, por ende, no es camisa de fuerza para el juez, sino medio probatorio que, a pesar de tener carácter especial por su calificación técnica, no impone a tal funcionario la obligación de acogerlo, puesto que, al igual que los demás materiales de convicción, está sometido a las reglas de la sana crítica (art. 176 CGP).

Con otras palabras, al valorar la experticia debe tenerse en cuenta la firmeza, precisión, claridad, exhaustividad y calidad de sus fundamentos (art. 232 CGP)" (CSJ SC3689-2021).

En esa línea de pensamiento, téngase presente que el artículo 399 del Código General del Proceso preceptúa que a la demanda de expropiación "*se acompañará* (…) *un avalúo de los bienes objeto de ella*"; igualmente, establece que "*cuando el demandado esté en desacuerdo con el avalúo o considere que hay lugar a indemnización por conceptos no incluidos en él o por un mayor valor, deberá aportar un dictamen pericial elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o por una lonja de propiedad raíz, del*

cual se le correrá traslado al demandante por tres (3) días (…)"; y que vencido el traslado de "*la demanda al demandado o del avalúo al demandante, según el caso, el juez convocará a audiencia en la que interrogará a los peritos que hayan elaborado los avalúos y dictará sentencia. En la sentencia se resolverá sobre la expropiación, y si la decreta* (…) *determinará el valor de la indemnización*".

En concordancia con lo anterior, el canon 228 *ibidem,* refiriéndose a la "*contradicción del dictamen*", es claro en señalar que se "*citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes* (…)".

3. Ubicadas así las cosas, y examinado el acopio probatorio que reposa en la foliatura, este Colegiado anticipa el fracaso del recurso, puesto que las inconformidades traídas por el apelante -que basilarmente cuestionan el dictamen allegado por la demandante- no logran derruir los argumentos torales en que se cimentó dicha decisión, como a continuación pasan a explicarse:

3.1. Primeramente, importa relievar que, en acatamiento de la normatividad citada *ut supra*, la parte actora aportó el "*avalúo comercial rural*" elaborado por la empresa Valorar S.A., experticia que fue suscrita por Daniel Amézquita (Avaluador Comisionado), Jorge Medrano Vega (Coordinador Comité Técnico RAA) y Jorge Mario Ángel (Representante legal de Valorar RAA S.A.).

Asimismo, se evidencia que, para efectos de la contradicción de los dictámenes, la juez de primera instancia realizó la respectiva audiencia los días 8 y 9 de febrero de 2023, y, en su fase inicial, resolvió tener "*por justificada la inasistencia del perito avaluador Daniel Amézquita Aldana* (…) *y, en su lugar, interrogará al Coordinador o al que fuera el Coordinador del Comité Técnico de Avalúo de Valorar S.A.* (…) *Ingeniero Jorge Medrano Vega, quien según lo informado, participó y suscribió el avalúo presentado con la demanda*", decisión que fue notificada en estrados, sin objeción por parte de los intervinientes.

En dicha vista pública, se recibió la sustentación del informe técnico elaborado, entre otros expertos, por Jorge Alberto Medrano Vega, quien dijo, bajo la gravedad del juramento, ser "*Ingeniero Catastral y Geodesta*", con especialización en "*Avalúos*" de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el año 2011, "*con título de Máster en Métodos de*

Valoración Multi Criterio en el año 2018 (…) *de la Universidad Politécnica de Valencia, España*", y, además, afirmó, ser docente en la Especialización de Avalúos del primer establecimiento educativo en mención y dictar cátedra "*sobre evaluaciones de predios para proyectos de infraestructura*", en la Universidad Nacional de Lima (Perú). De igual manera, y respecto de su experiencia, referenció que lleva "*más o menos diez años elaborando, coordinando, supervisando y gerenciando avalúos para proyectos de infraestructura de transporte terrestre en diferentes proyectos como Ruta del Sol, Transversal de las Américas, Autopista Medellín-Bogotá* (…) *Túnel de Aburrá Oriente, Pacífico Uno que es el que nos compete aquí* (…) *etc*", y que ha "*tenido la oportunidad de defenderlos en diferentes instancias judiciales para procesos de expropiación*".

Ante la pregunta de ¿*Cuántos trabajos periciales, si lo recuerda, similares al presentado en este proceso ha presentado usted*?, manifestó: "*creo que debo estar por el orden de los 3200 peritajes que he hecho en todos los procesos, porque la mayoría se van por enajenación voluntaria* (…) [y] *entre un 5% y 7%* [por] *enajenación forzosa o expropiación de los diferentes proyectos. Entonces, de todos los proyectos que mencione ahorita he participado en la defensa de dichos dictámenes para procesos de expropiación en diferentes juzgados en Bogotá, Medellín, Amagá, en Titiribí y en Venecia* (…) *para darle una cifra global, pues estaba tal vez en unos 200 procesos de expropiación* (…)".

Luego, la funcionaria cognoscente lo requirió para que informara si está registrado en el Registro de Avaluadores. "*Y si en caso de ser así, ¿con qué especialidades.?* Para lo cual contestó: "*Yo estoy en el registro abierto de avaluadores desde el año 2017. Le recuerdo que la Ley Nacional Profesional de Avaluadores es del año 2013, se reglamentó con el Decreto 556 de 2014 y empezó a funcionar después de los dos años de transición* (…) *cuando se fundó la primera ERA, que se conoce como el auto regulador nacional de Avaluadores, eso fue en el año 2017. Entonces, estoy vinculado desde que se creó la primera, ir al RAV (Registro Abierto de Avaluadores), con el registro Aval 79925679. Las especialidades en las que estoy registrado son avalúos rurales, avalúos urbanos, avalúos especiales, maquinaria, equipo, intangibles especiales, recursos naturales y suelos de protección, establecimientos de comercio por el método de la renta. Creo que ahí están todos en 8 categorías*".

Y, más adelante, explicó: "*Valorar es una empresa afiliada a la Lonja de Medellín* [que] *es un gremio, hay veintidós gremios a nivel nacional que son las lonjas de las diferentes regiones, hay Lonja Bogotá, Lonja de Cali, Lonja de Barranquilla, Lonja de Medellín, Lonja de Antioquia. Valorar es una empresa afiliada a ese gremio".*

Adicionalmente, indicó que su función o participación en la elaboración del dictamen pericial presentado en este proceso, se concretó a "*presidir el Comité o la mesa que iba a aprobar los valores, metodologías utilizadas para liquidar el valor de la indemnización, a saber, por la enajenación voluntario del predio denominado La Cabaña con el consecutivo ACP 1-01-028, asignado por Pacífico Dos por allá en el mes de octubre del año 2018* (…)".

Posteriormente, se le concedió la palabra al mandatario de Edgar Jaime Isaza, para que contrainterrogara a Medrano Vega, no sin antes precisarle: "*Puede doctor Zuluaga interrogar al perito y las preguntas que usted tenga con relación a la imparcialidad del perito, se las puede formular, porque, pues, este precisamente, es el momento para que usted lo haga doctor Zuluaga* (…)".

En ese escenario procesal, dicho procurador judicial desarrolló la formulación de sus preguntas, laborío que, para una mejor comprensión, se describe así:

PREGUNTADO: *¿Es usted miembro de la lonja de propiedad raíz o lo era al momento de la elaboración del avalúo que aquí se debate?* CONTESTÓ: *Era empleado de una empresa afiliada a la lonja de propiedad raíz y actualmente soy afiliado por mi empresa a la lonja de propiedad raíz.* PREGUNTADO: "*Para clarificar. ¿Al momento del avalúo no era miembro de la lonja de propiedad raíz?*" CONTESTÓ: *Era empleado de una empresa miembro de la lonja de la propiedad raíz.*" (…). PREGUNTADO: *¿Valorar es una lonja de propiedad raíz o era una lonja de propiedad raíz al momento de la elaboración de este avalúo?* CONTESTÓ: *No, Valorar no es una lonja, es una empresa con ánimo de lucro afiliada a una lonja de propiedad raíz, domiciliada en el departamento de Antioquia.*

Seguidamente, el profesional del derecho dirigió su interrogatorio, única y exclusivamente, a solventar las dudas relacionadas con el contenido del dictamen allegado por la ANI, sin indagar acerca de la experiencia, cualificación y neutralidad del deponente.

3.2. Dentro de ese proscenio demostrativo, se avista, sin dificultad, que la falta de objetividad, imparcialidad e idoneidad, endilgada por el recurrente a quienes elaboraron la experticia, en nombre y representación de Avalúos y Tasaciones de Colombia Valorar S.A., fue un aspecto no planteado en la audiencia celebrada el 8 de febrero de 2023, considerando que al momento de contrainterrogar al ingeniero Jorge Alberto Medrano Vega -quien actuó como Coordinador del Comité Técnico, y en tal calidad suscribió el avalúo comercial objeto del presente proceso-, el apoderado del demandado omitió averiguar sobre la ecuanimidad de su

juicio, así como las capacidades y competencias profesionales del experto para rendir el trabajo técnico encomendado, es decir, no hizo uso de las facultades consagradas en el artículo 228 del C.G.P.; olvidando que "[c]*aros principios del derecho procesal, como los de preclusión y eventualidad, indican que cuando se agota un estadio procesal no es posible reabrirlo, menos aun cuando se acepta pasivamente una determinación al no promover los mecanismos de control dispuestos en la legislación para obtener su modificación o revocatoria.*"[1] De ahí que no sea de recibo que en sede de apelación, sin mediar elemento persuasivo, se pretenda descalificar las calidades del perito, pues tal preceder desconoce que "*cuando una etapa del litigio ha sido superada no es posible volver sobre ella a riesgo de tornar interminable el debate. Por ende, contravenir los imperativos de economía procesal, tutela judicial efectiva y duración razonable de los procesos, así como quebrantar el principio de seguridad jurídica, con respecto a los sujetos que intervienen en la controversia y de las etapas surtidas en el proceso.*"[2]

Adicional a lo expuesto, comporta destacar que en la sustentación del recurso se hizo especial énfasis en el contrato suscrito entre el Consorcio Constructor Pacífico 1 y Avalúos y Tasaciones de Colombia Valorar S.A., el cual tenía por objeto que ésta última compañía, en su condición de contratista, debía realizar "*un avalúo comercial corporativo a cada uno de los predios y de las mejoras* (…) *que se encuentren ubicados en zona de influencia para la construcción del proyecto denominado Autopista Conexión Pacífico*". También se hizo referencia a una denuncia radicada ante el Autorregulador Nacional de Avaluadores en contra de Valorar S.A.; convenio y queja aludidos que, en sentir del censor, rompieron con la objetividad e imparcialidad de la última sociedad en mención, pues, el dictamen debía rendirse conforme a la cláusula de indemnidad pactada; y, de otro lado, el "*testimonio*" del señor Medrano Vega es "*parcial* (…) *proveniente del sentimiento o animadversión que el deponente tiene en contra del demandado*", con ocasión a esa acusación.

No obstante, el apoderado de Edgar Jaime Isaza, al iniciar su intervención en la vista pública celebrada el 8 de febrero de 2023, intentó "*tachar el dictamen*" con fundamento en la misma argumentación expuesta en la impugnación, es decir, indicó que "*ese contrato, tiene dentro de sus muchas cláusulas* [haciendo alusión a las estipulaciones contenidas en los numerales 4, 6, 8, 11, 15] *que le restan independencia al perito*", pero, la juez frente a dicha solicitud, le requirió que podía interrogar al perito "*con relación a la imparcialidad*", situación que, en últimas, no ocurrió, ya que tal

[1] CSJ. SC4263-2020, rad. 54001-31-10-003-2011-00280-01
[2] CSJ. AC916-2021, rad. 11001-02-03-000-2019-00033-02

clausulado no se le puso de presente al ingeniero Medrano Vega, a fin de que éste se pronunciara al respecto, e informara si en verdad, su juicio o discernimiento, junto con el de su equipo de trabajo, fue alterado por las condiciones acordadas en esa relación contractual. Y si bien el experto mencionó, de manera tangencial, la denuncia que radicó el extremo pasivo en contra de Valorar S.A., tal circunstancia, por sí sola, no dejó entrever ni acreditó la presunta "*animadversión*" en disfavor del demandado.

3.3. Esa suerte frustránea se hace extensiva al cuestionamiento soportado en que Medrano Vega "*nunca fue miembro de la lonja de propiedad raíz al momento de la firma del avalúo*", porque además de que tal requisito sería exigible a la entidad contratada para realizar el informe valuatorio, según el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, esta particular crítica no fue elevada en la fase del contrainterrogatorio, pese que el ingeniero valuador aseveró estar inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores desde el año 2017 y que Avaluar S.A. es una empresa afiliada a la Lonja de Medellín, y explicar con detalle que "*Valorar S.A. es una sociedad cuyo mayor accionista es la lonja propia de Medellín. El mayor accionista de Valorar es la misma Lonja. Los otros accionistas de valorar que actualmente deben ser unos 140, son las empresas de avalúos y algunas constructoras de Medellín que son afiliadas a la Lonja*"; situación que, valga resaltar, quedó definida en la Resolución No. 1424 del 19 de septiembre de 2019, "*por medio de la cual se resuelve el recuso reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 1085 del 17 julio de 2019, expedida por la Agencia Nacional de infraestructura",* al precisarse que *"VALORAR S.A. cumple con los requisitos establecidos para la elaboración de avalúos de infraestructura al ser una persona jurídica afiliada a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia y por ende, se encuentra autorizada para la realización de los Avalúos Comerciales, los cuales cuentan con la aprobación de un grupo de expertos en la materia (mesa colegiada), que revisan y aprueban el fondo , la forma, las metodologías aplicadas y los valores determinados en cada avalúo de acuerdo con los parámetros establecidos en al normatividad vigente en materia de avalúos, esto es el decreto 1420 de 199* (sic)*, Resolución 620 de 2008, modificada a su vez por la Resolución No. 316 de 2005. Es de aclarar, que esta Agencia dio su NO OBJECIÓN a la lonja mediante oficio radicado No. 2015-604-015828-1 de fecha 17 de julio de 2015."*

3.4. Improsperidad que igualmente abarca al reparo fundado en que el trabajo pericial no es un avalúo comercial ni corporativo, porque, supuestamente, "*no tuvo en cuenta el valor más probable en que se podría comercializar el bien sus términos de referencia fueron bienes fuera del ámbito de ubicación del inmueble, vereda SABALETAS y dijo inicialmente que eran predios colindantes mostrándolo en un plano que nada indicaba al respecto y olvidando la*

parcelación La Siria que está (…) *de por medio con el predio objeto de la expropiación.*"

Sobre ese aspecto, téngase en mente que en la citada Resolución No. 1424 del 19 de septiembre de 2019, la ANI concluyó que "*el **Avalúo Comercial** de fecha 14 de noviembre de 2018 sí posee el carácter de **Corporativo**, toda vez que, VALORAR es una persona jurídica afiliada a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, y sus peritos cuentan con inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), enmarcándose en lo dispuesto por la Ley 1673 de 2013, reglamentada por el Decreto 556 de 2014.*"[3]

Sumado a ello, el planteamiento formulado por el recurrente tampoco puede ser acogido por este Tribunal, puesto que el perito, al sustentar su dictamen, expuso, de manera seria y fundamenta, las razones por las cuales no podía tener como referencia los precios de inmuebles ubicados en La Siria, para efectos de determinar el valor de terreno que se encuentra en la "*unidad fisiográfica 2*", básicamente "*porque la norma de uso del suelo, las unidades fisiográficas, las condiciones agrológicas y las características físicas de la parcelación La Siria, son completamente diferentes al predio objeto de avalúo*"; afirmación reforzada en los predios ubicados en Sabaletas que por sus características físicas se asemejaban más a la propiedad objeto del proceso, pues "*están bajo el mismo polígono normativo, con las mismas condiciones topográficas y clases agrológicas del suelo*"; conclusiones que tampoco fueron desvirtuadas por el extremo pasivo.

3.5. De cara al reproche referente a que el Coordinador del Comité Técnico no visitó la heredad objeto del proceso, tal circunstancia, por sí sola, no tiene la entidad suficiente para concluir que el dictamen no fue elaborado en debida forma, porque, en la confección del mismo, participaron varios profesionales, entre esos, Daniel Amézquita Aldana, como "*avaluador comisionado*", Edwin Julián Álvarez Sarmiento, en su condición de "*avaluador auxiliar*" y la ingeniera agrónoma Katherin Vanegas, quienes hicieron la respectiva inspección ocular el 19 de octubre de 2018.

3.6. En lo tocante a la censura sustentada en que la funcionaria de primer grado no analizó el "*certificado expedido por el señor Director de Planeación o Secretario de Planeación de Titiribí y lo descartó sin un fundamento legal*", prontamente se otea que tal rebatimiento dista mucho de la realidad cursada en el proceso, porque en el fallo opugnado sí examinó ese documento, cuando se puntualizó que "(…) *el experto, para el cálculo del terreno, aplicó el método residual. Frente al cálculo de los precios de venta, el de comparación y mercadeo, tomando como base y referente, otros 6 peritajes de*

[3] Negrillas fuera de texto.

fincas parcelables, practicados por otros peritos avaluadores, de los cuales no trajo dato alguno para su verificación y algunos extractos de investigaciones de mercado indirecto, al parecer publicitados en medios especializados, sin indicar cuál datos de los cuales, señaló la desviación estándar, el coeficiente de variación, los límites superiores e inferiores, coeficiente de asimetría, etc.

Para determinar la parcelación del predio tomó como referente y de forma equivoca la repuesta a lo que se cree fue un derecho de petición, emitido por el Secretario de planeación municipal, que, de modo alguno, puede constituir certificación de uso del suelo o que el predio a avaluar este dentro de esas posibilidades. Allí se indica que, para acceder a una parcelación en esa zona o sector del municipio, conforme a la normatividad vigente, debe inexorablemente cumplirse con una serie de requisitos, los que seguramente deberá verificar la entidad a partir del momento en que se haga el respectivo trámite. De modo que, con tal documento no podrá decir que el predio es apto o cumple requisitos para una eventual parcelación.".

Argumentaciones que guardan correspondencia con las comunicaciones adiadas el 19 de noviembre de 2018 y el 26 de julio de 2019, mediante las cuales el Secretario de Planeación e Infraestructura Física, en respuesta a un requerimiento elevado por Edgar Jaime Isaza Isaza, informó en qué consistía una "*parcelación*" y cuáles eran los requisitos que debía cumplir el predio para subdividirlo en dos o más parcelas, y que de "*acuerdo al uso del suelo para esta zona (productora y ganadera), el área mínima para parcelar es de una (1) hectárea*"; orientación sobre la que, en cierta medida, transitó el perito Carlos Alberto Delgado, al momento de realizar el laborío técnico encargado por el accionado, pues, cuando fue preguntado por la juzgadora *a quo*: "*Sírvase indicar a esta audiencia ¿con qué bienes inmuebles comparó usted el predio materia o la franja materia de expropiación y por qué razón los comparó con esos bienes?"*, respondió: "(…) *se atendió el valor de mercado para fincas con potencialidades normativas de parcelación, y la referencia directa es las relaciones en el entorno, que son parcelación La Siria y Casa Grande"*; y más adelante manifestó: "(…) *en la tierra que estamos hablando, conocí una probable parcelación* (…) *con base en eso se planteó una posible parcelación*". Es decir que concluyó, de manera hipotética, que la franja requerida por la entidad demandante sería objeto de parcelación, y a partir de ese eventual fraccionamiento efectuó su avalúo. Expectativa cuya materialización aquí no se demostró, dejando sin piso real tal informe pericial, comoquiera que no fueron acreditados actos desplegados por el aquí interpelado antes de iniciarse el trámite expropiatorio, tendientes a lotear su heredad.

Desde otro paraje, en cuanto a la confutación relativa a que el perito Carlos Alberto Delgado se le indagó por un dictamen distinto al que fue decretado como prueba, cabe destacar que tal circunstancia no se le puso de presente a la funcionaria cognoscente en el transcurso de la

contradicción de la experticia, amén de que, al finalizar esa etapa procesal, la directora del proceso efectuó control de legalidad y el abogado del convocado no hizo manifestación alguna al respecto, actitud silente que impide traer en el decurso de la alzada un asunto que pudo ventilarse en primera instancia, puesto que "[l]*os términos y oportunidades señalados en el estatuto procesal para la realización de los actos procesales de las partes* (…)*, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario; tal como lo previene el artículo 118 de ese ordenamiento.*"[4]

3.7. Por último, en lo que tiene que ver con la caducidad del avalúo aportado por el extremo activo, dado que al interponerse la demanda de expropiación se había superado la vigencia de un año, es del caso apuntalar que dicho término corre en el transcurso del trámite administrativo, para los fines del artículo 24, parágrafo 2, de la Ley 1682 de 2013, más no durante el proceso judicial, regulado por el artículo 399 del Código General del Proceso, norma que, en modo alguno, contempla un plazo extintivo para ese trabajo valuatorio, ya que tan solo dispone, en su numeral 6, que "[c]*uando el demandado esté en desacuerdo con el avalúo o considere que hay lugar a indemnización por conceptos no incluidos en él o por un mayor valor, deberá aportar un dictamen pericial elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o por una lonja de propiedad raíz, del cual se le correrá traslado al demandante por tres (3) días. Si no se presenta el avalúo, se rechazará de plano la objeción formulada*."

4. Con todo, esta Sala de Decisión dispondrá la indexación de la suma de $777.471.347.oo, consignada a órdenes del juzgado, por concepto de "*Oferta Formal de Compra*" formulada al señor Edgar Jaime Isaza Isaza, esto de conformidad con el artículo 283, inciso 2, del C.G.P., y la Sentencia STC1709-2021, en la que fue puesto de presente que la Corte Suprema de Justicia "[h]*a dicho con profusa claridad* (…) *que «[l]a corrección monetaria -o indexación- es una remuneración equitativa y razonable para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo del dinero por la inflación, es decir, una retribución para que la prestación económica tenga un valor igual -o similar- al que tuvo en el momento en que se ejecutaron las obligaciones del respectivo negocio, que fue cuando se pagó el precio pactado, o debió pagarse el justo» (CSJ SC10291-2017), figura que vino a ser aceptada en nuestra jurisprudencia desde la sentencia del 24 de abril de 1979*[5]*, la cual se ha mantenido hasta la actualidad, con sus distintos bemoles, por supuesto*[6]*, y que con el Código General del Proceso es hoy día, inclusive, una obligación del juez reconocerla de oficio*[7]*.* ***Bajo tal perspectiva, es***

[4] CSJ, SC 9 mayo de 2013, exp. 73268-31-84-002-2008-00320-01
[5] CSJ, SC GJ CLIX Parte 1 (1979), Págs. 99 – 117.
[6] Consultar al respecto, CSJ, sentencia del 19 de noviembre de 2001, Exp. 6094; CSJ, sentencia del 25 de abril de 2003, Exp. 7140; CSJ, SC10097-2015; CSJ, SC3365-2020, CSJ, SC002-2021, entre otras.
[7] El artículo 284 ibidem prescribe: *"Si no se hiciere en la sentencia la condena en concreto, la parte favorecida podrá solicitar dentro del término de su ejecutoria, que se pronuncie sentencia complementaria. //Cuando entre la fecha de la sentencia definitiva y la de entrega de los bienes, se hayan causado frutos o perjuicios reconocidos en la sentencia, su liquidación se hará por incidente, el cual debe proponerse dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega, con estimación razonada de su cuantía expresada bajo juramento. Vencido dicho término se extinguirá el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación que se le presente.//**La actualización de las condenas a pagar sumas de dinero con reajuste monetario, en el lapso comprendido entre la fecha de***

claro que la actualización monetaria peticionada por el demandado resulta justificada, pues de lo contrario, se le impondría al propietario del predio objeto de enajenación forzada recibir un dinero disminuido por la merma de su valor real o poder de compra, producto de la depreciación por causa del fenómeno inflacionario, desde que se realizó la oferta de compra, hasta cuando se efectué el pago correspondiente, por lo que por equidad y justicia debe traerse a valor presente la suma ofrecida por la entidad que desarrolla la obra de interés público, o la determinada en el juicio por el juez de acuerdo con la o las experticias aportadas por las partes."[8]

Entonces, el atrás reseñado monto se traerá al valor presente teniendo como fecha inicial el 29 de enero de 2019, día en que se le notificó al demandado la "*oferta formal de compra*", y como data final la variación del IPC reportada para mayo de 2023, ya que para el momento de la emisión de este fallo es el último reportado por el DANE[9], indexación que se concreta así[10]:

Tabla de Indexación						
Periodo inicial	Periodo Final	Capital	IPC Inicial	IPC Final	Factor Indexación	Indexación
29/01/2019	31/05/2023	777.471.347,00	100,6	133,38	1,325845	$ 253.335.096,96
Total Indexación						**253.335.096,96**

Resumen Liquidación indexación	
Capital	777.471.347,00
Valor Indexación	253.335.096,96
Total Liquidación	**1.030.806.443,96**

5. En ese orden de ideas que se trae, se modificará el fallo apelado, en el sentido de conminar a la Agencia Nacional de Infraestructura que, en un término no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, proceda a consignar a órdenes del juzgado de conocimiento, la suma de $253.335.096,96, por concepto de la diferencia para indexar el monto dinerario inicialmente depositado, esto es, $777.471.347, para un total de $1.030.806.443,93. Asimismo, se dispondrá que la funcionaria de primer grado, en el menor tiempo posible, y una vez se verifique la conversión pertinente, entregue en favor del demandado, señor Edgar Jaime Isaza Isaza, identificado con cédula de ciudadanía No 3.334.121, el depósito judicial por valor de **$777.471.347,oo**. Dada la forma como se resolvió la alzada, no se condenará en costas de esta instancia.

---

la sentencia definitiva y el día del pago, se hará en el momento de efectuarse este." (destaco ajeno al texto)

[8] Negrillas fuera de texto.

[9] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc

[10] Operación aritmética realizada por el contador del Tribunal Superior de Bogotá, Gabriel Leonardo Cárdenas, Caicedo, Profesional Universitario Grado 12.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- MODIFICAR, única y exclusivamente, el numeral 6° de la sentencia proferida el 9 de febrero de 2023, por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., el cual quedará así:

FIJAR la indemnización a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI-, en la suma de **$1.030.806.443,93**. Puesto que ya se consignaron **$777.471.347,oo,** por concepto de la oferta inicial, se ordena a la demandante poner a disposición del juzgado el saldo correspondiente de **$253.335.096,96**. Lo anterior, en el término de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de este fallo. Cumplido esto, la juez *a quo* autorizará el pago correspondiente, previo el trámite de rigor.

Asimismo, se **ORDENA** que el juzgado de primer grado, en el menor tiempo posible, y una vez se verifique la conversión pertinente, entregue en favor del demandado, señor Edgar Jaime Isaza Isaza, identificado con Cedula de Ciudadanía No 3.334.121, el depósito judicial por valor de **$777.471.347,oo**.

Los restantes segmentos resolutivos de la sentencia apelada permanecen incólumes.

SEGUNDO.- Sin condena en costas de esta instancia.

TERCERO- DEVOLVER, en oportunidad, el expediente al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE,

JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO
Magistrado
(29 2022 00161 01)

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
Magistrado
(29 2022 00161 01)

ÓSCAR FENANDO YAYA PEÑA
Magistrado
(29 2022 00161 01)

Firmado Por:

Juan Pablo Suarez Orozco
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

German Valenzuela Valbuena
Magistrado
Sala 019 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Oscar Fernando Yaya Peña
Magistrado
Sala 011 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a8b0cdfcfbb58d32f0ae771043cd6cdb69a42510989ce55ad0f2cdc57ff1a44c**
Documento generado en 26/06/2023 04:42:51 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Bogotá D.C. veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Ref: Proceso ordinario de Guillermo González Holguín y otra contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Se niega la solicitud de corrección del auto de 25 de mayo de 2022, toda vez que no se incurrió en ningún error aritmético.

Téngase en cuenta que, como se acotó en dicha providencia, el valor aprobado corresponde al de la liquidación de costas, que no solo comprende el monto de las agencias en derecho (valores que, ciertamente, suman $263 896 161, 32), sino también el de “los honorarios y gastos del perito, los gastos del proceso y las expensas de notificación”.

NOTIFIQUESE

Firmado Por:

Marco Antonio Alvarez Gomez

Magistrado

Sala 006 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ba0ae1d9b76680101b08183f8c4f5cf2e57284c75934aeff113c56acfc52eb81**

Documento generado en 26/06/2023 04:20:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Expediente No. 031201900209 02

Revisadas las pruebas y, en general, los elementos de juicio que obran el expediente, se advierte que no es posible conceder el recurso de casación interpuesto por el demandante, toda vez que no satisface uno de los requisitos previstos en el artículo 338 del CGP, puesto que no alcanza el interés fijado por la ley para acudir ante la Corte Suprema de Justicia, dado que el agravio que le habría causado la decisión desfavorable no es superior a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Téngase en cuenta que en la frustrada demanda se pidió imponer una condena por $195 014 387, por concepto de lucro cesante, más 50 smlmv por daño moral, montos que, sumados, son inferiores a la cuantía exigida por la ley para poder acudir ante la Corte de casación.

Así las cosas, como el artículo 339 del C.G.P. autoriza emitir un pronunciamiento sin necesidad de acudir a otras pruebas, **no se concede** el recurso de apelación.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:
Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **45a1be6036929063f3da5ba7e67b50c61925c289593a2d3a37f2e6bfd03ca619**
Documento generado en 26/06/2023 11:39:01 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Rdo. 032202100185 01

Se admite el recurso de apelación que la parte demandante interpuso contra la sentencia de 1° de junio de 2023, proferida por el Juzgado 32 Civil del Circuito de la ciudad dentro del proceso de la referencia.

Oportunamente, retorne el proceso al Despacho.
NOTIFÍQUESE

Firmado Por:
Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e4b1e0ae4ee7e46f85cdb3c5f0c78746f1a5dad1c7e185aa071715a049f1775c**
Documento generado en 26/06/2023 11:12:13 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA SEXTA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil veintitrés

11001 3103 020 2012 00353 02
Ref. proceso ordinario de pertenencia de Inversiones y Transportes LCN S.A.S. frente a Eduardo Alberto Monroy Fajardo (y otros)

Como quiera que la parte demandante no sustentó su recurso en la oportunidad que consagra el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 (que se computó a partir de la ejecutoria del auto de 7 de junio del año que avanza, mediante el cual se admitió el recurso vertical), el suscrito Magistrado DECLARA DESIERTA la alzada que se interpuso contra la sentencia que, en primera instancia se profirió en el proceso de la referencia.

Lo anterior, teniendo en cuenta las previsiones del inciso final del artículo 322 del C. G. del P., por cuya virtud, "**el juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado**".

Devuélvase el expediente al juzgado de origen.

Notifíquese y cúmplase

Firmado Por:
Oscar Fernando Yaya Peña

Magistrado

Sala 011 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ba68b438ee6eb2db74dd69ac7960e39cd5e2350103412122198b218cd36a4bce**
Documento generado en 26/06/2023 03:37:46 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA SEXTA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D. C., veintiséis de junio de dos mil veintitrés

11001 3103 026 2017 00506 01
Ref. proceso ejecutivo de Enrique Porto Velásquez frente a MC y CIA S.C.A. (y otros)

El suscrito Magistrado declarará INADMISIBLE la alzada que interpusieron Pedro Julio Saiz Ávila, Ángelo Aristizábal Ospina y José Francisco Saiz Ávila (aquí terceros, pero demandantes en un proceso laboral) contra el auto que el 21 de abril de 2023 profirió el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso de la referencia.

Con el auto apelado, el juez *a quo* optó por no pronunciarse de fondo en relación con una orden de embargo que, al parecer, habría emitido el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja en un proceso verbal en el que son demandantes los hoy apelantes, por cuanto, según el juez *a quo,* no ha sido notificado formalmente de la existencia de esa cautela.

SE CONSIDERA:

1. Conviene memorar que, en materia de apelabilidad de autos impera el principio de taxatividad y que el artículo 321 (núm. 8°) del C. G. del P., habilita el recurso de apelación solo contra el auto que "resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla".

Sin embargo, en esta oportunidad la alzada no recayó sobre el auto que resolvió sobre una medida cautelar (como habría sido, por vía de ejemplo, la providencia que decrete, deniegue, revoque o se abstenga de revocar una medida cautelar) sino que tal decisión no va más allá de advertir que no le es factible tomar nota, ni tampoco repudiarla, de la orden cautelar que, eventualmente se emitió en el proceso laboral.

Contra esa específica decisión, ni el artículo 321 del C. G. del P., ni sus normas concordantes, autoriza expresamente la alzada.

Téngase en cuenta, además, que, en materia de apelación de autos, el ordenamiento procesal civil colombiano acogió el principio de taxatividad, en atención al cual el grupo de providencias susceptibles de apelación constituye "un numerus clausus no susceptible de extenderse, ni aún so pretexto de analogía, por el juez a casos no contemplados en la Ley" (C. S. de J., auto del 4 de junio de 1998), doctrina que no es ajena al criterio que en la materia ofrece el C. G. del P. (art. 321).

2. Por ende, se decidirá según se anunció.

DECISIÓN. Así las cosas, el suscrito Magistrado declara INADMISIBLE la alzada que interpusieron Pedro Julio Saiz Ávila, Ángelo Aristizábal Ospina y José Francisco Saiz Ávila (aquí terceros, pero demandantes en un proceso laboral) contra el auto que el 21 de abril de 2023 profirió el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá en el proceso ejecutivo de la referencia.

Sin costas de esta instancia, por no aparecer justificadas. Devuélvase el expediente a la oficina de origen.

Notifíquese

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

Magistrado

Firmado Por:
Oscar Fernando Yaya Peña
Magistrado
Sala 011 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2039800c3fba8c7e9768184fcfed26337f39014dac86e359581c46847cede8b7**
Documento generado en 26/06/2023 03:41:51 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Magistrado Sustanciador: **RICARDO ACOSTA BUITRAGO**

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	:	ANGÉLICA ROCÍO HERNÁNDEZ VARELA
DEMANDADO	:	MEI-JA CHÍA HERNÁNDEZ, Y LOS MENORES YUANG SENG EDUARDO DUSSAN HERNÁNDEZ Y YU WANG CHÍA HERNÁNDEZ REPRESENTADOS POR LUZ BIBIANA DEL PILAR HERNÁNDEZ VARELA
CLASE DE PROCESO	:	SIMULACIÓN
MOTIVO DE ALZADA	:	APELACIÓN SENTENCIA

ASUNTO

Se ocupa la Sala de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que el 2 de julio de 2020, profirió el Juzgado 1º Civil del Circuito Transitorio de Bogotá.

ANTECEDENTES

1. Con demanda radicada el 6 de mayo de 2011[1], subsanada con posterioridad[2], la actora pidió declarar, **principalmente**, **(i)** que la venta del apartamento 402 identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-

[1] Págs. 15 a 22 archivo "01CuadernoPrincipal"
[2] Pág. 28 ib.

1469800 contenida en la escritura pública No. 2327 del 20 de junio de 2007 otorgada en la Notaría 2ª del Círculo de Bogotá, realizada a Luz Bibiana del Pilar Hernández Varela, quien actuó como representante legal de sus menores hijos Yu Wang Chía Hernández, Yuang Seng Eduardo Dussan Hernández y Mei-Ja Chía Hernández, fue *"una venta nula por haber sido simulada y que por lo tanto no se le transmitió el dominio… a las personas menores ya relacionadas"*; **(ii)** en consecuencia, ordenar la cancelación de la escritura pública, registrar la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria y, **(iii)** condenar al pago de frutos civiles "percibidos desde la fecha que ocuparon simuladamente el inmueble hasta la fecha que lo reintegren", estimados bajo juramento en el escrito de subsanación de la demanda, en $23 500 000 por concepto de "47 meses de arriendo… cada uno de… $500 000" y los que se sigan causando[3]. **Subsidiariamente**, declarar que la vendedora sufrió lesión enorme *"en la supuesta venta"* y "las demandadas deben completar el justo precio que en el juicio se señale… con deducción de la décima parte o consentir en la recisión". Finalmente, condenarlas en costas.

2. Como soporte de su *petitum* afirmó que su hermana demandada tuvo dos hijos, Mei-Ja y Yu Wang Chía Hernández con Raimundo Ramón Chía Uculmana y un tercero, Yang Seng Eduardo Dussan Hernández con Luis Eduardo Dussan Cardona. Debido a "*los graves problemas de separación"* con el último de los señores mencionados, Luz Bibiana le propuso realizar una "*venta simulada"* del inmueble con el objetivo de *"demostrar solvencia económica para que le otorg(aran) la patria potestad de*

[3] Pág. 39, ib.

sus menores hijos" en el proceso del Juzgado 3º de Familia del Circuito de Bogotá, radicado No. 2007-00762. Sensibilizada por la situación acordaron "*la creación de una declaración aparente que ocultara ante terceros su verdadera intención, que era simular (la venta) del inmueble sin la intención de trasferir el dominio, por una parte, ni el propósito de adquirirlo por la otra"*. Con escritura pública No. 2327 realizó la venta del apartamento 402 ubicado en la carrera 24 No. 40-09, actualmente carrera 26 No. 40-09 de la ciudad, edificio el Peñón P.H. a los 3 menores representados por su madre Luz Bibiana del Pilar Hernández Varela. "*Pasado el tiempo prudencial acordado para que la demandada hiciera devolución del apartamento y anulación de las escrituras de venta"* se negó, pese a que "*ya se encuentra en magnifica situación económica",* dejando a la actora, junto con su hija Luz Angely Shayna Chía Hernández, "*a la intemperie de un inhumano despojo patrimonial y, como consecuencia, en la pobreza"*. Para la fecha del contrato "*era la demandada persona de escasos ingresos provenientes de ahorros que apenas le permitían atender su congrua subsistencia"*. El precio acordado fue de $50 000 000, que no se pagó; sin embargo, fue "inferior en más de la mitad del justo precio o valor comercial", pues para la época en la que se otorgó la escritura "el valor real" del apartamento ascendía a $130 000 000 (hecho 11 de la subsanación).

3. La demanda fue admitida el 10 de junio de 2011[4]. Los convocados no contestaron la demanda, pero después compareció Luz Bibiana Hernández como abogada y pidió ser reconocida para "asumir la defensa y represar los intereses" de

[4] Pág. 32 ib.

sus menores hijos[5] e instauró incidente de nulidad alegando la indebida notificación. En el recaudo de los interrogatorios cada una de las partes incorporaron documentos que fueron tachados de falsos recíprocamente. Con posterioridad el juez decretó y practicó las pruebas solicitadas por la parte demandante y algunos testimonios de oficio.

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El *a quo* consideró necesario realizar un estudio de las acciones de nulidad y simulación al evidenciar que "*las pretensiones revisten incongruencias lo cual dificulta darle un sentido a la intención de la accionante"*. Precisó que en el contrato "*no vislumbra que esté afectado de nulidad absoluta*", porque "*no se demostró que su objeto y causa fueran ilícitos, tampoco se omitió algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor del acto en consideración a su naturaleza*". Frente a la nulidad relativa "*no se constató en la voluntad de los intervinientes la presencia de vicio alguno… o imitaciones particulares para [su] celebración*", ni la negociación reviste las características de una simulación relativa; no se alegó en la demanda que "*se haya fingido celebrar la compraventa con el fin de ocultar otro negocio"*, ni fue objeto de pretensión. Por ello, concluyó que se abordaría el litigio como "*tendiente a que se declare la simulación absoluta*". Destacó que "*el debate probatorio no se orientó a demostrar los supuestos de la lesión enorme pues no se acreditó el que sería el justo precio del bien vendido al*

[5] Pág. 129, ib.

momento de la celebración del contrato, factor objetivo con el cual habría de compararse el precio de la venta".

El recaudo de los testimonios le permitió afirmar que *"no se encuentra probado que las partes hayan efectuado el negocio… con el propósito de engañar a terceros y que ello se hubiere cumplido"*: no existe prueba del *"concilio fraudulento"* ni del móvil para simular; por el contrario *"lo que emerge… es que entre las partes sí se celebró una compraventa respecto del inmueble objeto de la litis"*. De las declaraciones rendidas por Ricardo Chía Seminario -ex pareja de la actora-, Luis Eduardo Dussan Cardona -pareja de la demandada-, y Luz Miriam Varela -madre de las litigantes-, se extrae que *"la demandante tenía algunos problemas económicos y que, debido a ello acudió a la demandada, con el fin de venderle uno de los dos inmuebles que le habían sido adjudicados en su liquidación de la sociedad conyugal"*, lo que dejó en evidencia *"la necesidad del vendedor para realizar el acto"*. Todos los testigos *"fueron consistentes en afirmar que el pago sí se realizó y el destino que se le dio a esos dineros".* Versiones que guardan congruencia con el dicho de la representante legal de los menores en su interrogatorio.

En cuanto a las declaraciones de Diana Carolina Munévar Varela, Zully Marieth Daza Mahecha, Alba Luz Rivera Cely y Livy Anyela González Cortés dijo que *"no aportan nada al proceso… no dieron detalles concretos y coincidentes respecto del contrato que celebraron las partes y las condiciones del mismo"*, no indicaron *"en qué consistió el presunto concierto simulatorio"*

y su conocimiento *"no fue en forma directa sino por lo que comentaban las partes"*, situación que debilitó su credibilidad.

La actora incumplió la carga de demostrar la simulación del contrato pues no hizo *"ningún esfuerzo"* para probar varios de los presupuestos de la acción, entre ellos la situación económica de la compradora al momento de la negociación. Varios de los testigos narraron que fue la demandante quien acudió a su hermana *"porque estaba demandada y necesitaba dinero, amen que el pago iba a ser para el acreedor que tenía cautelado el bien"*.

Adicionalmente, entre el valor de $50 000 000, pactado en el contrato, y el avalúo del inmueble, para la época de la venta, *"no hay una notoria diferencia que conduzca a inferir un precio irrisorio, indicio propio de la simulación"* y recalcó la entrega del inmueble a la demandada. El parentesco tampoco puede interpretarse como un indicio de simulación, porque *"en el derecho colombiano las transacciones entre hermanos no están prohibidas"*. De las pruebas *"emerge… un marcado conflicto familiar"*.

Frente a la tacha propuesta por la demandada, al recibo de pago y los extractos de las tarjetas de crédito, dijo que no se alegó falsedad intelectual o material y tampoco fueron suscritos o manuscritos por las partes, por lo que no se cumplió con los presupuestos del art. 289 del C.P.C. Y la presentada por la parte actora a los documentos visibles a folios 165, 171 y 174, con fundamento en que la firma no es la suya, adujo que *"había de rechazarse por extemporánea"* pero, como se le impartió

trámite, el dictamen pericial concluyó que *"las signaturas cuestionadas… se identifican con las grafías auténticas"*, es decir, *"no se acreditó la suplantación en la firma de la demandante"*; no obstante, los documentos tachados *"carecen de influencia en la presente decisión"*.

En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

LOS FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La parte actora censuró la falta aplicación de los efectos del art. 95 del C.P.C. ya que no se contestó el libelo. Durante todo el proceso se afirmó que la razón de la venta *"fue hacerle un favor a la demandada con el motivo de engañar al juez de familia, respecto de la capacidad económica de la demandada, para que esta pudiera demostrar en el proceso que (podía)… hacerse cargo de su menor hijo Y.E.D.H… cuando en realidad ello no era cierto",* prueba indiciaria que el juez debía declarar *"si la encuentra probada"* .

Alegó que con los indicios se demostró: (i) la existencia de la demanda de privación de la patria potestad presentada al reparto el 6 de agosto de 2007 -un 1 mes y 19 días después de firmar la escritura de compraventa- y la obtención de una decisión favorable al privar a Luis Eduardo Dussan de sus derechos como padre; (ii) el a quo no valoró la "pluralidad" de pruebas aportadas y desconoció una "serie de motivos" para simular, como las *"relaciones parentales"*, ausencia de movimientos en las cuentas

bancarias, precio bajo no entregado, ocultación del negocio y su tiempo sospechoso, "falsificaciones", *"captaciones de voluntad"*, todas *"maniobras torticeras"*, documentación sospechosa, dejadez -no pagó administración, valorización y mucho menos mantenimientos-, no existir promesa de compraventa, falta de capacidad económica de la demandada -demuestra que tiene bienes, pero no puede disponer de ellos-, "mala conducta" al negarse a contestar preguntas y "*operaciones simuladas"* respecto al señor Raimundo Ramón Chía Uculmana.

Frente a los recibos de pago aportados por la demandante, el estudio grafológico determinó que *"las firmas dubitadas… NO SE IDENTIFICAN FRENTE AL MATERIAL CALIGRÁFICO PATRÓN"* de la señora Angélica Rocío Hernández Varela, otro indicio más en contra de la demandada. El perito José Manuel González Navarro expuso que en el apartamento 402 se encuentran los insumos señalados en las facturas aportadas por la actora *"probando y acreditando que la cocina integral, cerámicas, espejo y demás accesorios hasta la fecha permanecen incorporados"*, reforzando los demás indicios de simulación.

Se dio *"plena credibilidad"* al testimonio de Ricardo Chía Seminario, quien afirmó que, *"efectivamente había un acuerdo entre la demandante y la demandada para que la una le transfiera la propiedad a la otra… cuando el mismo fuera desembargado"*, lo cual es *"falso".* También *"se pasó por alto"* la afirmación que Bibiana hizo en la denuncia que presentó, pues *"en los hechos… dice que la demandante afirma que el señor Ricardo Chía Seminario es su amante"*, aunado a que el declarante

dijo residir en la calle 49 No. 15-64 de Bogotá, donde se ubica una *"supuesta"* propiedad de la demandada. Por lo tanto, *"no es irrazonable pensar que el testigo no es imparcial en su declaración".*

Luis Eduardo Dussan Cardona, padre del menor hijo de Bibiana y su compañero sentimental para cuando sucedieron los supuestos de la demanda, vivía en México por lo que *"no le consta ningún hecho"*. Lo mismo que la señora Luz Marina Varela, pues no vivía en el país, salió en agosto de 2005 y regresó en enero de 2007, según la Oficina de Migración Colombia, *"testigo falsa que mintió completamente en su declaración"*. Además, es madre de la representante legal de los menores y comunera del 50% de la casa del barrio la Merced del Norte como consta en el FMI No.50C-12117493; luego, *"les asiste interés mutuo".* Los testigos mencionados y los demás no son coherentes con las sumas de dinero que dijo la demandada haber pagado.

Que el inmueble "*objeto de la litis… tuviese una deuda, no es razón suficiente para deducir que necesariamente la demandante debía vender(lo) para pagar las acreencias".* Los testigos presentados por la actora "*ni los mencionó"* el a quo. Alba Luz Rivera allegó documentos "decisivos", como la adjudicación que hizo Ricardo Chía del 50% del bien por concepto de alimentos a la hija común con la demandante. Livy Angela González detalló los arreglos realizados al apartamento 402 en los años 2006 y 2007 y dijo que Angélica lo estaba arreglando para prestárselo a su hermana para *"vivir por un tiempo"*. Pasó por alto que Bibiana ocupó el inmueble *"en calidad de arrendataria como se demuestra*

con las diferentes declaraciones que hiciera en el transcurso del proceso de privación de la patria potestad, y los recibos de arriendo que la demandada transformó y falsificó". Que Angélica *"retuvo la posesión del bien"* con el fin de hacerle arreglos.

Sobre la lesión enorme insistió en que *"se pactó el precio de… $50 000 000… suma inferior al precio real del inmueble, el cual era superior a los $75 000 000… dinero que la demandada nunca entregó y que la demandante jamás recibió"*; el avalúo fue estimado para el año 2007 sin tener en cuenta la remodelación. De allí la pretensión subsidiaria reclamada *"para que el señor juez observara el quebranto que sufría el contrato de compraventa… por la desigualdad y desproporción del precio"*.

CONSIDERACIONES

Dada la concurrencia de los presupuestos procesales y ante la ausencia de motivo de nulidad, la decisión será de fondo; como los reparos efectuados se encuentran encaminados a cuestionar la falta de análisis de la prueba indiciaria y los demás elementos probatorios, se procederá a su estudio a fin de determinar si le asistió razón o no al *a quo* al no declarar la simulación del negocio de compraventa y negar, también, la existencia de lesión enorme.

El art. 1766 del C.C. señala que *"las escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, no producirá efecto contra terceros"*. A partir de la norma transcrita, la jurisprudencia ha dicho que la simulación

se configura cuando: "*hay discordancia entre lo pactado por los contratantes y lo revelado al público, haciéndose necesario desterrar del ordenamiento el acto fingido para que, en su lugar, prevalezca el real, al ser el que, en verdad, está llamado a producir efectos frente a las partes y respecto de los terceros que se hallan a su alrededor*"[6].

De allí surge, de un lado, la simulación absoluta "*si se comprueba la total ausencia de interés en celebrar el acuerdo entre quienes aparentan hacerlo"*[7] y, de otro, la relativa como "*la desfiguración del verdadero querer de los intervinientes que prefieren encubrirlo al utilizar vías alternas"*[8].

Previo a ahondar en el material probatorio del plenario, resulta pertinente precisar que, "*dada la dificultad probatoria, donde los contratantes generalmente toman medidas adecuadas para impedir que el verdadero negocio salga a la luz, se acude en la mayoría de los casos a la prueba indiciaria, mediante la cual se logra, por inducción lógica, el resultado de dar por conocidos, en hechos firmemente acreditados en el proceso, otros que no lo están, lo que supone una labor crítica donde predomina ampliamente la actividad intelectual del juzgador, quien dentro de los límites señalados en la ley, libremente escoge los hechos básicos que le han de servir para formular la inferencia y deducir sus consecuencias (…)*[9]. Algunos tipos de indicios se encuentran el parentesco, la amistad íntima, la falta de capacidad económica

[6] Sentencia SC3678-2021
[7] Sentencia SC3979-2022
[8] Ib.
[9] Cas. 22 de febrero de 2000, Exp. 6205

del adquirente, la retención de la posesión del bien por el enajenante, el comportamiento de las partes al celebrar el negocio, o en el litigio, el precio exiguo, entre otros.

El caso concreto.

De todos los temas de la apelación se ha de iniciar por referirse a la aplicación del art. 95 del C.P.C. -vigente para la época del traslado de la demanda- porque, en línea de principio, podría decirse que la no contestación constituyó un indicio grave en contra de los demandados, como lo reclamó el recurrente. Pero, cosa distinta es "presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda", situación contemplada ahora en el artículo 97 del C.G.P., dado que "ley también distingue entre el indicio y la presunción. El primero es un medio de prueba, en el que demostrado un hecho indicador, el juez, mediante una inferencia lógica, llega a un indicado, que, así, se tiene por demostrado. En tanto que, la presunción implica que la ley, a partir de un hecho antecedente da por establecido otro hecho, consecuencia del primero por disposición del legislador" (Corte Constitucional. Sentencia C-102 de 8 de febrero de 2005), pero "la mera circunstancia de que no conteste la demanda… no implica ipso facto, que la presunción o el indicio que esta conducta implica, según la ley, conduzca a que el juez se vea impelido a dictar sentencia desfavorable a los intereses de quien actuó de esa manera" porque, además, "la apreciación por parte del juez de los indicios y de las presunciones también hace parte de la actividad lícita de este funcionario en el proceso" (*ibidem*).

Es decir, el indicio grave que reclama el apelante tiene lugar a partir de los hechos de la demanda siempre y cuando resulten indiscutiblemente probados porque, en este caso, no se presumen ciertos.

El motivo para simular y los indicios

La parte demandante en el libelo expuso que la finalidad del acto fue que su hermana pudiera *"demostrar solvencia económica para que le otorguen la patria potestad de sus menores hijos"*, en razón de los "graves problemas de separación" de la demandada (hecho 3), la creación de *"una falsa imagen de un negocio jurídico que le diera aparente y transitoria solvencia económica"* (hecho 5), *"el tiempo prudencial acordado para que la demandada hiciera devolución del apartamento y anulación de las escrituras de venta"* (hecho 7), los escasos recursos de su hermana (hecho 8), el no pago del precio (hecho 9). Razones reiteradas en los reparos, pues el recurrente insistió en que el móvil *"fue hacerle un favor a la demandada con el motivo de engañar al juez de familia, respecto de la capacidad económica de la demandada, para que esta pudiera demostrar en el proceso que (podía)… hacerse cargo de su menor hijo Y.E.D.H… cuando en realidad ello no era cierto"*[10].

Aquí, son varias las razones que permiten descartar que la compraventa celebrada tuviera ese propósito.

Primera. Las relaciones de parentesco.

[10] Pág. 5, archivo 06SustentacionApelacion.

En el plenario se estableció que la demandante y la representante legal de los menores demandados son hermanas y ellos sus sobrinos, como lo refirió la actora en su interrogatorio: *"Bibiana Hernández la hermana mía, ella me propuso traspasar el bien a nombre de los menores hijos de ella"*[11]; a su vez la demandada en su declaración dijo que Angélica era su hermana[12], vínculo al que hicieron alusión todos los testigos y, por supuesto, Luz Marina Varela, la madre de ambas. El juzgado dejó constancia en momento de su declaración, de que ella *"manifiesta que Angélica Rocío Hernández Varela y Luz Bibiana del Pilar Hernández Varela son sus hijas"*[13]. Luego se encuentra acreditado el primero de los indicios mencionado. Sobre el particular ha dicho la Corte Suprema de Justicia: *"la confianza originada en las relaciones familiares entre vendedor [y] comprador es un ambiente propicio para concretar negocios aparentes"*[14], pues es lógico *"que se elija para urdir la simulación a una persona de confianza y no a un extraño"*[15]; no obstante, este indicio de naturaleza personal, por sí solo, no es suficiente para socavar la presunción de realidad del convenio, de allí que deban confluir con otros (art. 242 del C.G.P.) para constatar la veracidad de las declaraciones de voluntad manifestadas exteriormente que lleven a descubrir la intención real de las concertantes, estudio con el cual se prosigue.

Segunda. El proceso de privación de patria potestad.

[11] Pág. 190, archivo "01CuadernoPrincipal"
[12] Pág. 192 ib.
[13] Pág. 282 ib.
[14] Sentencia SC16608-2015
[15] Sentencia SC7274-2015

La parte demandante aportó copia de la demanda de privación de la patria potestad[16] que instauró Luz Bibiana contra Luis Eduardo Dussan, el 6 de agosto de 2007, radicación No. 2007-00762, a escasos dos meses después de haberse otorgado la escritura pública de compraventa del apartamento 402, actuar que tildó el recurrente como punto determinante de la simulación. Pero de su lectura íntegra no refulge el móvil señalado por la parte actora; veamos: en los hechos de ese libelo Bibiana, en su calidad de progenitora del menor Y.E.D.H., no hizo referencia a su capacidad económica, tan solo se circunscribió a señalar el tiempo de convivencia con el demandado, el abandono del hogar y la desatención a las obligaciones del padre para con el menor. En el acápite de pruebas no mencionó los bienes que poseía para la época, ni mucho menos adosó documento alguno que diera cuenta de su existencia sólo adjuntó el registro civil del hijo en común; es así que, tampoco refirió la dirección del apartamento comprado como lugar de notificaciones. Por lo tanto, si esa fue la razón para simular la compraventa del inmueble, no sobra la pregunta de ¿por qué en la demanda no hizo alarde de ello ante quien pretendió engañar con su acto, que no era otro sino el juez de familia, como lo alegó en el recurso?

Y si lo anterior fuera poco, la demandante también aportó copia del acta de la diligencia de la audiencia prevista en el art. 432 del C.P.C., en la cual consta el interrogatorio de oficio practicado a Bibiana por el Juez 3° de Familia de Bogotá el 29 de

[16] Págs. 119 a 122, archivo "01IncidentedeNulidad"

marzo de 2011[17], donde tampoco aparece referencia alguna al inmueble tantas veces mencionado o a su capacidad económica; así mismo, el juez no dirigió ninguna pregunta con el fin de constar si Bibiana poseía bienes o de dónde obtenía los ingresos para cubrir las necesidades del menor.

Tampoco la sentencia favorable en aquel proceso puede interpretarse con un indicio grave en contra de la demandada, pues para la juez de familia lo que determinó su decisión fue tan solo que se logró demostrar *"que el demandado está inmerso en la causal que se le endilga, esto es, la… del numeral 2° del artículo 315 del C.C"* -es decir, el abandono del hijo por el padre- *"sin más consideraciones por no ser ellas necesarias"*, afirmó[18].

Tercera. El pago del precio.

El juez dijo que se encontraba acreditado. Como sustento de tal afirmación, se debe partir de lo estipulado en la escritura pública 2327 de 20 de junio de 2007, cláusula cuarta, donde la vendedora declaró haber recibido el precio de $50 000 000 *"en efectivo y a satisfacción de los compradores, por intermedio de su señora madre…"*[19], pues amparada por el artículo 1934 del C.C., tal atestación goza de credibilidad, salvo que se pruebe *"la nulidad o la falsificación"*; conforme con el art. 257 del C.G.P. toda vez que, los instrumentos públicos *"hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga*

[17] Págs. 125 a 128 ib.
[18] Págs. 178 a 181, archivo "01CuadernoPrinicipal"
[19] Pág. 5 anverso, archivo "01CuadernoPrincipal"

el funcionario que los autoriza", pero *"las que hagan los interesados… tendrán entre estos y sus causahabientes el alcance probatorio señalado en el art. 250",* es decir, indivisibles y comprendiendo *"aún lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato".* Esto resulta de trascendencia en el caso porque la demandante fue parte del contrato y en la escritura declaró que recibió el precio acordado, mención que tiene directa relación con el acto dispositivo. Además, la mayoría de las pruebas arrimadas reafirman el pago, sin que haya lugar a poner en duda la credibilidad del acto allí instrumentado.

Basta con acudir al testimonio de quien dijo ser la asistente personal de Bibiana, la señora Lunny Nery Ávila Castro, para comprender la forma en la que se sufragó el precio del apartamento a la demandante. Al preguntársele por el contrato de venta celebrado entre las hermanas Hernández dijo que *"Angélica se lo ofreció a la Dra. Luz Bibiana porque ella tenía una hipoteca"* y le consta que *"el día que se entregó la plata a la señora Angélica yo serví para cambiar el dinero, más exactamente unos dólares… yo se los ayude a contar ese día… la última persona que contó los cuarenta millones de pesos que se le entregaron a la señora Angélica fui yo"*[20], entrega que se realizó *"en el Davivienda de la 72 con 13* y *"la acompañó a hacer el depósito"*. Mencionó otras entregas de dinero por parte de Bibiana a Angélica *"le dimos doce millones de pesos a la señora Angélica; digo le dimos porque yo estuve presente y yo le ayudé a contar los doce millones. Después le dimos ocho millones de pesos más, se había*

[20] Pág. 279 y ss. ib.

establecido sesenta millones de pesos ahí". Luego refirió que hubo una entrega de seis millones de pesos *"porque la señora Angélica abusivamente le ingresó al apto y lo había arrendado por un día… dos días después llegaron a un acuerdo… que ella le entregaba seis millones de pesos más"*, por concepto de *"unos cambios en la cocina y otras cosas… que había pagado a crédito".*

El mismo Ricardo Chía Seminario señaló que Bibiana les dio la plata *"se entregaron 40 millones de pesos o algo así, con lo que se pagó el crédito"*[21]. En cuanto al valor real del negocio afirmó que no lo sabía, pero *"el negocio fue que prestaba la plata, y cuando saliera se le adjudicaba a Luz Bibiana, así se estipuló de palabra ese negocio"* y él firmó *"un poder para que se hicieran todas las diligencias en el banco"*, porque *"para pagar esa hipoteca no necesitaba estar yo personalmente, porque yo figuraba como propietario de las deudas y de los inmuebles, y esa hipoteca iba como 80 a 100 millones, más o menos; valía más la hipoteca que el apto en ese entonces, y cuando acordamos conseguir el dinero, se obtuvo, se pasó una carta a la entidad, esa entidad aceptó el valor que le ofrecíamos y fue así que Angélica y doña Bibiana fueron y cancelaron esa hipoteca"*[22].

Luis Eduardo Dussan, pareja de Bibiana, fue enfático en señalar que *"la señora Angélica le compró a mi señora (sic). En principio le dio 40 millones en efectivo y anterior a eso le entregó 12 y creo que fueron 8 más, en total 62 millones le fue dando"*[23], y que Angélica *"no le hacía escritura, en un principio*

[21] Pág. 265 y ss. Ib.
[22] Ib.
[23] Pág. 268 ib.

porque le exigió más dinero, porque se lo había vendido más barato, por eso la Dra. Bibiana accedió, y le seguía dando más dinero". Frente al testigo, el recurrente dijo que no le pueden constar los hechos porque para ese tiempo vivía en México y que convivió con Bibiana desde el 24 de mayo de 2005 hasta el 7 de noviembre de 2006, como se indicó en la demanda de privación de patria potestad. Sin embargo, olvida el censor que en el folio de matrícula inmobiliaria del apartamento 401 se plasmó como fecha del levantamiento de la cautela, el 9 de junio de 2006 -anotación 10-[24], por lo que su declaración se ciñe al tiempo referido.

Cuarta. La capacidad económica de la demandada

Se acreditó con los certificados de tradición de los inmuebles Nos. 50C-1217493[25], 50C-105367[26], 50C-376432[27], la tarjeta de propiedad del vehículo de placas BFX871[28], los honorarios que percibía y, según dijo en interrogatorio, *"el apoyo económico… que he recibido permanentemente de Raimundo Chía, el padre de mis hijos mayores"*[29]. La ausencia de movimientos en las cuentas bancarias, como lo refirió la apelante en este caso, no puede considerarse un indicio en contra de la demandada, pues al indagársele por parte del apoderado actor si tenía cuentas en bancos nacionales o internacionales al momento de la firma de la escritura dijo: *"los bancos no viene al caso, las*

[24] Pág. 188 anverso ib.
[25] Pág. 146 ib.
[26] Págs. 147 y 148 ib.
[27] Págs. 149 y 150 ib.
[28] Pág. Pág. 140 ib.
[29] Pág. 233.

cuentas, porque los dineros que manejo en cantidades, son dineros que recibo en euros o en dólares y no hay ninguna ley que lo obligue a uno a depositar el dinero en el banco para guardar en el banco"[30]. En consonancia con lo anterior allegó las actas de entrega de divisas sobre las cuales dijo que había cobrado el 50% de honorarios[31]. Una fue del año 2004 -$18 000 dólares y $15 000 euros-, apoderando a Luis Eduardo Dussan en la actuación con la DIAN, una vez culminado el "proceso administrativo cambiario… por allanamiento" y el "penal… en la Fiscalía 11 Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos"[32] y, en la segunda, de enero de 2006 -$32 305 dólares- por "terminación por allanamiento" del interesado Fernando Isaac Morales ordenada por la "División de Control de Cambios de la Administración Especial de Aduanas". Aunque las fechas no coinciden exactamente con la escritura de venta -20 de junio de 2007-, sí con la época de la negociación, que venía desde antes, y con la versión de la testigo Lunny Ávila quien dijo que el pago se había hecho en parte con dólares.

Así mismo, el hecho de que los bienes que reportó la demandada como de su propiedad hubieren sido adquiridos cuando *"tenía 26 años y era una simple bachiller"*, como afirmó el censor, en nada mengua su capacidad económica o hace que su patrimonio pierda valor. Tampoco que los inmuebles "de los que no podía disponer", porque no son fácilmente liquidables, se pueda inferir que carecía de solvencia para atender el compromiso de pago correspondiente a la compra de apartamento.

---

[30] Pág. 192 ib.
[31] Pág. 138 y 139, ib..
[32] Pág.

Quinta. La liquidación de la sociedad patrimonial de hecho entre la demandante y el señor Ricardo Chía Seminario. Activos y Pasivos.

Los apartamentos 401 y 402, este último objeto de la litis, hacen parte del edificio el Peñón P.H. y fueron adjudicados a la demandante con ocasión de la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho con el señor Ricardo Chía Seminario, proceso liquidatorio que cursó en el Juzgado 17 de Familia de Bogotá, como dan cuenta los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 50C-1469799 -anotación 13-[33] y 50C-1469800 -anotación 6-[34], respectivamente. En dicha actuación judicial también se reportó la deuda contraída por su ex pareja, pese a que la actora nada dijo respecto a la obligación, en su interrogatorio, pues se limitó a señalar que en virtud de la adjudicación le correspondió *"el 50% del apartamento donde hoy vivo que es el 401 de la carrera 26 No. 40-09 y, el garaje (en un) 50% del cual yo después le hice la compra del otro 50% a mi ex compañero; también me adjudicaron el 50% del apartamento 402 de la carrera 26 No. 40-09 donde el papá de mi hija firmó un acuerdo… solicita(ndo) al juzgado que se me adjudicara el otro 50% por razón de alimentos de mi menor hija"*[35].

A su vez, el señor Chía Seminario afirmó que *"en ese tiempo tenía como un problema de la liquidación, y como no se había pagado por mucho tiempo por un crédito que teníamos por*

[33] Pág. 189 ib.
[34] Pág. 7 anverso ib.
[35] Pág. 191 ib.

ese apto, se iba a rematar"[36], y que los apartamentos 401 y 402 *"estaban embargados"*. Con ocasión de la anterior manifestación el recurrente pretendió desacreditar al testigo; sin embargo, al preguntársele por qué no existía, en el certificado de tradición del apartamento 402, medida cautelar registrada y ponerse de presente el documento, contestó *"aclaro que me refiero al apartamento 401 y no al 402"*[37]*.* Entonces, el *lapsus* fue aclarado en el mismo acto, sin que ello le reste *"plena credibilidad"*, a su declaración como se alegó.

La testigo María Luisa Alemán Prada, respecto de la deuda, expresó que *"Angélica con la separación del esposo le iban a rematar el apto porque al separarse ellos no volvieron a pagar las cuotas"*[38], situación de la que se enteró por la mamá de Angélica, porque *"tenemos amistad con ella"*. En igual sentido, la señora Luz Miriam Varela, madre de las litigantes, señaló que *"estaba próximo a un remate el apto donde ella habita [el 401], junto con un garaje. La deuda llegaba hasta 70 millones de pesos… estaba en proceso de separación de bienes, de liquidación conyugal"*[39]*.*

La representante legal de los menores demandados, en interrogatorio, aportó la carta de aprobación del crédito que expidió el Banco Davivienda S.A., el 23 de abril de 1998, por la suma de $30 000 000 y con un plazo de 15 años[40], a favor del señor Chía Seminario. Información que coincide con el registro de

[36] Pág. 265 ib.
[37] Pág. 266 ib.
[38] Pág. 276 ib.
[39] Pág. 282 ib.
[40] Pág. 182 ib.

la hipoteca el 17 de junio de 1998 en el folio de matrícula del bien -anotación 7-[41].

Por lo tanto, se encuentra probada la existencia del proceso de liquidación de la sociedad entre compañeros, así como el pasivo contraído por el señor Chía Seminario.

Sexta. El embargo del apartamento 401, el motivo de la venta del apartamento 402.

El 28 de octubre de 2005 se registró medida de embargo sobre el apartamento 401, como se evidencia en la anotación No. 9 del certificado de tradición[42], decretado por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo con acción real No. 2005-00412 que inició la entidad bancaria mencionada antes en contra de Ricardo Chía Seminario, circunstancia por la cual la demandada adujo que *"para salvar el apartamento 401 y pagarle la hipoteca debían conseguir el dinero, fue cuando por intermedio de mi señora madre Luz Miriam Varela y mi hermana Angélica Rocío Hernández me propusieron el negocio de la venta del apto 402, expresando que era la única oportunidad que tenían para pagar la hipoteca del 401 y salvar el apto"[43].* Por su parte el deudor explicó: *"cuando hablamos con Luz Bibiana el trato fue… que ella nos ayudaba a salvar la hipoteca y, cuando esté saldado todo, su hermana se quedaba con el 401 y Bibiana con el 402"[44]*. Declaraciones que no avizoran acuerdos

[41] Pág. 188 anverso ib.
[42] Pág. 188 anverso ib.
[43] Pág.192 ib.
[44] Pág. 265 y ss ib.

ocultos o "artimañas" para *"arrebatarle"* el inmueble a la demandante, pues ella, más que nadie, era conocedora de los gravámenes que afectaban los bienes que posteriormente le fueron adjudicados.

Entonces, como lo dijo el a quo, entre las partes sí se celebró una compraventa, en atención a *"la necesidad del vendedor para realizar el acto"*. Estas versiones permiten inferir que debido a la obligación que había sido adquirida por el ex compañero de la demandante, garantizada con el apartamento 401, y la ejecución hipotecaria en curso, ellos acudieron a la demandada con el fin de que comprara el apartamento 402 y los dineros entregados destinarlos a pagar la obligación, como ya se explicó.

En consecuencia, probado está que debido al embargo que recaía sobre el apartamento 401, Angélica y Ricardo ofrecieron en venta el apartamento 402 a Bibiana, con el dinero pagarían la deuda hipotecaria del proceso y una vez adjudicado el segundo a Angélica dentro del proceso de liquidación, lo entregaría a su hermana. De la misma forma, que Bibiana pagó más de $50 000 000, pues no se puede ya dudar de que los testigos coinciden en que hubo una primera entrega de $40 000 000 para pagar la hipoteca, y otras sumas de más, $12 000 000 y $8 000 000, aunque no precisan los tiempos, solo que uno fue antes de la escritura y otro después, con dineros producto de su trabajo y que poseía varios bienes desde antes de celebrar el contrato de compraventa, lo que de tajo enervó lo afirmado por la demandante, referente a que *"era la demandada persona de*

escasos ingresos provenientes de ahorros que apenas le permitían atender su congrua subsistencia", dejando sin sustento la ausencia de capacidad económica de la madre de los menores.

Séptima. La entrega del apartamento 402.

Este aspecto debe analizarse en dos momentos:

El primero, la entrega que adelantó el Juzgado 10 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá comisionado por el Juzgado 17 Civil de Familia de la misma ciudad, en la cual la persona que habitaba el inmueble, Sandra Patricia Escobar Villegas, se comprometió a dejar el bien desocupado el 9 del mismo mes y año. Fecha a partir de la cual le fue entregado a Angélica con ocasión de la adjudicación en el proceso de separación con Ricardo Chía. Hecho que relató la testigo Alba Luz Rivera Celis diciendo que sabía de *"la venta que efectuó Angélica a Bibiana por un contrato simulado, debido a que Bibiana necesitaba acreditar capacidad económica y no la tenía, entonces Angélica le hizo una venta ficticia a Bibiana"*[45] y conoció el apartamento 402 porque *"yo actúe como apoderada en la entrega de ese inmueble"*, como prueba de lo dicho aportó copia del acta de diligencia de entrega de 4 de octubre de 2006[46].

Ahora bien, en el interrogatorio señaló la demandada que en mayo de 2006 se encontraba en estado de embarazo y se fue para Estados Unidos mientras su hijo nacía, *"a mi regreso, el*

[45] Pág. 262 ib.
[46] Pág. 258 ib.

inmueble se encontraba todavía ocupado por la señora Sandra que era la amante del esposo de mi hermana… inmediatamente se realizó la entrega mi hermana Angélica me hizo entrega de las llaves del apto"[47]*.* Y que al revisar el bien en compañía de Lunny Ávila y María Luisa Alemán *"encontró que estaba totalmente desmantelado… procedió a comprar materiales para acondicionarlo en una vivienda digna, pues mis planes eran que después del regreso de tener a mi hijo, viviría en ese apto"*[48]*.*

Al preguntarle a Luis Eduardo Dussan si sabía o conocía cuándo se realizó la entrega del apartamento 402 no indicó fecha cierta; sin embargo, manifestó *"que el apartamento nunca se ocupó, porque la idea era remodelarlo, lo cual entramos a hacerlo, tumbando la cocina y haciendo compra del piso, metiéndole un trabajo veneciano a las paredes, y a la entrada principal, reconstruyendo el baño, el cual yo contrate al trabajador, un señor James Hernández, las cosas hasta ahí supe, pues luego me fui a México"*[49].

Aquí se precisa que las contratantes manifestaron que habían realizado compras de materiales con el fin de remodelar el apartamento 402; en dictamen pericial elaborado por José Manuel Navarro, allegado con ocasión de la tacha propuesta por la demandada, se pudo constatar que los elementos relacionados en las facturas Nos. 18381, 3145, 6713, y 6064[50] se encuentran instalados en el apartamento 402[51]. Es decir, hasta ese entonces

[47] Pág. 193 ib.
[48] Pág. 194 ib.
[49] Pág. 269 ib.
[50] Págs. 239 a 242 ib.
[51] Págs. 40 a 42, archivo "06incidenteTacha"

Angélica no se había desprendido del inmueble en todo y ni otorgado la escritura de venta.

El segundo, en el año 2007, después de los arreglos del apartamento, narró la demandada que: *"viajé a la ciudad de Cali, eso fue para el mes de junio de 2007, e inesperadamente regresé, encuentro al pasar por el apto que las luces estaban prendidas, de tal manera que subo a chequear al apto y me encuentro con que mi hermana Angélica había roto las chapas, había ingresado, había sacado todos los elementos y cosas personales y había pasado la nevera al apto de ella, le hice un llamado a ver qué había sucedido, porque encontré a unas personas con un trasteo dentro de mi apto y manifestaron que ella les había arrendado; para esa fecha del año 2007 mi hermana no me había suscrito la escritura"*[52].

Dada la situación *"me dirijo a la fiscalía el 15/06/2007… y di a conocer los atropellos que ella estaba cometiendo en mi propiedad"* pero que, con posterioridad llegaron a un acuerdo y desistió de esa denuncia, en razón *"a que mi hermana en su sentir decía que ella quería más dinero por el apto, para evitar más problemas yo accedí"*[53].

Como sustento de lo expuesto la demandada, en su interrogatorio, adosó el manuscrito de fecha 19 de junio de 2007[54], signado por Angélica, en el que expresó: *"recibí la suma de $500 000 como abono al acuerdo de negocio del apartamento*

[52] Pág. 194
[53] Ib.
[54] Pág. 162

402", quedando un saldo de $4 500 000 y el pago de la cocina, que realizó con la tarjeta de crédito de Colpatria, "*hasta completar el valor de $1 600 000"* y $70 000 por el espejo. Documento no tachado de falso por la parte demandante, pero que prueba y reafirma, una vez más, la existencia del contrato de compraventa y el pago del precio por parte de la representante de los menores compradores. Continuó diciendo que *"llegamos al acuerdo voluntario y conciliamos para la firma de la escritura"*[55].

En cuanto a los recibos que aportó la demandada visibles a folios 166, 171 y 174 del cuaderno principal sobre algunos pagos por valor de $100 000, $600 000 y $300 000 efectuados por ella a la demandante, que fueron tachados de falsos por Angélica[56], sobre los que el grafólogo del Instituto de Medicina Legal, en su examen, consideró que "las firmas dubitadas" de los tres recibos "no se identifican frente al material caligráfico patrón" de la actora[57], al haber sido objetado el nuevo dictamen concluyó todo lo contrario, que las "signaturas cuestionadas tres (03) recibos originales dubitados… SÍ SE IDENTIFICAN con las grafías auténticas de la Agenda, documentos patrón, aportadas como modelos o patrones de comparación, es decir que se trata de grafías AUTÉNTICAS por el método de CREACIÓN LIBRE DE GRAFÍAS"[58]. Sin embargo, discutir cuál de los dos dictámenes puede tener más crédito resulta intrascendente pues se trata de cuentas que entre sí hacen las partes por las reparaciones del apartamento que, en últimas, no

[55] Pág. 220.
[56] Págs. 1 a 3, archivo "06IncidenteTacha"
[57] Págs. 232 a 238 ib.
[58] Págs. 261 a 283 ib.

tienen la capacidad de poner en duda el negocio de compraventa que se disputa.

Conclusión

Todos los hechos y circunstancias descritas llevan a afirmar que no se trató de una negociación sigilosa, que en principio es una de las características que revisten los contratos simulados, en la medida en que los parientes cercanos de los pactantes y amigos conocían de embargo que pesaba sobre el apartamento 401 y cuál fue el acuerdo realizado por las hermanas para *"salvar el apartamento".*

Si bien, el recurrente censuró que a los testigos que él llamó a juicio *"ni se les mencionó"*, como sí se hizo con los que fueron decretados de oficio y que desde su percepción, *"todos tenían intereses con la demandada"*, conviene precisar que las declaraciones de las señoras Livy González y Alba Luz Rivera se limitaron a contestar acerca del apartamento 402; la primera, que *"ella –se refiere a Angélica- me comentó alguna vez que iba hacer un negocio con la hermana con el apto, no sé qué clase de negocio, incluso yo me metí y le dije que dejara todo por escrito"*[59] y, cuando la demandada le preguntó si conocía el motivo de las remodelaciones del inmueble, le contestó *"doña Angélica se lo dio a prestar (sic) a Ud. Para vivir un tiempo con sus hijos, por problemas con su esposo"*[60]; la segunda, manifestó *"conozco la venta que efectuó Angélica a Bibiana por un contrato simulado,*

[59] Pág. 255
[60] Pág. 256

debido a que Bibiana necesitaba acreditar capacidad económica y no la tenía, entonces… le hizo una venta ficticia"[61]*,* pero de ese negocio se enteró porque *"Angélica me comentó de que había hecho la venta en forma ficticia"*[62], y frente al conocimiento de las condiciones económicas de las implicadas sin referirse a la demandante dijo que "*de Bibiana conozco menos, sé que también es litigante, pero no conozco intrínsecamente su labor como abogada";* y al preguntarle nuevamente para que precisara dijo *"no saber"* ni mucho menos constarle[63].

Entonces perdieron sustento los esfuerzos del apelante para concatenar varios de los indicios que dijo encontrar con los hechos de la demanda, que presuntamente estaban probados a la luz del art. 95 del C.P.C., pues los "graves problemas de separación" de la demandada, la creación de *"una falsa imagen de un negocio jurídico"* para aparentar *"solvencia económica"*, un *"tiempo prudencial acordado"* para que la demandada devolviera el apartamento y se anulara la escritura de venta, los escasos recursos de la demandada y el no pago del precio quedaron como simples hipótesis de circunstancias que ninguna de las dos testigos que presentó la actora pudieron respaldar convincentemente. Así mismo, la alegación de que la demandada ocupó el bien como arrendataria, hecho que no mencionó en la demanda sino en la sustentación del recurso, y que en el escrito subsanatorio reclamó como frutos bajo juramento estimatorio por valor de $23 500 000 equivalentes a 47 meses de arrendamiento, fue otra situación a la que ninguno de los testigos hizo alusión. En

[61] Pág. 262
[62] Pág. 263
[63] Ib.

el mismo acto refirió que la representante de los menores presentó los recibos de pago de arriendo "*que… transformó, falsificó y allegó (fl. 163 a 175 c1)"*, sin que los hubiere tachado de falsos o hecho alusión de ello cuando fueron incorporados al expediente.

En la apelación se sacó a relucir que la demandante "*es una abogada exitosa y con los medios económicos suficientes para pagar cualquier deuda y vivir dignamente como hasta ahora lo ha hecho en compañía de su hija en el apartamento 401"*, pese a que en el hecho 7 del libelo había dicho que la negativa de la demanda a devolver el inmueble ha dejado a la señora Angélica Rocío y a su hija *"a la intemperie de un inhumano despojo y como consecuencia en la pobreza"*, manifiesta contradicción donde refulge que los hechos consignados en la demanda no corresponden a la realidad y que sólo se presentó después de que el juez determinó que el motivo de la venta no fue el señalado, sino el relacionado con la deuda y la hipoteca del referido apartamento 401.

Por lo tanto, todas las deducciones aparentes que trató de extraer de la demanda incontestada quedaron sin sustento, pues si los hechos que podrían constituir indicio grave fueron infirmados no brindan la suficiente credibilidad a sus pretensiones, de ahí que la sentencia recurrida habrá de mantenerse incólume.

Para finalizar, tampoco hay lugar a conceder la pretensión subsidiaria, atinente a la lesión enorme, puesto que en la escritura pública de compraventa se plasmó como valor del

apartamento la suma de $50 000 000 y el avalúo presentado por la perito María Ignacia Cortés, con independencia de la solidez, claridad, precisión y calidad de sus fundamentos (art. 232 C.G.P.), tan sólo arrojó $74 193 000, equivalente al catastral aumentado en la mitad para el año 2007, lo que no demuestra el desequilibrio previsto en el art. 1947 del C.C. para lograr su prosperidad[64].

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Primera Civil de Decisión, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR sentencia que el 2 de julio de 2020, profirió el Juzgado 1º Civil del Circuito Transitorio de Bogotá.

Ante el fracaso del recurso se condenará en costas a la apelante.

En firme esta decisión, devuélvase el expediente al despacho de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE,

[64] Págs. 288 a 303

Firmado Por:

Ricardo Acosta Buitrago
Magistrado
Sala Civil Despacho 015 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **28c243dbea2f49aa2b99e49746626087c9ce275eb5e14877aae9200401fbcada**
Documento generado en 26/06/2023 02:42:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTES	:	Mariana Salazar Arias
DEMANDADO	:	Carlos Alberto Barriga Andrade y Roberto Valenzuela Reyes
CLASE DE PROCESO	:	Ejecutivo
MOTIVO DE ALZADA	:	Apelación Sentencia

El apoderado del demandado Roberto Valenzuela Reyes pidió aclarar la sentencia emitida el 29 de mayo cursante en dos temas. El primero se refiere a los intereses de mora ordenados en el numeral tercero de la parte resolutiva, pues en el contrato 001-09 se estableció expresamente que *"el no pago oportuno del canon aquí estipulado dará lugar a la terminación del presente contrato y al cobro de la cláusula penal aquí pactada, más no al cobro de intereses de mora sobre el valor del canon causado y no pagado"*. Y el segundo por el valor de los cánones a partir del 15 de abril de 2018 y 15 de abril de 2019 equivalentes a $10 887 354 y $11 233 572, respectivamente, los cuales ya cuentan con el incremento previsto en la cláusula sexta del contrato -IPC del año inmediatamente anterior-, toda vez que al haberse ordenado seguir adelante con la ejecución, según el mandamiento de pago, los valores indicados en esa providencia son errados.

No se accederá al primero de los pedimentos como quiera que al revisar el parágrafo de la estipulación quinta del contrato de arrendamiento es claro que entre las partes se pactó una sanción en caso de mora en el pago de la renta consistente en hacer exigible

la cláusula penal en lugar de los intereses; es decir, que la mora sí tendría una sanción, pero no las dos penalidades moratorias, conjuntamente. Luego, como el Tribunal excluyó el cobro de la cláusula penal, el efecto útil de la estipulación, rectamente interpretada, es que se generan los intereses como fueron ordenados en el mandamiento de pago.

El segundo tampoco se acogerá porque el valor de los cánones reclamados fue el que la demandante y Carlos Barriga estimaron en el cruce de cuentas del 8 de agosto de 2019, y que los valores exactos de la renta aparecen en la tabla de "RELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS HACIENDA EL SILENCIO -SR. CARLOS BARRIGA" que el mismo demandado aportó al contestar la demanda (049AllegaContestacionYNuevasPruebas). Y no está por demás decir que ese tema se trató en la sentencia (ver páginas 23 a 25).

No se olvide que el monto de los cánones por los que se libró el mandamiento de pago no fue discutido en los recursos que tanto el solicitante como el ejecutado Carlos Barriga, presentaron contra esa orden.

De igual forma solicitó adición porque la sentencia no se refirió a la excepción que denominó *"los hechos y pretensiones de la demanda corresponden a una relación jurídica de la que no es parte Roberto Valenzuela"*, ya que los valores para los periodos comprendidos entre junio de 2018 y agosto de 2019 no coinciden con el contrato 01. Pero, para que proceda la adición es necesario que el fallador haya omitido resolver sobre "cualquiera de los extremos de la litis" o "cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento", olvido que no ocurrió,

pues en las consideraciones la Sala señaló que frente a las excepciones "referidas a las otras relaciones surgidas entre el ejecutado Barriga y la ejecutante, acompañada de su hermano Juan Manuel Salazar, de las que no es parte Valenzuela no tienen lugar en el proceso porque consideraron que las pretensiones derivan de contratos que no son base de la ejecución", -los numerados como 003, 004 y 005- argumento que abordó lo solicitado, en tanto que era clara *"la condición solidaria del señor Valenzuela como deudor de la renta"* en el contrato 01, presentado como título ejecutivo. En este punto no hay lugar a adicionar la sentencia.

Por su parte, el demandante solicitó la corrección de la providencia en lo que tiene que ver con el valor del impuesto predial del año 2019, que debe aplicarse como compensación, pues erradamente se dijo que ascendía a $39 198 300 siendo lo correcto $36 198 300, petición que se concederá por consistir en un error aritmético (art. 286 *ibídem*).

En consecuencia, el Tribunal Superior de Bogotá NIEGA las solitudes de aclaración y adición pedidas por la parte demandada y CORRIGE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia en el sentido de indicar que el valor del impuesto predial del año 2019 es de $36 198 300, como solicitó la parte demandante.

Notifíquese,

Firmado Por:

Ricardo Acosta Buitrago
Magistrado
Sala Civil Despacho 015 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6c6088431b4505459bbda8ee9753cc806bcde137c8129620ea477168950c852c**
Documento generado en 26/06/2023 02:41:37 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTES	:	LUZ MILA MARTÍNEZ JIMÉNEZ
DEMANDADO	:	CORA PILAR RAMÍREZ GÓMEZ
CLASE DE PROCESO	:	EJECUTIVO
MOTIVO DE ALZADA	:	APELACIÓN SENTENCIA

Se ADMITE en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que profirió el 15 de julio de 2022, el Juzgado 47 Civil del Circuito, dentro del proceso de la referencia.

Una vez ejecutoriada esta providencia, la Secretaría procederá a contabilizar el término de cinco (5) días que el apelante tiene para sustentar su recurso, pues en caso de no hacerlo, se le declarará desierto; del escrito de sustentación que presente el recurrente se correrá traslado a la parte contraria en la forma y términos previstos por el artículo 12, en concordancia con el 9, de la Ley 2213 de 2022.

La sustentación, como su réplica, se remitirán al correo electrónico secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co. Cada parte, si es del caso, acreditará el envío del escrito a su contraparte para los efectos del artículo 3 y el parágrafo del artículo 9 de la Ley mencionada, lo cual deberá ser tenido en cuenta por la Secretaría.

Notifíquese,



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil veintitrés

Proceso:	Ejecutivo – Incidente de perjuicios
Demandante:	Macrofinanciera S.A.
Demandado:	Ecopetrol S.A. y otro
Radicación:	11001310302620140007105
Procedencia:	Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá
AI-111/23	

Se resuelve sobre la concesión del recurso extraordinario de casación y la petición de fijar caución para la suspensión de la sentencia, presentado por Factoring Holding Corp.

Antecedentes

1. Con sentencia de 31 de enero de 2020 este Tribunal revocó la sentencia proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso de la referencia; en su lugar, declaró probadas las excepciones propuestas por el ejecutado y condenó a la demandante al pago de perjuicios derivados del decreto y práctica de las medidas cautelares.

2. Ecopetrol S.A. promovió incidente de regulación de perjuicios contra Macrofinanciera S.A. y Factoring Internacional Holding Corp., última que actúa como cesionaria de los derechos de crédito. El Juez de primera instancia negó las pretensiones del incidente, en sentencia que fue apelada por la incidentante.

3. El 13 de abril de 2023 esta Corporación resolvió la alzada, revocando la sentencia del *a quo* y, en su lugar, liquidó los perjuicios ocasionados a Ecopetrol S.A. en la suma de $2.431’027.519, los cuales debían ser pagados por Factoring

Internacional Holding Corp. en los 10 días siguientes a la notificación de esa decisión.

4. Con auto de 31 de mayo de 2023 se negaron las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia.

5. En tiempo, Factoring Internacional Holding Corp. presentó recurso extraordinario de casación y solicitó fijar caución para la suspensión de los efectos de la providencia recurrida.

Consideraciones

1. Al tenor del artículo 333 de la Ley 1564 de 2012 el recurso de casación se distingue por su carácter extraordinario, de ahí que en el precepto que le sigue, se anota de manera restrictiva que sólo tiene cabida respecto de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores, en "*segunda instancia*", "*en toda clase de procesos declarativos*"; "*en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria*" y "***las dictadas para liquidar una condena en concreto*";** con la advertencia, además, de que en sumarios relativos al estado civil recae, simplemente, en las de "*impugnación o reclamación del estado y la declaración de uniones maritales de hecho*". Acerca de la procedencia del recurso extraordinario de casación ha puntualizado la jurisprudencia:

> «*2.1. En virtud de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casación, su procedencia se halla condicionada a la satisfacción de diversos requisitos, expresamente establecidos en la ley. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso prevé que el aludido medio de impugnación «(…) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1) Las dictadas en toda clase de procesos declarativos; 2) Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria; 3) Las dictadas para liquidar una condena en concreto».*
>
> *En ese orden, resulta evidente que no todas las providencias judiciales son susceptibles de ser atacadas por esta vía, sino solo aquéllas expresamente previstas por el legislador, en consideración a la naturaleza del*

asunto debatido y, en determinados supuestos, a la cuantía actual del agravio denunciado por el impugnante. 2.2. Conviene precisar, también, que el Código General del Proceso introdujo relevantes modificaciones a la impugnación extraordinaria en comento, por vía de ejemplo, amplió el espectro de las sentencias susceptibles de ser atacadas en casación, desde la perspectiva del tipo de procedimiento en el que se profirieron (declarativos, acciones de grupo y liquidaciones de condena en concreto en cualquier tramitación).

Asimismo, la normativa procesal actual puntualizó que el importe de la resolución desfavorable debe ascender, cuanto menos, a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cuando se trate de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan sólo los fallos pronunciados en acciones de grupo, además, claro está, de aquellos juicios donde el debate aluda a temáticas relativas al estado civil (y que carecen, por lo mismo, de cuantía), siempre y cuando versen sobre la reclamación e impugnación del mismo o la declaración de uniones materiales de hecho (artículos 334 y 338 ejusdem)»[1].

2. El artículo 338 *ibídem* agrega que, si las expectativas del litigante vencido son netamente económicas, el ataque procede "*si el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente*" excede de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que carece de incidencia en "*sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil*". Exigencia que constituye lo que se conoce como el interés para recurrir en casación:

«*En ese sentido, la Sala ha decantado que el interés para recurrir en casación "depende del valor económico de la relación sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesión o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés", (auto de 15 de mayo de 1991, Exp. 064), porque en verdad, en cuanto al recurrente se refiere, "la vulneración de sus intereses y de ahí <u>el agravio inferido, se concreta en la negativa, total o parcial, de las pretensiones</u>*

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto AC3342-2020, de 7 de diciembre de 2020, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, radicación 11001020300020200309400.

económicas insertas en la demanda o su reforma y, en principio, a partir de la cuantificación que él mismo haya hecho". (Auto de 19 de diciembre de 2007, Exp. No. 2007-01662-00, subraya la Corte)»[2].

Más recientemente, al respecto, se indicó:

«El interés para recurrir en casación, entonces, refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al recurrente, al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnación extraordinaria, concepto que «(…) está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (CSJ AC7638-2016, 8 nov.).

Lo anterior implica que, cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que le ocasione la decisión impugnada al inconforme, en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, y atendidas las singularidades del caso. Así lo ha señalado, en forma invariable, el precedente de la Sala:

«(…) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos» (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.).

En síntesis, la actualidad de la afectación, en su faceta patrimonial, constituye un elemento determinante para la viabilidad del indicado medio de impugnación extraordinario, razón por lo cual su cumplimiento debe evaluarse con prolijidad y estricta sujeción a la relación sustancial definida en la sentencia, en tanto que «sólo la

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 28 de agosto de 2012, magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, radicación 11001020300020120123800.

cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés» (CSJ AC924-2016, 24 feb.)»[3].

Además, en las contiendas meramente patrimoniales, el artículo 339 *ídem* impone que, cuando "*sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión*"; disposición que consagra una carga para el recurrente de probar el *quantum* del detrimento que le ocasiona la providencia, simultáneamente con la radicación del embate, o a más tardar antes de que venza el lapso para ese fin, salvo que lo estime identificable con los instrumentos obrantes en el legajo, en cuyo caso es tarea del funcionario constatarlo, sin que esté autorizado para decretar pruebas adicionales a las existentes, ya que el censor asume los efectos adversos de su desidia.

De cualquier forma, la fijación del malogro debe cristalizarse al tiempo en que surge la legitimación para disentir, esto es, la fecha de la decisión cuestionada y contar con bases susceptibles de verificación.

«*Ahora bien, el artículo 338 ibídem agrega que si las expectativas del litigante vencido son «esencialmente económicas» el ataque procederá cuando «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente» exceda de «un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes», cuantía que al tenor del artículo 339 procesal se determinará, en línea de principio, «con los elementos de juicio que obren en el expediente», a menos que el censor estime que estos son insuficientes para demostrar el monto del detrimento económico que le ocasiona el pronunciamiento, caso en el cual corre con la carga de «aportar un dictamen pericial», cuya idoneidad demostrativa deberá constatar el funcionario, con la advertencia de que el recurrente asume los efectos adversos de su desidia probatoria.*

Significa entonces, como lo ha sostenido la Sala, que «el interés pecuniario del agraviado ha de determinarse a través de las probanzas recaudadas a lo largo del litigio,

[3] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto AC1594-2023 de 8 de junio de 2023, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, radicación 13001310300720130006902.

salvo que aquel allegue un dictamen al formular el recurso para acreditarlo, de modo que el fallador pueda establecer de manera objetiva si el perjuicio irrogado por la resolución confutada es suficiente para promover esta herramienta» (CSJ AC3554-2021. Subrayas ajenas al original)».[4]

3.. En el *sub lite,* a propósito del interés para recurrir en casación, de conformidad con la jurisprudencia reseñada, se observa que el valor del agravio que la sentencia proferida por esta Corporación le irroga al censor asciende a $2.431'027.519, suma en la que se concretó la condena por concepto de perjuicios, luego de revocar la decisión de primera instancia que le fue beneficios.

Así, el interés económico que le fue desfavorable a la parte demandada en esta instancia supera la cifra para recurrir en casación que, para este año, equivale a $1.160'000.000,00[5].

De lo que se concluye la procedencia del recurso extraordinario.

4. Ahora bien, el inciso 4° del 341 de la Ley 1564 de 2012 prevé los efectos del recurso de casación y en él se determina:

«*En la oportunidad para interponer el recurso, el recurrente podrá solicitar la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada, ofreciendo caución para garantizar el pago de los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquella. El monto y la naturaleza de la caución serán fijados en el auto que conceda el recurso, y esta deberá constituirse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de aquel, so pena de que se ejecuten los mandatos de la sentencia recurrida. Corresponderá al magistrado sustanciador calificar la caución prestada. Si la considera suficiente, decretará en el mismo auto la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada. En caso contrario, la denegará*».

En tal virtud, a petición del interesado, podrá suspenderse el cumplimiento de la providencia objeto de recurso de casación, para tal efecto deberá: (i) ofrecer una caución para

[4] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto AC2834-2022 de 30 de junio de 2022, magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, radicación 11001020300020220185100.
[5] Salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023: $1.160.000,00.

respaldar el pago de los perjuicios que deriven de la suspensión, (ii) el Magistrado determinará la naturaleza y el monto de la misma teniendo en cuenta la eventual desvalorización, en este caso, del dinero, (iii) una vez prestada la caución la aportará al expediente y; (iv) por el Magistrado se calificará y, determinará si es suficiente.

4.1. En este caso, se condenó a Factoring Internacional Holding Corp. a pagar $2.431.027.519,00, suma sobre la que se causarán intereses legales a la tasa del 6% anual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1617 del Código Civil. Por tanto, atendiendo a que la duración aproximada del trámite en sede de casación, ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia es de 5 años, por dicho lapso se hará la estimación del perjuicio que se derivaría de la suspensión:

Interés legal sobre la condena
($2.341.027.519,00 x 6%) x 5 = $702.308.256

Perjuicio derivado de la suspensión
$2.341.027.519,00 + $702.308.256 = **$3’043.335.775,oo**

En conclusión, el monto por el cual se ordenará al casacionista que constituya póliza otorgada por compañía de seguros es de $3.043’335.775,00, a fin de suspender el cumplimiento de la sentencia.

Decisión

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil de Decisión **RESUELVE:**

1. **CONCEDER EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN** formulado por la incidentada Factoring Internacional Holding Corp., en contra de la sentencia que emitió este Tribunal el 13 de abril de 2023, sobre la que se negó su aclaración y adición el 31 de mayo del presente anuario, en el asunto del epígrafe.

2. Factoring Internacional Holding Corp., recurrente en casación, dentro del término legal de diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, deberá prestar caución mediante póliza otorgada por compañía de seguros por la suma de TRES MIL CUARENTA Y TRES MILLONES

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($3.043’335.775,oo), a fin de resolver sobre la suspensión de la ejecución de la sentencia.

3. Por Secretaría contrólese el término conferido.

Notifiquese,

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada

Firmado Por:
Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **60c740a6e5cc45d949a1756752b42ba4993043b2c47688ffa3c307f3b2c2ec5d**
Documento generado en 26/06/2023 11:29:31 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica